



## Progresismos latinoamericanos: segundo tiempo

299

50  
AÑOS



## **NUEVA SOCIEDAD**

es una revista latinoamericana abierta a las corrientes de pensamiento progresista, que aboga por el desarrollo de la democracia política, económica y social.

Se publica cada dos meses en Buenos Aires, Argentina, y circula en toda América Latina.

*Directora:* Svenja Blanke

*Jefe de redacción:* Pablo Stefanoni

*Coordinadora de producción:* Silvina Cucchi

*Plataforma digital:* Mariano Schuster, Eugenia Corriés

*Administración:* Vanesa Knoop, Karin Ohmann

### **NUEVA SOCIEDAD Nº 299**

*Diseño original de portada:* Horacio Wainhaus

*Diagramación:* Fabiana Di Matteo

*Ilustraciones:* Jorge Roa

*Fotografía de portada:* AP Photo/Natacha Pisarenko

*Corrección:* Germán Conde, Vera Giaconi

*Traducción al inglés de los sumarios:* Kristie Robinson

Impreso en Talleres Gráficos Nuevo Offset,  
Viel 1444, Buenos Aires, Argentina

Los artículos que integran **NUEVA SOCIEDAD** son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Revista. Se permite, previa autorización, la reproducción de los ensayos y de las ilustraciones, a condición de que se mencione la fuente y se haga llegar una copia a la redacción.

**NUEVA SOCIEDAD** – ISSN 0251-3552

Oficinas: Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, Argentina.

Tel/Fax: (54-11) 3708-1330

Correo electrónico: <info@nuso.org>

<distribucion@nuso.org> (distribución y ventas)

**<www.nuso.org>**

El portal **NUEVA SOCIEDAD** es una plataforma de reflexión sobre América Latina.  
Articula un debate pluralista y democrático sobre política y políticas latinoamericanas.



**NUEVA  
SOCIEDAD**

es un proyecto de la

**FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG**

Mayo-Junio 2022

## Índice

### COYUNTURA

- 4779 **Francisco J. Verdes-Montenegro.** La «Europa geopolítica»  
y América Latina. ¿Una oportunidad para la autonomía estratégica? ..... 4

### TRIBUNA GLOBAL

- 4780 **Zbigniew Marcin Kowalewski.** Tres formas históricas  
del imperialismo ruso..... 13

### TEMA CENTRAL

- 4781 **José Natanson.** La nueva nueva izquierda ..... 25  
4782 **Manuel Canelas.** América Latina: no todo lo que brilla  
es un «ciclo» ..... 35  
4783 **Juan Pablo Luna.** Una promesa llamada Gabriel Boric ..... 44  
4784 **Humberto Beck / Patrick Iber.** AMLO y sus contradicciones ..... 57  
4785 **Marisa Glave.** Perú: el profesor en su laberinto ..... 70  
4786 **María Esperanza Casullo.** El curioso caso de un peronismo  
no verticalista..... 83  
4787 **Fernando Molina.** El MAS boliviano ya no baila solo  
al ritmo de Evo ..... 93  
4788 **Cicero Araujo.** ¿Una segunda «marea rosa» en Brasil? ..... 105  
4789 **Maryhen Jiménez.** La democratización en Venezuela pasa también  
por la reconstrucción del Estado ..... 120  
4790 **Leticia Salomón.** Los desafíos de Xiomara Castro en Honduras ..... 134

### ENTREVISTAS | 50 AÑOS

- 4791 **Sheila Fitzpatrick / Mariano Schuster.** Una vida entre  
los archivos soviéticos..... 145

### SUMMARIES

## Segunda página

América Latina, contra diversos pronósticos, mantiene una gran cantidad de gobiernos progresistas, e incluso este año podrían ser más que durante el primer «giro a la izquierda», registrado entre mediados de los años 2000 y mediados de los 2010, según los países. Pero el contexto es claramente diferente. Por eso dedicamos el Tema Central de este número de NUEVA SOCIEDAD a este «segundo tiempo» del progresismo latinoamericano, a sus tensiones y potencialidades.

José Natanson sostiene, en el artículo que abre el *dossier*, que los gobiernos progresistas parecen definir nuevamente el color ideológico de la región, si bien el marco es muy diferente al de antaño, y por ello el éxito de «la nueva nueva izquierda» dependerá, entre otras cosas, de la capacidad de coordinación entre las diferentes tribus y de la posibilidad de aprovechar la oportunidad geopolítica abierta por la disputa entre China y Estados Unidos. Manuel Canelas, por su parte, postula que una suma de triunfos electorales no define necesariamente un nuevo «ciclo». No lo hizo con los conservadores a mediados de la década de 2000 y quizás no lo haga ahora con la suma de victorias progresistas.

Un recorrido por diversas experiencias nacionales puede ayudar a aclarar el panorama. Juan Pablo Luna escribe sobre la que más esperanzas concita: la del Chile de Gabriel Boric. Y precisamente por ello, pone el acento en las dificultades de un gobierno que ha capturado las ansias de cambio de manera aluvional, pero sin arraigarse lo suficiente en la sociedad. Con más tiempo en el poder, la experiencia de Andrés Manuel López Obrador aparece mucho más contradictoria en términos ideológicos y de práctica política. Humberto Beck y Patrick Iber muestran las tensiones entre

ampliación de la democracia y fortalecimiento del liderazgo personal de AMLO, pero también abordan los resultados de su gestión y las razones de su elevada popularidad.

Un caso peculiar de este «segundo tiempo» del progresismo regional es el de Pedro Castillo en Perú, analizado por Marisa Glave. El mandatario, proveniente del Perú rural, ha generado grandes expectativas de cambio, pero en el primer tramo de su gestión ha mostrado un rumbo errático y escasa capacidad de liderazgo, y se enfrenta una y otra vez a una posible destitución congresal.

María Esperanza Casullo aborda, a su turno, el espinoso objeto del peronismo, que hoy atraviesa una zona de turbulencia por el distanciamiento entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. Se trata de una suerte de coalición panperonista sin antecedentes, que genera una fuerte incertidumbre en sus filas. También Bolivia vive una situación en la que, tras 14 años de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), entre 2006 y 2019, hoy el presidente del país no es el mismo que el del partido. Fernando Molina analiza las tensiones en el movimiento, que volvió al poder en 2020 tras su violento derrocamiento en 2019, pero sin Evo Morales como presidente.

En el caso de Brasil, analizado por Cicero Araujo, la izquierda no ha vuelto aún al gobierno, pero podría hacerlo en 2022. El ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aspira a regresar al Planalto aupado por un frente democrático que desafíe a la extrema derecha de Jair Bolsonaro. Para eso, selló una alianza con su ex-adversario Geraldo Alckmin y busca trascender las fronteras de la izquierda. Por ahora, encabeza las encuestas, pero incluso en el caso de ganar, no es claro que se puedan recuperar los ejes de los gobiernos petistas del pasado.

El caso de Venezuela, abordado por Maryhen Jiménez, es interesante por los cambios de estos años en la gestión de Nicolás Maduro, que avanzó por diversas formas de liberalización económica de hecho sin abrir el juego político. La autora sostiene que, para encarar de manera seria la posibilidad de una redemocratización, es necesario emprender la tarea de reconstruir el Estado, que se ha erosionado severamente durante la «Revolución Bolivariana».

Para finalizar, otro caso de retorno del progresismo al poder, luego de un largo periodo de corrupción y autoritarismo, es el de Honduras. Leticia Salomón enumera los desafíos de la presidenta Xiomara Castro, los cambios en la relación entre EEUU y el país centroamericano y las posibilidades de que el nuevo gobierno satisfaga las ansias ciudadanas de cambio.

A la luz de estas experiencias, es posible visualizar algunas tendencias generales, que remiten en general a una potencia decreciente de los relatos transformadores y, vinculada a ella, una capacidad más acotada de generar hegemonía. En definitiva, se entrevén dificultades tanto hacia dentro de las alianzas progresistas como hacia afuera de ellas.

# La «Europa geopolítica» y América Latina

*¿Una oportunidad para  
la autonomía estratégica?*

Francisco J. Verdes-Montenegro

En los últimos años, la apuesta europea por la «autonomía estratégica» ha tenido una visión restringida, más apegada a la defensa, y otra más amplia, de carácter multidimensional. Estas visiones inciden en la percepción sobre los vínculos con América Latina, en un contexto de crisis y dependencias que está redefiniendo la geopolítica global.

La irrupción de la pandemia de covid-19 y el patrón de disrupciones de las cadenas de suministro globales que se está registrando en los últimos años<sup>1</sup> —desde la guerra comercial entre Estados Unidos y China hasta el bloqueo del canal de Suez<sup>2</sup>— han abierto paso a una

comprensión ampliada de la autonomía estratégica europea, con una agenda que toma en consideración otras dimensiones que van más allá de la militar. Esta lectura multidimensional en aras de una mayor resiliencia de las sociedades europeas, además, está estrechamente vinculada al

---

**Francisco J. Verdes-Montenegro:** es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como investigador del área de Estudios y Análisis de la Fundación Carolina.

**Palabras claves:** autonomía estratégica, geopolítica, materias primas críticas, América Latina, Unión Europea.

**Nota:** este artículo es un extracto de «La autonomía estratégica de la Unión Europea: ¿en qué lugar queda América Latina?», Documento de Trabajo N.º 65, Fundación Carolina, Madrid, 2022, disponible en <[www.fundacioncarolina.es/la-autonomia-estrategica-de-la-union-europea-en-que-lugar-queda-america-latina/](http://www.fundacioncarolina.es/la-autonomia-estrategica-de-la-union-europea-en-que-lugar-queda-america-latina/)>.

1. Harriet Agnew: «Ukraine, Supply Chains and the End of Globalization» en *Financial Times*, 28/3/2022.

2. Se refiere al bloqueo que se produjo en ese canal después de que, en marzo de 2021, el *Ever Given*, portacontenedor taiwanés con bandera panameña, encallara e impidiera el tráfico marítimo en una ruta clave del comercio mundial.

plan de transformación que ha aprobado la Unión Europea para los próximos años en torno de la transición digital y ecológica. Ambas transiciones son ejes estructurales del plan de recuperación que ha emprendido la UE a través del fondo NextGenerationEU tras el impacto socioeconómico que provocó la pandemia.

Entre los principales retos que conllevan la apuesta por estas transiciones, denominadas en la jerga comunitaria «transiciones gemelas» (*twin transitions*), y sus interrelaciones con la autonomía estratégica, cabe destacar el recelo a dejar atrás la dependencia de combustibles fósiles para pasar a depender ahora de materias primas críticas. Como viene advirtiendo la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a través su *World Energy Outlook*, existe un desajuste entre las metas del Acuerdo de París y la disponibilidad de los minerales esenciales para cumplirlas<sup>3</sup>. De este modo, si el Pacto Verde Europeo ya advertía sobre los riesgos, la nueva estrategia industrial de la UE reconoce directamente que el acceso a los recursos es una cuestión de seguridad estratégica para el éxito de las transformaciones hacia una descarbonización productiva.

Para la relación de la UE con América Latina, la mayor demanda de este tipo de materias y su carácter estratégico se

ilustra con los casos más sintomáticos del litio y el niobio: ambos son componentes esenciales para la producción de baterías eléctricas y de alta tecnología, como condensadores y superconductores, importados respectivamente en 78% de Chile y 85% de Brasil<sup>4</sup>. Tampoco puede perderse de vista el peso del cobre, que copa en buena medida Chile, Bolivia y Perú, o la bauxita y el mineral de hierro en el caso de Brasil. A su vez, los países europeos también son proveedores de materias primas críticas, como el estroncio (en España) o el hafnio (en Francia), además de cobalto, bauxita, berilio, bismuto, galio, germanio, indio o borato, sumados a yacimientos potenciales detectados a través del programa Copernicus.

A la escasez de proveedores y fuentes cabe sumar que la demanda de estas materias primas se va a incrementar en las próximas décadas, como en el caso del litio, cuyas estimaciones son que podría multiplicarse prácticamente por diez, pasando de las 43.000 toneladas de 2017 a 415.000 toneladas en 2050. Por ello, se entiende que las materias primas críticas pueden ser objeto de posibles tensiones y desabastecimientos en los próximos años y, al mismo tiempo, representar una oportunidad para los países que las atesoran, ya que, si pueden industrializar esos sectores y aportarles mayor valor

---

3. AIE: *World Energy Outlook*, 10/2021.

4. Comisión Europea: «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad», COM (2020) 474 final, Bruselas, 3/9/2020. Otras materias primas críticas que afectan a la UE, aunque fuera de su relación con América Latina, son las tierras raras (importadas desde China en 98%), el borato (98% de Turquía) y el platino (71% de África del Sur).

agregado, podrían beneficiarse de las transiciones en marcha.

Como ha plasmado la UE en distintos documentos sobre la cuestión, lo ideal es que no exista una dependencia de ningún país ni proveedor superior a 33%, y por ello, además de poner en marcha un Plan de Acción sobre las materias primas críticas y revisar su estrategia industrial –aprobada de forma previa a la pandemia y revisada a raíz de las falencias observadas–, se ha tratado de identificar en qué ámbitos hay mayores riesgos, y con qué países, además de determinar los sectores y ejes claves.

Respecto a esto último, tal y como ha explicitado la Comisión Europea, lograr una UE con capacidad y libertad para actuar pasa por reforzar su autonomía estratégica abierta, que se articula en torno de diez ejes: (a) asegurar un sistema de alimentación y salud sostenible y resiliente, (b) garantizar energía descarbonizada y accesible, (c) fortalecer la capacidad en la gestión de datos, inteligencia artificial y tecnologías disruptivas, (d) garantizar y diversificar el suministro de materias primas críticas, (e) asegurar el liderazgo a la hora de configurar los estándares globales, (f) construir un sistema económico y financiero resiliente y preparado para los retos futuros, (g) desarrollar y retener

las habilidades y talentos que responden a las ambiciones de la UE, (h) fortalecer las capacidades en seguridad y defensa, y el acceso al espacio, (i) trabajar con socios globales para promocionar la paz, la seguridad y la prosperidad para todos y (j) fortalecer la resiliencia de las instituciones<sup>5</sup>. Estos diez ámbitos abren un espacio para el diálogo de políticas entre la UE y América Latina en aras de una convergencia regulatoria entre ambas regiones que dé oportunidad de desplegar el denominado «Efecto Bruselas»<sup>6</sup>.

En el marco de renovación de la estrategia industrial de la UE, el 5 de mayo de 2021 la Comisión hizo público un estudio sobre dependencias estratégicas y capacidades. Con un análisis de más de 5.000 bienes que importa la Unión, se observó que en 137 de ellos hay una alta dependencia de terceros países. Como países de los que depende en mayor medida la UE, en orden de mayor a menor, figuran China (que representa alrededor de la mitad de esos productos), Vietnam y Brasil. Los principales sectores en los cuales se constatan estas dependencias externas son los ecosistemas de la industria de energía intensiva –materias primas y procesadas, y también químicos– y algunos productos de la industria farmacéutica, así como

5. Comisión Europea: «2021 Strategic Foresight Report: The EU's Capacity and Freedom to Act», COM(2021) 750 final, Bruselas, 8/9/2021.

6. El «Efecto Bruselas» o poder regulatorio de la UE, popularizado por Anu Bradford, se entiende como la habilidad de la Unión para influir en la regulación de distintas dimensiones normativas a escala global, sin coerción ni cooperación, sino gracias a la difusión de regulaciones por medio de mecanismos de mercado. Al regular la UE su mercado único, por su peso de acuerdo con su renta per cápita, así como sus estándares más elevados, las multinacionales tienden a incorporar esas normativas para el conjunto de su actividad a escala internacional para evitar mayores costos de transacción que se derivarían del cumplimiento de distintas regulaciones. A. Bradford: *How the European Union Rules the World*, Oxford UP, Oxford, 2020.

los mencionados componentes claves para la transición digital y ecológica.

Por ello, lejos de aspirar a una autosuficiencia, detrás de la búsqueda de una mayor autonomía estratégica abierta –aunque a veces también se enmarque como soberanía o resiliencia–, la pretensión es, según el comisario Thierry Breton, «la de tener opciones, contar con alternativas, que exista una competencia. Evitar las dependencias forzosas, tanto en el plano económico como geopolítico»<sup>7</sup>. O, lo que es lo mismo, que impere la libre competencia frente a mercados cautivos de lógicas monopolísticas o cartelizadas, dado que la apertura (*openness*) estimula la prosperidad, el dinamismo y la estabilidad. Por ello, dentro de la estrategia para lograr una mayor diversificación de proveedores de este tipo de materias primas críticas y garantizar el suministro, además de una apuesta por una mayor industrialización, extracción y reutilización (circularidad) *ad intra*, hacia fuera la Comisión está desarrollando asociaciones estratégicas internacionales para materias primas fundamentales que no se encuentran en Europa.

Estas asociaciones estratégicas ya se han empezado a tejer en formato piloto desde 2021 con Canadá y hay contactos abiertos con algunos países africanos y de la vecindad; así, es de esperar que la revitalización de la asociación estratégica entre la UE y América Latina integre esta problemática en futuros encuentros

birregionales. Como con el resto de los socios, la Comisión debe articular esta asociación de acuerdo con principios de transparencia y prácticas de minería sostenibles y responsables. En esta materia, es de celebrar que una iniciativa más avanzada, como la Alianza Europea para las Materias Primas (ERMA, por sus siglas en inglés), centrada en primera instancia en las necesidades más urgentes –como el suministro de tierras raras para imanes y motores, baterías y pilas de combustible– ya haya incorporado a empresas latinoamericanas, como las brasileñas Compañía Brasileña de Metalurgia y Minería (CBMM) o Aurum Assets SA, o la chilena BioLantánidos. Es de esperar que, por su carácter inclusivo, se puedan incorporar igualmente otros actores relevantes, como entidades públicas, centros de investigación, universidades, ONG, instituciones financieras, sindicatos o asociaciones<sup>8</sup>.

Estas alianzas con América Latina son un espacio propicio para revitalizar la asociación estratégica birregional, conectando las necesarias «alianzas verdes» que se derivan del Pacto Verde Europeo con aquellas que se precisan para responder a la autonomía estratégica buscada. Tras la invasión rusa a Ucrania a partir del 24 de febrero pasado y con la mayor conciencia de la dependencia energética que arrastra la UE, parece vislumbrarse una convergencia de ambos ejes<sup>9</sup>. El plan REPOWEREU, que impulsó

---

7. T. Breton: «Speech by Commissioner Breton at the Launch of the European Raw Materials Alliance», 13/9/2020.

8. «Red», página web de la ERMA, <<https://erma.eu/network/>>.

9. José Antonio Sanahuja: «El Pacto Verde, *NextGenerationEU* y la nueva Europa geopolítica», Documento de Trabajo Nº 63 (2ª época), Fundación Carolina, Madrid, 2022.

la Comisión en marzo de 2022 como respuesta, aspira a desacoplar a la Unión de su dependencia energética respecto a Rusia gracias a una reducción de dos tercios de las importaciones de gas desde ese país<sup>10</sup>.

Esto supone un ímpetu renovado hacia las energías renovables a mediano plazo y un reajuste de proveedores a corto plazo costoso, aparte de más contaminante y nocivo al reorientarse hacia el gas natural licuado (GNL) extraído con métodos de fracturación hidráulica (*fracking*). Será preciso, pues, atender hasta qué punto este ímpetu por las energías renovables se confirma, de forma que los imperativos de seguridad energética no eclipsen los objetivos de descarbonización. Tampoco se puede desatender el uso de la política energética por parte de la UE como herramienta activa de influencia externa ni los efectos nocivos que puede tener para terceros países, y por lo tanto en agregado. Con la subida en los precios del gas natural que está produciendo la guerra en Ucrania, se está advirtiendo una apuesta renovada por el carbón, al ser un recurso más económico aunque menos sostenible.

Se abre, en definitiva, un nuevo ciclo de una UE geopolítica y para la autonomía estratégica, con nuevas oportunidades de cooperación y de rearticulación de lazos con América Latina. Una herra-

mienta indispensable, en este aspecto, es la red de Acuerdos de Asociación que se ha articulado a escala birregional en las últimas dos décadas. Lejos de entenderse como meros acuerdos de libre comercio, estos tienen un marcado carácter geopolítico que no puede perderse de vista, con un importante potencial para abrir un espacio compartido de diálogo de políticas, así como de convergencia regulatoria para el cambio de los modelos de producción y consumo<sup>11</sup>. Igualmente, merece la pena atender a buenas prácticas en el ámbito birregional que han sido capaces de abordar problemáticas de interés compartido y que se inscriben en una lógica de autonomía estratégica.

### La iniciativa BELLA marca una senda

Como ha apuntado José Antonio Sanahuja, una UE geopolítica que anhela una mayor autonomía estratégica conlleva una implicación constructiva hacia América Latina, junto con la promoción de coaliciones flexibles, abiertas y efectivas. Tres son, según el autor, los ejemplos de una actuación más autónoma y flexible por parte de la UE, o lo que es lo mismo, de muestras incipientes de la «Doctrina Sinatra» en América Latina: (a) el tradicional rechazo de las sanciones de la Ley Helms-Burton

10. Ben McWilliams, Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra y Georg Zachmann: «Can Europe Manage if Russian Oil and Coal Are Cut Off?», en *Blog Post Bruegel*, 17/3/2022.

11. J.A. Sanahuja: «Pacto Verde Europeo: el giro ambiental de un actor global» en *El mundo después de la pandemia: enfrentar la desigualdad y proteger el planeta. Anuario CEIPAZ 2020-2021*, CEIPAZ, Madrid, 2021; J.A. Sanahuja y Jorge Damián Rodríguez: «El Acuerdo Mercosur-Unión Europea: escenarios y opiniones para la autonomía estratégica, la transformación productiva y la transición social y ecológica», *Análisis Carolina* Nº 20, Fundación Carolina, Madrid, 29/6/2021.

contra Cuba; (b) la posición de la UE en la crisis en Venezuela, y (c) la actuación coordinada de los Estados miembros de la Unión que son parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsada por el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, con motivo de la elección de un nuevo director del organismo. Esto último a raíz de la decisión que adoptó el gobierno de Donald Trump de romper la regla no escrita que otorga ese puesto a un candidato procedente de un país latinoamericano<sup>12</sup>.

En este artículo, además, se quiere destacar otra iniciativa que puede alinearse dentro de la cooperación UE-América Latina desde una perspectiva de autonomía estratégica, aunque su origen sea previo a la propia agenda de la UE: el programa Building the Europe Link to Latin America (BELLA), que conecta ambas regiones a través de un cable submarino. Este programa, que da continuidad al estudio Europe Link to Latin America (ELLA) que se inició en 2011, ha habilitado el sistema de cable submarino de última generación Ella-Link con 6.000 km de extensión, que conecta la UE, desde Sintra –con interconexión previa en Lisboa y Madrid– hasta América Latina, vía Fortaleza (Brasil), con interconexiones interoceánicas previstas con Guayana Francesa, isla de Madeira, islas Canarias y Cabo Verde, así como trestres con otros nodos como Marsella

en el caso europeo, y latinoamericanos como San Pablo, Porto Alegre, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Lima.

El programa viene acompañado de un derecho irrevocable de uso (IRU, por sus siglas en inglés) para una red birregional de investigación y educación que se beneficiará de una menor latencia para los proyectos conjuntos (menos de 50%), lo que permitirá lograr una mayor velocidad para el trabajo en remoto en ámbitos que demandan grandes volúmenes de datos, como la astronomía, la física de partículas y de altas energías o la observación de la tierra. La red está compuesta por cinco redes de investigación europeas –DFN (Alemania), FCT/FCCN (Portugal), GARR (Italia), RedIris (España) y RENATER (Francia)– y cuatro latinoamericanas –CEDIA (Ecuador), RENATA (Colombia), REUNA (Chile) y RNP (Brasil)–, lideradas en el primer caso por GÉANT, como consorcio europeo, y la RedCLARA, conformada por 11 redes nacionales latinoamericanas que vinculan a más de 2.000 instituciones educativas y científicas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay<sup>13</sup>.

Conviene tener presente que los cables submarinos de comunicaciones son una infraestructura crítica, ya que 97% del tráfico mundial de comunicaciones, lejos de realizarse por satélite o vía aérea, se desplaza bajo el océano. Estos cables cuentan con un importante

12. J.A. Sanahuja: «Pacto Verde y ‘Doctrina Sinatra’» en *Nueva Sociedad* N° 291, 1-2/2021, disponible en <[www.nuso.org](http://www.nuso.org)>.

13. RedCLARA: «Bella-T», <[www.redclara.net/index.php/es/proyectos/en-ejecucion/bella-t](http://www.redclara.net/index.php/es/proyectos/en-ejecucion/bella-t)>.

componente geopolítico, puesto que su ausencia puede generar vulnerabilidades y dependencias hacia terceros países en cuanto a los estándares regulatorios, como en materia de protección de datos. En el caso de la UE y América Latina, es el segundo cable que se habilita entre ambas regiones, puesto que existe un antecedente, el Atlantis-2 entre Argentina y Portugal. Sin embargo, por su capacidad bruta (40 gigabits por segundo), queda ya limitado para transmisiones de voz y no basta para dar respuesta al mayor número de usuarios y las tecnologías que han irrumpido desde entonces, que demandan una capacidad mayor, lo que a la postre hacía depender para la interconexión de ambas regiones de infraestructuras que pasaban por Estados Unidos.

La iniciativa BELLA, que tiene, como se ha señalado, un importante componente en ciencia e investigación, es un ejemplo paradigmático de lo que en el *Latin American Economic Outlook*<sup>14</sup> —no sin ciertos paralelismos con la «economía de misión» que promueve la economista Mariana Mazzucato<sup>15</sup>— se ha denominado «alianza internacional orientada por una misión» (*mission-driven international partnership*). Así, el programa cuenta con un enfoque multidimensional

que trasciende el científico-educativo y atesora también un componente geopolítico. Ha requerido de una aproximación *whole of government* que apuesta por una colaboración intersectorial —tres direcciones generales de la UE han estado implicadas: Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG-CONNECT), Asociaciones Internacionales (antes DG-DEVCO, hoy DG-INTPA) y la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio (DG-DEFIS)— y público-privada (el consorcio EllaLink). Todo ello, con un horizonte de largo plazo, si se atiende a los 25 años de vida útil que se prevén para el proyecto. Su construcción se inició en 2018 y se inauguró en 2021, con un costo estimado en 40 millones de euros, de los cuales 25 son provistos por la UE y el resto por la comunidad de redes latinoamericanas, incluyendo contribuciones en especie por medio de sus infraestructuras que equivalen a 25 millones de euros<sup>16</sup>. Cabe recordar, asimismo, que la puesta en marcha de este programa fue la única mención de América Latina por parte de la presidenta Ursula Von der Leyen durante su discurso sobre el estado de la Unión de 2021<sup>17</sup>.

Por el momento que atraviesa el regionalismo latinoamericano, fuertemente

14. *Latin American Economic Outlook 2021: Working Together for a Better Recovery*, OECD Publishing, París, 2021.

15. M. Mazzucato: *Misión Economía: una guía para cambiar el capitalismo*, Taurus, Madrid, 2021.

16. «BELLA. Building the Europe Link to Latin America», disponible <<https://ec.europa.eu/international-partnerships/>>.

17. Concretamente, las palabras de Von der Leyen fueron las siguientes: «¡Nosotros [la Unión Europea] queremos crear vínculos y no dependencias! Y sabemos cómo puede funcionar. Desde este verano, un nuevo cable submarino ha conectado Brasil y Portugal». Comisión Europea: «2021 State of the Union Address by President von der Leyen», Estrasburgo, 15/9/2021 (traducción del autor).

debilitado (se llega a hablar de «vaciamiento»<sup>18</sup>) —entre otros motivos, por la polarización que ha sufrido la región, con el consecuente bloqueo de cualquier iniciativa de carácter político—, parece oportuno plantearse un programa de cooperación con un componente más funcional, técnico y pragmático<sup>19</sup>. Por ello, una cooperación interregional que siga el ejemplo del programa BELLA puede interpretar adecuadamente el momento político latinoamericano, al mismo tiempo que ayuda a fortalecer las autonomías respectivas y la cooperación en su conjunto. En esta línea, una iniciativa a explorar sería la difusión y el aprovechamiento de datos que proporciona el programa Copernicus, a través de plataformas como la Academia Copernicus, y se llega incluso a valorar una cooperación más estrecha que permita incrementar el conocimiento y la monitorización de los recursos naturales de la región, así como la gestión ambiental.

### **¿Un eje para revitalizar la asociación estratégica birregional?**

Desde una aproximación ampliada o de «autonomía estratégica abierta», se responde a una tensión distinta, más enfocada en la resiliencia de la UE y en reconciliar a quienes propugnan un

fortalecimiento de las políticas industriales y quienes quieren preservar la apertura como garantía de competitividad e innovación. Esta lectura no solo es más cooperativa y apegada a la gestión de las interdependencias, sino que coloca a América Latina como un socio estratégico a la hora de responder con una lógica de beneficio mutuo a las transiciones que ambas regiones tienen que emprender, tanto en el plano ecológico como en el digital y productivo. Por su carácter multidimensional, y teniendo en cuenta las dependencias estratégicas que se advierten en estas agendas de cambio, es de esperar una revitalización de la asociación estratégica entre la UE y América Latina con una agenda que integre estas problemáticas para próximos encuentros birregionales.

La UE geopolítica que está abriéndose paso tras el 24 de febrero ucraniano, en la que parecen aunarse las dos aproximaciones —restringida y ampliada— de la autonomía estratégica, conlleva una implicación constructiva hacia América Latina, junto con la promoción de coaliciones flexibles, abiertas y efectivas. Existen buenas prácticas en ese sentido que marcan una senda apropiada para articular la cooperación UE-América Latina desde una perspectiva de autonomía estratégica, como el

18. Guadalupe González, Mónica Hirst, Carlos Luján, Carlos A. Romero y Juan Gabriel Tokatlian: «Coyuntura crítica, transición de poder y vaciamiento latinoamericano» en *Nueva Sociedad* N° 291, 1-2/2021, disponible en <[www.nuso.org](http://www.nuso.org)>.

19. Lorena Ruano y Natalia Saltalamacchia: «Latin American and Caribbean Regionalism during the Covid-19 Pandemic: Saved by Functionalism?» en *The International Spectator* vol. 56 N° 2, 2021; Detlef Note: «From the Summits to the Plains: The Crisis of Latin American Regionalism» en *Latin American Policy* vol. 12 N° 1, 5/2021.

programa BELLA. Con un componente más funcional, técnico y pragmático que se alinea bien con el momento que atraviesa el regionalismo latinoamericano, pone en marcha una alianza internacional orientada por una misión que incluye un componente geopolítico que permite ganar autonomía a ambas regiones, involucrando un abanico amplio de actores e intereses.

En esta línea, entre las múltiples opciones que se abren desde una perspectiva ampliada de la autonomía estratégica,

cabe plantearse un programa similar a BELLA, que difunda y saque mayor partido a los datos del programa Copernicus, aportando un mayor conocimiento y monitorización de los recursos naturales de América Latina, al mismo tiempo que se mejora la gestión ambiental en la región. También es de esperar una incorporación de otros actores, más allá del sector privado en la ERMA, que, en el ámbito de las materias primas críticas, integre principios de transparencia y prácticas de minería sostenibles. ☐

## El Cotidiano

REVISTA DE LA REALIDAD MEXICANA

Marzo-Abril de 2022

Ciudad de México

Nº 232

### REFORMA ELÉCTRICA Y SOBERANÍA NACIONAL

El reto de la iniciativa de Reforma constitucional en materia eléctrica 2021, **Mario Morales Vielmas**. La disputa por la industria eléctrica, **Luis Hernández Navarro**. Por qué no a la Reforma constitucional del sector eléctrico. Una propuesta alternativa, **Francisco José Barnes de Castro**. ¿Cambio de régimen?: un contexto político para la Reforma eléctrica, **Gibrán Ramírez Reyes**. Las razones detrás de la Reforma constitucional en materia de electricidad 2021, **José Manuel Hornelas Alba**. El Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional, **Alonso Romero**. Derecho a la electricidad, **Nancy Jiménez Camacho**. Cabilderos contra la Reforma al sector eléctrico en México, Estado y soberanía, **Guadalupe Correa-Cabrera**. Los secretos de las Subastas de Largo Plazo, **Carlos Ernesto Cisneros Zamora**.

<[www.elcotidianoenlinea.com.mx](http://www.elcotidianoenlinea.com.mx)>

El Cotidiano es una publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Av. San Pablo 180, Edif. K-011, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200, Ciudad de México. Tel. 53 18 93 36. Apartado Postal 32-031, Ciudad de México, 06031. Correo electrónico: <[cotid@correo.azc.uam.mx](mailto:cotid@correo.azc.uam.mx)>.

# Tres formas históricas del imperialismo ruso

Zbigniew Marcin Kowalewski

La anexión de Crimea en 2014 anticipó algunos movimientos posteriores de Rusia respecto de Ucrania, que en febrero de 2022 se transformarían en una invasión lisa y llana. Pensar las dinámicas del imperialismo ruso a lo largo de su historia permite entender la crisis actual más allá de sus elementos coyunturales o de su historia reciente.

Sergey Nikolsky, filósofo de la cultura ruso, dice que tal vez la idea más importante para los rusos «desde la caída de Bizancio hasta ahora es la idea del imperio y el hecho de que somos una nación imperial». Y prosigue:

Siempre hemos sabido que vivimos en un país cuya historia es una cadena ininterrumpida de expansión

territorial, conquista, anexión, defensa de las posesiones, pérdidas temporales y nuevas conquistas. La idea del imperio era una de las más preciadas de nuestro bagaje ideológico y esto es lo que proclamamos ante las demás naciones. Con ello sorprendemos, deleitamos o enloquecemos al resto del mundo.

---

**Zbigniew Marcin Kowalewski:** en la década de 1980 fue miembro de la dirección regional del sindicato *Solidarność* en Lodz. Es autor de varias obras sobre la historia de la cuestión nacional ucraniana, publicadas entre otras por la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Es subdirector de la edición polaca de *Le Monde diplomatique*.

**Palabras claves:** colonialismo interno, descolonización, imperialismo, Rusia, Ucrania.

**Nota:** la versión original de este artículo se publicó en la edición polaca de *Le Monde diplomatique*, 11/2014, tras la anexión rusa de Crimea. Su análisis de las formas del imperialismo ruso aporta claves de lectura de la invasión de Ucrania de febrero de 2022. Reproducimos, con leves ajustes, la traducción del inglés de la revista *Viento Sur*.

La primera característica y la más importante del imperio ruso ha sido siempre, dice Nikolsky, «la maximización de la expansión territorial en pro de sus intereses económicos y políticos, como uno de los grandes principios de la política del Estado»<sup>1</sup>. Esta expansión fue el resultado del predominio permanente y aplastante del desarrollo extensivo de Rusia sobre su desarrollo intensivo: el predominio de la explotación absoluta de los productores directos sobre su explotación relativa, es decir, aquella basada en el aumento de la productividad del trabajo.

«Al imperio ruso lo llamaban ‘prisión de pueblos’. Hoy sabemos que no solo es el Estado de los Romanov el que merece esta descripción», escribió Mijaíl Pokrovsky, el más destacado historiador bolchevique. Demostró que el Gran Ducado de Moscú (1263-1547) y el Zarato ruso (1547-1721) ya fueron «prisiones de pueblos» y que esos Estados se construyeron sobre los cadáveres de los inorodtsy, los pueblos indígenas no rusos. «Es dudoso que el hecho de que 80% de la sangre que corre por las venas de los gran-rusos provenga de estos pueblos les sirva de consuelo a los supervivientes. Únicamente la completa destrucción de la opresión imperial rusa por esa fuerza que luchó y sigue luchando contra toda opresión

podría ser una forma de compensación por todo lo que han sufrido»<sup>2</sup>. Estas palabras de Pokrovsky se publicaron en 1933, poco después de su muerte y poco antes de que por orden de Stalin se sustituyera, en la histórica formulación bolchevique «Rusia, prisión de pueblos», «Rusia» por «zarismo». El régimen estalinista se apresuró entonces a calificar la obra científica de Pokrovsky de «concepción antimarxista» de la historia de Rusia<sup>3</sup>.

### Imperialismo militar feudal

A lo largo de siglos, y hasta el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, los pueblos que fueron conquistados y anexionados por Rusia sufrieron tres formas sucesivas de dominación imperialista. El «imperialismo militar feudal», como lo calificó Lenin, fue la primera. No carece de interés repasar cuál fue el modo de explotación predominante en ese periodo: feudal o tributario, o también, como propone Yuri Semiónov, «politocrático»<sup>4</sup>. Este debate lo ha puesto ahora sobre el tapete Alexander Etkind con sus investigaciones más recientes. De ellas se desprende que en aquel entonces predominaron los modos de explotación coloniales:

1. S.A. Nikolsky: «Rousskie kak imperski narod» en *Politicheskaiia Kontseptologia* Nº 1, 2014, pp. 42-43.

2. M.N. Pokrovsky: *Istoricheskaiia nauka i bor'ba klassov* vol. 1, Sotsekizd, Moscú-Leningrado, 1933, p. 284.

3. A.M. Doubrovski: *Istoriik i vlast'*, Universidad Estatal, Briansk, 2005, pp. 238, 315-335.

4. Ver John F.F. Haldon: *The State and the Tributary Mode of Production*, Verso, Londres-Nueva York, 1993; Y. Semionov: *Politarny ('aziatski') sposob proizvodstva: Souchtchnost' i mesto v istorii tchelovchestva i Rossii*, Librokom, Moscú, 2011.

«El imperio ruso era un gran sistema colonial tanto en sus fronteras lejanas como en sus oscuras profundidades, (...) un imperio colonial como el de Gran Bretaña o Austria, y un territorio colonizado como el Congo o las Indias Occidentales». La cuestión es que «al expandirse a espacios enormes, Rusia colonizó a su propio pueblo. Fue un proceso de colonización interna, la colonización secundaria del propio territorio».

Esta es la razón, dice Etkind, de que tengamos que «entender el imperialismo ruso como un asunto interno, y no solo externo»<sup>5</sup>. El esclavismo –generalizado por ley en 1649– tenía allí un carácter igual de colonial que la esclavitud de los negros en Estados Unidos, pero afectaba asimismo a campesinos de la Gran Rusia y a otros a quienes el zarismo consideraba «rusos»: los de la Pequeña Rusia (ucranianos) y los bielorrusos. Etkind llama la atención sobre el hecho de que incluso en la Gran Rusia las sublevaciones campesinas tenían un carácter anti-colonial y que las guerras con que el imperio aplastó esas revueltas fueron guerras coloniales. Paradójicamente, el centro imperial de Rusia era al mismo tiempo una periferia colonial interna, dentro de la cual la explotación y la opresión de las masas populares eran más intensas que en muchas periferias conquistadas y anexionadas.

Cuando apareció el «imperialismo capitalista del último tipo», Lenin escribió que el imperio zarista estaba «enredado, por así decirlo, en una red particularmente tupida de relaciones precapitalistas», tan tupida que «en general, en Rusia predomina el imperialismo militar feudal». Por tanto, escribió, «en Rusia el monopolio del poder militar, un territorio inmenso o las especiales facilidades para saquear a los pueblos indígenas no rusos, China, etc., en parte complementa y en parte sustituye al monopolio del capital financiero moderno de nuestra época»<sup>6</sup>. Al mismo tiempo, siendo la menos desarrollada de las seis mayores potencias imperialistas, no era más que un subimperialismo. Como señaló Trotski,

Rusia pagaba así el derecho a ser aliada de los países avanzados, a importar capital y pagar intereses, es decir, básicamente su derecho a ser una colonia privilegiada de sus aliados, pero al mismo tiempo, adquiría el derecho a oprimir y expropiar a Turquía, Persia, Galitzia y, en general, a países más débiles y atrasados que ella misma. El imperialismo bífido de la burguesía rusa tenía en el fondo el carácter de una agencia de otras potencias mundiales más poderosas.<sup>7</sup>

5. A. Etkind: *Internal Colonization: Russian Imperial Experience*, Polity Press, Cambridge-Malden, 2011, pp. 23-24, 26, 251.

6. V.I. Lenin: *Polnoe sobranie sochinenii*, Politicheskoi Literatury, Moscú, 1969-1973, vol. xxvi, p. 318; vol. xxvii, p. 378; vol. xxx, p. 174.

7. Lev Trotski: *History of the Russian Revolution*, Haymarket, Chicago, 2008, p. 13. [Hay edición en español: *Historia de la Revolución Rusa*, Sarpe, Madrid, 1985].

## No hay descolonización sin separación

Fue precisamente el potente monopolio extraeconómico mencionado por Lenin el que garantizó la continuidad del imperialismo ruso tras el derrocamiento del capitalismo en Rusia a raíz de la Revolución de Octubre. Contrariamente a lo que había declarado Lenin anteriormente, en el sentido de que la revolución socialista garantizaría la independencia de las colonias, en los hechos solo se separaron de Rusia las colonias a las que no alcanzó la expansión de la revolución o las que la rechazaron. En muchas regiones periféricas, esta expansión tuvo el carácter de una «revolución colonial» dirigida por colonos y soldados rusos sin la participación de los pueblos oprimidos e incluso manteniendo de hecho las relaciones coloniales existentes. Georgy Safarov describió un proceso de este tipo que experimentó la revolución en el Turquestán<sup>8</sup>. En otras regiones se produjo en forma de conquista militar, y algunos bolcheviques, como Mijaíl Tujachevsky, improvisaron rápidamente una teoría militarista de la «revolución desde fuera»<sup>9</sup>.

La historia de la Rusia soviética desmiente la tesis de los bolcheviques de que con la caída del capitalismo desaparecerían las relaciones de dominación colonial de unos pueblos sobre

otros y que esos pueblos podrían, o incluso deberían, permanecer en el marco de un Estado único. El «economicismo imperialista», que niega el derecho de los pueblos a la autodeterminación y que cundía (aunque fuera criticado por Lenin) entre los bolcheviques rusos, fue una manifestación extrema de este fenómeno. En realidad, lo acertado es exactamente lo contrario: la separación estatal de un pueblo oprimido es una condición necesaria para la destrucción de las relaciones coloniales, aunque no la garantice. Vasyl Shajrai, activista bolchevique de la revolución ucraniana, ya lo comprendió en 1918 cuando polemizó públicamente con Lenin sobre esta cuestión<sup>10</sup>. Muchos otros comunistas no rusos también lo entendieron entonces, en particular el líder de la revolución de los tártaros, Mirsaid Sultán Galiev, el primer comunista que fue apartado de la vida política pública a instancias de Stalin, en 1923.

En realidad, el imperialismo basado en los monopolios extraeconómicos que mencionó Lenin se autorreproducía de muchas maneras, espontáneamente y sin que se notara, incluso cuando perdió su base específicamente capitalista. De ahí que, como demostraría Trotski, en la década de 1920 Stalin «se convirtió en el vector de la opresión burocrática gran-rusa» y rápidamente «aseguró ventajas para el imperialismo burocrático

8. G. Safarov: *Kolonialnaia revolutsia: Opyt Turkestana*, Gosizdat, Moscú, 1921.

9. M. Tujachevsky: «Revolution from Without» en *New Left Review* vol. 1 N° 55, 5-6/1969.

10. Serhii Mazlakh y Vasyl Shakhrai: *On the Current Situation in the Ukraine*, ed. Peter J. Potichnyj, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1970.

gran-ruso»<sup>11</sup>. Con el establecimiento del régimen estalinista, se produjo la restauración de la dominación imperialista de Rusia sobre todos aquellos pueblos previamente conquistados y colonizados que permanecían dentro de las fronteras de la URSS, donde representaban la mitad de la población, y sobre los nuevos protectorados, Mongolia y Tuvá.

### El ascenso del imperialismo burocrático

Esta restauración vino acompañada de una violencia policial asesina e incluso de verdaderos genocidios: el exterminio por inanición conocido en Ucrania por el nombre de Holodomor y en Kazajistán por el de Shasandy Asharshylyk (1932-1933). Los cuadros bolcheviques y la intelectualidad autóctonos fueron exterminados y se puso en marcha una rusificación intensiva. Poblaciones y minorías nacionales enteras fueron deportadas (la primera gran deportación en 1937 fue la de los coreanos que vivían en el Lejano Oriente soviético). El colonialismo interno se expandió una vez más y «la más terrible de esas prácticas fue la explotación de los prisioneros del gulag, que puede calificarse como forma extrema de colonización interna»<sup>12</sup>. Del mismo modo que en la época del zarismo, la emigración de la población rusa

y rusoparlante a las periferias calmaba las tensiones y las crisis socioeconómicas en Rusia, asegurando de paso la rusificación de las repúblicas periféricas. Superpoblado, empobrecido y azotado por el hambre tras la colectivización forzosa, el mundo rural ruso exportó masivamente mano de obra a los nuevos centros industriales en los márgenes de la URSS. Al mismo tiempo, las autoridades impedían la migración a las ciudades de la población local no rusa originaria del campo.

La división colonial del trabajo distorsionó y de hecho frenó el desarrollo y, en algunos casos, incluso transformó las repúblicas y regiones periféricas en fuentes de materias primas y zonas de monocultivo. Esto vino acompañado de una división colonial entre la ciudad y el campo, el trabajo manual y el trabajo intelectual, cualificado y no cualificado, bien o mal remunerado, además de una estratificación igualmente colonial de la burocracia estatal, de la clase obrera y de sociedades enteras. Estas divisiones y estratificaciones garantizaban a los rusos étnicos y a los individuos rusificados una posición social privilegiada con respecto al acceso a los ingresos, calificaciones, prestigio y poder en las repúblicas periféricas. El reconocimiento de la «rusidad» étnica o lingüística en forma de «salario público y psicológico» —un concepto tomado por David Roediger de W.E.B. du Bois y aplicado en sus estudios sobre la clase obrera blanca

11. L. Trotski: *Stalin II*, Lenizdat, San Petersburgo, 2007, p. 189.

12. A. Etkind, D. Uffermann e I. Kukulin (eds.): *Tam, vnutri: Praktiki vnutrennei kolonizatsii v kulturnoi istorii Rossii*, Novoe Literaturnoe Obozreniie, Moscú, 2012, p. 29.

estadounidense<sup>13</sup>— pasó a ser un importante medio de dominación imperialista de Rusia o de construcción de una «ruidosa» imperialista en el interior mismo de la clase obrera soviética.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la participación de la burocracia estalinista en la lucha por un nuevo reparto del mundo fue una extensión de la política imperialista nacional. En el curso de la contienda y una vez finalizada esta, la URSS recuperó gran parte de lo que había perdido Rusia tras la Revolución y conquistó además nuevos territorios. Su extensión territorial creció 1,2 millones de kilómetros cuadrados hasta alcanzar los 22,4 millones de kilómetros cuadrados. Después de la guerra, el territorio de la URSS era 700.000 kilómetros cuadrados mayor que el del imperio zarista cuando estaba a punto de sucumbir, y 1,3 millones de kilómetros cuadrados menor que la extensión del imperio en el apogeo de su expansión: en 1866, justo después de la conquista del Turquestán y poco antes de la venta de Alaska.

### **La lucha por un nuevo reparto del mundo**

En Europa, la URSS se anexionó las regiones occidentales de Bielorrusia y Ucrania, Ucrania de los Cárpatos,

Besarabia, Lituania, Letonia, Estonia, partes de Prusia oriental y Finlandia, y en Asia, Tuvá y las islas Kuriles meridionales. Pasó a controlar toda Europa oriental y pretendió que Libia se sometiera a su tutela. Trató de imponer un protectorado sobre dos grandes provincias fronterizas chinas, Xinyiang y Manchuria. Además, pretendió anexionarse el norte de Irán y la parte oriental de Turquía, basándose para ello en las ansias de liberación y unificación de muchas poblaciones locales. De acuerdo con el historiador azerí Jamil Hasanli, la Guerra Fría comenzó en Asia y no en Europa, concretamente en 1945<sup>14</sup>.

«El carácter parasitario de la burocracia se manifiesta, tan pronto lo permiten las condiciones políticas, en forma de saqueo imperialista», escribió por entonces Jean van Heijenoort, antiguo secretario de Trotski y futuro historiador de la lógica matemática. «¿Implica la aparición de rasgos imperialistas que haya que revisar la teoría de que la URSS es un Estado obrero degenerado? No necesariamente. La burocracia soviética se nutre en general de la apropiación del trabajo de otros, y desde hace ya tiempo hemos reconocido este hecho como algo consustancial a la degeneración del Estado obrero. El imperialismo burocrático no es más que una forma particular de esta

13. Ver D.R. Roediger: *The Wages of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class*, Verso, Londres-Nueva York, 2007.

14. J. Hasanli: *At the Dawn of the Cold War: The Soviet-American Crisis over Iranian Azerbaijan, 1941-1946*, Rowman & Littlefield, Lanham-Nueva York, 2006; J. Hasanli: *Stalin and the Turkish Crisis of the Cold War, 1945-1953*, Lexington Books, Lanham-Nueva York, 2011.

apropiación»<sup>15</sup>. Los comunistas yugoslavos se convencieron más bien pronto de que Moscú «quería subordinar totalmente la economía de Yugoslavia y convertirla en un mero complemento que suministre materias primas a la URSS, lo que dificultaría la industrialización y desvirtuaría el desarrollo socialista del país»<sup>16</sup>. Las «empresas conjuntas» soviético-yugoslavas estaban destinadas a monopolizar la explotación de los recursos naturales de Yugoslavia que necesitaba la industria soviética. El comercio desigual entre los dos países garantizaría beneficios extraordinarios a la economía soviética a expensas de la economía yugoslava.

Tras la ruptura de Yugoslavia con Stalin, Josip Broz Tito declaró que a partir del pacto Molotov-Ribbentrop (1939), y sobre todo tras la conferencia de los «tres grandes» en Teherán (1943), la URSS participa en el reparto imperialista del mundo y «avanza conscientemente por la antigua vía zarista del expansionismo imperialista». Dijo asimismo que «la teoría del pueblo dirigente dentro de un Estado multinacional», proclamada por Stalin, «no es otra cosa que la expresión del hecho del sojuzgamiento, la opresión nacional y el saqueo económico de los demás pueblos y países por el

pueblo dirigente»<sup>17</sup>. En 1958, Mao Zedong observó irónicamente en una discusión con Nikita Jrushchov: «Hubo un hombre llamado Stalin que tomó Port Arthur y convirtió Xinjiang y Manchuria en semicolonias, y también creó cuatro empresas conjuntas. Estas fueron todas sus buenas obras»<sup>18</sup>.

### La URSS al borde del desmembramiento

El imperialismo burocrático ruso se apoyaba en poderosos monopolios extraeconómicos, reforzados por un poder totalitario, y por tanto era de carácter no económico. Debido a ello, resultó ser demasiado débil o totalmente incapaz de llevar a cabo los planes estalinistas de explotar los países satélites de Europa oriental y las regiones fronterizas de la China popular. Ante la creciente resistencia en estos países, la burocracia moscovita tuvo que abandonar la idea de las «empresas conjuntas», del comercio desigual y de la división colonial del trabajo que pretendía imponer. Tras la pérdida de Yugoslavia, a partir de 1948 fue perdiendo paulatinamente el control político sobre China y algunos otros países y tuvo que aflojar su dominio sobre otros.

Dentro de la propia URSS, los monopolios extraeconómicos también

15. D. Logan [J. van Heijenoort]: «The Eruption of Bureaucratic Imperialism» en *The New International* vol. xii Nº 3, 1946, pp. 74 y 76.

16. Vladimir Dedijer: *Novi prilozzi za biografiju Josipa Broza Tita* vol. 1, Liburnija, Rijeka, 1981, p. 434.

17. J. Broz Tito: «H kritiki stalinizma» en *Časopis za Kritiko Znanosti, Domisljijo in Novo Antropologijo* vol. viii Nº 39/40, 1980, pp. 157-164, 172-185.

18. V. M. Zubok: «The Mao-Khrushchev Conversations, 31 July-3 August 1958 and 2 October 1959» en *Cold War International History Project Bulletin* Nº 12-13, 2001, p. 254.

resultaron incapaces de asegurar a largo plazo la dominación imperialista de Rusia sobre las principales repúblicas periféricas. La industrialización, la urbanización, el desarrollo de la enseñanza y más en general la modernización de las periferias de la URSS, así como la creciente «nacionalización» de su clase obrera, de la elite intelectual y de la propia burocracia, comenzaron a alterar gradualmente el equilibrio de poder entre Rusia y las repúblicas periféricas a favor de estas últimas. El dominio de Moscú sobre ellas se fue debilitando, y la creciente crisis del sistema aceleró el proceso, que empezó a desmembrar a la URSS. Las medidas del poder central para contrarrestar este proceso —como el derrocamiento del primer secretario del Partido Comunista de Ucrania, Petro Shelest, en 1972, calificado de «nacionalista» por el Kremlin— no lograron revertir la situación y ni siquiera frenar efectivamente el proceso.

Durante la segunda mitad de la década de 1970, el joven sociólogo soviético Frants Sheregi trató de observar la realidad de la URSS a la luz de «la teoría marxista de las clases, combinada con la teoría de los sistemas coloniales». Concluyó que «la extensión gradual de la elite intelectual y de la burocracia (funcionariado) autóctonas en las repúblicas no rusas, el crecimiento de la clase obrera —en suma, la formación de una estructura social más progresiva— llevará a las repúblicas nacionales a separarse de la URSS». Pocos años después, por encargo de las máximas autoridades del Partido Comunista de la

URSS (PCUS), analizó la situación social de los equipos de jóvenes movilizados por el Komsomol (juventudes comunistas) en todo el país con vistas a la construcción de la vía ferroviaria principal Baikal-Amur, la famosa «obra del siglo». «Sentí curiosidad, dice Sheregi, por la contradicción que descubrí entre la información sobre la composición internacional de los trabajadores de la construcción, difundida con bombos y platillos por la propaganda oficial, y el alto grado de uniformidad nacional de las brigadas de trabajadores que llegaron». Estaban compuestas casi enteramente por personas étnicamente rusas y rusoparlantes. «Entonces llegué a la conclusión inesperada de que los rusos (y los rusófonos) estaban siendo desplazados fuera de las repúblicas nacionales» por las llamadas nacionalidades titulares, como por ejemplo los kasajos en Kazajistán.

Esto se confirmó en los estudios que realizó de otros dos grandes proyectos en Rusia:

El gobierno central lo sabía y participaba en el reasentamiento de pobladores rusos mediante la financiación de «proyectos de ingeniería de choque». Así concluí que debido a que los fondos sociales de las repúblicas nacionales se habían agotado, había escasez de puestos de trabajo, incluso para los representantes de las nacionalidades titulares para quienes existían garantías sociales (guarderías, colonias de vacaciones, sanatorios, oportunidades para la obtención

de viviendas); este tipo de situaciones puede generar antagonismos interétnicos, de modo que las autoridades «repatriaban» gradualmente a los jóvenes rusos que viven en las repúblicas nacionales. Entonces me di cuenta de que la URSS estaba a punto de estallar en pedazos.<sup>19</sup>

### Imperio militar-colonial

La crisis del régimen burocrático soviético y del imperialismo ruso fue tan profunda que, para sorpresa de todos, la URSS se hundió en 1991, no solo sin que hubiera una guerra mundial, sino sin siquiera una guerra civil. Rusia perdió sus periferias exteriores, pues 14 repúblicas no rusas de la Unión la abandonaron y proclamaron su independencia: todas aquellas que de acuerdo con la Constitución soviética tenían ese derecho. Esto comportó una pérdida de territorios —cosa que carece de precedentes en la historia rusa— de una extensión total de 5,3 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, como ha señalado Boris Rodoman, un eminente científico que creó la escuela rusa de geografía teórica, hoy en día Rusia sigue siendo «un imperio militar-colonial que se mantiene al precio de un derroche desbocado de recursos biológicos y humanos, un

país de desarrollo extensivo en el que el uso extremadamente despilfarrador y costoso de la tierra y de la naturaleza es habitual en su funcionamiento». En este terreno, así como con respecto a «la migración de poblaciones, las relaciones mutuas entre grupos étnicos, entre la población local y los migrantes en varias regiones, entre las autoridades estatales y el público, las características ‘clásicas’ del colonialismo siguen vivas, como en el pasado»<sup>20</sup>.

Rusia sigue siendo un Estado plurinacional que comprende 21 repúblicas de población no rusa que abarcan casi 30% de su territorio. Rodoman escribe que «en nuestro país tenemos un grupo étnico que lleva su nombre y aporta la lengua oficial [el ruso], además de otros muchos grupos étnicos; algunos de estos gozan de autonomía nacional-territorial, pero no tienen derecho a abandonar esta pseudofederación [rusa], es decir, no tienen más remedio que permanecer en ella».

### Restauración del imperialismo capitalista

La restauración del capitalismo en Rusia ha complementado en parte y sustituido en parte los monopolios extraeconómicos, debilitados y amputados tras el desmembramiento de la URSS,

19. B. Doktorov: «Sheregi F.E.: Togda ia prishel k vyvodu: SSSR stoit pered raspadom» en *Teleskop: Zhurnal Sotsiologicheskikh i Marketingovykh Issledovaniy* vol. 5 Nº 65, 2007, pp. 10-11.

20. B.B. Rodoman: «Vnoutrenny kolonializm v sovremennoï Rossii» en Tatiana Zaslavskaya (ed.): *Kouda idet Rossiya? Sotsialnaïa transformatsiia postsovetskogo prostranstva*, Aspekt-Press, Moscú, 1996, p. 94, y «Strana permanentnogo kolonializma» en *Zdravy Smysl* vol. 1 Nº 50, 2008/2009, p. 38.

por un poderoso monopolio financiero vinculado al aparato de Estado. El imperialismo ruso, reconstruido sobre esta base, sigue siendo un fenómeno inextricablemente interno y externo que opera a ambos lados de las fronteras del país, que una vez más empiezan a ser móviles. Las autoridades rusas han construido una megaempresa estatal que detenta el monopolio de la colonización interna de Siberia oriental y el Lejano Oriente ruso. Estas regiones tienen yacimientos de petróleo y otros minerales. Gozan de acceso privilegiado a los nuevos mercados globales en China y en el hemisferio occidental.

Es posible que esas dos regiones compartan el destino de la Siberia occidental. «El centro federal se reserva casi la totalidad de los ingresos de Siberia occidental derivados de la venta de petróleo, sin destinar fondos a la región ni siquiera para la construcción de carreteras normales», escribió el periodista ruso Artem Yefimov

hace unos años. «El problema, como siempre, no es la colonización, sino el colonialismo», pues «es la explotación económica y no la mejora y el desarrollo del territorio lo que busca la citada empresa. (...) Básicamente se admite que en el país, en el más alto nivel del Estado, reina el colonialismo. El parecido de esta empresa con la Compañía de las Indias Orientales y otras empresas coloniales europeas de los siglos XVII a XIX es tan evidente que incluso podría resultar gracioso»<sup>21</sup>.

En 2013, la revuelta masiva de los ucranianos en la plaza Maidán de Kiev, que culminaría con el derrocamiento del régimen de Víktor Yanúkovich, fue un intento de Ucrania de romper definitivamente la relación colonial que la vinculaba históricamente a Rusia. No podemos comprender la actual crisis de Ucrania —la anexión de Crimea, la rebelión separatista en Donbas y la agresión rusa contra Ucrania— si no comprendemos que Rusia sigue siendo una potencia imperialista. ☐

---

21. A. Yefimov: «Ost-Rossiiskaia kompaniia» en *Lenta.ru*, 23/4/2012.

| TEMA CENTRAL

# Progresismos latinoamericanos: segundo tiempo





# La nueva nueva izquierda

José Natanson

Los gobiernos progresistas y de izquierda parecen estar definiendo nuevamente el color ideológico de la región. No obstante, el escenario es diferente del ciclo de izquierda de los años 2000. El éxito de «la nueva nueva izquierda» dependerá, entre otras cosas, de la capacidad de coordinación entre las diferentes tribus y de la posibilidad de aprovechar la oportunidad geopolítica abierta por la disputa entre China y Estados Unidos.

Como en otros lugares del mundo, la izquierda latinoamericana, hasta ese momento limitada a planteos más o menos abstractos de círculos pequeños de intelectuales y artistas, adquirió un impulso formidable a partir de 1917, cuando los bolcheviques derrotaron a las tropas zaristas e instauraron el régimen revolucionario en Rusia. La emergencia de un movimiento revolucionario propiamente latinoamericano, que con altas y bajas se mantendría vigente durante siete décadas, fue su consecuencia más tangible, pero otros sucesos menos directamente conectados (en apariencia) resultan también incomprensibles sin considerar el influjo del triunfo bolchevique, desde la Constitución Mexicana de 1917 hasta la Reforma Universitaria argentina de 1918 o la Columna Prestes que se levantó en Brasil en 1925. El debate intelectual latinoamericano y por supuesto el arte —del romanticismo de Alejo Carpentier al realismo social de Jorge Amado— quedaron envueltos en el clima revolucionario de la primera mitad del siglo xx.

---

**José Natanson:** es periodista y politólogo. Es director de *Le Monde diplomatique* edición Cono Sur, de *Review*, *Revista de Libros* y de la editorial Capital Intelectual.

**Palabras claves:** Guerra Fría, izquierda, reformas, América Latina.

Sin embargo, en términos de política concreta –de lucha y conquista del poder–, la primera ola de la izquierda latinoamericana se demoró hasta la década de 1960. Sin entrar en discusiones acerca del carácter izquierdista o no de los populismos del siglo xx, se puede afirmar que recién con el triunfo de otra revolución, en este caso estrictamente latinoamericana, la Revolución Cubana de 1959, la izquierda regional adquiriría impulso ascendente y fama universal. «La Revolución Cubana –resumió Eric Hobsbawm su atractivo– lo tenía todo. Espíritu romántico, heroísmo en las montañas, antiguos líderes estudiantiles con la desinteresada generosidad de su juventud –el más viejo apenas pasaba de los 30 años– y un pueblo jubiloso en un paraíso turístico tropical que latía a ritmo de rumba»<sup>1</sup>.

Con Cuba como imán, los ensayos revolucionarios se multiplicaron por América Latina. Si por un lado es cierto que el foquismo de Ernesto «Che» Guevara fracasó en todos los lugares donde se intentó, con la muerte del guerrillero argentino a manos de un ignoto sargento boliviano como símbolo trágico, también es verdad que la ola revolucionaria cubriría prácticamente toda la región, con movimientos más extendidos en aquellos países de población rural donde el componente agrario de la insurgencia se impondría sobre el urbano. Las guerrillas urbanas, se sabe, son más fáciles de organizar, en la medida en que el anonimato de la ciudad no exige el apoyo de la población local para que prosperen (alcanza con organización y recursos) y permiten también golpes espectaculares de propaganda, pero a menudo, y por estos mismos motivos, mueren rápido. Las guerrillas de base rural suelen ser más duraderas y efectivas (incluso si, como suele suceder, su conducción queda a cargo de jóvenes urbanos de clase media), como muestra la experiencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de las guerrillas centroamericanas.

La discusión político-teórica de las izquierdas de las décadas de 1960 y 1970 se organizaba en torno de la tensión reforma-revolución, entre quienes defendían caminos graduales y electorales, que incluían la negociación de compromiso con las fuerzas burguesas y los populismos, y aquellos que impulsaban el cambio total por la vía armada. La paradoja es que el faro de este primer gran impulso de la izquierda latinoamericana fue Cuba, pero su modelo de toma del poder no fue replicado con éxito por ningún otro movimiento guerrillero de la región. De hecho, la otra experiencia claramente identificada con la izquierda que llegó al poder en aquellos años lo hizo por una vía completamente distinta: el socialismo democrático de Salvador Allende, a través de elecciones democráticas (el sandinismo nicaragüense, aunque siguió el sendero insurreccional, también era muy diferente del modelo cubano: un amplio frente policlasista que incluía un

---

1. E. Hobsbawm: *Historia del siglo xx*, Crítica, Barcelona, 2005, p. 439.



© Nueva Sociedad / Jorge Roa 2022

sector católico y una importante facción burguesa). Al final, quien terminó de resolver la discusión allendismo-castrismo fue Augusto Pinochet. Designado por Allende al frente del Ejército en la confianza de que se mantendría leal, Pinochet demostró que la última solución de compromiso intentada por el presidente había fracasado. Que Allende, después de horas de resistir en La Moneda combatiendo junto a un puñado de leales, se terminara suicidando con un AK-47 que le había regalado justamente Fidel Castro encierra la última paradoja de la primera ola de la izquierda latinoamericana.

### El giro a la izquierda de los años 2000

La nueva ola de la izquierda es la que comienza con el triunfo de Hugo Chávez en 1999 y continúa con las victorias de Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner, Evo Morales, Tabaré Vázquez, Rafael Correa y Fernando Lugo. Y podríamos sumar los gobiernos de centroizquierda en Chile.

Su condición de posibilidad fue la caída del Muro de Berlín, es decir la desaparición de la Unión Soviética como adversario geopolítico de Estados Unidos. Pero antes hubo que resolver otro debate dentro del campo de la izquierda. Como el debate reforma-revolución de los años 60 y 70, este también se saldó por la cruda vía de los hechos. Había comenzado el 1º de enero de 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) intentó tomar siete cabeceras municipales de Chiapas y emitió su famosa Declaración de la Selva Lacandona, en la que le declaraba la guerra al Estado mexicano. Con su hablar suave de profesor universitario, su pasamontañas negro y sus auriculares descansando en el cuello, el subcomandante Marcos supo combinar reclamos indígenas centenarios con una serie de estudiados gestos simbólicos (el alzamiento, por caso, se produjo el mismo día que entraba en vigencia el tratado de libre comercio con EEUU) y un talento literario capaz de articular en un solo discurso fábulas campesinas, imágenes que remitían a un primitivismo idealizado y sutiles ironías contra la sociedad de consumo, la represión estatal y el capitalismo. Al calor del zapatismo, fueron surgiendo iniciativas como la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), que propuso un impuesto a las transacciones financieras globales; el Foro Social Mundial, un encuentro de partidos políticos y movimientos sociales creado en espejo con el Foro de Davos; y una serie de nuevos enfoques teóricos entre los que sobresalían los libros de Michael Hardt y Antonio Negri y los *best-sellers* globalifóbicos de Naomi Klein<sup>2</sup> (nótese que

---

2. M. Hardt y A. Negri: *Imperio*, Paidós, Barcelona, 2000; N. Klein: *No logo*, Paidós, Barcelona, 2000.

muchas de estas reacciones se originaron en países del Primer Mundo, igual que la banda de sonido de aquellos años, la del artista francoespañol Manu Chao).

Pero el zapatismo no ofrecía un camino a recorrer, mucho menos un programa; funcionaba apenas como una vanguardia cultural inorgánica que encubría su ausencia absoluta de objetivos con las frases de Marcos, de una resonancia romántica conmovedora pero totalmente inútiles en términos políticos. Frente a la propuesta zapatista de «cambiar el mundo sin tomar el poder», la izquierda realmente existente opuso el camino, al menos más concreto, de las elecciones. En algunos casos, llegó al gobierno luego de años de paciente construcción partidaria y territorial (el Partido de los Trabajadores brasileño, el Frente Amplio uruguayo, el socialismo chileno y el Movimiento al Socialismo boliviano); en otros, voló directo al gobierno como un relámpago inesperado (Hugo Chávez, Rafael Correa y, en parte, Néstor Kirchner); y algunos de estos movimientos y líderes (especialmente Evo Morales) combinaron la acción directa en las calles con la disputa electoral clásica.

En todos los casos, la «nueva izquierda», que en su cenit llegó a gobernar todos los países sudamericanos salvo Colombia y Perú, priorizó el acceso al poder antes que las discusiones abstractas. Y desde allí desplegó una serie de políticas que le permitieron, en un contexto ciertamente favorable por los precios ascendentes de las materias primas, combinar tres cosas: sustentabilidad macroeconómica (salvo en Venezuela y en parte en Argentina, el manejo de la macro fue sobrio); amplias políticas de transferencia de ingresos que permitieron impulsos formidables de inclusión (sobre todo en las zonas más desfavorecidas, como el altiplano boliviano y el Nordeste brasileño); y una continuidad político-institucional que permitió ciclos largos de reformas. El debate que dividió a los diversos integrantes de la familia de la izquierda, más práctico que teórico, refería al mejor camino para avanzar en las transformaciones propuestas: ¿impulsar una reforma constitucional que reseteara institucionalmente el país para comenzar desde un «año cero», como hicieron Chávez, Morales y Correa, o garantizar una mayor continuidad, al estilo de Lula da Silva, Kirchner o Tabaré Vázquez? A diferencia del debate de la década de 1960, esta discusión, resumida en la dicotomía chavismo/lulismo, no aludía a la profundidad de las reformas (no hay manera de argumentar que, en los hechos, Lula da Silva fuese menos reformista que Correa, o Kirchner que Evo Morales), sino a la mejor forma de llevarlas a la práctica.

Mientras la izquierda real discutía en los hechos su táctica y avanzaba, el zapatismo se iba deshilachando en una serie de iniciativas que generaban un

**La «nueva izquierda»  
priorizó el acceso  
al poder antes  
que las discusiones  
abstractas**

enorme entusiasmo inicial pero que no daban ningún resultado concreto y que terminaban en una desilusión desmoralizante, al tiempo que establecía una relación de absurda competencia con la izquierda real mexicana encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que incluyó el boicot a las elecciones de 2006, en las que el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quedó a menos de un punto de la derecha. Hoy, con AMLO en el gobierno, el zapatismo administra, a través de sus juntas de buen gobierno, una serie de pequeños municipios chiapanecos, rodeado de un ejército que lo tolera, y sigue fascinando a los mochileros europeos.

### ¿Qué izquierda vuelve?

El final de la ola de gobiernos de izquierda, la más larga y brillante de la izquierda latinoamericana, es conocido: entre el cambio de las condiciones internacionales, el desgaste natural tras más de una década de ejercicio ininterrumpido del poder, las dificultades para procesar la sucesión y el fortalecimiento del bloque derechista, la izquierda fue desplazada del gobierno mediante elecciones limpias (Argentina, Uruguay, Chile) o por vía de golpes o semigolpes de Estado (Paraguay, Brasil, Bolivia); y, si logró mantenerse en el poder, fue al costo de un giro autoritario (Venezuela, Nicaragua). El fracaso de los experimentos de derecha, que no lograron consolidar un ciclo político de largo aliento como el neoliberalismo en los años 90, creó la oportunidad para un regreso de la izquierda. Pero ¿qué izquierda es la que vuelve?

Al igual que en la etapa anterior, la familia de la izquierda está lejos de ser homogénea. En este nuevo tiempo, hay tres conjuntos diferentes, que no constituyen categorías puras sino grupos que podemos construir sobre la base de dos o tres intuiciones.

En primer lugar, *la izquierda autoritaria* de Venezuela y Nicaragua. Aunque originalmente Hugo Chávez y Daniel Ortega fueron elegidos de manera democrática, y por lo tanto correspondía incluirlos en la amplia familia de la izquierda democrática, ambos regímenes fueron derivando en sistemas crecientemente autoritarios: hoy son los únicos países latinoamericanos con presos políticos y dirigentes opositores encarcelados, que celebran elecciones sin verificación internacional y donde, decisivamente, está vigente la reelección indefinida (el límite temporal al ejercicio del poder por la misma persona es una condición básica de las democracias presidencialistas).

El segundo grupo, el más novedoso y en algún sentido interesante, es el de *la izquierda que gobierna en países donde no gobernó la izquierda*: México, Honduras, Perú y ¿Colombia? Aunque con enormes diferencias entre sí, se trata en todos los casos de países cercanos a EEUU, por razones de migración

(México, Honduras), comerciales (todos tienen vigentes tratados de libre comercio con Washington) o de seguridad (Colombia y Perú son los dos principales productores de cocaína del mundo y una fuente de preocupación permanente para EEUU).

El triunfo de Pedro Castillo y el ascenso de Gustavo Petro (en cierto modo, también la victoria de Xiomara Castro en Honduras) tienen en común el haber logrado superar el rechazo que producían las alternativas de izquierda, dados los antecedentes de secuestros y asesinatos de las guerrillas que durante años operaron en ambos países. Castillo tuvo que superar el anticomunismo cerril de parte importante de la sociedad peruana que, junto a factores estructurales (la orientación aperturista de la economía y la fortaleza histórica de la derecha), explica que el país haya quedado afuera de la ola progresista anterior (y lo mismo Petro, que más allá del resultado electoral ha colocado a la izquierda colombiana en su mejor resultado histórico). En estos casos, los triunfos son más ajustados, los márgenes de libertad más acotados y los obstáculos más grandes. Sus victorias son demasiado recientes como para arriesgar un pronóstico. No es el caso de López Obrador, quien ya superó la mitad de su mandato con altos índices de aprobación y que recientemente pasó con éxito el referéndum revocatorio. Más que como modelo a copiar (la realidad de México es demasiado diferente, por ubicación geopolítica, dimensión e historia, de la de Perú, Honduras o Colombia), la experiencia mexicana resulta útil como demostración de que un presidente progresista puede mantenerse en el poder, en este «segundo tiempo» del giro a la izquierda, garantizando la estabilidad macroeconómica y sosteniendo al mismo tiempo el vínculo con los sectores populares.

El tercer grupo es el de *la izquierda que regresa*, conformado por Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile y, si se confirman los pronósticos, Lula da Silva en Brasil. La llegada de estos partidos o líderes al poder es, en primer lugar, resultado del fracaso de las «derechas breves»: a diferencia de lo que ocurrió con el ciclo largo del neoliberalismo, los gobiernos conservadores y liberales no lograron la continuidad por vía de la reelección o de un sucesor aceptable, tal como ocurrió con Mauricio Macri, Sebastián Piñera y el gobierno de facto de Bolivia (y podría ocurrir con Jair Bolsonaro). También a diferencia del neoliberalismo de la década de 1990, este giro a la derecha no llegó con un programa económico claro, más allá de las vagas promesas de terminar con el populismo, y sufrió una cierta «impotencia reformista» que le impidió crearse una base social lo suficientemente amplia como para permanecer en el poder.

**En estos casos,  
los triunfos son  
más ajustados,  
los márgenes de  
libertad más acotados  
y los obstáculos  
más grandes**

El recuerdo —a la larga positivo— de los años 2000-2010 también abrió el camino para el regreso. Con ello, la izquierda demostró que su paso por el poder no fue simplemente una sucesión de casualidades alentadas por el precio de los *commodities* sino la expresión de una representación social con bases sólidas. ¿Qué forma adquiere esta vuelta? La de una mayor moderación, una voluntad de cambio atenuada, en primer lugar, por precios de las materias primas más volátiles y fiscos maltrechos, lo que obliga a gestionar en un marco de restricciones económicas impensables en la etapa anterior. Es una izquierda de la escasez más que de la abundancia. Y, junto a ello, una correlación de fuerzas que también ha cambiado. A diferencia de la etapa anterior, con el bloque conservador astillado y desorientado, esta vez la oposición está liderada por una derecha que, aunque perdió las elecciones, sabe que es capaz de grandes victorias y que, en muchos casos, se ha radicalizado hasta extremos de fascismo. La tercera izquierda es una izquierda modesta: el centrismo de Alberto Fernández y la moderación de Luis Arce se explican tanto por las circunstancias antes descritas como por el hecho de que ambos llegaron al poder como parte de una alianza con sus jefes políticos, que por motivos electorales o judiciales no pudieron presentarse pero que siguen muy presentes en la vida pública de sus respectivos países. La decisión de que el ex-gobernador conservador de San Pablo Geraldo Alckmin acompañe a Lula como candidato a vicepresidente sugiere que el líder del PT también gira al centro.

En esta división tentativa entre diferentes grupos, Boric ocupa un lugar particular. Por un lado, sería incorrecto incluirlo en el subtipo de países donde la izquierda es novedad. Desde el fin de la dictadura pinochetista, el progresismo gobernó Chile —en alianza con la Democracia Cristiana— en tres oportunidades, durante la presidencia de Ricardo Lagos y los dos mandatos de Michelle Bachelet. Pero no pudo establecer rupturas claras con el modelo económico, el marco institucional y el formato de sociedad construido

**Chile se encuentra tramitando un proceso constituyente al estilo de los que se concretaron hace una década en varios países de la región**

a sangre y fuego por Pinochet. Por eso la etapa de movilizaciones sociales, que incluyó momentos cuasi insurreccionales y de la cual el mismo Boric es un emergente, sitúa al flamante gobierno en un lugar diferente al de Alberto Fernández, Arce y eventualmente Lula da Silva. Boric asumió con un mandato de cambio más parecido al de Castillo o a uno eventual de Petro (o de Evo Morales en 2006), y de hecho Chile se encuentra tramitando un proceso constituyente al estilo de

los que se concretaron hace una década en varios países de la región. La diferencia es que, en contraste con las reformas constitucionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que fueron una propuesta original de sus líderes, que se

ocuparon de escribirlas casi diríamos a mano y que las utilizaron como una forma de ratificar su legitimidad popular, la Constituyente chilena es anterior a Boric, que además no la conduce. La complejidad del desafío chileno exige un delicadísimo *mix* de cambio y continuidad cuyo éxito dependerá de la habilidad anfibia de Boric.

## El riesgo de la melancolía

Aunque considerado individualmente cada país es un mundo, América Latina procede por oleadas: en las últimas tres décadas pasó de la hegemonía neoliberal al giro a la izquierda y de ahí a un periodo breve de dominio de la derecha, al que le sigue un incipiente, pero ya perfectamente distinguible, regreso de la izquierda.

La explicación de esta regularidad es geopolítica, con EEUU como principal referencia. La radicalización de la izquierda latinoamericana en los años 60 y 70 se inscribía en las coordenadas de competencia político-ideológica de la Guerra Fría, con el mundo dividido en esferas de influencia y el estallido regular de conflictos por delegación en sus periferias: el sudeste de Asia (Vietnam, Corea), Oriente Medio (Afganistán) y Centroamérica y el Caribe. Si el marco de ese ascenso era la Guerra Fría, el del giro a la izquierda del año 2000 fue el mundo unipolar de pura hegemonía estadounidense creado tras la caída del Muro de Berlín. En *La nueva izquierda*, el primer libro que consideró los progresismos de la primera década del siglo XXI como parte de una misma familia, escribí que el derrumbe de la Unión Soviética —la desaparición de Moscú como Meca— canceló la posibilidad de que las izquierdas latinoamericanas adscribieran a un bloque socialista que ya no existía y les otorgó una libertad geopolítica antes impensada<sup>3</sup>. Con EEUU concentrado en el nuevo enemigo (el terrorismo reemplazó al comunismo) y, sobre todo desde 2001, enfocado en Oriente Medio, los países de América Latina, y en particular los de América del Sur, pudieron elegir a líderes y partidos de izquierda que diez o veinte años atrás hubieran sido bloqueados por Washington mediante operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) o el simple golpe de Estado.

El contexto actual de la vuelta —o la llegada «tardía»— de los progresistas al gobierno es la competencia bipolar entre EEUU y China. En contraste con la Guerra Fría, que prescribía a los países la adhesión a uno de los dos bloques de manera unívoca, como si exigiera exclusividad, la disputa actual se tramita de manera más ambigua. En primer lugar, porque los

---

3. J. Natanson: *La nueva izquierda. Triunfos y derrotas de los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Uruguay y Ecuador*, Debate, Buenos Aires, 2012.

dos contendientes están indisolublemente unidos: las empresas estadounidenses no podrían sobrevivir un día sin la mano de obra barata china y las compañías chinas quebrarían si se cerrara el mercado norteamericano. En segundo lugar, China no exige conversión ideológica a la fe maoísta (fe que ella misma apenas practica) antes de conceder un *swap*, otorgar un crédito o construir una represa —lo que no implica que nada de esto sea gratis—. Como sostienen Esteban Actis y Nicolás Creus<sup>4</sup>, el vínculo combina rivalidad con interdependencia en una competencia que es multidimensional: se manifiesta ruidosamente en la arena comercial, pero tiene también un costado militar y esconde en última instancia una confrontación tecnológica.

Es este conflicto equívoco el que crea las condiciones para el nuevo ascenso de la izquierda. Más que un péndulo, que es la figura clásica de los estudios de relaciones internacionales de la Guerra Fría, se trataría de construir agendas paralelas con los dos gigantes: la clásica «agenda occidental» con EEUU (cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo) y una agenda de inversiones, infraestructura y comercio con China, hoy el primer o segundo socio económico de casi todos los países latinoamericanos. Juan Tokatlian definió la estrategia latinoamericana como una «diplomacia de la equidistancia»<sup>5</sup>, que los internacionalistas chilenos Carlos Ominami, Jorge Heine y Carlos Fortín buscan traducir en una doctrina, a la que llaman «no alineamiento activo»<sup>6</sup>.

Concluyamos. Luego de un periodo breve y turbulento en el que las fuerzas liberales y conservadoras no lograron construir una hegemonía al estilo del neoliberalismo de la década de 1990, la izquierda protagoniza nuevamente el ciclo político latinoamericano. El contexto global ha cambiado y las condiciones son más hostiles que las de la etapa anterior: en la estela de una pandemia devastadora, con una derecha acechante y el riesgo de ofrecer un programa reparatorio que no innove respecto de aquella etapa: la tentación de una izquierda melancólica. En este marco difícil, el éxito de «la nueva nueva izquierda» dependerá, entre otras cosas, de la capacidad de coordinación entre las diferentes tribus, de la habilidad para ofrecer un programa de reforma socioeconómica que contemple las nuevas sensibilidades relacionadas con la diversidad, el feminismo y el cuidado del ambiente, y de la posibilidad de aprovechar la oportunidad geopolítica abierta por la disputa entre China y EEUU. ☐

4. Leandro Darío: «Esteban Actis y Nicolás Creus: 'La relación entre Estados Unidos y China es el termómetro del mundo'» en *Perfil*, 1/1/2021.

5. J. Tokatlian: «La diplomacia de equidistancia, una propuesta estratégica» en *Clarín*, 10/2/2021.

6. C. Fortín, J. Heine y C. Ominami (coords.): *El no alineamiento activo y América Latina: una doctrina para el nuevo siglo*, Catalonia, Santiago de Chile, 2021.

# América Latina: no todo lo que brilla es un «ciclo»

Manuel Canelas

La victoria de fuerzas progresistas en diversos países ha impedido la consolidación de un «giro a la derecha» en la región, pero ¿qué tan productivo es pensar la política latinoamericana en términos de ciclos?, ¿qué características tienen estos nuevos progresismos?

Que las fuerzas ubicadas a la izquierda del espectro político ganen elecciones y lleguen al gobierno en una cantidad significativa de países es una condición necesaria para poder hablar de un ciclo político progresista, pero de ningún modo es una condición suficiente. Desde algunos sectores progresistas se certifica desde hace algún tiempo que América Latina vive un «segundo giro a la izquierda» y lo primero que se suele enseñar como prueba de esta afirmación es la lista de las últimas victorias electorales. Es cierto, sin duda, que la izquierda ha sumado victorias electorales importantes en los últimos dos años: el retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia al poder luego del golpe de Estado contra Evo Morales, la victoria de Gabriel Boric en Chile, el triunfo de un peronismo de centroizquierda en Argentina y la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México. Pero conviene tomar estos datos con cautela y realizar un análisis más detenido antes de hacer afirmaciones ideológicas demasiado apresuradas.

---

**Manuel Canelas:** tiene una maestría en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Fue diputado, viceministro de Planificación y ministro de Comunicación en Bolivia durante la legislatura 2015-2020.

**Palabras claves:** ciclo, giro a la izquierda, progresismo, América Latina.

### **Los análisis en términos de ciclos llevan en ocasiones a percepciones que exageran tendencias**

Hay varios ejemplos recientes en la región, tanto en la izquierda como en la derecha, de que el resultado de una elección no determina un rumbo ideológico predeterminado y de que, de hecho, ese rumbo puede incluso ser bastante diferente del que se hubiera esperado en sus comienzos. Seguramente dos de los casos más paradigmáticos son los del colombiano Juan Manuel Santos y el ecuatoriano Lenín Moreno. Por eso, los análisis en términos de ciclos llevan en ocasiones a percepciones que exageran tendencias y pierden capacidad para mirar las tensiones que atraviesan la política latinoamericana. Tanto en la izquierda como en la derecha, en estos años las sucesiones cortocircuitaron en varios países las continuidades lineales tanto de las políticas como de los liderazgos «naturales» de cada sector.

### **Huevitos que se rompen**

Cuando Álvaro Uribe le entregó el mando a Juan Manuel Santos en 2010, también le transmitió su legado representado en sus famosos «tres huevitos»: seguridad democrática, confianza de los inversores y cohesión social. Además de representar su herencia, esta entrega significaba un mandato a su sucesor y ex-ministro de Defensa: las fronteras de lo que Santos podía hacer las marcaban estos huevitos, que llevaban escritos en tinta invisible los ejes de la hegemonía uribista, que entonces llevaba muchos años dando señales de fortaleza y que la victoria electoral de Santos pareció corroborar. Sin embargo, el guion y la tutela que imaginó Uribe no se mantuvieron vigentes mucho tiempo más después de ese simbólico acto. Uno de los desafíos más duros planteados a Uribe provino precisamente de Santos quien, pese a formar parte del ala dura, no tardó en enfrentarse política y públicamente con él para terminar rompiendo ruidosamente su relación y convertirse en declarado enemigo político. A inicios de 2014, de hecho, Uribe exhibía en un evento público una canasta con tres huevos dañados, y en un acto que no ahorra teatralidad, preguntaba a la gente que lo rodeaba si el gobierno de Santos había sabido cuidar esos huevos. Obviamente, el público gritaba «No» y Uribe confirmaba: «Los quebraron. No quedó ni para [hacer una] tortilla». Santos tenía sus propias ideas y objetivos —muy alejados de los de la derecha dura colombiana a la que había adherido—, entre los que estaba el avanzar en serio en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y restablecer relaciones con gobiernos y figuras de la izquierda nacional y regional a los

que su predecesor les había declarado una dura guerra. Promovió y llevó a cabo el referéndum sobre la paz, decisión que el uribismo combatió con intensidad participando activamente en una beligerante campaña por el «No», con Iván Duque como vocero destacado. El «No» se impuso por la mínima y Uribe pudo celebrar el haber propinado una derrota a su gran rival sin que le importase mucho la oportunidad perdida que esta victoria suponía para el país. Santos sí fue consciente de que esta oportunidad, incluso perdida, no podía dejarse pasar, y se empeñó en avanzar de todas maneras en un proceso complejo pero que se resolvió positivamente, y que, entre otras cosas, le valió el Premio Nobel de la Paz y significó un importante paso en el cese de la violencia en Colombia.

Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa, además de ser uno de los dirigentes de primera línea de Alianza País desde los inicios de esta organización política. El binomio oficialista para las elecciones de 2017 se completó con Jorge Glas, quien fuera el otro vicepresidente de los años de Correa y, además, amigo íntimo suyo. La dupla se leyó como una combinación de un perfil político popular, que podía llegar a ciertos sectores molestos con los últimos años del correísmo, pero con un deseo de autonomía creciente, y el de un hombre totalmente leal al entonces presidente. Sin embargo, no había muchas dudas de que ambos compartían en líneas generales lo hecho por su partido y su líder histórico. Ambos habían sido protagonistas de esa década. La derecha ecuatoriana y regional hacía pocas distinciones, tanto la primera vuelta como la segunda se llevaron a cabo en un clima tenso y, de hecho, hubo una campaña fuerte para denunciar un supuesto fraude en favor de Moreno. La ofensiva de la derecha parecía soldar las diferencias internas que, en todo caso, no parecían aventurar un quiebre como el que luego se produjo. Se daba por descontado que una victoria de Moreno sería también una victoria de Correa y, por lo tanto, una continuidad del ciclo progresista en Ecuador y una señal para la región. En efecto, en el mitin de presentación oficial del binomio, con Correa, Moreno y Glas en el escenario, el entonces candidato presidencial contó a la multitud reunida la importancia que tenía para él verse acompañado de Glas. Moreno explicó que, interrogado por un joven familiar suyo sobre cómo podría hacer frente al reto complejo de dirigir el Ecuador, había respondido varias veces que lo enfrentaba más seguro y confiado porque sabía que Jorge Glas lo acompañaba.

Sin embargo, la ruptura y el cambio radical de guion de Moreno no tardaron demasiado en producirse. Quienes lo habían contado como un refuerzo progresista en la región se vieron rápidamente decepcionados. Glas fue destituido y enviado a prisión, en un proceso que tuvo múltiples observaciones. Moreno acompañó su giro neoliberal con una fuerte ofensiva contra Correa y sus cuadros principales, y cuestionó varias de las decisiones

más importantes de la última década, en la que él no fue un actor secundario. En política regional, se enfrentó a los gobiernos de izquierda, desahució a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) e incluso clausuró la propia sede del organismo en Quito; volvió a establecer una relación cercana con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), etc. El balance de su gobierno, a diferencia del de Santos, tiene poco de positivo o relevante si nos guiamos por diversos estudios de opinión sobre su larga y sostenida desaprobación, y por la imposibilidad de Moreno y su espacio de presentar una candidatura propia mínimamente competitiva para las elecciones de 2021. Sin embargo, el daño que le supuso al correísmo fue relevante, y si bien su binomio en 2021 fue líder en la primera vuelta electoral, perdió con Guillermo Lasso en la segunda y, por diferentes razones, el espacio no ha logrado recuperarse suficientemente y retornar al poder, como sí lo hicieron el peronismo en Argentina o el MAS en Bolivia.

En Perú está el antecedente reciente de Ollanta Humala, quien también dio un giro de una envergadura parecida a los casos arriba señalados. Su victoria pareció un vuelco del país hacia la izquierda; su gobierno tuvo

**«Temíamos  
que Castillo fuera  
un Ollanta 2.0.  
Resulta que es un  
Ollanta 0.2 Mal»**

un primer gabinete de ministros con un peso importante de figuras relevantes de la izquierda peruana, pero no tardó mucho en escoger otro rumbo. En los últimos tiempos, buena parte de la izquierda de Perú asiste con perplejidad y con temor al rumbo que lleva el gobierno de Pedro Castillo, para algunos ya una suerte de *déjà vu* de lo que fue Humala, pero con una perspectiva más incierta. El escritor Juan Manuel Robles se lamentaba en Twitter: «Temíamos que Castillo fuera un Ollanta 2.0. Resulta que es un Ollanta 0.2 Mal».

Lo ajustado de la victoria de Castillo, por escasos 44.000 votos frente a Keiko Fujimori, le imprimió la poca épica que le faltaba al histórico acontecimiento que suponía su llegada al gobierno del Perú: un maestro rural desconocido para la mayoría del país hasta pocos meses atrás, con un discurso de recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, en favor de abrir un proceso constituyente, apoyado por la izquierda nacional y regional. Desde Luiz Inácio Lula da Silva hasta Evo Morales, las figuras y los partidos políticos progresistas más importantes de la región le dieron la bienvenida y celebraron que su victoria marcaba el segundo ciclo progresista en la región. Sin embargo, nueve meses después de su asunción, Castillo suma ya cuatro gabinetes distintos, varias de sus banderas iniciales de cambios profundos han quedado relegadas y ha roto con buena parte de la izquierda y con referentes como Verónica Mendoza o Avelino Guillén.

Para buena parte de ellos, es imposible ya hablar de Castillo como un proyecto nítidamente progresista. Incluso la izquierda que aún lo apoya o participa en su administración se refiere a que el sentido del gobierno de Castillo está en pugna y a que es mejor dar esa pelea desde dentro. Ya no existen, en todo caso, las definiciones que había en un principio. Algunos de sus últimos nombramientos, como Óscar Graham en lugar de Pedro Francke como ministro de Economía y Finanzas, certifican un desplazamiento progresivo hacia posiciones mucho más moderadas o incluso conservadoras. En el campo internacional, Perú, a diferencia de Bolivia, México o Argentina, ha mantenido una buena relación con Luis Almagro y la Organización de Estados Americanos (OEA). También ha respaldado claramente la participación de su país en la Alianza del Pacífico o en el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TTP-11). Si bien es cierto que también retiró a Perú del Grupo de Lima, el gobierno ha marcado distancia con el gobierno de Nicolás Maduro. Y en el campo interno, las protestas han venido escalando ante la falta de capacidad oficial para canalizarlas hacia algún tipo de negociación.

### ¿Gobiernos y hegemonía?

Este último punto, la relación entre algunos de los proyectos de izquierda que han ganado elecciones recientemente o que tienen serias posibilidades de victoria, es uno de los puntos más importantes que analizar para ver si es posible o no incluir a todas estas izquierdas dentro de la misma ola progresista, o bien si no hay ya algunos ejes en los que existen posiciones con diferencias mayores a los matices, que vuelven mucho más difícil y complejo agruparlas dentro de un mismo bloque.

Mucho antes de ser elegido presidente de Chile, Gabriel Boric ya había sido crítico con el gobierno de Maduro. En ese sentido, las posiciones que ha asumido desde que fue electo no son una sorpresa, pero el cambio es muy relevante. Alguien podría haber esperado que, como presidente, y al ubicarse claramente en la izquierda política, se viera tentado a rebajar el contenido de sus críticas, además del hecho de que Venezuela lleva un tiempo de relativa estabilidad y recuperación. Hace poco tuvieron lugar las elecciones regionales con múltiples observadores internacionales, en las que el chavismo perdió –y aceptó el resultado de inmediato, contra lo que algunos esperaban– en históricos feudos como el estado de Barinas. Incluso el gobierno estadounidense ha enviado a Venezuela algunas señales e interlocutores por el tema petrolero, en el marco de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Sin embargo, una vez electo, Boric no cambió la opinión

de sus años como diputado y ha señalado con bastante claridad que para él Venezuela no solo no es un modelo, sino que el gobierno de Maduro ha cometido serias violaciones a los derechos humanos, y no le quita responsabilidad en el éxodo de más de cinco millones de venezolanos, muchos de los cuales migraron precisamente a Chile (migración que es motivo de tensión política y expresiones de xenofobia en el norte del país).

Como era de esperar, esto fue respondido desde distintos espacios. El ex-presidente ecuatoriano Rafael Correa, el intelectual argentino y ahora dirigente del Partido Comunista Atilio Borón o el ex-canciller venezolano y yerno de Hugo Chávez Jorge Arreaza cuestionaron al joven mandatario chileno. Borón le recomendó tomar clases de historia<sup>1</sup> y Arreaza salió al cruce en Twitter: «Hay izquierdas tan extraviadas que no se dan cuenta [de] que, sin la resistencia y el coraje de los pueblos más asediados por EEUU, ellas serían poco menos que nada». El mensaje de Arreaza obtuvo el apoyo de Daniel Jadue, figura importante del Partido Comunista chileno y ex-contendor de Boric en las primarias de la alianza Apruebo Dignidad. «Toda la razón, compañero. Fuerza y coraje para lo que se avecina», comentó ante el mensaje del venezolano.

La masiva migración venezolana a países como Perú, Colombia o Chile ha provocado que lo que antes podía ser solamente una disputa ideológica entre elites políticas de países diferentes ahora tenga un fuerte componente de política interna. La presencia de decenas y centenas de miles de venezolanos modifica aspectos de la política interna de estos países y, al mismo tiempo, «populariza» la crisis venezolana entre amplias capas de la población, que escuchan testimonios directos de sus vecinos, clientes o compañeros de trabajo venezolanos.

Esto puede explicar, en parte, que incluso gobiernos en principio de la misma órbita que el venezolano tengan posiciones críticas más duras. Este hecho no será algo pasajero, es una realidad que tiene cierta vocación de extenderse en el tiempo. Y es, por supuesto, un problema de primer orden si hablamos de la supuesta existencia de un nuevo ciclo progresista en la región.

Hoy es difícil ver a Boric, Castillo o Alberto Fernández pensar en muchas, o incluso en pocas acciones conjuntas con el gobierno de Maduro, pero además con el de Cuba o Nicaragua. Colombia tiene una situación idéntica en esta materia y, por lo tanto, no es de extrañar que también Gustavo Petro, quizás con algo menos de dureza que Boric pero también de manera clara, haya marcado sus diferencias con el gobierno venezolano.

---

1. A. Borón: «URGENTE: presidente inexperto necesita clases de historia de A. Latina, colonialismo cultural, imperialismo y relaciones internacionales...» en Twitter, 22/1/2022.

Cuando Maduro criticó a Boric y Castillo como representantes de la izquierda cobarde, el líder de Colombia Humana –la principal figura de la izquierda en el país– le respondió en Twitter: «Le sugiero a Maduro que deje sus insultos. Cobardes [son] los que no abrazan la democracia. Saque a Venezuela del petróleo, llévela a la más profunda democracia, si debe dar un paso al costado, hágalo».

Alguien podría objetar que en el primer «giro a la izquierda» también había diferentes apuestas estratégicas, culturas políticas y sensibilidades. Pero no es menos cierto que existían un espacio común y vínculos estrechos entre gobiernos progresistas, más allá de que tuvieran sesgos más «socialdemócratas» o más «populistas», con una cierta división de tareas, en el caso sudamericano, entre el Brasil «lulista» y la Venezuela «chavista», tanto en el plano de la integración regional como en el de las redes de partidos y movimientos. Precisamente, el solapamiento de esas «dos izquierdas» es lo que definió el ciclo progresista que operó desde mediados de los años 2000 hasta mediados de la década de 2010, con periodizaciones diferentes según los países. Hoy vemos un atrincheramiento de los discursos más bolivarianos, con menos capacidad expansiva, y la emergencia de diferentes variantes de (centro)izquierda, a menudo en coaliciones con divergencias internas significativas (como se ve en Argentina, Bolivia, Perú y, con menos intensidad por el momento, en Chile).

En lo que único que parece haber coincidencia es en celebrar diferentes victorias electorales como prueba de la existencia del «segundo ciclo», pero se habla menos del día después y de las gestiones concretas de gobierno. La derecha durante algunos años también sumó varias victorias electorales: Iván Duque en Colombia, Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, y ello no fue suficiente para que se verificara, en la práctica, un ciclo conservador en la región. Y esto es así en buena medida porque esos gobiernos fracasaron internamente, fueron poco ambiciosos, dentro de sus coordenadas ideológicas, hacia afuera, y actuaron de forma poco coordinada.

Fueron varios los factores que impidieron que ese ciclo se concretara: su «globalismo» quedó desfasado por los efectos de las políticas de Donald Trump<sup>2</sup>; las organizaciones sociales mantuvieron un poder de veto, fortalecido en el ciclo

**Hoy vemos un  
atrincheramiento  
de los discursos  
más bolivarianos,  
con menos capacidad  
expansiva**

---

2. José A. Sanahuja y Jorge D. Rodríguez: «Veinte años de negociaciones Unión Europea-Mercosur. Del interregionalismo a la crisis de la globalización», Documento de Trabajo Nº 13/2019 (segunda época), Fundación Carolina, Madrid, 2019.

anterior, sobre medidas demasiado «neoliberales»; y las fuerzas de izquierda conservaron caudales electorales que les permitieron seguir siendo competitivas. A ello se sumaron movilizaciones sociales en varios países, con el estallido chileno como la expresión más significativa.

Solo hubo una excepción que no modifica el fondo: el esfuerzo coordinado en pos del «cambio de régimen» en Venezuela y, en el plano de la integración, el desmonte de la Unasur. No hubo nada más reseñable —el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) no pasó de ser el nombre de una aspiración— y los gobiernos convivieron con índices de popularidad elevados (Piñera, Duque) o crisis económicas que carcomieron sus ansias reeleccionistas (Macri).

Los gobiernos de Chávez, Morales, Correa, Lula da Silva y Dilma Rousseff o el kirchnerismo se extendieron más allá de un mandato, además de haber logrado muchos de ellos victorias con claras mayorías en sus parlamentos. En síntesis: lograron una hegemonía significativa sobre la sociedad y capturaron un clima de época «posneoliberal». Nada de esto parece darse hoy. Ya no existen las mayorías parlamentarias del pasado y algunos de los líderes históricos no ocupan el liderazgo formal en sus gobiernos (Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales) y, como mención importante, las tensiones internas en los oficialismos progresistas son hoy públicas. Incluso en el caso de los líderes históricos, como Lula da Silva, vemos esta misma dinámica. Si gana en las elecciones de octubre —con lo cual la izquierda volvería al país más grande de Sudamérica—, Lula no tendrá una mayoría clara en el Parlamento brasileño —un Parlamento inmanejable, atravesado por la política «fisiológica» y clientelar y la fuerte fragmentación, que ya fue un problema para el Partido de los Trabajadores (PT)— y, por razones propias de la biología, es difícil creer que el ex-dirigente metalúrgico pueda gobernar más de un periodo. El PT, todavía en crisis y con fuerte resistencia, tendrá el reto de saber si aprovecha su paso por un posible gobierno para fortalecerse como una opción de poder más allá de Lula da Silva.

Por último, pero no menos importante, cabe apuntar que uno de los efectos de la pandemia es que la ciudadanía ha elevado sus exigencias en clave nacional y las fidelidades de los electorados se han vuelto más volátiles. No son buenos tiempos para las apuestas por la integración regional. De hecho, los brotes de xenofobia en Chile, Perú o Colombia en relación con los inmigrantes venezolanos se han incrementado sustancialmente estos últimos dos años. Es poco probable que ahora concite mucho apoyo social que un presidente de la región se ofrezca a organizar cumbres y encuentros de líderes que no suelen tener resultados inmediatos. En este repliegue nacional, también se puede leer el intento del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou de flexibilizar el Mercado Común del Sur (Mercosur), uno de los pocos organismos

sudamericanos estables, para precautelar sus intereses nacionales. De hecho, es difícil creer que si la Presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) no hubiese recaído en México durante la pandemia esta organización hubiera podido sobrevivir. Solo un país del tamaño de México, con la posibilidad de poner recursos y con un presidente fuerte política e institucionalmente, podía embarcarse en una iniciativa como esta, de clara importancia regional. El contexto descrito no pone las cosas fáciles para la vigencia y consolidación de un potencial «segundo ciclo progresista». No lo desahucia, pero cabe mantener cierta cautela a la hora de colocar calificaciones ideológicas.

Aunque la izquierda podría sumar más gobiernos que en el primer «ciclo», hay un creciente hiato entre gobierno y hegemonía, en un contexto global incierto marcado por una sucesión de crisis y un debilitamiento de los imaginarios, los discursos y los liderazgos de los progresismos regionales, que buscan diversas formas de recomponer sus proyectos y encontrar nuevos relatos movilizados. ☐

## ÍCONOS

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

Mayo-Agosto de 2022

Quito

Vol. XXVI Nº 73

URBANISMO, ARQUITECTURAS Y DISEÑOS FEMINISTAS

DOSSIER: Presentación del dossier, **Laura Sarmiento, Inés Moisset y Natalia Czytajlo**. Labores de cuidado y covid-19: cambios en la movilidad cotidiana de mujeres en Santiago, Chile, **Catalina Paz Zúñiga-Olave y Marie Geraldine Herrmann-Lunecke**. Movilidad y género en contextos de vulnerabilidad: el caso del Sistema Metropolitano de Tucumán, **Inés González-Alvo y Natalia Czytajlo**. Paisajes del cuidado en la Ciudad de México. Experiencias, movilidad e infraestructuras, **Paula Soto-Villagrán**. Planificación urbana, covid-19 y diversidades sexogenéricas en Pereira, Colombia, **Miguel Peraza**. Retos al feminismo popular: intervenciones urbanas en el Pedregal de Santo Domingo, México, **Socorro Pérez-Rincón**. TEMAS: Hablar de mí es hablar de todas: memorias y emociones entre activistas afroargentinas, **Paola Monkevicius**. Más que un expediente... Las madres de las personas desaparecidas en México y sus carpetas de investigación, **Isaac Vargas**. La relación capital-trabajo en la Industria 4.0, **Guillermo Foladori y Ángeles Ortiz-Espinoza**. Números de la injusticia ambiental: la medición de la impunidad en México, **Juan Antonio Le Clercq y Celeste Cedillo**. Conflicto hídrico y defensa territorial: mujeres en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Argentina, **Mariela Peña**.

Íconos es una publicación cuatrimestral de Flacso-Ecuador, La Pradera E7-174 y Av. Almagro, Quito, Ecuador. Tel.: (593 2) 3238888. Correo electrónico: <revistaiconos@flacso.edu.ec>. Página web: <www.revistaiconos.ec>.

# Una promesa llamada Gabriel Boric

Juan Pablo Luna

El triunfo de Gabriel Boric en Chile ha generado, por sus propios méritos, gran entusiasmo dentro y fuera del país. No obstante, a los problemas económicos y sociales –y también en el plano de la seguridad– del «modelo chileno», se suma el hecho de que el nuevo proyecto de izquierda ha crecido de manera aluvial y no ha enraizado suficientemente en la sociedad chilena.

La llegada de Gabriel Boric y del Frente Amplio chileno al gobierno se ha transformado en la esperanza del nuevo progresismo latinoamericano, e incluso global. Se trata, sin duda, de una nueva izquierda, y no solo en términos de recambio generacional: es feminista, promueve el multiculturalismo, combina una fuerte conciencia ambiental con la preocupación clásica por la equidad y la incorporación social de los sectores subalternos, y ha venido afirmando su fuerte compromiso democrático y con los derechos humanos, incluso en referencia a procesos «sensibles» para las izquierdas como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ese compromiso también aplica a Chile y tiene múltiples aterrizajes: desde la violencia policial al doloroso y persistente problema de la vulneración que sufren cotidianamente los niños que se encuentran bajo la tutela estatal en el Servicio Nacional de Menores (Sename)<sup>1</sup>. Es también una izquierda que piensa a Chile desde América Latina, en

---

**Juan Pablo Luna:** es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

**Palabras claves:** Convención Constitucional, izquierda, Gabriel Boric, Chile.

1. Javiera Matus: «Sename registró 4.500 denuncias por maltrato a menores en 2020» en *La Tercera*, 14/2/2021.

lugar de visualizarse a sí misma (e intentar venderse) como el ejemplo de país que logró «escapar» de la región.

En el caso de Boric, además, esta nueva izquierda se articula en torno de un liderazgo con una capacidad innata para el manejo de los elementos simbólicos, para conducir los gestos y para desplegar empatía, tanto a través de abrazos como de redes sociales. El pasado verano, durante el periodo de transición, Chile recobró la alegría tras largos años de agobio, incertidumbre y malestar. Boric resplandecía donde el liderazgo presidencial de Sebastián Piñera generaba hastío y rechazo. La nominación de un gabinete con mayoría de mujeres, con niveles inéditos de diversidad social y territorial, con *expertise* técnica pero además de trabajo social en las carteras sectoriales, también contribuyó significativamente a generar una genuina esperanza. Y mientras el recambio de elites gobernantes cristalizaba la ilusión de dejar atrás a una clase política tradicional cómplice de los «abusos» del «modelo», la Convención Constitucional también prometía desanclar las rémoras institucionales de un nuevo orden social. Este clima culminó en un cambio de mando pleno de símbolos y de optimismo.

No obstante, las primeras semanas del gobierno encabezado por Boric, así como el derrotero de la Convención Constitucional, han puesto rápidamente en entredicho su promesa. La luna de miel fue intensa, pero corta. Como tantas otras exportaciones no tradicionales de Chile («una economía competitiva, con bajos niveles de colusión y corrupción», «un sistema de partidos institucionalizado», «un Estado capaz y eficiente», «una sociedad con bajos niveles de informalidad»), esta nueva izquierda podría ser algo «hidropónica», sin un suficiente encauzamiento en la sociedad.

En el resto del texto analizo los factores estructurales que subyacen a esta debilidad. Primero, describo las características del sistema político en el que opera el gobierno. Segundo, exploro la carencia de una sociología política y economía moral capaces de anclar un nuevo modelo de desarrollo. Tercero, doy cuenta de debilidades centrales del Estado chileno contemporáneo. Finalmente, concluyo explorando la difícil encrucijada que hoy enfrenta el gobierno de Boric.

## La (des)estructura política

Aunque tiene cimientos en una trayectoria colectiva e individual más larga, cuyos orígenes deben rastrearse en el movimiento estudiantil de 2011 y sus antecedentes, el caudal electoral que llevó a la victoria de Boric emergió en un plazo de nueve meses. Lo que sería un rutilante triunfo en la segunda

vuelta del 19 de diciembre de 2021 comenzó con un intenso debate interno, en un contexto de fuerte debilidad política, en el que la disyuntiva era presentar un candidato propio para marcar presencia y evitar una crisis final del Frente Amplio o simplemente adherir a la candidatura encabezada por el alcalde comunista Daniel Jadue. Las dudas y dificultades para recolectar las 32.000 firmas necesarias para inscribir la candidatura, sobre un padrón electoral de más de 14 millones de votantes, reflejaron la endeblez del proyecto presidencial de Boric.

Durante los nueve meses transcurridos entre marzo y diciembre de 2021, la candidatura de Boric superó obstáculo tras obstáculo, estribando en dos estrategias: destacar las características personales del candidato («escucha», «reconoce sus errores y sabe pedir perdón», «apostó aun en contra de su partido a la vía institucional») y convertirlo en el mejor candidato «anti». Primero fue anti-Jadue, luego fue anti-Concertación y anti-Piñera, y finalmente anti-José Antonio Kast, el postulante de la extrema derecha. En este trayecto, se consolidó una consigna programática que emergió en la disputa con el candidato comunista en la primaria de Apruebo Dignidad —la alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista—: «la gente quiere cambios tranquilos, con seguridad».

El crecimiento electoral fue tan aluvional como precarias son sus bases sociales y organizativas. El resultado de la elección parlamentaria también refleja esas debilidades: muchos de quienes votaron por Boric y Apruebo Dignidad en la segunda vuelta optaron por parlamentarios de otros partidos en la elección legislativa. También lo hicieron en las elecciones locales y regionales, así como en la primera vuelta presidencial.

El gobierno hoy se estructura en torno de dos coaliciones. Por un lado, está la del Frente Amplio con el Partido Comunista y otros partidos menores (Apruebo Dignidad), la que sostuvo la candidatura presidencial de Boric. Por otro, la alianza con la socialdemocracia, representada por el Partido Socialista (ps) y el Partido por la Democracia (ppd). A pocas semanas del traspaso de mando, la tensión entre ambas coaliciones, propiciada por el desembarco del espacio socialdemócrata en puestos claves del gobierno y el malestar de la vieja guardia del Partido Comunista, es evidente.

La escasez de cuadros propios, así como la necesidad de viabilizar mayorías legislativas con el bloque ps-ppd, ha vuelto fundamental la incorporación de figuras destacadas de la Concertación en puestos de gobierno de Boric. Esto, si bien dota de capacidad de gestión y experiencia al gobierno y tranquiliza a los mercados, también abre flancos a la izquierda de Apruebo Dignidad y genera desconfianza en quienes apostaban a un recambio (más profundo) de elites. También ha comenzado a generar ruido el desempeño de Izkia Siches, un liderazgo central en el armado del gobierno y carente de



afiliación partidaria. La ex-presidenta del Colegio Médico, que desembarcó en el comando para la campaña de segunda vuelta y tuvo un rol fundamental en dotarla de arraigo electoral en el norte del país, hoy tiene a cargo la Jefatura de Gabinete y el ministerio de más difícil gestión: Interior.

Seguramente por oposición al liderazgo omnipresente y agobiante de Piñera, en sus primeras semanas Boric ha restringido su presencia pública y dado protagonismo a sus ministros y a distintas figuras de gobierno. Aunque razonable y bienvenida, esta modalidad de gestión no está exenta de riesgos, particularmente cuando las voces de gobierno han comenzado a sonar como un coro desafinado y desordenado de personajes que pujan por hacerse oír y tener presencia en medios y redes sociales.

Pero las dificultades que enfrenta ya el gobierno no son meramente atribuibles al liderazgo presidencial, a su elenco o a su base política. En realidad, reflejan claves sistémicas. El sistema de partidos tradicional no solo se volvió ilegítimo para la mayoría de la población chilena, sino que perdió capacidad de vertebrar y canalizar institucionalmente conflictos sociales centrales que quedaron huérfanos de representación política. Con el estallido de 2019, esos conflictos larvados y presentes hace tiempo, tanto sectoriales como territoriales, irrumpieron con estridencia en el escenario nacional. Sin embargo, el «estallido» solo es representable en su voluntad destituyente (de la clase política tradicional) y en la negación de los pilares institucionales del orden preexistente. Más allá de ambos tropismos, no hay (¿todavía?) en las elites emergentes capacidad de síntesis o articulación del descontento en clave más constructiva.

El devenir de la Convención Constitucional refleja claramente la imposibilidad de vertebrar el conflicto en el Chile actual. Instalada con niveles de legitimidad social inéditos en el periodo posdictatorial, la Convención ha quedado presa de su propia legitimidad, buscando afirmarla y reafirmarse, mediante gestos y giros identitarios que cada vez generan menos adhesión en la opinión pública. La Convención y su proceso, más que una solución institucional a los problemas de Chile, reflejan la dificultad para representar constructivamente las rabias, demandas e identidades que legítimamente se fraguaron (y bifurcaron) tras décadas de negación y postergación.

Esas rabias, demandas e identidades tienen como contracara el vaciamiento, la ilegitimidad y la fragmentación de las organizaciones partidarias y de los movimientos sociales. Mientras los movimientos sociales se encuentran y convergen en la protesta callejera, los partidos suman los votos de quienes corren bajo sus etiquetas los días de elección. Pero ambos son frágiles desde el punto de vista organizativo y se quiebran ante el primer intento de síntesis, propuesta o emergencia de un liderazgo, que rápidamente genera sus «antis». En este marco, el vacío lo llenan personajes que movilizan «por

aire» e intentan estirar sus 15 minutos de fama cabalgando con habilidad la controversia o el escándalo cotidiano. Esos personajes protagonizan una discusión política tan pobre que en muchos aspectos termina siendo un lamentable «camorreo», un debate lleno de prejuicios, pequeñas disputas y alusiones *ad hominem*. Hay quienes ven en ese camorreo una polarización izquierda-derecha, pero en el mejor de los casos se trata de una polarización más bien artificial entre quienes, a izquierda y derecha, intentan desmarcarse de la mácula sistémica. En estas discusiones superficiales se nos pasan los días, los meses y los periodos electorales.

De un sistema que funciona con esta lógica, desde hace años, provienen las fragilidades que hoy enfrenta el gobierno de Boric para estructurar y canalizar el conflicto. Esas debilidades, para ser claros, le son propias. La principal ventaja con que hoy cuentan el presidente y su gobierno es un emergente clivaje generacional (que ha logrado incorporar parcialmente a jóvenes de segmentos populares), aún en proceso de cristalización. Los partidos que propiciaron su candidatura, no obstante, están hoy volcados de lleno a la acción de gobierno y ven debilitada su ya escasa presencia organizacional en la sociedad. Y en una economía en la que está escaseando el pan, el circo, tan propio del sistema político nacional y su derrotero, rápidamente estará jugando en contra del presidente y su elenco.

**La principal ventaja con que hoy cuentan el presidente y su gobierno es un emergente clivaje generacional**

## Un nuevo modelo de desarrollo sin actores

El desafío para una nueva izquierda a escala regional consiste en encontrar una alternativa que permita generar crecimiento económico y protección social, escapando, o amortiguando al menos, las lógicas de crecimiento predominantes en el primer «giro a la izquierda». Durante la primera década y media del siglo XXI, la izquierda adhirió a lo que Maristella Svampa denominó el «Consenso de los *Commodities*», para buscar el crecimiento económico y la incorporación al consumo<sup>2</sup>. Hoy ese patrón de crecimiento está entredicho, entre otras cosas, por la crisis ecológica y por sus impactos en territorios y comunidades. Al mismo tiempo, la restricción fiscal (incomparable a la holgura generada por el *boom* de las materias primas entre 2005 y 2015) acota los márgenes de acción y de gasto público.

---

2. M. Svampa: «'Consenso de los *Commodities*' y lenguajes de valoración en América Latina» en *Nueva Sociedad* N° 244, 3-4/2013, disponible en <[www.nuso.org](http://www.nuso.org)>.

Los programas de transferencia condicionada, por otra parte, altamente efectivos por su impacto en la pobreza y su bajo costo fiscal, se quedaron cortos en términos distributivos. La segunda transición demográfica, así como la necesidad de acotar las brechas de género, exige hoy expandir políticas de cuidado y reformar sistemas de pensiones y de salud pública escuálidos. La mayor incorporación al sistema educativo formal alcanzada en las últimas décadas no ha permitido, empero, reducir suficientemente las brechas internas (entre ricos y pobres) y externas (respecto al logro y calidad educativa en países desarrollados). En un mundo en plena revolución tecnológica, los déficits en investigación y desarrollo limitan la capacidad de los países de América Latina de insertarse en cadenas de valor globales como algo más que productores de materias primas.

Esa incapacidad impacta también en una creciente dualización de los mercados laborales locales, al ampliar brechas entre quienes acceden a trabajos de alta productividad y remuneración y quienes prestan servicios en condiciones cada vez más precarias de empleo. En esta fuerza laboral precarizada tiene participación creciente la población migrante, cuya incorporación laboral, en contextos de baja sindicalización, presiona a la baja los salarios y alimenta reacciones xenófobas por parte de trabajadores nacionales desplazados.

El problema de la vivienda también refleja un proceso de fuerte dualidad entre quienes acceden a créditos para inversión inmobiliaria (desde la compra de departamentos para arriendo al desarrollo inmobiliario) y quienes se ven forzados a arrendar en un contexto en el que la escasez de oferta y el endurecimiento de los créditos para sectores medios y bajos han empujado los precios al alza. En el caso de Chile, por ejemplo, se estima que en la pospandemia unos dos millones de personas carecen de acceso a una vivienda digna. En este contexto social general, la informalidad e incluso la ilegalidad se han revitalizado como canales alternativos para la aspiración de movilidad social bloqueada por una economía formal fuertemente estamental que reproduce desigualdades. Estas desigualdades, al mismo tiempo, se han politizado significativamente en los últimos años.

Por su parte, los Estados, que deberían jugar un rol de articulación estratégica en la promoción de industrias y sectores capaces de generar un nuevo tipo de crecimiento económico, son hoy cada vez menos capaces de hacerlo. Esto también afecta, obviamente, su capacidad de regular y canalizar conflictos por vías institucionales. Por un lado, en el escenario pospandémico de bajo crecimiento con inflación, los gobiernos enfrentan enormes restricciones fiscales. Por otro lado, en la nueva economía digital y con la irrupción de los gigantes de la *gig economy*, los Estados han perdido el monopolio respecto a la capacidad de generar información sobre las sociedades

que gobiernan. Hoy Google o Microsoft cuentan con mejor información y analítica de datos que las administraciones que deberían regular su acción. Combinando datos estatales abiertos con datos privados, las consultoras de prospección minera, por ejemplo, tienen hoy mejor información que las agencias estatales de regulación.

Asimismo, una parte importante de la nueva informalidad en la economía funciona sobre la base de aplicaciones cuya regulación se ha vuelto virtualmente imposible, en parte porque en una economía precarizada las apps también funcionan como un seguro de desempleo y como red subalterna de protección social. Finalmente, el quiebre del monopolio informacional también resquebraja el monopolio de la coerción en que se sustenta la capacidad estatal de regular legítimamente las interacciones sociales. ¿Cómo se regula mejor con peor información relativa? En suma, la institucionalidad estatal y su poder están desafiados por arriba y por abajo.

¿Cuáles son los retos que enfrentan Boric y su gobierno en este plano? Chile cuenta hoy con un modelo de crecimiento económico agotado, en su sociología política y en su economía moral. El viejo modelo, el que en palabras del presidente Piñera días antes del estallido de 2019 consagraba a Chile como un «oasis» en el desierto latinoamericano, está quebrado. Los actores, las instituciones y los repertorios que lo hacían «funcionar» carecen hoy de legitimidad. Esa falta de legitimidad, no obstante, no se traduce en la articulación de una alternativa.

Chile posee condiciones únicas para convertirse en una potencia verde mediante la producción de energías renovables (solar, eólica, hidrógeno verde) y la explotación, en clave sustentable, de materias primas elementales para industrias limpias (por ejemplo, el cobre, cada vez más demandado como conductor, y el litio, clave para la producción de baterías). Sin embargo, explotar estas riquezas requiere no solo hacerlo en clave ambiental, sino también proveyendo estímulos a la inversión en un contexto en que los marcos regulatorios están siendo fuertemente objetados y bajo revisión (en la Convención Constitucional), y en que la conflictividad territorial y los repertorios de acción colectiva en el nivel local se han concentrado durante años en la oposición a industrias extractivas. Existe por tanto un clima de desconfianza doble: la de potenciales inversores y eventuales socios del Estado y la de comunidades que durante décadas han sufrido las consecuencias de la explotación socialmente irresponsable de recursos naturales.

La articulación de un nuevo modelo también carece de actores. Más allá de expresiones locales extremadamente fragmentadas o de grupos de

**Chile cuenta hoy con un modelo de crecimiento económico agotado, en su sociología política y en su economía moral**

interés e identidades más bien «monotemáticos», los únicos actores todavía organizados y con capacidad de acción colectiva (aunque últimamente solo logran generar *boomerangs* en la opinión pública) son los empresarios del viejo modelo. En el plano geopolítico, por su parte, el cambio más relevante es la creciente presencia china en sectores estratégicos de la economía chilena. Ni los empresarios tradicionales ni China proveerán, al menos si actúan sin contrapesos, la base para articular un nuevo modelo.

Mientras tanto, lo que seguramente se ve desde La Moneda son demandas, petitorios, enojo y esperanzas, todas tan inmediatas como fragmentadas

**Lo que seguramente  
se ve desde  
La Moneda son  
demandas, petitorios,  
enojo y esperanzas**

en cuanto a su articulación colectiva. El denominado «quinto retiro» (la posibilidad de retirar un 10% adicional de los fondos de pensión de las cuentas de ahorro personal) al que el gobierno hoy se opone (habiendo apoyado, desde la oposición, los cuatro proyectos anteriores) es tal vez la manifestación más visible de este tipo de demandas, su inmediatez y su falta de articulación colectiva. Cualquier similitud con las lógicas que han predominado en la Convención Constitucional no es mera coincidencia, porque, en definitiva, en Chile hay demandas, pero no hay (aún) actores ni proyecto para un nuevo modelo de desarrollo. La ciudadanía hoy sabe muy bien lo que no quiere y lo que no le gusta y coloca su esperanza en un nuevo modelo que, en términos de proyecto, es una entelequia. Pensar que el nuevo texto constitucional, aun si termina siendo de gran calidad y aprobado por un amplio margen que lo dote de legitimidad, representa ese proyecto es también claudicar ante el pensamiento mágico.

Como el modelo en crisis, el nuevo proyecto está también huérfano de economía moral. El legado más persistente del neoliberalismo en Chile es la destrucción de bienes públicos. Sin bienes públicos, extendidos y socialmente transversales, resulta prácticamente imposible articular coaliciones políticas amplias para negociar los parámetros de un nuevo modelo. En Chile no hay bienes públicos y muy poca gente los promueve o desea para sí. A modo de ejemplo, la sentida demanda por un sistema de pensiones más generoso y más justo choca de frente con la preferencia, también mayoritaria, por un sistema de capitalización individual en el que cada quien ahorra lo que puede. Por su parte, la educación pública carga con el estigma de ser la educación de los más pobres, aun cuando ofrezca, en muchos casos, igual o mejor calidad que los colegios subvencionados con que compite en el nivel local. La gran mayoría de quienes pueden pagar un copago mínimo segregan a sus hijos de los más pobres, lo que deteriora nuevamente un bien público social fundamental. En suma, no solo pesa la falta de actores con capacidad de sostener un modelo alternativo, sino

que también pesa la incapacidad de reconstituir un *ethos* que fomente la reconstrucción de bienes públicos en torno de los que progresivamente se articulen nuevas coaliciones sociales que los sostengan.

## El (des)orden

Si dar con una economía política y una secuencia de reformas capaz de avanzar en el frente económico y social resulta complejo, también lo es solucionar los problemas de orden que hoy constituyen una preocupación principal de la sociedad chilena. En principio, los problemas de orden son cuatro. Todos tienen causas de larga duración, aunque cada uno de ellos se ha agudizado, por una combinación de acciones y omisiones, durante el gobierno de Piñera.

(a) El conflicto en la zona de la Araucanía ha escalado significativamente y generado episodios de violencia cotidianos. Este conflicto, de larga data en Chile, tiene múltiples vertientes y expresiones, que se reflejan también en clave territorial y en quiebres y conflictos internos entre militantes de la causa mapuche. A modo de ejemplo, los grupos más radicales que participan del conflicto no reconocen a los constituyentes mapuche en la Convención Constitucional como sus representantes y han descartado, desde el comienzo, su participación en esfuerzos de diálogo y negociación con el gobierno que encabeza Boric. La primera incursión del gobierno entrante en la zona de conflicto fue repelida (exitosamente) a balazos. La ancestral heteronomía de las comunidades mapuche dificulta así la capacidad de lograr acuerdos vinculantes y relativamente amplios. Asimismo, existen en la zona crecientes apuestas paramilitares por parte de terratenientes y empresas, que también han contribuido a la escalada de violencia. La coordinación entre seguridad privada y pública es poco transparente, pero los testimonios disponibles apuntan a una colusión de facto entre las fuerzas de seguridad pública, los terratenientes y las empresas. Esto también se traduce en una larga retahíla de abusos perpetrados en contra de comunidades indígenas por parte del Estado.

Por otro lado, existen en la zona múltiples expresiones de actividad criminal vinculadas al robo de madera, la extorsión (impuesto de seguridad), el cultivo de marihuana y el tráfico de tierras. Respecto a esto último, existen serios cuestionamientos respecto a la acción de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en cuanto a la compra de tierras y su distribución a comunidades indígenas. En suma, el desorden y la consolidación de territorios liberados han generado incentivos para el asentamiento de múltiples economías ilegales, no necesariamente (o directamente) asociadas al conflicto original.

**En los últimos años,  
la situación en la  
frontera norte del  
país se ha deteriorado  
de manera visible**

(b) En los últimos años, la situación en la frontera norte del país se ha deteriorado de manera visible ante la inoperancia del Estado chileno respecto a la regulación de la migración y el tráfico fronterizo con Bolivia y Perú. Esa frontera, en la que tradicionalmente han operado redes de contrabando y tráfico de bienes y personas, hoy parece estar fuera de control. El flujo de población migrante ha generado a su vez brotes xenófobos y crecientes conflictos sociales entre inmigrantes y población local. De estos conflictos se han alimentado ya, para crecer electoralmente, fuerzas políticas emergentes de carácter nacionalista y conservador. Hoy la situación es tan tensa que el gobierno de Boric decidió extender el estado de excepción en el norte del país, lo que permite el despliegue de fuerzas armadas para colaborar en tareas de patrullaje y control.

(c) La expansión del narcotráfico ha tomado especial notoriedad en la agenda pública. En particular, la estructura del microtráfico a escala barrial genera dos tipos de problemas. Por un lado, situaciones de control territorial pautadas por un abandono tácito por parte del Estado (lo que no necesariamente implica la ausencia de fuerzas policiales, sino procesos de colusión con bandas locales) y una fuerte violencia estructural. Estas situaciones eventualmente producen escaladas de violencia en el marco de disputas territoriales entre bandas. Por otro lado, un aumento de situaciones de robo con violencia (en comercios, residencias y en la vía pública, especialmente contra vehículos). Esto último, porque la estructura relativamente precaria de las bandas de microtráfico se asocia al financiamiento recurrente de compra de producto a través de dineros obtenidos mediante la reducción de especies robadas.

En simultáneo a la expansión del narco, también se han expandido organizaciones criminales vinculadas a la extorsión, el microcrédito informal, el sicariato, la ocupación de terrenos y propiedades y la administración de espacios de venta para el comercio informal. La irrupción de estos fenómenos se asocia además a una mayor conflictividad y a episodios de violencia recurrentes en el espacio público, los cuales también han contribuido a un crecimiento significativo de los homicidios en el país.

(d) Finalmente, el gobierno también ha debido enfrentar, ya durante sus primeras tres semanas, protestas callejeras violentas que ha tenido que sofocar recurriendo a la represión policial. Estos últimos episodios han tensado la relación con parte de la base social del gobierno, incluidas figuras del Partido Comunista, así como con movimientos sociales (como parte del movimiento de estudiantes secundarios, quienes ya se han declarado en oposición al gobierno). Un elenco oficialista fuertemente asociado a la protesta se ha

visto así en la necesidad de recurrir rápidamente al apoyo de Carabineros, institución involucrada en la violación de derechos durante la represión del estallido de 2019, para intentar controlar las manifestaciones violentas. El episodio más llamativo (por el momento en que ocurrió) lo constituyó una declaración pública de la ministra Siches que dio absoluto respaldo a Carabineros antes de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, organizada por colectivos de izquierda para recordar el asesinato de tres militantes comunistas en 1985 y rechazar a la dictadura pinochetista<sup>3</sup>.

Los cuatro problemas asociados a la agenda de orden y seguridad tienen como mínimo común denominador el rol de las fuerzas de orden, así como la presencia, evidente pero problemática, de contradicciones entre el discurso electoral, el propio origen del Frente Amplio y su acción de gobierno. Respecto al rol de las fuerzas de seguridad y especialmente de Carabineros, el desafío consiste en encarar una reforma profunda de la institución para, entre otras cosas, someterla a un control civil efectivo, mientras se la necesita operando en las calles para solucionar problemas que hoy se han vuelto el centro de la preocupación ciudadana.

Respecto al conflicto en la Araucanía, las primeras semanas han dado cuenta de una falta de profundidad en el diagnóstico sobre sus distintas aristas y su complejidad. Los llamados al diálogo, así como gestos relevantes como el de levantar el estado de excepción, a diferencia de lo que se decidió para el norte del país, generaron por el momento reacciones violentas por parte de los actores más radicales. Dialogar y negociar requiere poder imponer condiciones y costos a los actores a cambio de proveer garantías. Nuevamente, sin embargo, para poder lograr un diálogo exitoso y vinculante, el gobierno depende de actores que le son en principio hostiles, sobre los que no tiene suficiente influencia y que, en última instancia, desconfían de la prometida «refundación» de las fuerzas del orden.

## La encrucijada

El gobierno se encuentra, en mi opinión, ante la siguiente disyuntiva. Una opción, al menos por defecto, consiste en constituirse como un gobierno que impulse sin demasiada coordinación distintas agendas y reformas sectoriales, intentando a su vez encaminar la gestión cotidiana de temas centrales para la población (por ejemplo, la reactivación económica y la restitución

---

3. «Siches por Día del Joven Combatiente: ‘No vamos a tolerar ataques violentos’» en *El Desconcierto*, 29/3/2022.

del orden público). Esa gestión puede, al mismo tiempo, ganar fuerza con el impulso de demandas más caras a su base social, como el avance de la agenda de género y el compromiso ambiental.

En este escenario, el desenlace de la propuesta de nueva Carta Magna que emerja de la Convención Constitucional también será sumamente relevante para el gobierno y su gestión. En caso de que la nueva Constitución sea aprobada, parte significativa de la acción de gobierno deberá volcarse a la difícil transición entre ambos órdenes constitucionales. El rechazo del nuevo texto constitucional constituirá, en cambio, un golpe duro a la agenda de transformación social que impulsa el gobierno, y puede complicar, a su vez, el clima en el que deberán negociarse reformas para las que el oficialismo no cuenta con mayorías legislativas suficientes. En este escenario, la suerte final del gobierno dependerá de la efectividad de su gestión y de su capacidad de mantener niveles razonables de adhesión sobre la base de su política comunicacional. En caso de que las cosas vayan bien, tal vez logre perfilar figuras de gobierno como alternativa para disputar la próxima elección. Para eso tiene varios buenos nombres. En caso de que las cosas no vayan bien, el nuevo «anti» probablemente lo ofrezca la ultraderecha, hoy fortalecida por el derrumbe de la centroderecha y la irrupción del Partido Republicano en la última elección.

La segunda alternativa consiste en intentar articular un proyecto de desarrollo integral, vertebrando y organizando a actores sociales que hoy no tienen expresión colectiva. El liderazgo de Boric y la elevada adhesión que concita, así como el desconcierto y debilidad relativa de los actores centrales del viejo «modelo», abren una posibilidad fugaz de comprar tiempo e intentar esa articulación. El riesgo de intentarlo es que nadie sabe muy bien cómo cuadrar ese proyecto, dotándolo de bases sociales y de una nueva economía moral. El riesgo de no intentarlo es convertir esta nueva alternancia hacia la izquierda en otro movimiento efímero de un péndulo que se alimenta hace ya décadas de un descontento con quienes gobiernan que carece de articulación política. ☐

# AMLO y sus contradicciones

Humberto Beck / Patrick Iber

El presidente mexicano ha venido caminando en la cuerda floja, equilibrando las tendencias opuestas del populismo: la ampliación de la democracia y el fortalecimiento del liderazgo personal. ¿Ha empezado a tambalearse? Un repaso por los resultados de su gestión permite abordar las tensiones de su gobierno y las razones de su elevada popularidad.

El 1º de diciembre de 2021, la plaza central de la Ciudad de México, el Zócalo, comenzó a llenarse de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Hacía dos años que no había una convocatoria popular de tal dimensión. Los autobuses llegaron desde todo el país, algunos organizados por distritos gobernados por el partido de AMLO, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y por algunos sindicatos. Luego de horas de espectáculos musicales, apareció el presidente. Sus seguidores estaban felices de ver a alguien a quien admiran como político y como autoridad moral. En su discurso, destacó las políticas impulsadas por el gobierno y los planes para

---

**Humberto Beck:** es docente de Historia en El Colegio de México. Es autor de *The Moment of Rupture: Historical Consciousness in Interwar German Thought* (University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2019).

**Patrick Iber:** es docente de Historia en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es autor de *Neither Peace nor Freedom: The Cultural Cold War in Latin America* (Harvard UP, Cambridge, 2015).

**Palabras claves:** democracia, liderazgo personal, reformas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México.

**Nota:** una versión en inglés de este artículo fue publicada con el título «The Contradictions of AMLO» en *Dissent*, primavera de 2022. Traducción: María Alejandra Cucchi.

el futuro. «En tres años», dijo el presidente, «ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo, que eso es lo más importante de todo»<sup>1</sup>.

Mientras sus partidarios celebraban y el presidente proclamaba su respeto por la Constitución, un grupo mucho más pequeño se reunía a unos 16 kilómetros del centro de la ciudad. Puertas afuera del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), los estudiantes habían organizado una ocupación para protestar contra el rector designado por el gobierno al frente de la institución en noviembre de ese año. El CIDE es una prestigiosa universidad pública que se especializa en la formación en el área de las ciencias sociales. Mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene más de 200.000 estudiantes, el CIDE tiene solo 400. Fue fundado en 1974, durante el mandato del presidente nacionalista de izquierda Luis Echeverría, para formar a expertos que pudieran aconsejarlo en temas de política económica. En la década de 1990, sin embargo, se volvió conocido por sus profesores que completaban doctorados en el exterior, lo que en algunos casos incluía formación en economía de mercado<sup>2</sup>. AMLO alega que durante la época neoliberal que con tanta frecuencia critica la institución terminó «aborreciendo el servicio público»<sup>3</sup>.

Los estudiantes del CIDE no lo ven del mismo modo. Cuando llegó el nuevo rector en el otoño pasado y transgredió prácticas habituales en la universidad respecto de la promoción y la retención de su plantel docente, iniciaron una huelga. A muchos les preocupa que, en un contexto en el que AMLO tiende a equiparar el servicio público con el apoyo a su gobierno, haya un riesgo real para la libertad académica de quienes se involucran en investigación o defensa de causas que difieren de los planes y las políticas del gobierno. Estos temores están relacionados con otros ataques al ámbito académico. En 2021, el gobierno mexicano fue criticado en medios internacionales por su manejo de un caso de corrupción contra algunos científicos que habían recibido apoyo estatal: rechazó decisiones de la Corte que favorecían a los científicos y los amenazó con aplicar leyes muy severas que normalmente se utilizan contra narcotraficantes<sup>4</sup>. Estudiantes y profesores por igual temen que el gobierno de AMLO los haya colocado entre sus blancos y que esté utilizando la

---

1. «Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador a 3 años de gobierno 2018-2021», disponible en <<https://lopezobrador.org.mx/2021/12/01/discurso-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-a-3-anos-de-gobierno-2018-2021/>>.

2. Mauricio Tenorio Trillo: «¿Por qué la inquina contra el CIDE?» en *Reforma*, 21/11/2021.

3. Eduardo Dina: «Los neoliberales hicieron del CIDE una versión 'hasta de segunda' del ITAM: AMLO» en *El Universal*, 28/1/2022.

4. Christine Murray: «Mexican President's War on 'Neoliberalism' Moves on to Campus» en *Financial Times*, 4/11/2021.

política de austeridad para atacar a instituciones que percibe como hostiles a sus propósitos.

El «AMLOFest» y la ocupación de los estudiantes en el CIDE difícilmente fueron comparables en escala, y el contraste entre ellos sugiere algo sobre la naturaleza del gobierno de AMLO. Aunque el presidente sigue disfrutando de niveles de aprobación cercanos a 60%, su índice de desaprobación creció de un escaso 14% en 2019 a 39% en febrero último<sup>5</sup>. Mientras el gobierno conserva su popularidad entre amplias franjas de la población, las acciones del presidente han alejado a un número creciente de votantes. AMLO juzga casi todo de acuerdo con cómo afecta su imagen. Durante una de sus conferencias de prensa matinales, alardeó sobre el hecho de que sus índices de aprobación netos están en segundo puesto en el escenario mundial, solo superados por los de Narendra Modi, al parecer sin advertir que la comparación podría ser poco favorecedora, dadas las características del gobernante indio. AMLO se reserva el derecho de decidir quién pertenece al auténtico pueblo y quién es parte de la elite egoísta. En su lógica de «conmigo o contra mí», se presenta a los críticos —incluidos no solo académicos sino también periodistas y activistas de varias causas— como motivados por la defensa de sus privilegios y del viejo régimen. Muchos de los simpatizantes de AMLO se hacen eco de estas críticas; por ejemplo, el periodista simpatizante de Morena Gibrán Ramírez desestimó la ocupación del CIDE tildándola de «picnic»<sup>6</sup>.

AMLO es el primer presidente mexicano de izquierda desde la transición del país a una democracia competitiva a fines de la década de 1990. Cuando fue elegido en 2018, muchos esperaban que reduciendo la extrema desigualdad y la corrupción, como lo había prometido, su presidencia iba a profundizar y expandir la democracia. Aunque a algunos les preocupaban sus rasgos «populistas», los movimientos populistas no son totalmente enemigos de la democracia: pueden sumar nuevas voces a la política, dar poder e integrar a grupos marginados y dismantelar redes de privilegio. Pero estos movimientos también pueden imbuir a líderes carismáticos de poder simbólico, atacar a las instituciones independientes y a los movimientos sociales, y construir nuevas redes de privilegio basadas en la lealtad. En los años transcurridos desde su elección, estas tendencias opuestas

**AMLO es el primer presidente mexicano de izquierda desde la transición del país a una democracia competitiva**

5. Datos disponibles en Javier Márquez: «Aprobación presidencial» en *Oraculus*, 5/4/2022, <<https://oraculus.mx/aprobacion-presidencial/>>.

6. «Gibrán Ramírez se burla de protesta en el CIDE: ‘Es un picnic de juventudes neoporfiristas’» en *Reporte Índigo*, 2/12/2021.

del populismo han coexistido en el México de AMLO. Pero en el último año hubo episodios más frecuentes y más serios en los que AMLO excedió los límites del liderazgo democrático y abrazó la personalización de la autoridad como la mejor manera de impulsar su proyecto político.

### Los trabajadores, un poco mejor

Las elecciones de medio término celebradas en junio de 2021, que en general fueron percibidas como un referéndum sobre la gestión de AMLO, fueron la primera oportunidad para que su coalición (Morena se asoció con dos partidos pequeños) disputara muchos de los poderosos gobiernos de los estados del país. La coalición logró buenos resultados y obtuvo 11 de los 15 estados en disputa. Por otro lado, perdió terreno en la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso mexicano. Los principales partidos del sistema político previo a AMLO —los remanentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de larga trayectoria en el poder, el Partido Acción Nacional (PAN), de derecha, y el Partido de la Revolución

### Morena sigue siendo el favorito indiscutido para las elecciones presidenciales de 2024

Democrática (PRD), de centroizquierda— formaron un bloque opositor unido. Lograron resultados lo bastante buenos como para privar a Morena de la supermayoría necesaria para aprobar enmiendas constitucionales. No obstante, Morena sigue siendo el favorito indiscutido para las elecciones presidenciales de 2024, en las que probablemente sea representado por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard o la jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum. (La Constitución limita los mandatos presidenciales a un periodo y AMLO ha prometido respetarlo).

Los resultados en la Ciudad de México permiten entrever algunos de los cambios en la coalición presidencial. Su victoria en 2018 fue el resultado de un apoyo multiclasista, pero el año pasado perdió en la mayoría de las demarcaciones territoriales de la ciudad, el primer resultado de este tipo para un partido nominalmente de izquierda desde 2000. Con una población de más de ocho millones, la Ciudad de México ha sido el bastión de la izquierda política del país; tanto AMLO como Ebrard se han desempeñado como sus jefes de Gobierno. En mayo pasado, sin embargo, camino a las elecciones de medio término, Ebrard y Sheinbaum resultaron dañados por el colapso de un trayecto elevado del Metro de la Ciudad de México, cuya construcción deficiente y pobre mantenimiento sugirieron que se había priorizado la conveniencia política por sobre la seguridad de los pasajeros. Las derrotas

de Morena en el área al poniente de la ciudad, que alberga algunos de los distritos más ricos, representan no solo la esperable hostilidad de las clases acomodadas, a las que AMLO descalifica como «fifís», sino también la caída del apoyo entre los profesionales con mayores niveles de educación. Mientras tanto, su fortaleza en las zonas más pobres del oriente de la ciudad muestra la lealtad de esa porción de su base electoral.

Parte de la razón de esa lealtad son los nuevos programas sociales implementados durante la gestión de AMLO, que han producido logros limitados pero reales. El gobierno ha aprobado incrementos significativos del salario mínimo, en un país donde el salario promedio era más bajo en términos reales en 2019 que en 2005. La serie de aumentos salariales aprobados por Morena —que incluyen un incremento de 22% para 2022— suma 65% en términos reales<sup>7</sup>. Los proyectos insignia del gobierno para atacar la desigualdad y la pobreza mediante transferencias de dinero a estudiantes y jubilados, entre otros grupos, también le han ganado algún apoyo. Entre 2018 y 2020, hubo un incremento de 7 puntos porcentuales en la población mexicana en situación de pobreza<sup>8</sup>, una cifra un poco más baja de lo que se esperaba debido a los efectos de la pandemia. Durante el mismo periodo, los beneficios derivados de programas sociales crecieron 56%; las transferencias de efectivo se cuentan entre las razones de esta contradicción aparente<sup>9</sup>.

Otras reformas laborales introducidas por Morena han comenzado a tener efectos positivos. De acuerdo con los requerimientos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el partido introdujo nuevas reglamentaciones que permiten a trabajadores y trabajadoras presentar quejas, anular contratos fraudulentos y formar sindicatos independientes sobre bases más favorables<sup>10</sup>. Se trata de reformas significativas y democráticas. Durante los gobiernos semiautoritarios del PRI, partido que gobernó México durante la mayor parte del siglo XX, sindicatos poderosos obtuvieron posiciones de privilegio en sectores claves a cambio de lealtad política. Fueron pilares fundamentales del régimen y sus dirigentes se enriquecieron, pero

---

7. Jon Martín Cullell: «El salario mínimo en México subirá un 22% en 2022» en *El País*, 2/12/2021.

8. Datos disponibles en Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval): «Medición de la pobreza. Pobreza en México. Resultados de pobreza en México 2020 a nivel nacional y por entidades federativas», <[www.coneval.org.mx/medicion/MP/paginas/pobreza\\_2020.aspx](http://www.coneval.org.mx/medicion/MP/paginas/pobreza_2020.aspx)>.

9. Rodolfo de la Torre: «Avanza la pobreza y retrocede la política social» en *El Gatopardo*, 10/8/2021.

10. Joyce Sadka: «Hearing on “Mexico’s Labor Reform: Opportunities and Challenges for an Improved NAFTA»», 2019, disponible en <<https://waysandmeans.house.gov/sites/democrats.waysandmeans.house.gov/files/documents/Sadka%20Testimony.pdf>>.

solo una minoría de trabajadores resultó beneficiada. Una representación sindical más democrática tiene el potencial de crear una nueva cultura del trabajo en México.

Como ejemplo, en febrero de 2022 el personal de una planta de General Motors situada en la ciudad de Silao, que ensambla camionetas Chevy y GMC, votó mayoritariamente a favor de unirse a un sindicato independiente, lo que ponía fin al convenio negociado por uno de los dinosaurios de la era del PRI. Según el viejo convenio, los salarios alcanzaban un máximo de 23 dólares estadounidenses diarios y los trabajadores reportaban un maltrato frecuente, como la negativa a permitirles pausas para ir al baño. Los organizadores del sindicato independiente afrontaron intimidaciones y amenazas para obtener este logro. Su éxito es emblemático respecto de las posibilidades que se abren para el poder de los trabajadores bajo la nueva ley, en especial en el sector privado. Si este fortalecimiento del trabajo impulsado por la nueva legislación se consolida, ofrecerá una de las esperanzas más tangibles para una redistribución duradera de la riqueza en México.

En otras áreas, la centralización del poder en el Ejecutivo y la falta de transparencia debilitan el potencial de las reformas. En los pro-

**La centralización  
del poder en el  
Ejecutivo y la falta  
de transparencia  
debilitan el potencial  
de las reformas**

gramas sociales, todo, desde el registro de beneficiarios hasta los efectos sociales de las transferencias en efectivo, está envuelto en la opacidad. Contrariamente a lo que afirma la retórica del gobierno, el gasto social es de hecho más bajo y menos progresivo de lo que fue con el presidente anterior<sup>11</sup>. La evolución de los sindicatos claves del sector público no es tampoco muy alentadora.

El sindicato de trabajadores de Pemex, la compañía petrolera estatal, fue famoso durante décadas por su corrupción, y sus dirigentes disfrutaban ostentadamente de sus condominios en Miami y Cancún. En 2019, el líder histórico del sindicato fue obligado a dimitir, pero la oficina del fiscal general (que es formalmente independiente, pero percibida como aliada del presidente) ha dejado caer o ha frenado las investigaciones judiciales, pese a los claros indicios del caso en su contra. Muchos se preguntan si la importancia estratégica del sindicato ha llevado a AMLO a tolerar prácticas antidemocráticas mientras sus líderes se mantengan favorables al gobierno. Los trabajadores de Pemex, que votaron prácticamente al mismo tiempo que los de la planta de GM en Silao, lo hicieron con el resultado contrario: consagraron

---

11. Máximo Ernesto Jaramillo-Molina: «Los mitos de la política social de la 4T» EN *Nexos*, 29/6/2021.

a un colaborador cercano del líder depuesto, en una elección en la que los candidatos independientes denunciaron intimidación y uso del clientelismo<sup>12</sup>.

## La reforma energética

Pemex es central para los planes de AMLO de desarrollo regional en el sudeste, la zona más pobre del país. También es clave para su objetivo de lograr la «soberanía energética». Con este fin, su administración está otorgando a la empresa, profundamente endeudada, inyecciones de capital, créditos fiscales y generosos aumentos presupuestarios<sup>13</sup>. El gobierno federal también rehabilitó antiguas refinerías, comenzó la construcción de una nueva planta y adquirió otra en Texas<sup>14</sup>.

El objetivo de la soberanía energética está también detrás de la propuesta presidencial de una reforma constitucional que transformaría de manera drástica el mercado nacional de energía eléctrica relegando a las empresas privadas y fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía estatal de energía. Según el gobierno, la legislación energética existente —resultado de una reforma constitucional previa de 2013— crea un «desorden regulatorio»<sup>15</sup> y despilfarra miles de millones de dólares en subsidios a empresas privadas<sup>16</sup>. La secretaria de Energía Rocío Nahle sostuvo que un mercado energético bajo control privado deja a los consumidores indefensos frente a las fluctuaciones<sup>17</sup>. La reforma propuesta corregiría esta situación devolviendo al Estado el control de la electricidad, garantizando el suministro a todos los consumidores y reduciendo los riesgos para la seguridad nacional<sup>18</sup>.

Si se aprueba la reforma, que en este momento está trabada en el Congreso, las plantas de la CFE tendrán prioridad por sobre las privadas para subir

---

12. Carlos Montesinos: «STPRM: de vuelta al mismo lugar de Romero Deschamps» en *Reporte Índigo*, 2/2/2022.

13. «Pemex y CFE, las mayores apuestas del gobierno pierden 319,734.5 mdp en 2021» en *El Ceo*, 4/3/2022.

14. Francesco Manetto: «López Obrador persigue su sueño petrolero con un plan de soberanía energética para México» en *El País*, 29/12/2021.

15. Rodrigo Benedith: «La reforma eléctrica de AMLO busca arreglar la reforma fallida de EPN» en *The Washington Post*, 5/10/2021.

16. Oriol Malló: «Industria eléctrica y soberanía energética: lo que está en juego» en *Jornada*, 12/4/2021.

17. Javier Lafuente y Sonia Corona: «Rocío Nahle: ‘No nos va a venir nadie de fuera a decir si la reforma energética está bien o mal’» en *El País*, 17/10/2021.

18. «CFE: falacias y realidades» en *Jornada*, 1/2/2021.

su energía a la red de distribución. Esto representaría un golpe para las plantas de energía renovable, que se encuentran mayoritariamente en manos de empresas privadas<sup>19</sup>. Además, la reforma establece que la CFE será legalmente responsable por la generación de al menos 54% de la electricidad en México, muy por encima del 38% actual. Las plantas existentes no bastan para satisfacer esa necesidad, lo que con toda probabilidad significa que habrá un mayor recurso a combustibles fósiles. El Climate Action Tracker evalúa las acciones y las políticas mexicanas para la reducción de emisiones en la categoría de «muy insuficientes», y la apuesta de AMLO por la energía no renovable solo empeorará la situación<sup>20</sup>.

La reforma energética propuesta, que fue rechazada en la Cámara de Diputados el 18 de abril, también proponía suprimir organismos a cargo de regular la producción de energía, que el gobierno percibe como límites al poder presidencial, y establecería un monopolio estatal sobre la explotación de los enormes yacimientos mexicanos de litio<sup>21</sup>. La búsqueda de este tipo de cambios es representativa de la creciente centralización del poder en el gobierno federal y de la sistemática desconfianza de AMLO hacia los organismos públicos, las empresas y los actores políticos que no están bajo su control directo. Tras anunciarse el rechazo a la ley propuesta, llamó «traidores a la patria» a los diputados de oposición que habían votado en contra.

## Autonomismo

La investigadora especializada en relaciones internacionales Natalia Saltalamacchia describe el enfoque de AMLO en política energética como «autonomismo»: la convicción de que los países más débiles deberían concentrarse en expandir su autonomía para satisfacer objetivos nacionales, no intereses extranjeros. La misma idea se aplica a la política exterior de la administración de AMLO. El presidente cita con frecuencia a Benito Juárez, estadista liberal del siglo XIX, quien afirmó: «El respeto al derecho ajeno es la paz». En la práctica, esto significa una suerte de indiferencia hacia las condiciones internas en otros países. Esta indiferencia no es ideológica: AMLO buscó tener buenas relaciones con Donald Trump, así como ahora busca tenerlas con los líderes cubanos. El resultado es que hoy México tiene una postura en

---

19. Isabella Cota y J.M. Cullell: «La iniciativa energética de López Obrador margina a las renovables en favor de la CFE» en *El País*, 2/2/2021.

20. Información disponible en <<https://climateactiontracker.org/countries/mexico/targets/>>.

21. J.M. Cullell: «Reforma eléctrica: López Obrador concentra el poder en la Comisión Federal de Electricidad» en *El País*, 1/10/2021.

política exterior que se asemeja a la que caracterizaba a los gobiernos del PRI, que con frecuencia buscaban mediar en conflictos regionales.

Durante el año pasado, el país ocupó la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y fue anfitrión de una cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Esta última es un grupo que algunos Estados latinoamericanos –en especial los no democráticos, como Venezuela, Nicaragua y Cuba– esperan construir como alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA), sin la presencia de Estados Unidos. En un discurso en la cumbre de septiembre, AMLO llamó a poner fin a la «política de bloqueos y de malos tratos» y promovió «asociarnos por el bien de América, sin vulnerar nuestras soberanías». También hizo un llamamiento a construir algo similar a «lo que fue la Comunidad Económica que dio origen a la actual Unión Europea». Sin embargo, la Unión Europea, a cambio de la inclusión, impone restricciones significativas a las estructuras legales y la política económica. Como lo ha señalado Martha Bárcena Coqui, ex-embajadora de México en EEUU, la UE es un ejemplo supremo de «cesión de soberanía nacional a una organización supranacional»<sup>22</sup>.

Las sanciones impuestas por EEUU han sin duda causado sufrimiento a la población de Cuba y Venezuela (y podría argumentarse que han fortalecido a sus gobiernos en lugar de debilitarlos). Y en teoría, es útil para un país como México estar disponible para albergar negociaciones sensibles, como las mantenidas entre el gobierno venezolano y la oposición. Pero AMLO muchas veces interpreta los esfuerzos por proteger la democracia como interferencias a la soberanía. Así, por ejemplo, advirtió en contra de las sanciones a Nicaragua luego de las elecciones ilegítimas de noviembre de 2021 y estuvo en desacuerdo con las propuestas para prohibir a los medios de comunicación estatales rusos luego de la invasión a Ucrania<sup>23</sup>. «Tenemos buenas relaciones con todos», declaró. Otra iniciativa reciente de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido ampliamente elogiada, incluso por muchos críticos de AMLO<sup>24</sup>. En agosto, anunció que iniciaría acciones legales contra los fabricantes de armas estadounidenses por contribuir a la violencia y la inestabilidad en México. Entre 2014 y 2018, 70% de las armas rastreadas en México provenían de EEUU. La

**Entre 2014  
y 2018, 70%  
de las armas  
rastreadas en  
México provenían  
de EEUU**

22. M. Bárcena Coqui: «¿Es posible la unión latinoamericana?» en *El Heraldito*, 3/8/2021.

23. «Mexico Declines to Impose Economic Sanctions on Russia» en *Reuters*, 2/3/2022.

24. Natalie Kitroeff y Oscar Lopez: «Mexico Sues Gun Companies in US, Accusing Them of Fueling Violence» en *The New York Times*, 4/8/2021.

demanda, que fue aceptada por un tribunal de Massachusetts, acusa a los fabricantes de producir en forma deliberada armas que son atractivas para el mercado mexicano y los grupos criminales. Los compradores de armas ilegales y los contrabandistas aprovechan las normas en extremo laxas estadounidenses para adquirir armas y luego traficarlas hacia el sur. «Así como los imputados no pueden volcar residuos tóxicos u otros contaminantes para envenenar a los mexicanos del otro lado de la frontera», afirma la demanda, «tampoco pueden poner sus armas de guerra en manos de los carteles, causando un daño grave y reiterado, y después reclamar que se los exima de responsabilidad»<sup>25</sup>. Los expertos legales no esperan que esta demanda tenga éxito, pero aun así puede aumentar la conciencia sobre la responsabilidad por la violencia armada en México como algo compartido y quizás generar cierta presión comercial y política.

### Contra «los conservadores»

**Pese a todos los  
reveses para  
su administración,  
su popularidad  
personal es todavía  
inmensa**

AMLO tiende a identificar a los países con sus gobernantes y no con sus ciudadanos, lo que quizás nos dice algo de cómo piensa México. En ocasiones, describe su liderazgo como si estuviese por encima de otros principios o instituciones de la democracia. Esto no implica que él o México se hayan vuelto autoritarios. Hay divisiones dentro de su partido que no puede controlar y algunas de sus propuestas están trabadas en el Congreso. Y pese a todos los reveses para su administración, su popularidad personal es todavía inmensa. No obstante, su estilo de liderazgo está conectado al menos en parte con tradiciones más antiguas y antidemocráticas, en especial la creencia en que el jefe de Estado es la única solución posible a los problemas del país.

Una encuesta de marzo de 2022 mostró que el índice de aprobación de AMLO había caído a 54%, todavía alto para la mayoría de los estándares, pero dañado por un escándalo reciente que debilitó su afirmación de que él y su gobierno «no son lo mismo» (como repite con frecuencia) que los gobernantes anteriores de México<sup>26</sup>. En enero, nuevos informes mostraron

---

25. Zach Murdock: «Mexico Sues US Gun Manufacturers, Including Colt's Manufacturing in Connecticut, over Weapons Trafficking that Arms Dangerous Drug Cartels» en *Hartford Courant*, 24/8/2021.

26. Alejandro Moreno: «Casa Gris le 'cuesta' a AMLO: Aprobación baja a 54% en febrero» en *El Financiero*, 1/3/2022.

que uno de los hijos de AMLO pasó de un estilo de vida de clase media a otro lujoso, al mudarse a una enorme casa en Houston<sup>27</sup>. Luego se reveló que está trabajando para una empresa que es propiedad de los hijos de un empresario responsable de supervisar la construcción de uno de los megaproyectos de infraestructura de AMLO, el Tren Maya. AMLO reaccionó a la historia exponiendo información privada del periodista y demandando una investigación sobre sus ingresos y riqueza, así como detalles de sus socios de negocios y los miembros de su familia. Tal hostilidad hacia los medios ha crecido de manera incesante durante el gobierno de AMLO, en el que ya es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.

A lo largo de los tres primeros años de su gobierno, el discurso político de AMLO ha cambiado en forma sutil: poco a poco ha abandonado sus dichos antioligárquicos sobre la *mafia del poder*, su expresión para referirse a la alianza entre los plutócratas monopólicos y los políticos corruptos, y en su lugar ha comenzado a hablar de *los conservadores*, un grupo identificado con vaguedad que incluye a empresarios, periodistas, intelectuales, feministas, activistas de derechos humanos y hasta a la «clase media» en su conjunto. Lo único que los une es que AMLO los percibe a todos como «adversarios» de su gobierno. El mandatario mexicano solía ser conocido por su concepto inclusivo de «pueblo», pero durante su mandato ese grupo se ha reducido cada vez más.

La instancia más extrema de esta tendencia es su disputa con el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo público autónomo responsable de la organización de las elecciones. Las manipulaciones electorales fueron parte integrante del sistema político del país durante la mayor porción del siglo XX, pero una serie de reformas en la década de 1990 hicieron del INE un elemento importante en la democratización de México. Sin embargo, AMLO trata a la institución como un obstáculo; ahora la llama enemiga de la democracia en México. Los más altos funcionarios del INE han a veces devuelto la hostilidad de AMLO adoptando un discurso que presenta el «populismo» (usado como un eufemismo para referirse a AMLO y a Morena) como una amenaza para la democracia.

La enemistad del presidente con las autoridades electorales se remonta a 2006, cuando perdió en su primer intento de acceder a la Presidencia por un margen de menos de un punto porcentual. Desde entonces ha estado convencido de que el INE (conocido como IFE en esa época) cometió fraude electoral en su contra. La evidencia para este reclamo es insuficiente, y el INE ha sido también responsable de la organización de elecciones que terminaron en victorias para Morena, entre ellas la de AMLO en 2018.

---

27. Carlos Loret de Mola: «Los lujos que sataniza AMLO, su hijo mayor los goza» en *El Universal*, 28/1/2022.

El INE está en buena medida fuera del alcance de la autoridad personal de AMLO (se le otorgó autonomía constitucional desde 1996), pero sufrió recortes sustanciales en su presupuesto en el marco de su política de austeridad. Estas cuestiones llegaron a un clímax con la convocatoria sin precedentes a una votación nacional para una revocación de mandato, que tomó lugar en abril. El plebiscito fue impulsado en 2019 por el propio oficialismo, que describió la votación como un instrumento de democracia directa para determinar si la gente «perdió la confianza» en AMLO. Dada la popularidad del presidente, el resultado de este ejercicio nunca estuvo en duda. (Con mucha abstención por parte de la oposición, 91% de los votos favorecieron que AMLO «siga en el poder»). Pero aun con un resultado previsible y una participación inferior a 18%, la votación le permitió a AMLO llevar adelante el equivalente a una segunda campaña electoral para promover su imagen y la de su partido un año antes de las elecciones locales de este año y de los comicios presidenciales de 2024. Al mismo tiempo, el referéndum revocatorio representó una carga significativa para el INE, que se sumó a su de por sí ajustado presupuesto. En diciembre pasado, el Consejo General del INE votó a favor de suspender momentáneamente la organización de la revocación hasta después de que la Secretaría de Hacienda girara los fondos necesarios. En respuesta, figuras destacadas de Morena pidieron a la oficina del fiscal general que encarcelara a los miembros del Consejo General y sugirieron que de ahora en adelante las elecciones sean organizadas por el gobierno federal<sup>28</sup>.

Uno de los puntos principales de discordia respecto del INE son los salarios y los beneficios de los funcionarios del Consejo y de los asesores de la organización. Las reducciones presupuestarias, junto con el referéndum revocatorio, representan una forma indirecta de ejercer presión sobre el INE para bajar los salarios, pero el instituto se ha negado a ceder. Tras la negativa de Hacienda a otorgar más fondos, el INE decidió organizar la revocación con solo un tercio de las sedes necesarias para un ejercicio de esta magnitud. «No lo hacen con gusto, no les causa placer la democracia», comentó AMLO. «Y todo es para que sigan teniendo los mismos sueldos, que se sigan dando la gran vida»<sup>29</sup>. No obstante, cualesquiera sean las fallas del INE, colocar las elecciones bajo control federal pondría realmente en duda la legitimidad de las elecciones venideras.

---

28. M. Albert Hernández: «Mario Delgado considera que hay que ‘exterminar’ al INE tras cancelación de candidaturas de Morena» en *El Financiero*, 29/3/2021.

29. «López Obrador afirma que el INE realiza la consulta de revocación ‘a regañadientes’» en *El Sur*, 23/2/2022.

## El equilibrista

Durante los primeros años de su mandato de seis, AMLO caminó en la cuerda floja haciendo equilibrio entre las tendencias opuestas del populismo: la extensión de la inclusión democrática y el fortalecimiento del liderazgo personal a costa de las instituciones democráticas. Ahora ha comenzado a tambalearse. Los elementos positivos de su gobierno —algunos de sus programas sociales, las nuevas leyes laborales, la demanda contra los fabricantes de armas— siguen siendo materia de elogio, aunque no sean necesariamente mejores que los que podría haber llevado adelante otra administración. Otros elementos pueden ser polémicos, pero permanecen dentro del marco del desacuerdo democrático. Pero la resistencia de AMLO a la transparencia y el escrutinio y su preferencia por el control presidencial son motivos reales de preocupación.

AMLO afirmó que el próximo plebiscito representa la democracia real y participativa: «En una auténtica democracia, el pueblo manda». Luego aclaró, a su modo que incluye y excluye a la vez, que la democracia es el «poder del pueblo, no de los intelectuales, no de los políticos, no de los periodistas, de los expertos, de los potentados, es el poder de todos»<sup>30</sup>. 

---

30. «AMLO insistió que el INE sí tiene presupuesto para la Revocación de Mandato: 'El pleito no es conmigo'» en *Infobae*, 17/1/2022.

# Perú: el profesor en su laberinto

Marisa Glave

La llegada al gobierno de Pedro Castillo fue posible por el voto antifujimorista, pero aun así, el perfil del presidente, proveniente del Perú rural, generó expectativas de cambio. Sin embargo, el primer tramo de su gestión ha sido caótico, la izquierda urbana se alejó del mandatario y los conflictos sociales se suman a las amenazas del Congreso de apartarlo del poder.

En menos de un año de gobierno, el presidente Pedro Castillo ya tuvo cuatro gabinetes. Si bien el país venía de una crisis institucional que había generado alta rotación en los cargos ejecutivos, la celeridad de los cambios del actual gobierno ha roto los récords. El promedio de duración de los gabinetes no alcanza los tres meses. Pero lo delicado no es solo la atípica rotación de personas que ocupan los cargos, sino la escasa continuidad programática. El principal problema que afronta el gobierno hoy es la ausencia de un norte claro, más allá de algunos anuncios de corte populista y sin mayor sustento<sup>1</sup>.

---

**Marisa Glave:** es socióloga y tiene una maestría en Gestión de Políticas Públicas. Entre 2007 y 2013 fue regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima y fue congresista de la República entre 2016 y 2019. Actualmente es investigadora asociada de DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.

**Palabras claves:** crisis, inestabilidad, izquierda, Pedro Castillo, Perú.

1. Por ejemplo, recientemente se presentó un proyecto de ley al Parlamento para que se apruebe la castración química para los condenados por violación, tras el caso de una violación de una niña de tres años. La medida fue rechazada en un pronunciamiento público por más de 100 organizaciones y colectivos feministas. Ver Angélica Motta: «Castración química, un distractor que refuerza la violencia sexual» en *Sudaca*, 22/4/2022.

Para entender el laberinto en el que se mueve el presidente, es necesario revisar su breve gestión, marcada por las tensiones con Perú Libre, el partido por el que postuló, y la amenaza de vacancia del Congreso. A esto se suman sus propias dificultades para armar una gestión coherente.

### Una victoria inesperada

Pedro Castillo Terrones, profesor rural, sindicalista, hijo de una familia campesina, ganaba en segunda vuelta las elecciones del bicentenario de la independencia peruana con 50,12% de los votos válidos. El candidato cajamarquino hizo del lema «No más pobres en un país rico» el signifiicante vacío en el que miles de peruanos y peruanas depositaron sus propios sueños y expectativas, antes por una lógica de identificación que de convencimiento. Y, no menos importante, su candidatura sirvió para frenar un gobierno de Keiko Fujimori, la hija del ex-dictador. Sea como fuere, el triunfo de Castillo fue calificado como un resultado histórico que rompía con el patrón tradicional del país al ganarle a la candidata del poder constituido<sup>2</sup>.

«¿De dónde salió Pedro Castillo?» fue la pregunta que atravesó el establishment político. El crecimiento de su candidatura se reporta con claridad la penúltima semana de campaña para las elecciones del 11 de abril de 2021. Su postulación había pasado desapercibida para la mayoría de los medios de comunicación «nacionales» que, como es ya una mala tradición en el Perú, son capitalinos, limeños y sin capacidad –ni voluntad real– de informar, y menos aún de entender, los procesos que se generan en el resto de las regiones del país.

Las elecciones de 2021 se inscribieron en un escenario de grave crisis institucional, tras cinco años de convulsión y de enfrentamiento constante entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, que acabaron con la disolución del Parlamento y la elección de uno nuevo para culminar el periodo constitucional, así como con la sucesión de cuatro presidentes en cinco años, uno de los cuales, acusado por la ciudadanía de orquestar un golpe de Estado desde el Congreso, no duró ni una semana en el poder. En medio de esta crisis institucional llegó la pandemia, que puso al Perú nuevamente en los rankings internacionales. Pero esta vez no por su «milagro económico» ni por su alto nivel de crecimiento, sino por ser el país con el mayor número de muertes en la región por covid-19. Literalmente, el país se quedó sin oxígeno para hacer frente a la pandemia.

---

2. Eduardo Ballón: «¿El agotamiento de un ciclo?» en *Perú Hoy* Nº 39, 2021.

La ilusión de bonanza económica fruto del neoliberalismo de pronto se desplomó. Apareció con una claridad dolorosa la calamitosa realidad nacional. Los servicios públicos no daban abasto, en particular los sanitarios. En las estadísticas regionales sobre cantidad de camas en las unidades de cuidados intensivos, Perú estaba solo detrás de Guatemala<sup>3</sup>. El hacinamiento y la precariedad de la vivienda popular redujeron los posibles efectos del confinamiento —uno de los más radicales y largos de la región—, pues las condiciones de habitabilidad no solo no prevenían el contagio, sino que lo promovían<sup>4</sup>. El confinamiento dejó sin ingresos a cientos de miles de familias, en un país donde más de 70% de la población económicamente activa (PEA) es informal y vive del día a día y sin ningún sistema de protección social que le permita paralizar sus actividades sin pasar hambre<sup>5</sup>. Crisis económica, crisis sanitaria y crisis institucional simultáneas: una tormenta perfecta.

En ese contexto, con solo 15,3% de los votos emitidos, Castillo ganó la primera vuelta de una elección altamente fragmentada, con 18 candidaturas, en la que los votos nulos y viciados ascendieron a 18,6%, mientras que 30% de los electores y electoras habilitados no fueron a votar. Su contendora en la segunda vuelta, Keiko Fujimori, tres veces candidata, pasó a la segunda ronda con solo 10,9% de los votos emitidos<sup>6</sup>. La polarización se instaló. La derecha y la centroderecha apoyaron rápidamente a Fujimori, incluido el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, otrora enemigo político de Alberto Fujimori y del fujimorismo. El eje de su campaña fue la supuesta defensa de la libertad y la democracia frente al comunismo. En la otra orilla, Verónica Mendoza, candidata de la izquierda urbana, llegó a un acuerdo de gobierno con Castillo sobre la base de compromisos exigidos desde varios movimientos sociales de respeto a la institucionalidad democrática y a la igualdad de género, lucha contra la corrupción y atención a la pandemia<sup>7</sup>, particularmente desde las organizaciones feministas y de derechos humanos.

---

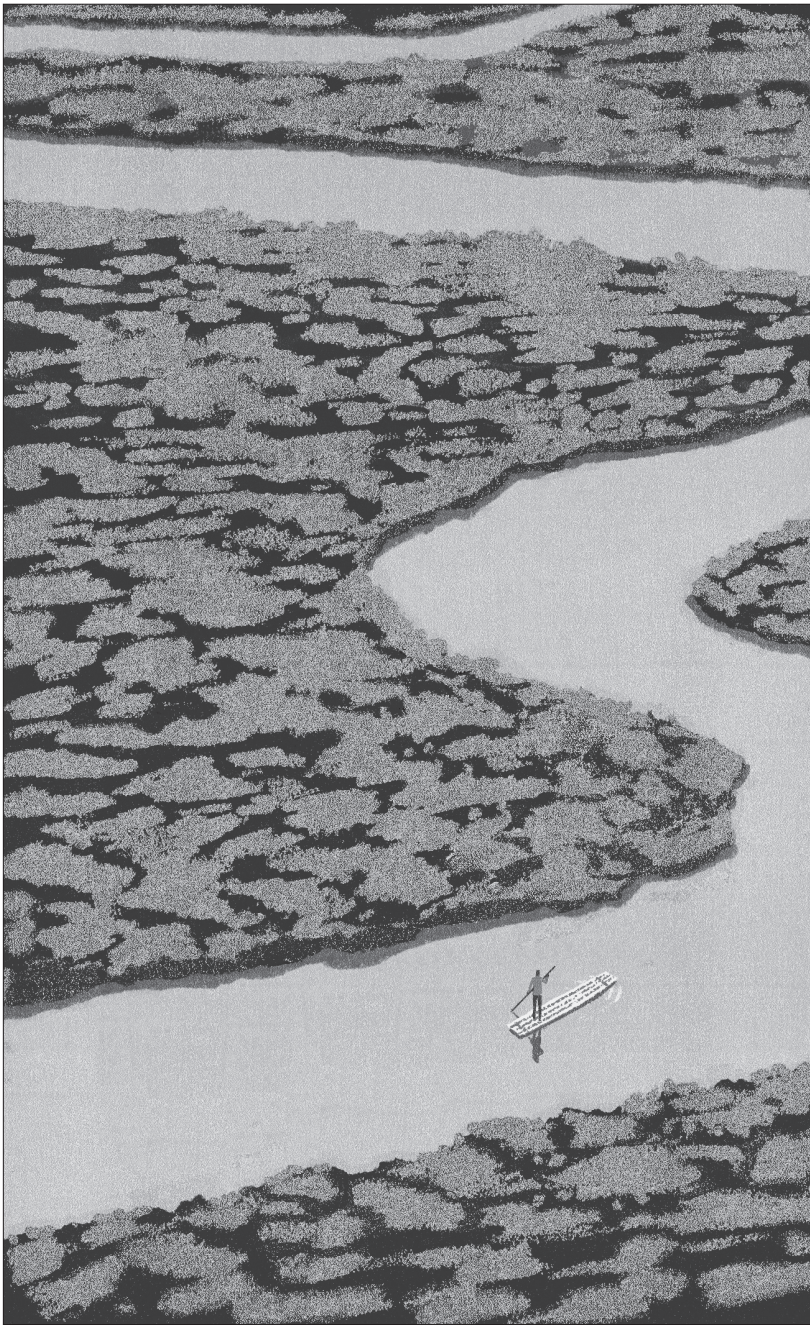
3. Para un relato crudo sobre el devenir de la pandemia y la (in)capacidad del Estado para hacerle frente, v. Luis Jochamowitz y Rafaella León: *Días contados. Lucha, derrota y resistencia del Perú en pandemia*, Planeta, Lima, 2021.

4. La crudeza de la pandemia en las ciudades llevó a un pronunciamiento conjunto de urbanistas, centros de investigación y colectivos urbanos: «Hacia una nueva normalidad con menos desigualdad urbana» en Change.org, <[www.change.org/p/estado-peruano-hacia-una-nueva-normalidad-con-menos-desigualdad-urbana](http://www.change.org/p/estado-peruano-hacia-una-nueva-normalidad-con-menos-desigualdad-urbana)>.

5. Carolina Trivelli, ex-ministra de Inclusión Social, señala que en el periodo 2018-2020 47,8% de la población enfrentaba inseguridad alimentaria. Ver C. Trivelli: «Focalización para atender el hambre» en *El Comercio*, 17/4/2022.

6. Sobre los votos válidos, Castillo araña el 19% y Keiko Fujimori queda levemente por encima de 13%.

7. En el mismo evento de suscripción del pacto con Mendoza, Castillo firmó un «Compromiso con el pueblo peruano» aún más amplio, con énfasis en la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos. V. «Pedro Castillo busca dar garantías mediante diez compromisos» en *La República*, 6/5/2021. Cabe señalar que otros dos candidatos presidenciales expresaron su apoyo a Castillo en la segunda vuelta, Marco Arana y Ciro Gálvez, pero ninguno logró más de 0,5% de los votos emitidos.



## Negacionismo de las clases altas y surgimiento de la extrema derecha

**Keiko Fujimori  
perdió las elecciones  
por escasos 44.000  
votos, pero ganó con  
amplitud en los  
territorios con mayor  
poder económico**

Keiko Fujimori perdió las elecciones por escasos 44.000 votos, pero ganó con amplitud en los territorios más modernos y con mayor poder económico, en la costa norte y en Lima con más de 60% de los votos válidos. Durante días, no aceptó la derrota y sus seguidores desataron una campaña desesperada alegando un fraude electoral. No podían creer que hubieran perdido contra un profesor rural pese a todo el dinero invertido. Varios bufetes de abogados buscaron a como diera lugar «pruebas» del fraude supuestamente realizado por un poder electoral sin ningún vínculo con Castillo. El clasismo y el racismo de la clase alta peruana, particularmente la limeña, se mostraron sin pudor<sup>8</sup>.

Pese a que nunca apareció prueba alguna y a que el Jurado Nacional Electoral (JNE) desestimó todos los pedidos presentados, los autoproclamados «defensores de la libertad y la democracia» organizaron una gira hasta la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que el organismo regional iniciara una acción de revisión de las elecciones en Perú. Obviamente, la cruzada nació muerta y la delegación no llegó ni siquiera a ser recibida. Todo este despliegue de histeria colectiva consiguió que la proclamación de los resultados se postergara como nunca antes, y así desapareció del debate público un elemento esencial en democracia: conocer al equipo que acompañará al candidato en la gestión y cuáles serán sus primeras medidas en el gobierno.

Tras su victoria en la mayor parte del territorio nacional —incluidas las regiones y distritos más pobres, donde obtuvo porcentajes de entre 70% y 90% de los votos—, las discrepancias entre el nuevo presidente y el partido Perú Libre, por el que postuló como invitado, no tardaron en salir a la luz. Especialmente con Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. El mismo día de la juramentación, no quedaba claro quiénes serían convocados a su primer gabinete, en medio de una visible pugna interna.

Cerrón, dos veces gobernador de la región Junín, sentenciado por corrupción e inhabilitado para ejercer la función pública (razón por la que no pudo postular), es un personaje controvertido, de verbo encendido y sed de protagonismo. Representa a una izquierda con retórica setentista de manual, que se autoproclama «marxista-leninista», sin mayor apego por la democracia y con rasgos misóginos y homofóbicos, a la vez que muestra bastante pragmatismo a la hora de expandir su influencia en el Estado. Cerrón, que se identifica

---

8. Ver Julio Rospigliosi: «En el racismo, hermanos» en *Sudaca*, 16/6/2021.

como una «izquierda provinciana», no disimuló sus recelos por la alianza de Castillo con Verónica Mendoza ni dudó en descalificar permanentemente a los miembros de la agrupación aliada como una «izquierda caviar». Particular encono tuvo con Pedro Francke, destacado profesor de Economía e histórico militante de izquierda elegido finalmente como ministro de Economía<sup>9</sup>.

Las declaraciones de Cerrón fueron el perfecto aliciente para el sector de la derecha peruana que, tras fracasar en su afán de inventar un fraude, se lanzó en una segunda cruzada: lograr la vacancia presidencial. Esta figura controvertida, contemplada en la Constitución<sup>10</sup>, se ha vuelto una especie de juicio político cuyos requisitos son únicamente conseguir 34 congresistas para presentarla y 87 que voten a favor de destituir, «vacar», al presidente. Con menos de un año de gobierno, Castillo ya debió enfrentar dos mociones de vacancia y una de ellas alcanzó los votos suficientes para ser debatida en una sesión del pleno del Parlamento. La oposición, dividida y sin liderazgos, aún no cuenta con los votos suficientes para su aprobación, pero es claro que seguirá buscándolos.

Este acoso parlamentario permite entender una de las pocas líneas claras de un gobierno que se ha caracterizado por el rumbo errático: la búsqueda permanente de pactos o prebendas a parlamentarios para bloquear los posibles votos en favor de la vacancia. Son conocidas las visitas a oficinas ministeriales de congresistas de los partidos opositores Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP) para transformar sus votos negativos en beneficios prebendales. El juego de ser una oposición «responsable» que a la vez se beneficia con inversiones en las regiones y provincias donde tienen alcaldes o gobernadores se hace cada vez más evidente. El pragmatismo parece ser su línea ideológica.

Un cambio en el escenario político importante es la aparición de una derecha cada vez más fundamentalista. El fujimorismo dejó de ser su versión más extrema al surgir a su derecha Renovación Popular, partido liderado por Rafael López Aliaga, empresario –deudor tributario<sup>11</sup>– y militante del Opus Dei. López Aliaga disputa con Keiko Fujimori el liderazgo no solo de la opinión pública, sino el de colectivos radicalizados como La Resistencia, que están siendo investigados tras varios episodios de acoso violento a personas públicas. Su más reciente víctima ha sido Gloria Cano, abogada de los familiares de

---

9. V., por ejemplo, una muestra de sus declaraciones en redes en su cuenta de Twitter, <[https://twitter.com/vladimir\\_cerron/status/1419485637347008521?lang=es](https://twitter.com/vladimir_cerron/status/1419485637347008521?lang=es)>.

10. Entre otros, Abraham García Chávarri escribe sobre la figura de incapacidad moral del presidente. Ver A. García Chávarri: «Tres maneras de conceptualizar la figura de la permanente incapacidad moral del presidente de la República como causal de vacancia en el cargo», Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEPUCP), 17/11/2020.

11. Se señala que sus empresas o en las que tiene participación deben más de 30 millones de soles. Ángel Páez: «Rafael López Aliaga sigue sin pagar abultada deuda coactiva con Sunat» en *La República*, 28/10/2021.

La Cantuta y Barrios Altos, casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos por los que fue condenado Alberto Fujimori. Luchan también por constituirse como contrapartes oficiales del partido español Vox o de la Fundación Vargas Llosa, cada vez más ligada a la derecha autoritaria de la región. Su discurso adopta la narrativa global de extrema derecha en contra del enfoque de género, los derechos humanos y el cambio climático.

El principal freno a las protestas sociales, y por tanto el principal salvavidas del presidente Castillo en medio de la crisis de su gobierno, termina siendo el miedo que genera una derecha tan extrema. Pese a que el fujimorismo y Renovación Popular no son numéricamente mayoritarios en el Parlamento, han definido el tenor del debate. Hoy el Parlamento tiene solo 11% de aprobación, inferior a la ya baja del presidente, y en varias regiones las protestas piden su cierre<sup>12</sup>.

### Sin rumbo y sin sombrero

#### La falta de rumbo oficial se evidenció en el carácter errático de los gabinetes

La falta de rumbo oficial se evidenció en el carácter errático de los gabinetes del presidente Castillo que, según la Constitución, deben ser aprobados por el Congreso. Las distancias entre el enfoque de Guido Bellido, quien encabezó el

primer gabinete, militante de Perú Libre y ficha de Vladimir Cerrón, y Mirtha Vásquez, que lo sucedió como *premier*, abogada y defensora de derechos humanos, era sustancial. Pero entre Vásquez y Héctor Valer, tercer jefe del Consejo de Ministros, había una distancia sideral. Valer no llegó ni a pedir el voto de confianza del Parlamento. Por surrealista que parezca, Valer fue elegido par-

lamentario por el grupo de Rafael López Aliaga, ubicado, como mencionamos, en la extrema derecha. Entre otras declaraciones de su autoría, se volvió viral un video en el que durante la campaña electoral llamaba a votar por la señora Fujimori para frenarle el paso al «comunismo» de Castillo. Finalmente, fue la indignación que generó su historia previa de escándalos de violencia machista contra su esposa e hija lo que llevó a que el presidente le pidiera la renuncia.

Así como terminó este gabinete, terminó también un signo distintivo del presidente Castillo: el sombrero<sup>13</sup>. En medio de sus dificultades para estabilizar una gestión, el presidente tocaba fondo, y se deshacía del sombrero

12. «Congreso cae a 11% de aprobación» en *La República*, 25/4/2022.

13. Coincide esa semana tan convulsionada en el país por el nombramiento del gabinete del *premier* Valer con un viaje del presidente Castillo a Brasil. En medio de la conferencia de prensa de ambos mandatarios, Jair Bolsonaro le quita el sombrero y se lo pone, ante la risa y el desconcierto de la prensa. Luego, Castillo dejó de usar el sombrero como una forma de renovar su imagen.

chotano que era una marca de identidad, primero de su candidatura y luego de su atípica presidencia. Una marca de un presidente alejado de la elite tradicional y vinculado a las «rondas campesinas».

El primer gabinete reflejó las tensiones del propio proceso electoral y marcaba claramente varias dinámicas contrapuestas en el interior del gobierno. Por un lado, Bellido y los ministros de Perú Libre que –incluso públicamente– coordinaban con Cerrón antes que con Castillo. Por otro, Pedro Francke, ya convertido en ministro de Economía y Finanzas, Anahí Durand (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Hernando Cevallos (Salud), provenientes de una izquierda que incluye en su programa la defensa de un proyecto ambientalista y feminista, y pone en el centro la defensa de los derechos humanos. Y un tercer grupo: ministros con agendas propias, no conectados con las organizaciones aliadas del gobierno, que respondían a otro tipo de lealtades, más territoriales, con el presidente. De hecho, empezó a hablarse de los «chotanos», paisanos del presidente que poco a poco ganaron protagonismo y terminaron constituyendo una suerte de entorno del mandatario.

Las tensiones en el primer gabinete empezaron el día uno de la gestión de Castillo. La injerencia de Cerrón era tan evidente que el gabinete juramentó sin el ministro Francke. En una reciente entrevista, Francke afirmó que, para su juramentación un día después que el conjunto del primer gabinete que integró, puso como condición absoluta la autonomía de su cartera. Eso, al parecer, se respetó. Lo que no se respetó fue la línea de mando. Guido Bellido agudizó las contradicciones con el propio presidente, al extremo de promover que la bancada de Perú Libre en el Parlamento avanzara contra ministros de su propio gabinete con los que no comulgaba.

Sin mediar acuerdo y mucho menos preparación real en el Ejecutivo, el entonces *premier* Bellido decide anunciar la renegociación del contrato de explotación del gas de Camisea. La noticia tomó por sorpresa al país y al propio gobierno. El presidente y el resto del gabinete parecieron enterarse por la prensa<sup>14</sup>. La cuestión se manejó de manera tan improvisada que aún hoy, pese a los cambios en los sucesivos gabinetes, no hay claridad sobre hacia dónde van esa renegociación y la promesa de la masificación de las conexiones de gas domiciliario.

La juramentación de la nueva *premier* Mirtha Vásquez generó mucha expectativa. Era una mujer de izquierda, conocida públicamente como defensora de líderes sociales criminalizados por enfrentarse a proyectos extractivos, y por haber jugado, como parlamentaria, un rol importante para dar viabilidad al

---

14. Para un relato de la prensa de la tensión suscitada en el gobierno por las declaraciones unilaterales de Guido Bellido en torno de Camisea, v. Daniela Mercado y Diego Quispe: «Pedro Castillo desautoriza a Guido Bellido y a Vladimir Cerrón en la controversia por el gas» en *La República*, 29/9/2021.

gobierno de emergencia y transición de Francisco Sagasti (2020-2021). Se esperaba, además, que su coordinación más fluida con ministros como Francke o el popular ministro de salud Hernando Cevallos –con quienes compartía la misma sensibilidad político-ideológica– mejorara sensiblemente la gestión cotidiana. Sin embargo, pronto se supo que varios ministros no habían sido nombrados con su aprobación y que, además, tenían serios cuestionamientos. La presión de Vásquez por sacar a algunos de ellos tensionó desde el comienzo su relación con el presidente. La nueva *premier* se abrió así un doble frente de conflicto: con Castillo y con Perú Libre y Cerrón, quienes nunca aceptaron su nombramiento y buscaron su alejamiento del gobierno.

El juego de la bancada de Perú Libre en el Parlamento ha sido también un factor de inestabilidad para el Poder Ejecutivo. Con vasos comunicantes con el fujimorismo y otras bancadas de oposición, por ejemplo, en la defensa de economías informales –e incluso ilegales–, ha participado de los intentos de voltear las pocas reformas iniciadas en gobiernos pasados en el campo de la educación universitaria (contra universidades privadas de bajísima calidad académica) y el transporte urbano (en este caso, con la finalidad de regular el caótico sistema imperante). Comparte también con sectores ubicados a la derecha el combate contra el enfoque de género en las políticas públicas y la educación sexual integral, lo que la llevó a sumarse en un frente parlamentario contra Vásquez.

El presidente mantuvo una línea de gobierno paralela a la de Vásquez, lo que contribuyó a profundizar la grieta interna. La más dura fue la disputa en torno del entonces ministro del Interior, Avelino Guillén. Llevado por Vásquez al gabinete, Guillén es una importante figura para el movimiento de derechos humanos peruano pues fue el fiscal supremo encargado de procesar al ex-presidente Alberto Fujimori, y se enfrentó en su gestión ministerial al jefe de la Policía Nacional, Javier Gallardo, acusado de cobrar comisiones ilegales por ascensos en la institución. Castillo optó por el general Gallardo antes que por su ministro<sup>15</sup>. La renuncia de Vásquez fue cuestión de días, y el nombramiento del nuevo gabinete a la cabeza de Valer traería además la salida de Francke, su reemplazo por un tecnócrata de carrera del Ministerio de Economía y Finanzas y la salida de Cevallos, el ministro con más alta aprobación por una exitosa campaña de vacunación, reemplazado por un médico cuya única credencial era haber sido parte del gobierno regional de Junín durante la gobernación de Cerrón.

---

15. Recientemente, la ex-ministra Vásquez ha dado una entrevista extensa a la revista *Quehacer* donde relata sus tensiones con el presidente y su lectura del momento actual. Ver Carlos Noriega: «El Presidente siempre sale con promesas y el país ya no da para promesas (entrevista a Mirtha Vásquez)» en *Quehacer* N° 9, 4/2022.

El último gabinete, presidido por Aníbal Torres, fue ya el de la crisis permanente. Su juramentación parecía un «mientras tanto», pues el presidente anunció la búsqueda de alguien independiente y Torres viene desde el primer gabinete de Castillo como ministro de Justicia. La composición ministerial fue similar a la del gabinete de Valer. Ambos respondían a una lógica de supervivencia. La designación de varios ministros busca garantizar votos en el Congreso. El presidente vuelve a necesitar a la bancada de Perú Libre y de Cerrón. El objetivo es claro: avalar el gabinete y evitar la vacancia.

### **El último gabinete, presidido por Aníbal Torres, fue ya el de la crisis permanente**

En medio de este vaivén en la gestión del gobierno, la prensa denunció supuestos beneficios a algunas empresas otorgados por el Ministerio de Transporte y la compañía estatal Petroperú. Las empresas tenían vínculos con la lobista Karelím López, quien resultó ser una asidua visitante al Palacio de Gobierno. El nexo de López con el entorno presidencial era Bruno Pacheco, secretario de la Presidencia y mano derecha de Castillo. Hoy Pacheco se encuentra prófugo de la justicia, al igual que dos de los sobrinos del propio presidente. Estos escándalos han dañado la imagen de Castillo y contribuyen al ímpetu «vacador» del Congreso. La aprobación presidencial ha descendido a 25%.

### **El mayor peligro: la inflación y una posible crisis alimentaria**

Mientras el presidente sigue perdido en su laberinto, los conflictos sociales proliferan y nadie parece atenderlos a tiempo. Junto a los conflictos socioambientales en entornos mineros, agudizados por el mal manejo histórico y el hartazgo de la población con mesas de diálogo que no logran resultados concretos<sup>16</sup>, aparecen otros vinculados específicamente a la inflación. Son particularmente serias las tensiones con transportistas y agricultores.

Ambos conflictos responden a un problema más global. La guerra entre Rusia y Ucrania afecta nuestras economías por la elevación del precio de combustibles y fertilizantes. Sin embargo, sobre todo en el caso de los fertilizantes, la elevación de precios empieza con la crisis iniciada por la pandemia, y la agricultura, en particular la pequeña agricultura familiar, exige atención incluso desde antes del comienzo del gobierno de Castillo.

---

16. Uno de los más visibles se registra en el llamado Corredor Minero, entre comunidades y la empresa MMG Las Bambas. Recientemente, comuneros de Fuerabamba tomaron las tierras del entorno del tajo y hay rumores de un posible desalojo violento. Este yacimiento de cobre es uno de los más importantes del país. Para más información sobre los conflictos en entornos mineros, v. la página web del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, <<https://conflictosmineros.org.pe/>>.

En campaña, el presidente se comprometió a llevar adelante una «segunda reforma agraria», en alusión al proceso de transformación social que supuso la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado de 1969. La promesa generó gran expectativa y movilizó a los principales gremios agrarios que, desde las diversas regiones del país, promovieron el debate en torno de los posibles lineamientos para avanzar en el proyecto.

Víctor Maita, ex-presidente de la Confederación Nacional Agraria y primer ministro de Agricultura de Castillo, sentó las bases del proceso. Se organizó un gran evento en la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco, para anunciar a los gremios agrarios y organizaciones campesinas los ejes de la reforma. Uno de ellos, el apoyo a las familias campesinas para paliar el aumento del precio de la urea. De esto no queda más que un decreto supremo que no se ha operativizado. Maita fue removido de su cargo en función de la lógica de reparto de cargos para evitar la vacancia en el Congreso. La salida de Maita confirma una tendencia peligrosa: Castillo está dispuesto a sacrificar a los pocos ministros con capacidad de gestión y densidad política, como Francke, Cevallos o Maita, para mantener los equilibrios de poder. También confirma que no le gustan los perfiles con luz propia en su gabinete.

Eduardo Zegarra, investigador agrario y ex-asesor ministerial, ha calificado el plan de emergencia del nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, como una burla para los agricultores. Ha advertido además que nuevamente se está priorizando la gran agricultura de exportación y que se ha «descabezado» al Ministerio sacando a más de 40 altos directivos para colocar a personas que no conocen el sector. Sobre la «segunda reforma agraria», el ministro ha preparado un proyecto de ley absolutamente innecesario pues todo lo señalado está ya en el decreto original de lanzamiento de la reforma, pero que le permitirá culpar al Congreso, que no lo aprobará, de la parálisis. Para Zegarra, Perú tiene un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea y la inacción del Estado puede llevarlo a la reducción de hasta 40% de la producción de alimentos esenciales como arroz y papa, con el consiguiente incremento de los precios<sup>17</sup>.

**Las protestas  
de transportistas  
primero y luego de  
agricultores han  
paralizado este  
año varias regiones  
del país**

lado está ya en el decreto original de lanzamiento de la reforma, pero que le permitirá culpar al Congreso, que no lo aprobará, de la parálisis. Para Zegarra, Perú tiene un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea y la inacción del Estado puede llevarlo a la reducción de hasta 40% de la producción de alimentos esenciales como arroz y papa, con el consiguiente incremento de los precios<sup>17</sup>.

Las protestas de transportistas primero y luego de agricultores han paralizado este año varias regiones del país y en algunos momentos ha escalado la violencia. Esta nueva convulsión social tiene demandas muy diversas. En Lima, las principales

---

17. Andi Chero: «Eduardo Zegarra: 'La reforma agraria está por convertirse en una promesa incumplida'» en *La República*, 22/4/2022.

protestas piden la renuncia del presidente<sup>18</sup>; en el resto del país lo que hay, por el contrario, es una exigencia al presidente de que cumpla sus promesas de cambio y que gobierne. Frente a esta situación, Castillo constituyó un gobierno itinerante con reuniones descentralizadas del Consejo de Ministros. Ya se han realizado algunas en Huancayo, Cuzco y Puno. Estas reuniones, de carácter más asambleario que ejecutivo, han servido por un lado como espacio de catarsis de los principales dirigentes y autoridades locales. Por el otro, como espacio para ensayar la nueva narrativa del Ejecutivo: no podemos avanzar sin que el Congreso apruebe los proyectos que hemos enviado. Quizá la alta desaprobación del Congreso –como señalamos, por debajo del propio presidente– y el poco conocimiento sobre el funcionamiento del Estado peruano permitan que esta excusa funcione de manera temporal. Pero si los precios siguen al alza y queda meridianamente claro que no se necesita ninguna ley para comprar urea, la solución puede resultar peor que la enfermedad.

### Fuga hacia adelante: la Asamblea Constituyente

Mientras escribía este artículo, se abría un nuevo escenario de polarización. El presidente Castillo presentó en abril un proyecto de ley al Congreso para modificar la Constitución y abrir la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. Inicialmente descartada de la agenda de gobierno por los sucesivos ministros y por el propio Castillo, la opción de la Constituyente reaparece por ser la única que le da oxígeno al gobierno al cambiar los ejes de la discusión.

La semana previa, la agenda política y mediática estaba centrada en la renuncia del presidente o en el adelanto de las elecciones generales –una versión institucionalista del «que se vayan todos», tanto Castillo como los congresistas– que va adquiriendo un creciente apoyo popular: hoy esta consigna es aprobada por 68% de los consultados como salida de la crisis<sup>19</sup>. Pero la propuesta de un referéndum para consultar a la población sobre una posible Asamblea Constituyente ha descentrado en parte la coyuntura.

La movida es astuta. Evidentemente, no ha sido planificada; las graves inconsistencias en el propio texto legal enviado al Parlamento lo

---

18. Juan Luis Dammert analiza las protestas en la capital y las consecuencias de la declaratoria de Estado de Emergencia en Lima en «La torpeza de Castillo» en *La Mula*, 5/4/2022.

19. «El 68% de los peruanos está de acuerdo con el adelanto de elecciones, según IEP» en *LR Data*, <<https://data.larepublica.pe/encuesta-iep-aprobacion-desaprobacion-peru-presidente-congreso-de-la-republica/>>.

demuestran. Pero Castillo no pretende ganar en el debate jurídico o académico, sino sobrevivir políticamente en el gobierno, y para ello necesita reconfigurar el campo de juego.

Los detractores han respondido con mucha agresividad. Defendiendo el establishment y haciendo gala de su autoritarismo, cuestionan la mera posibilidad de una consulta ciudadana. Las fuerzas de izquierda y las organizaciones sociales más representativas defienden la opción de una Constituyente, ya que siempre fue un anhelo compartido forjar un nuevo pacto social en democracia y abandonar así la Constitución nacida de la dictadura de Fujimori. No hay, sin embargo, una única posición. Varias voces han advertido que hay una utilización política de Castillo de la propuesta, y por ello plantean empujarla desde la sociedad más allá del propio gobierno.

Jurídicamente, la propuesta no tendrá una larga vida. El Congreso no permitirá que avance. Lo que queda como duda es si habrá generado suficiente ilusión como para movilizar a la ciudadanía en favor de su aprobación. Lo cierto es que el debate se ha abierto en medio de una crisis institucional muy aguda y la inflación sigue acosando los bolsillos de las grandes mayorías. El presidente puede ganar esta partida, pero parece difícil revertir la inestabilidad e ineficacia de su gobierno. ☐

## Ecuador Debate

Diciembre de 2021

Quito

Nº 114

PRESENTACIÓN. COYUNTURA: Bienvenidos a Ecuador: crisis, muerte y «reactivación», **John Cajas Guijarro**. Reflexiones en torno a la coyuntura, **Edison Pare-des Buitrón**. Conflictividad socio-política: Julio-Octubre 2021. TEMA CENTRAL: A manera de presentación del Tema Central: Aproximaciones teóricas y realidades de la Economía Feminista, **Silvia Vega, Ailynn Torres y Nora Fernández**. Economía feminista y post normalidad: Reflexiones para una agenda de investigación, **Alison Vásquez Rodríguez**. Cuidados, mercado laboral y crisis: los efectos sobre las mujeres en Ecuador, **Karla Vizuete, Gabriela Andrade y Nora Fernández**. Ecología política feminista y política del cuidado, **Wendy Harcourt**. Mujeres y cuidado: reflexiones en el contexto de la crisis del covid-19, **Diana Morán Chiquito y Roberto Ruiz Blum**. Reconocer, Reducir y Redistribuir los Trabajos de Cuidado: la experiencia del Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá, **Natalia Moreno Salamanca**. DEBATE AGRARIO: Las asociaciones productivas agrícolas. ¿Un camino a la equidad de género en la ruralidad?, **Suelen Emilia Castiblanco Moreno**. ANÁLISIS: Sublevaciones indígenas en Chimborazo: 1920-1921. Algunas representaciones a partir de *El Telégrafo* y *El Observador*, **David Anchaluza Humala**. La reforma y contrarreforma monetaria-financiera, **Luis Rosero M. RESEÑAS**.

Ecuador Debate es una publicación del Centro Andino de Acción Popular. Redacción: Diego de Utreras N28-43 y Selva Alegre, Apartado aéreo 17-15-173-B, Quito, Ecuador, Tel.: 2522763. Correo electrónico: <caaporg.ec@uio.satnet.net>.

# El curioso caso de un peronismo no verticalista

María Esperanza Casullo

El rechazo de gran parte del kirchnerismo a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra la heterogeneidad de la coalición panperonista que gobierna Argentina. Pero, al mismo tiempo, las tensiones internas en el gobierno de Alberto Fernández reflejan una situación inédita en el peronismo: la ausencia de un liderazgo unificado. Esto genera incertidumbre sobre el futuro inmediato.

El peronismo está viviendo una situación inédita. No es inédita la derrota electoral que sufrió en noviembre pasado en las elecciones de medio término, ya que también fueron derrotados gobiernos peronistas en 1997, en 2009 y en 2013. Tampoco es inédita la difícil situación económica; durante los primeros meses del gobierno de Carlos Menem se dio un pico inflacionario y en los últimos años de su gobierno la desocupación alcanzó a 13% de la población económicamente activa. Lo que sí es inédito es la división del gobierno en dos bloques abiertamente opuestos. El enfrentamiento entre los dos sectores internos del Frente de Todos ha escalado en los últimos meses hasta alcanzar un grado de incertidumbre que ha congelado la agenda legislativa y amenaza las perspectivas de los últimos dos años de la gestión del presidente Alberto Fernández.

---

**María Esperanza Casullo:** es politóloga, doctora en Gobierno por la Universidad de Georgetown (Washington, DC) y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina). Publicó artículos y capítulos sobre teoría de la democracia, populismo latinoamericano y peronismo. Su último libro es *¿Por qué funciona el populismo? El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis* (Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2019).

**Palabras claves:** peronismo, populismo, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Argentina.

**Los vencimientos  
del préstamo con  
el FMI han pendido  
sobre la cabeza  
de la nueva  
administración  
como la espada de  
Damocles**

El tema que expuso la profundidad de la fractura entre las dos «alas» del Frente de Todos fue la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para habilitar la refinanciación del gravoso préstamo asumido en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri. En ese año, y luego de varios meses de crisis cambiaria y devaluación del peso, Macri obtuvo un financiamiento del FMI por más de 50.000 millones de dólares y Argentina pasó a ser el principal deudor del organismo (su deuda equivale hoy a 61% de la cartera de la institución). Sin embargo, esta megainyección de fondos no detuvo la crisis, a punto tal que el gobierno saliente entró en *default* pocos días antes de dejar el poder. Desde el primer día en que asumió el gobierno la fórmula ganadora integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los vencimientos del préstamo con el FMI han pendido sobre la cabeza de la nueva administración como la espada de Damocles.

Todos los sectores del Frente de Todos están de acuerdo en algunas cuestiones básicas. El préstamo fue asumido por Macri en condiciones de dudosa legalidad según los protocolos del Fondo y con una bajísima legitimidad política doméstica: la deuda fue tomada sin discusión en el Congreso argentino, anunciada por el presidente con los hechos consumados, en un video de Facebook de apenas un minuto y medio de duración. El propio FMI aceptó en un informe interno de evaluación en 2021 que al menos parte de los fondos en dólares fueron ofrecidos por Argentina a inversores financieros para desarmar sus posiciones en pesos y fugar sus divisas fuera del país. La posibilidad de repago real del préstamo era desde el comienzo bastante fantástica; luego, en medio de la pandemia, fue claro que era imposible afrontar el esquema de vencimientos en dólares tal como se había pactado. Aquí, sin embargo, terminan los acuerdos. Mientras tanto, el préstamo sigue vigente, ya que es una obligación soberana asumida por el Estado nacional.

Luego de dos años de negociación, el ministro de Economía Martín Guzmán (ex-profesor de Economía de la Universidad de Columbia y alumno de Joseph Stiglitz) anunció que se había obtenido un preacuerdo para una refinanciación. Este tomó la forma de un crédito de facilidades extendidas mediante el cual el FMI le prestaría al país las sumas necesarias para afrontar cada uno de los pagos agendados, bajo la condición de aprobar revisiones trimestrales de los números de la economía argentina. Las condicionalidades que exige el FMI, si bien son menores a las que el organismo ha impuesto históricamente, incluyen un compromiso de aumentar las tarifas de energía y de revisar de alguna manera el sistema de previsión social del país (los subsidios a la energía y las jubilaciones

representan la mayor masa de gastos del Estado argentino). Estos puntos, sin embargo, son provisionales.

En este contexto, pocos días después del anuncio del preacuerdo, el hijo de la ex-presidenta Cristina Fernández, el diputado nacional Máximo Kirchner, anunció mediante una carta pública que no lo apoyaba. Expresó fuertes críticas a la gestión del ministro Guzmán y manifestó que se sentía excluido del sistema de toma de decisiones del presidente Fernández. Por todo esto, renunció al cargo de presidente del bloque legislativo del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Llamar a esta reacción «explosiva» sería poco.

Si bien en los días que siguieron a la renuncia se dieron pasos para desescalar la situación (Fernández dijo que no les pediría las renuncias a los funcionarios cercanos a Máximo Kirchner y este anunció que su agrupación, La Cúmpora, no se iría del gobierno), las grietas parecen hoy más profundas que nunca. Dirigentes políticos y referentes de opinión del kirchnerismo se muestran críticos hacia el acuerdo con el FMI y llaman a denunciar la deuda y recurrir al Tribunal de La Haya y dividirán el voto oficialista en el Congreso.

No obstante, las grietas no son nuevas. La vicepresidenta Cristina Fernández ya había manifestado su disconformidad con el gobierno en varias oportunidades y ministros de su sector presentaron públicamente su renuncia al gabinete en octubre de 2021, luego de la derrota en las elecciones primarias (no les fue aceptada). En esa oportunidad, ella misma manifestó en una carta abierta que a Alberto Fernández le falta decisión, voluntad de enfrentarse con los sectores del capital y celeridad en la gestión<sup>1</sup>. La centralidad que ha asumido el género epistolar en la política argentina es prácticamente decimonónico, aunque esas cartas se publiquen en plataformas virtuales.

Hay que señalar, sin embargo, que los dos sectores internos en pugna no son equivalentes. El kirchnerismo es un colectivo compacto, con un liderazgo único y definido: Cristina Fernández de Kirchner. El sector que podría llamarse «albertista», en cambio, es más bien una especie de archipiélago de actores singulares unidos en una desconfianza (que no es nueva) hacia el estilo de conducción de la ex-presidenta. Gobernadores, alcaldes de la provincia de Buenos Aires, los sindicalistas unidos en la Confederación General del Trabajo (CGT), el Movimiento Evita y figuras del peronismo de la ciudad de Buenos Aires cercanas desde hace décadas al presidente, como Gustavo Béliz (muy resistido por Cristina Fernández) forman parte del conglomerado, pero no tienen con Alberto Fernández la relación vertical que el kirchnerismo tiene con la ex-presidenta. Hay que sumarle a estos dos sectores el del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, que hasta ahora se

---

1. Puede leerse el texto completo de la carta en <[www.lanacion.com.ar/politica/el-texto-completo-ladura-carta-de-cristina-kirchner-contra-alberto-fernandez-y-su-entorno-nid16092021/](http://www.lanacion.com.ar/politica/el-texto-completo-ladura-carta-de-cristina-kirchner-contra-alberto-fernandez-y-su-entorno-nid16092021/)>.

mantiene más o menos prescindente del conflicto abierto, pero cuyas ambiciones (seguramente) recaen en él mismo.

### El experimento del Frente de Todos

**Es la primera vez, desde 1983 hasta hoy, que el peronismo no tiene un liderazgo único, fuerte y vertical**

Si la situación actual del peronismo es inédita, lo es porque el Frente de Todos fue, a su vez, una construcción novedosa. Es la primera vez, desde 1983 hasta hoy, que el peronismo no tiene un liderazgo único, fuerte y vertical. Steven Levitsky y Kenneth Roberts ofrecen una pista para pensar la situación actual en su libro del año 2011 *The Resurgence of the Latin American Left* [El resurgimiento de la izquierda latinoamericana], dedicado a interpretar el auge de las izquierdas latinoamericanas en la primera década del siglo. Allí, clasifican los partidos y movimientos que estaban en ese entonces en el poder en cuatro categorías. Movimientos de izquierda (el Movimiento al Socialismo boliviano), populismos de izquierda (el chavismo, con Hugo Chávez aún vivo), partidos de izquierda institucionalizados (el Partido Socialista chileno y el Frente Amplio uruguayo) y, finalmente, el peronismo, clasificado como «partido-máquina populista». Levitsky y Roberts escriben: «los partidos-máquina populistas son organizaciones establecidas que han sobrevivido años, o incluso décadas, fuera del poder, incluso como oposiciones a gobiernos autoritarios. Sin embargo, esas organizaciones están atadas al proyecto político de una personalidad dominante que se ubica en el vértice de una estructura de autoridad piramidal»<sup>2</sup>.

La teoría de partidos, que conocen bien Levitsky y Roberts, supone que estos o bien son institucionales o bien son movimientos basados en liderazgos. Los partidos institucionalizados tienen dirigentes, pero estos son varios, y ninguno de ellos tiene un rol de líder único (los ejemplos serían el socialismo chileno y el Frente Amplio uruguayo). El peronismo sería una *rara avis*, un partido institucionalizado, con mecanismos rutinizados y durabilidad, pero que requiere de un liderazgo personalista para funcionar.

Es decir, afirman Levitsky y Roberts, que el peronismo funciona como un partido pero tiene la particularidad de operar con «liderazgos seriales». A un líder fuerte le sucede otro, y otro, y otro (u otra). La mejor descripción del partido-máquina con liderazgo serial del que hablaban Levitsky y Roberts

---

2. S. Levitsky y K. Roberts: *The Resurgence of the Latin American Left*, Johns Hopkins UP, Baltimore, 2011, p. 14.

la dio en 2015 el entonces gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, pocos meses antes de la elección, cuando en una entrevista con el diario *La Nación* dijo: «Mirá, cuando tenga un candidato a presidente, que todavía no lo tengo, me va a empezar a parecer un gran dirigente; en septiembre, me va a parecer que es lo más cercano a los postulados del peronismo, y en octubre, cuando gane las elecciones, me va a parecer la reencarnación de Perón. Así somos nosotros».

La experiencia peronista es entonces única por partida doble. Para comenzar, hay pocos partidos políticos fundados por un líder carismático que hayan logrado sobrevivir al exilio prolongado o a la muerte del fundador. El peronismo lo hizo doblemente: primero sobrevivió a 18 años de proscripción, exilio de su líder y persecución de sus militantes entre 1955 y 1973, luego, al fallecimiento de Perón en 1974, y poco después, a siete años más de represión violenta bajo la última dictadura militar (1976-1983). Las explicaciones para la supervivencia del peronismo ponen el acento en la capacidad de organización y resiliencia de diversos actores de la base del movimiento: los sindicatos (analizados por Daniel James<sup>3</sup>), los gobernadores y dirigentes provinciales relativamente autónomos de las provincias (estudiados por Ana María Mustapic<sup>4</sup>), la descentralizada militancia territorial (retratada por el mismo Levitsky<sup>5</sup>) y las camadas juveniles que se incorporaron masivamente al peronismo en la década de 1970. Es decir, los sectores que permitieron sobrevivir al peronismo sin Perón y que le dan vitalidad aún hoy son los mismos que tensionan la vida interna del Frente de Todos. Estas tensiones, históricamente, se han resuelto por el liderazgo. El peronismo nació como un movimiento ligado a un liderazgo carismático que logró sobrevivir a la muerte de su líder originario. Esto es poco habitual, pero no imposible. Lo curioso es que haya sobrevivido sin burocratizarse por completo, que haya conservado una especie de necesidad serial de carisma.

La bibliografía sobre partidos asume que, en aquellos casos en que un partido carismático logre transicionar hacia un formato de partido institucionalizado, lo hará transformándose en una organización más gris, más procedimental, manejada por burócratas. Así lo dice Max Weber, creador tanto del concepto de *carisma* como del de *burocratización*. Weber compara

---

3. D. James: *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina*, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2006.

4. A.M. Mustapic: «Del Partido Peronista al Partido Justicialista. Las transformaciones de un partido carismático» en Marcelo Cavarozzi y Juan Manuel Abal Medina (comps.): *El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*, Homo Sapiens, Rosario, 2002.

5. S. Levitsky: «Una ‘Des-Organización Organizada’: organización informal y persistencia de estructuras partidarias locales en el peronismo argentino» en *Revista de Ciencias Sociales* N° 12, 2001.

**Al liderazgo  
original de Juan  
Domingo Perón lo  
sucedió un  
breve periodo de  
«desorden»**

los partidos modernos con la Iglesia católica. El carisma es el milagro original: no se planifica ni se diseña. Es reconocido como tal por los seguidores o no lo es. El carisma se autoexplica y se autolegitima. Además, es siempre *personal* y constituye la única fuente de lo nuevo en la política. El carisma no se transmite ni se hereda, dice Weber; a lo sumo, se sublima en autoridad organizacional. El carisma del fundador se puede institucionalizar, pero ninguna figura alcanzará la autoridad del líder original.

Esto no es, sin embargo, lo que sucedió con el Partido Justicialista. Al liderazgo original de Juan Domingo Perón lo sucedió un breve periodo de «desorden» y conducción colegiada bajo las 62 Organizaciones Peronistas, que culminó en la derrota de 1983. El momento de refundación se dio en 1988, cuando Carlos Menem le ganó en una primaria al gobernador bonaerense Antonio Cafiero. Pero lo importante para el argumento de este artículo es que luego de la primera y única elección interna del peronismo para la candidatura presidencial, no se produjo la burocratización del justicialismo, sino que surgió un liderazgo que duraría 11 años. Tanto es así, que Menem integró sin rispidez y de manera completa a toda la dirigencia de la Renovación caferista: Carlos Grosso, José Luis Manzano y Juan Manuel de la Sota asumieron responsabilidades de peso durante el gobierno menemista, y Menem pudo operar durante los diez años de su presidencia como la máxima autoridad del partido sin grandes desafíos. El éxodo del llamado Grupo de los Ocho en 1991, bajo el comando de Carlos «Chacho» Álvarez, no hizo sino confirmar el liderazgo de Menem: tan fuerte era su figura que el *exit*, la fuga, era preferible a dar batalla en el interior del partido.

El patrón serial solo fue fortalecido más tarde con el ascenso de Néstor Kirchner y Cristina Fernández como articuladores de una nueva hegemonía dentro del partido. (Eduardo Duhalde nunca pudo consolidar su liderazgo interno de manera total). La victoria del kirchnerismo sobre Duhalde en 2005 consolidó un nuevo «liderazgo serial» que duraría hasta 2015 (aunque tuvo desprendimientos). La efectiva anulación de Menem y su transformación en un senador muy poco relevante no dejaron de ser sorprendentes para quienes habían visto de primera mano el control que llegó a ejercer en su momento de auge.

Solo entendiendo el rol del liderazgo como punto de síntesis de las tensiones internas del peronismo puede comprenderse el péndulo ideológico entre el neoliberalismo radical del menemismo y las políticas de centroizquierda «nacionales y populares» del kirchnerismo. Históricamente, siempre han existido posturas diversas dentro del denominado «movimiento nacional y

popular». Lo que suturaba la inconsistencia programática era la aceptación de la unicidad del liderazgo. Esto permite comprender trayectos como, por ejemplo, el del actual senador Oscar Parrilli. Peronista desde siempre, dirigente del peronismo de la provincia del Neuquén, Parrilli fue en 1992 el miembro informante que defendió en la Cámara de Diputados la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), empresa estatal de hidrocarburos y entonces (como ahora) principal compañía del país. Cercano a los Kirchner en los 90, se incorporó a la «mesa chica» de su gobierno como secretario general de la Presidencia en 2003 y defendería la «recuperación» de la empresa por parte del Estado. Hoy, como senador, es una de las voces activas del kirchnerismo contra la firma del acuerdo con el FMI.

No se trata, sin embargo, de que el peronismo fuese ajeno al internismo más salvaje. Por el contrario, los enfrentamientos internos del movimiento han llegado a niveles muy altos de violencia, incluso violencia armada entre diversas facciones, de la izquierda y la extrema derecha peronistas, en la década de 1970. En la entrevista citada, Urtubey agregaba sobre el nuevo liderazgo que estaba esperando: «Si le va bien, dentro de cuatro años militaremos su reelección, y si no le va bien, nos lo llevaremos puesto [le pasaremos por encima]». La clave es ese «si no le va bien». El enfrentamiento interno suele aplacarse durante la gestión de gobierno, cuando se acepta la hegemonía del presidente o la presidenta, y recrudecer en los últimos años del periodo de gobierno de un presidente sin reelección posible (como ocurrió entre Menem y Duhalde entre 1997 y 1999, o en el kirchnerismo luego de 2013) y durante los periodos en la oposición. Lo novedoso es que el peronismo sigue hoy igual o más dividido que en 2019, cuando comenzó el actual gobierno.

### **El peronismo luego de 2015: una nueva era para el movimiento**

La finalización del gobierno de Cristina Fernández en 2015 dejó en claro que la vieja dinámica de internas salvajes/aceptación del nuevo liderazgo había perdido vigencia. En 2015 el peronismo entró en una nueva era.

El primer factor novedoso es que el lazo carismático entre Cristina Fernández y un sector importante de la sociedad no se agotó con su salida del poder. La fortaleza de ese lazo quedó en evidencia en 2017, cuando la ex-presidenta mostró que su nombre encabezando una boleta era competitivo electoralmente. El peronismo nunca tuvo un ex-mandatario que ocupara este lugar real y simbólico. Perón nunca fue un «ex-presidente». En el exilio, siguió más vigente que nunca y luego falleció en el poder.

(Su viuda, María Estela Martínez, nunca fue líder real del movimiento). Menem agotó su capital político rápidamente al dejar el poder. Aunque fue candidato presidencial y luego fue elegido para el Senado de la Nación varias veces, nunca se destacó en el recinto ni intentó (ni habría podido) encabezar una corriente interna del peronismo. Su liderazgo, antaño tan poderoso, simplemente se evaporó.

Pero el peso de Cristina Fernández se mantuvo tras su salida de la Presidencia. No solo no se agotó su liderazgo, sino que mantuvo una total centralidad en el peronismo entre 2016 y 2019. En la elección de 2017, compitió con los sectores encabezados por Sergio Massa por un lado, y Florencio Randazzo y el Movimiento Evita por el otro (con el actual presidente Alberto Fernández como jefe de campaña), y los superó ampliamente.

La pregunta entonces es por qué la ex-presidenta no reconstruyó su liderazgo partidario ni intentó volver al poder. La propia Cristina Fernández renunció a ello al elegir a Alberto Fernández como candidato presidencial en 2019. Él afirmó en una entrevista con el diario *Página/12* en 2018 que «sin

### **La unidad del peronismo fue la clave para el triunfo sobre el macrismo**

ella no se puede, pero con ella sola no alcanza». Cristina Fernández pareció haber tomado en cuenta que un sector importante de la sociedad argentina jamás la votaría, que hay actores con poder dentro del peronismo que miran con recelo su estilo de conducción, y que sin sumar a todo el arco peronista la victoria se alejaba en 2019. La unidad del peronismo fue la clave para el triunfo sobre el macrismo. Y así se llegó a la bifurcación entre la Presidencia (encabezada por Alberto Fernández) y el liderazgo político dentro del peronismo (corporizado en la ahora vicepresidenta).

### **Modelos de sucesión en el peronismo**

Entonces, los antecedentes existentes del pasaje del bastón de mando de un liderazgo a otro pueden sintetizarse en tres modelos:

(a) *Desaparición física del líder*. En este caso, se abre una sucesión obligada. Es lo que ocurrió con Perón. Su fallecimiento en la Presidencia, en 1974, abrió un periodo de vacancia y anomia que no se saldó hasta 1987, cuando Antonio Cafiero resultó electo gobernador de la provincia de Buenos Aires (el liderazgo de Cafiero fue fugaz y duró hasta su derrota a manos de Menem en 1988).

(b) *Agotamiento natural del liderazgo*. Esto sucedió con Menem en 2003. Varios esperaban que sucediera con Cristina Fernández luego de 2015 pero, como señalamos, ella probó que su capital político estaba, si no intacto, tan

vigente como siempre, y que el kirchnerismo constituía una facción estable dentro del peronismo.

(c) *Desafío exitoso de un challenger que «jubila» al líder.* Esto se aplicaría a dos casos: Menem con Cafiero en 1988, y Néstor Kirchner con Duhalde en 2003. Son casos algo diferentes, pero opera la misma lógica de una figura desafiante que logra ocupar el liderazgo del movimiento.

## Escenarios a futuro en el Frente de Todos

La primera conclusión es que el Frente de Todos, en tanto organización política, no funciona bien sin un liderazgo unificado (o simplemente no funciona). No es fácil pensar en el futuro en un contexto tan desfavorable y con un grado tan alto de incertidumbre. (Alberto Fernández asumió en diciembre de 2019, en marzo de ese año el mundo se sumergió en la pandemia de covid-19 y ahora, en 2022, con la pandemia cediendo, el mundo se encuentra inmerso en un conflicto global con la invasión rusa a Ucrania).

En este marco, emergen distintos escenarios. El primero sería la institucionalización de la disputa interna. En este caso, todos los sectores existentes (kirchnerismo, albertismo y massismo) aceptarían dirimir el liderazgo en elecciones internas, ya sean las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) o de otro tipo. Esta opción implicaría un esfuerzo por salir del empantanamiento actual mediante la apuesta a transformar al peronismo en el tipo de partido «burocratizado» que, hasta ahora, nunca fue. Tal cosa parece poco probable hoy, porque además quien pierda queda automáticamente fuera de competencia para la Presidencia. Alberto Fernández dijo que impulsaría esta vía (con él como competidor), pero los acuerdos parecen muy improbables.

El segundo escenario sería que Alberto Fernández se decidiera a romper con el kirchnerismo, tal como Néstor Kirchner lo hizo con Eduardo Duhalde en 2005, y que construyera finalmente el «albertismo». No hay dudas de que hay actores cercanos al presidente que le aconsejan seguir este camino, pero el propio Fernández parece muy poco decidido a tomarlo. ¿Ganaría en caso de hacerlo? Es cierto que tendría el apoyo de algunos sindicatos, de algunos gobernadores y alcaldes, tal vez de movimientos sociales y hasta quizás de algunos empresarios. Pero Néstor Kirchner desafió a Duhalde en un momento de economía en ascenso y luego de haber acumulado una gran popularidad. Ninguna de esas dos condiciones se da hoy, tanto por factores ajenos al gobierno como por errores autoinfligidos (como la reunión en la residencia presidencial para festejar el cumpleaños de la primera dama en medio de la cuarentena).

El tercer escenario sería que el kirchnerismo denunciara al gobierno y rompiera definitivamente con él. Tal cosa no es imposible, y puede hasta ser inevitable. Es difícil imaginar cómo continuaría la coalición tras la oposición de sectores kirchneristas al acuerdo con el FMI. Pero es también casi imposible imaginar cómo continuaría si el kirchnerismo profundizara su ruptura con el gobierno.

El cuarto escenario es que continúe el empantanamiento, esta convivencia poco agraciada entre quejas, rezongos y denuncias mutuas. Los acontecimientos de los primeros meses de 2022 parecen solo confirmar que, en efecto, ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner pueden, o quieren, romper con la lógica del conflicto constante sin ruptura abierta. Máximo Kirchner eligió el acto por el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 para mostrar la capacidad de movilización de su organización, La Cámpora; Alberto Fernández volvió a insistir en que él es quien toma las decisiones, en una reiteración no demasiado convincente; Cristina Fernández utilizó un homenaje a los ex-combatientes con motivo del 40º aniversario de la Guerra de Malvinas para criticar a la vocera presidencial (extraña elección por lo asimétrico de las figuras<sup>6</sup>). Esta dinámica, sin embargo, no parece satisfacer a nadie. Los dos años restantes mostrarán, probablemente, a un gobierno con graves problemas para tomar decisiones y para establecer lineamientos compartidos por todos sus socios; dos años más de gestión ralentizada por desconfianzas y bloqueos entre primeras y segundas líneas. Y, finalmente, sería muy difícil pensar en una opción que garantice una única oferta electoral en 2023. En caso de ser derrotado en ese año, ¿se consolidaría un liderazgo nuevo, que no fuera ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández, o continuaría la entropía? Resulta difícil decirlo. La situación misma de un peronismo sin un liderazgo claro ya resulta desconcertante. ☐

---

6. Mencionó, además, que le envió de regalo de cumpleaños al presidente el libro *Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín*, del sociólogo Juan Carlos Torre. No pasó desapercibido que este libro habla de la crisis económica que acabó con el gobierno de Raúl Alfonsín, ni que la vicepresidenta destacara en su discurso la «tremenda actualidad» del libro. Extracto disponible en «Interna: Cristina Kirchner reveló que le regaló un libro a Alberto Fernández y chicaneó a su vocera», video en *TN*, 2/4/2022, <[www.youtube.com/watch?v=iBBxj4g95m8](https://www.youtube.com/watch?v=iBBxj4g95m8)>.

# El MAS boliviano ya no baila solo al ritmo de Evo

Fernando Molina

El triunfo de Luis Arce Catacora en 2020, tras el derrocamiento de Evo Morales luego de tres periodos de gobierno, abrió paso a una situación inédita para el Movimiento al Socialismo (MAS): por primera vez, el líder del gobierno no coincide con el líder partidario. Si bien mantiene un fuerte dominio del partido, Evo Morales ya no controla el Estado, y sus tensiones con Arce y el vicepresidente David Choquehuanca son cada vez más abiertas.

El 29 de marzo de 2022, el Movimiento al Socialismo (MAS) celebró en la ciudad minera de Oruro el 27<sup>º</sup> aniversario de su fundación. Estuvieron allí sus tres principales dirigentes: Evo Morales, considerado el «líder indiscutible» del movimiento; Luis Arce, presidente del Estado y ex-ministro de Economía de Morales, autor del modelo económico que ha estado vigente en el país desde 2006; y David Choquehuanca, actual vicepresidente y ex-canciller de Morales, de quien se halla distanciado desde 2017. El acto discurrió sin percance alguno. Si no hubiera sido por la insistencia de los discursos en la necesidad de la «unidad», nadie se habría dado cuenta de los serios problemas en que se encuentra el partido oficialista de Bolivia.

---

**Fernando Molina:** es un periodista y escritor boliviano. Es autor de *Racismo y poder en Bolivia* (Oxfam / Friedrich-Ebert-Stiftung, La Paz, 2021) e *Historia contemporánea de Bolivia. De la reinstalación de la democracia al nacimiento del Estado Plurinacional* (Libros Nómadas, La Paz, 2021), entre otras obras.

**Palabras claves:** Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, Evo Morales, Bolivia.

En su discurso, Morales señaló con razón que su movimiento era «único». Y no solo por constituirse como la organización directa de una gran variedad de sindicatos de campesinos y trabajadores, que fue lo que él mencionó. También porque representó, por casi 27 años, la unidad de la izquierda boliviana, un sueño que para esta corriente había resultado imposible de concretar durante todo el siglo xx. Pero la condición del MAS de frente único de la izquierda, que se dio gracias a un conjunto muy particular e irrepetible de circunstancias históricas, hoy está en entredicho. Cada uno de los personajes que se sentaron juntos en el escenario del acto de aniversario representaba a un ala partidaria distinta.

Desde que volvió al país en noviembre de 2020, luego de su exilio mexicano y argentino, Morales controla férreamente el aparato del partido. Arce fue elegido presidente poco antes, con un sorpresivo 55% de los votos, y formó un gobierno que si bien ha implicado una distribución del poder entre los diferentes órganos y bloques del MAS, posee un núcleo «arcista» y no ha incorporado más que tangencialmente a los principales colaboradores de Morales en el pasado, el «entorno» que manejó las riendas del poder entre 2006 y 2019.

**En el interior del MAS,  
las demandas de  
renovación se  
solapan con disputas  
faccionales que  
vienen tensionando el  
liderazgo de Morales**

En el interior del MAS, las demandas de renovación se solapan con disputas faccionales que vienen tensionando el liderazgo de Morales. El principal valedor de esta consigna de renovación es, sin embargo, un miembro de la vieja guardia, por mucho tiempo considerado una de las personas más próximas y sucesor de Morales: David Choquehuanca. Este, en su discurso después de su juramento como vicepresidente, el 8 de noviembre de 2020, dijo que el poder debía «fluir». Además, constantemente alienta a los jóvenes a tomar el testigo. Choquehuanca es el referente de algunos dirigentes intermedios que, por una razón u otra, se han distanciado o se sienten desplazados por la dirección nacional del MAS, dominada por Morales. La consigna de renovación, por tanto, lo beneficia en la misma medida en que perjudica al ex-presidente.

Choquehuanca se enfrentó a Morales tras el referendo de 2016 que debía habilitar al entonces presidente para una tercera reelección. El MAS perdió y Choquehuanca se comenzó a mover como su posible sustituto, lo que ocasionó la respuesta de Morales, quien lo despidió del Ministerio de Relaciones Exteriores en 2017; posteriormente, fue «exiliado» en un puesto diplomático secundario y todos sus colaboradores directos pasaron a la «congeladora». Finalmente, Morales lograría una controvertida habilitación por la vía de una sentencia del Tribunal Constitucional para disputar un cuarto mandato presidencial.

La reacción contra Choquehuanca se debió a que el entorno evista no podía permitir que se perfilara un nuevo presidente y, por tanto, un nuevo entorno. Tal es la lógica de los agrupamientos políticos en Bolivia: fundamentalmente caudillista. La caída de un líder implica la salida del poder de todo un grupo; por tanto, este se halla fuertemente motivado a impedirla. O, a la inversa, el ascenso de un nuevo dirigente implica el ascenso de un nuevo grupo, como ha ocurrido tras el juramento de Arce como presidente. Esto, pese a que Arce había sido parte del entorno de Morales y había llegado a la candidatura presidencial por una decisión personal de este. El candidato elegido en Bolivia por el MAS para que lo representara en las elecciones de 2020 era Choquehuanca. Morales y el núcleo de exiliados en Argentina antepusieron a Arce, tanto porque les parecía un mejor candidato para un momento de crisis económica como el que vivía el país, cuanto porque no deseaban que un rival –que además es indígena– ocupara el puesto principal. Así, Choquehuanca perdió la oportunidad de ser presidente del país. Obviamente, esto ha profundizado su distanciamiento de Morales. Este político actúa con extrema contención, lo que le ha permitido sobrevivir las malas épocas, pero tiene muchas razones para tratar de socavar la influencia de su antiguo amigo.

En el acto de celebración del aniversario, Morales y Choquehuanca se saludaron fríamente; la prensa siguió con atención su encuentro porque es muy raro que ambos se presenten juntos en público. En cambio, Arce y el ex-presidente se dieron un abrazo e intercambiaron sonrisas. Las fricciones de sus grupos todavía no se han hecho tan personales (o al menos tan públicamente personales) aunque, según se sabe, Morales considera en privado que el gobierno es ineficiente. Sin embargo, pocos creen que esto vaya a continuar sin cambios.

### Causas de las fisuras

«El enemigo principal del MAS es la derecha que busca confrontarnos con traiciones, ambiciones y mentiras. Nuestra obligación es preservar la unidad», tuiteó el 25 de marzo Morales. Días antes, un comunicado del gobierno del presidente Arce exhortaba al oficialismo boliviano a resistir «las tácticas no convencionales [que] utilizando todo el poderío de la guerra multidimensional [esperan] lograr la implosión de las fuerzas internas de nuestro Proceso de Cambio»<sup>1</sup>.

---

1. Ministerio de la Presidencia: «La unidad del pueblo es la garantía de la democracia intercultural», 3/2022.

De estas declaraciones se puede inferir tanto el miedo a la escisión en el MAS —y, por tanto, la admisión de la posibilidad de su división— como la tendencia a responsabilizar de esta a un tercero: la derecha boliviana y sus «tácticas no convencionales» de guerra. Para un observador neutral, las causas de los problemas del MAS son más bien internas, aunque esto no signifique que la oposición no siga con particular interés la pelea entre facciones, ya que su futuro depende de cómo esta se desarrolle. También es cierto que los principales medios de comunicación, que tienen una línea editorial antimasista, exponen en grandes titulares cualquier roce o desencuentro entre unos y otros dirigentes izquierdistas. Después del festejo del aniversario ya mencionado, *Página Siete*, el diario más abiertamente enfrentado al MAS, tituló: «Pese a fracturas, el MAS se esfuerza por mostrar unidad». En los últimos meses, la política boliviana ha consistido casi únicamente en las vicisitudes de la disputa oficialista.

Pero ¿cuáles son las causas de esta disputa? Primero, el MAS carece de una fuerte institucionalidad, como no la tiene ninguno de los partidos políticos bolivianos. Aunque en Bolivia varios partidos han sido ideológicos y han tenido cierta vida interna, su principal tendencia ha sido siempre la *personalista*, lo que tiene que ver con la forma predominante de las relaciones sociales en el país, que no son del todo modernas y están mediatizadas por los resabios de la colonización. En Bolivia el Estado es débil, siempre ha estado cooptado y manipulado por distintos sectores sociales, nunca ha podido imponerse del todo a la sociedad ni abarcar todo el territorio nacional, así que nadie puede estar seguro de que las normas y los derechos se aplicarán de forma objetiva y permanente, una condición imprescindible para el funcionamiento pleno de las instituciones.

A fines del siglo XIX, el fundador del Partido Liberal, Eliodoro Camacho, elogiaba a su criatura como el «primer partido impersonal» del país. Solo que tampoco lo fue. Apenas llegó al poder se dividió en facciones, según los diferentes presidentes que, en su representación, se iban sucediendo en el poder. Cuando no existen respaldos seguros para la institucionalidad, y cuando las instituciones son débiles, solo los individuos esclarecidos pueden proveer el orden y la certidumbre que se necesitan. El dirigente se convierte así en «caudillo». El caudillismo es un concepto a menudo mal definido pero que tiene una larga tradición literaria en América Latina. El más célebre sociólogo marxista boliviano, René Zavaleta, llegó a decir que en Bolivia «la forma de organización de las masas es el caudillo»<sup>2</sup>.

---

2. R. Zavaleta: «La creación de la conciencia nacional» en *Obras completas 1. Ensayos 1957-1974*, Plural, La Paz, 2011.

Aunque federa una amplia red de sindicatos y organizaciones sociales de todo el país, el MAS se formó en torno de la figura de Evo Morales, lo que exigió el alejamiento de otros aspirantes a la máxima dirección, como el dirigente campesino Alejo Véliz u otro de los fundadores del «Instrumento Político» —como también es denominado—, Román Loayza. Recientemente, en el contexto de las amenazas de división, Morales volvió a referirse a estos dirigentes que optaron por salirse y formar parte de otras fuerzas políticas: «Nuestro primer candidato a presidente era Alejo Véliz, pero en 2002 se ha ido con [la candidatura presidencial de] Manfred [Reyes Villa, volviéndose su] diputado; primera traición, pero no ha dividido», afirmó. Y luego señaló: «Segundo traidor, yo diría, Román Loayza; era candidato a presidente con otro partido, tampoco ha dividido»<sup>3</sup>.

La subordinación del partido a su jefe funcionó muy bien (ningún disidente pudo dividir al MAS, como recordó Morales) en tanto este tenía una enorme popularidad electoral y su presencia en la papeleta garantizaba la victoria a sus seguidores. También fue exitosa mientras el gobierno de Morales contaba con una gran cantidad de recursos económicos, lo que le permitía ampliar constantemente los canales de acceso al Estado y mantener el vínculo clientelar con grandes masas de seguidores.

Como señalaron hace varios años Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto, el «pegamento» del MAS ha sido «la perspectiva de acceso al Estado»<sup>4</sup>, perspectiva descubierta gracias a la invención de un «instrumento político» que permitía participar electoralmente a los pobres y los indígenas. Hace poco, Morales ha dicho que ni él mismo creía en el futuro del MAS hasta una fecha tan próxima como 2002, año en el que se ubicó de manera inesperada en segundo lugar en las elecciones. ¿La razón? Pensaba que él nunca podría ser presidente, porque se lo acusaba de narcotraficante<sup>5</sup>. Por tanto, el movimiento mismo no llegaría a cuajar. Esta es la dimensión pragmática de la política en Bolivia. Cuando la mayoría indígena y popular descubrió, en un lapso que fue de 2002 a 2009, que el «Instrumento» sí funcionaba, se volcó completamente hacia él. Así quedó establecido, en los hechos, un pacto que no por utilitario dejaba de tener gran trascendencia: la mayoría empobrecida y discriminada votaba por el MAS-Evo («por ellos mismos») y,

**El «pegamento»  
del MAS ha sido  
«la perspectiva de  
acceso al Estado»**

3. Agencia de Noticias Fides: «Evo anuncia registro de nuevos militantes en el MAS por la existencia de ‘muchos traidores’», 21/3/2022.

4. P. Stefanoni y H. Do Alto: *La revolución de Evo Morales. De la coca al Palacio*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.

5. Radio Kausachun Coca: «27 aniversario del MAS-IPSP», 29/3/2022.

## Esto convirtió a Morales en el mayor caudillo de la historia de un país lleno de ellos

a cambio, el MAS-Evo franqueaba a esta mayoría el acceso al poder «tanto material como simbólico»<sup>6</sup>. Esto convirtió a Morales en el mayor caudillo de la historia de un país lleno de ellos. Además, como su modelo económico estatista marchó bien, especialmente entre 2006-2015, hubo prosperidad y movilidad social. De este modo, Morales logró gobernar más tiempo que ningún otro boliviano, incluido Víctor Paz Estenssoro, líder de la Revolución Nacional y cuatro veces presidente (si incluimos su fugaz reelección de 1964, cuando fue derrocado por un golpe de Estado) y Andrés de Santa Cruz, el fundador de Bolivia. Y consiguió así lo ya señalado, esto es, que se alinearan tras él casi todos los sindicatos campesinos (que al inicio lo veían solamente como un líder sectorial, cocalero); los sindicatos obreros y de clase media (que eran obreristas y resistían la posibilidad de apoyar a un dirigente rural); la mayoría de los aymaras (que inicialmente lo veían como alguien ajeno, porque, aunque nació en una comunidad aymara, había vivido en una zona quechua de Cochabamba); la mayoría de los quechuas (que hubieran preferido a uno de los suyos); muchos indígenas guaraníes (que lo percibían como «colla» o del occidente andino); y la mayoría de los cenáculos e intelectuales izquierdistas, desde los neomarxistas más sofisticados (como su vicepresidente Álvaro García Linera) hasta los más dogmáticos grupos comunistas, guevaristas y maoístas que quedaban en el país (pues el éxito de Morales también se explica en parte por el hundimiento previo, en la década de 1980, de los grupos marxistas que habían monopolizado el espacio de la izquierda durante el siglo xx).

Transformándose en un caudillo con un apoyo masivo, Morales demostró grandes dotes como estratega político, lo que ulteriormente impidió que el MAS perdiera demasiada sangre a causa de las múltiples batallas que tenía que librar desde el poder y también de los múltiples errores que cometía, entre los cuales los de índole personalista, de «culto a la personalidad», eran los más importantes.

Stefanoni recuerda la condición *sui generis* de este partido. Explica que se trata de «una suerte de confederación de sindicatos, urbanos y rurales, comunidades indígenas y diferentes tipos de organizaciones populares, con escasa organicidad pero mucha capacidad para la representación corporativa de una amplia variedad de intereses sociales de los de 'abajo'». De ahí que el MAS esté siempre en «un permanente e inestable equilibrio: por ejemplo, en el norte de Potosí, debe articular *ayllus* originarios, sindicatos de mineros

---

6. P. Stefanoni: «El MAS puede ganar sin Evo» en *El País*, 19/10/2020.

y organizaciones campesinas; todos deben tener sus representantes en las listas de candidatos, sea a diputados, senadores, alcaldes, etc.»<sup>7</sup>. Y lo mismo ocurre en otras regiones del país.

Morales, en su «época de gloria», supo mantener este equilibrio con virtuosismo. Un estudio de Fernando Mayorga sobre su estilo de gobierno evidencia esto<sup>8</sup>. En él se señala que el ex-presidente tenía que negociar con los dirigentes del Pacto de Unidad, el conglomerado de sindicatos afiliados al MAS, las principales decisiones gubernamentales, que podían tratar de políticas públicas, legislación, proyectos de inversión o, muchas de ellas, de cargos y dignidades, lo que Morales hacía para asegurar cotidianamente un mínimo de coordinación entre los grupos internos y el alineamiento del partido con el gobierno.

Con este esfuerzo, Morales renovaba una y otra vez –recreaba sin cesar– el «pacto de unidad» (sin mayúsculas) de los distintos sectores que componían el «evismo», pacto que era estratégico a la vez que clientelar; de él emergía un bloque de poder, en el sentido gramsciano de este término, es decir, un actor histórico con proyección hegemónica, y al mismo tiempo una alianza social «populista», es decir, capaz de agregar en su seno diversas demandas, así como una variedad amplia de posiciones ideológicas.

Las condiciones que permitían el gobierno «decisionista» de Morales acabaron en noviembre de 2019, cuando el jefe del MAS fue derrocado por un movimiento de la clase media y los descendientes blancos<sup>9</sup> que contó con el apoyo decisivo de policías y militares, y que los obligó a él y a su cúpula a pasar a la clandestinidad y luego a salir del país y buscar protección extranjera. Perdió entonces parcialmente el control de un partido que previamente se había hecho inmenso: casi un millón de afiliados, la mayoría de ellos jóvenes y deseosos de recibir los beneficios del poder. La corrupción no siempre está incluida, pero tampoco es extraña en estos cálculos. Una vez alejado el caudillo, se produjo lo que habían temido –real o retóricamente– los defensores de la constante reelección de Morales: la fragmentación. Así lo planteaba, por ejemplo, García Linera: «Sigo reafirmando que Evo era la única garantía personal de la unidad de una sociedad plebeya, subalterna y popular muy fragmentada; si

---

7. *Ibíd.*

8. F. Mayorga: *Mandato y contingencia. Estilo de gobierno de Evo Morales*, CESU / FES, La Paz, 2019.

9. Este concepto permite englobar las diferentes transformaciones y mestizajes que sufrieron los bolivianos que se derivan, así sea remotamente, de los criollos coloniales. Por otro lado, están los descendientes indígenas, que también han mutado al mismo tiempo que mantenido su condición subalterna, en tanto que los primeros continúan poseyendo un *ethos* señorial. Ver F. Molina: *Racismo y poder en Bolivia*, Oxfam / FES, La Paz, 2021.

no hemos ido en 2020 [con Evo Morales como candidato] la unidad ha sido por el golpe»<sup>10</sup>.

Entonces emergieron varios caudillos regionales que intensificaron la volatilidad organizativa que era connatural al MAS, pues se resistían a alinearse automáticamente tras Evo. Comenzaron las recriminaciones contra este y su entorno, a los que, en un gesto muy interesante para el análisis político, no se les echó en cara su caudillismo, el haber tratado de perpetuarse en el poder, sino otras cosas: haberse «escapado» del país, haberse dado por vencidos frente a la clase media, haber dejado solos a los dirigentes intermedios, etc. En una situación de debilidad extrema, Morales tuvo que aceptar que alguien contrario a él como Choquehuanca fuera candidato, una posibilidad impensable en otras circunstancias. Solo atinó a impedir que fuera el primero de la fórmula y colocó allí a alguien relativamente cercano y sin base social propia: su ministro por más de una década y un hombre que no había demostrado particulares ambiciones (pero tampoco dotes) políticas, Luis Arce Catacora.

Si en 2019-2020 no hubiera tenido tan altas credenciales internacionales y no hubiera contado con el histórico respaldo incondicional de los sindicatos cocaleros, Morales podría haber sido completamente desplazado, como pasó en la historia con otros «grandes derrocados» como Andrés de Santa Cruz o José Ballivián, poderosos caudillos y presidentes del siglo XIX. En cambio, logró mantener parte de su influencia sobre el MAS, y este, perseguido y vejado por sus enemigos, comprendió que si quería sobrevivir debía aceptarlo, así como aceptar a todos los grupos que habían surgido en su seno, lo que a la postre le permitiría volver al poder. García Linera lo expresó así: «En verdad, lo que ha unido [al MAS después de Morales] ha sido el golpe, este brutal desplazamiento de los sectores populares del poder es lo que los ha vuelto a unir»<sup>11</sup>.

Tras haber retornado al país en olor de multitudes, en noviembre de 2020, Morales se puso a la tarea de recuperar su centralidad. Con grandes resistencias, nunca antes vistas, definió las listas de los candidatos a alcaldías y gobernaciones para las elecciones de marzo de 2021. Ajustó cuentas con los caudillos regionales más díscolos: ahuyentó a la popular Eva Copa, ex-presidenta del Senado por el MAS durante el gobierno de Jeanine Áñez, y la empujó a postular a la alcaldía de El Alto por otro partido (aun así, Copa arrasó en las elecciones), y hace poco expulsó del MAS a Rolando Cuellar, dirigente del Bloque Oriente en la normalmente adversa región de Santa Cruz,

---

10. Gabriel Romano: «García Linera advierte sobre una ‘fragmentación popular’ en el MAS para 2025», *Agencia Efe*, 6/3/2022.

11. *Ibid.*



porque no cesaba de antagonizar con él. Sin embargo, Morales no ha podido recuperar todas las posiciones y prerrogativas que tenía en el pasado por el sencillo hecho de la victoria del MAS en las elecciones de octubre de 2020, que si bien él necesitaba desesperadamente para que dejaran de perseguirlo y poder volver al país, entregó al mismo tiempo el poder más significativo de un país presidencialista como Bolivia, el Poder Ejecutivo, a dos personas que no eran él —y una de ellas, declarada adversaria suya—.

Por otra parte, el atractivo electoral y político de Morales ya no es el mismo; ha quedado «desportillado» por los años de ejercicio casi absoluto del poder, las acusaciones de todo tipo que la oposición ha hecho en su contra y, sobre todo, por su obstinación en ocupar el sitio más alto de la política nacional sin límite de tiempo. Aparece en las encuestas con una menor popularidad e intención de voto que Arce y solo algo mejor que los dirigentes opositores.

Este hecho, la imposibilidad de que el poder vuelva completamente a sus manos, es la causa principal de las fisuras en el MAS. El ex-presidente ya ha dejado ver, sin embargo, que pretende volver al poder en 2025. Choquehuanca sabe que esta posibilidad sellaría su ocaso político, así que trabaja en contra de ella y trata de acumular fuerzas propias. Arce, por su parte, procura guardar un equilibrio entre los contendientes, ya que los necesita a ambos para que su gestión sea exitosa: una rebelión de Choquehuanca o un ataque frontal de Morales contra su gobierno, que todavía tiene más de tres años por delante, serían muy complicados para el presidente. La oposición tendría entonces una oportunidad de oro para debilitarlo o algo peor: desplazarlo del poder, lo que no ha logrado hacer, por la vía electoral, desde 2005. A la inversa, malquistarse con Arce mientras este sea presidente significaría para los otros dos dirigentes dejar de participar, así sea parcialmente, en el gobierno, algo que prefieren diferir hasta el momento decisivo, que todavía no ha llegado.

La investidura presidencial ha convertido a Arce, si se quiere *automáticamente*, en un caudillo. Las organizaciones y bloques del MAS lo requieren para obtener empleos en el gobierno, que son el principal objeto de deseo de los políticos bolivianos (no solo del MAS: en estos meses se ha descubierto, de hecho, una enorme red de tráfico de puestos públicos en la alcaldía más grande del país, la de Santa Cruz de la Sierra, que nunca ha sido conducida por ese partido). Arce se acostumbró a «negar a Evo» en la campaña electoral, cuando los expertos del marketing político le pidieron no hablar de él. Tampoco lo mencionó en el discurso de aceptación

**El ex-presidente  
ya ha dejado ver,  
sin embargo,  
que pretende volver  
al poder  
en 2025**

de su cargo ante el Parlamento. Luego del retorno de Morales al país, comenzó a encontrarse con él, pero aclarando que los asuntos gubernamentales serían de su exclusiva responsabilidad. No incorporó a su equipo a los miembros del antiguo entorno evista, ni siquiera tras bambalinas. No obedeció la solicitud pública de Morales de cambiar algunos ministros. No ha despedido a los funcionarios choquehuanquistas que, contrastando con el talante calculador de su jefe, han atacado públicamente a Morales. Se sabe que el mandatario se molestó cuando el ex-presidente y jefe del MAS organizó la Marcha por la Patria, una caminata multitudinaria y épica para defender a su gobierno de los ataques de la oposición, pero que claramente significaba un despliegue de la fuerza social de Morales. Hasta ahora ha respaldado al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pese a que este despertó la furia de Morales y de los cocaleros por supuestamente seguir la «agenda de la DEA» (Drug Enforcement Administration, agencia antidrogas de Estados Unidos), cuando hizo detener en enero de este año a un ex-jefe antidroga del último gobierno de Morales, influido por una investigación previa de esta agencia estadounidense que lo había vinculado a una red de protección al narcotráfico. Castillo también criticó a los dirigentes que supuestamente se benefician de los permisos de producción de coca.

Todos estos hechos públicos, y lo que se puede saber de lo que se habla en los círculos íntimos del gobierno, indican que Arce desea proyectar su gestión –para apuntalar la cual, repetimos, hoy requiere de Choquehuanca y de Morales– más allá de 2025, aunque en un comienzo dijo que no lo haría. Hasta ahora ha logrado estabilizar el país tras la enorme crisis que causaron la pandemia y la irrupción del gobierno de Añez (que hoy nadie en la política boliviana defiende), pero no mucho más que eso. En público, Morales alaba la gestión de Arce, pero en conversaciones privadas la considera ineficaz; de ahí su demanda de cambio de ministros, que, como acabamos de ver, el presidente desestimó.

A esto se refería García Linera cuando identificaba «una separación entre el liderazgo político y estatal, que recae en Arce y Choquehuanca, y el liderazgo social, que representa Morales, como algo nuevo que podría manifestarse en candidaturas separadas». «Teóricamente –prosigue el ex-vicepresidente–, tienen la posibilidad de plantear su candidatura en 2025 y tienen todo el derecho a hacerlo; lo que pasa es que no sabemos cuál será la posición de ellos [Arce y Choquehuanca] en términos de las elecciones, si serán candidatos dentro del MAS o no lo serán»<sup>12</sup>.

---

12. G. Romano: ob. cit.

## Un futuro incierto

En suma, «las tendencias centrífugas [dentro del MAS] son grandes»<sup>13</sup>. ¿Existirá el «algoritmo» que busca el ex-copiloto de Morales para lograr que las diversas facciones del MAS sigan actuando dentro de un mismo marco organizativo? Quién sabe. Si tuviéramos que apostar basados en la historia política de Bolivia, y en concreto, de la izquierda boliviana, que siempre ha sido cismática<sup>14</sup>, tendríamos que responder que no. Pero el MAS ya ha sorprendido muchas veces rompiendo las formas tradicionales de pensar y obrar en la política nacional. A ninguno de sus militantes se le escapa que su división daría una ventaja enorme a la oposición, que aprovecharía para tratar de vencer y luego destruir al partido izquierdista, como ya ocurriera tras el derrocamiento de Morales a fines de 2019. Y el instinto de supervivencia, sumado al deseo de seguir en el poder, pueden lograr finalmente lo que hoy parece imposible. ☒

---

13. *Ibíd.*

14. Dos partidos de base popular anteriores, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de la Izquierda (MIR), se convirtieron en media docena de agrupaciones el primero, y en tres partidos distintos el segundo, y perdieron su influencia de antaño. La diferencia entre el MAS y estos partidos está en que, por su extracción social y su fortaleza, el primero no ha buscado componendas ideológicas con la elite señorial del país.

# ¿Una segunda «marea rosa» en Brasil?

Cicero Araujo

El ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aspira a volver al poder aupado por un frente democrático que desafíe a la extrema derecha de Jair Bolsonaro. Para eso, selló una alianza con su ex-adversario Geraldo Alckmin y busca trascender las fronteras de la izquierda. Por ahora, el ex-presidente encabeza las encuestas, pero incluso en caso de ganar, no es claro que se puedan recuperar los ejes de los gobiernos petistas del pasado.

La «marea rosa» brasileña tuvo lugar entre 2003 y 2016, con el país gobernado por el Partido de los Trabajadores (PT) durante cuatro mandatos consecutivos. El cuarto de estos mandatos fue interrumpido antes de que alcanzase la mitad del periodo fijado por la Constitución por un proceso de destitución que separó de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff en agosto de 2016. Menos de un año después, en julio de 2017, el ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y seis meses de prisión, por supuesta participación en los casos de corrupción que involucraron a Petrobras, la petrolera estatal. Líder del PT, era también la carta principal del partido para las elecciones presidenciales del año siguiente.

---

**Cicero Araujo:** es profesor titular de Ética y Filosofía Política en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Pablo (USP).

**Palabras claves:** democracia, «marea rosa», Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil.

**Nota:** traducción del portugués de Cristian De Nápoli.

Esta sucesión de acontecimientos representó el punto culminante de una crisis constitucional que afectó no solo al llamado «experimento petista», sino a la propia estabilidad democrática del país. Acto seguido, en octubre de 2018, Jair Bolsonaro, candidato de extrema derecha en ascenso meteórico, se hizo con el triunfo en las elecciones, logrando una diferencia de cerca de diez millones de votos con Fernando Haddad, el candidato improvisado del PT una vez que quedó claro que Lula da Silva, quien se encontraba cumpliendo prisión efectiva, no podría postularse. Tras la asunción, el nuevo presidente ofreció la jefatura del Ministerio de Justicia al juez federal Sergio Moro, responsable del proceso y la condena de Lula. Moro dejó el cargo de juez y asumió como ministro.

Hoy, de cara al final de su mandato, puede decirse que Bolsonaro no frustró las expectativas de sus adversarios pero que, en cambio, sí decepcionó a una porción considerable de quienes lo apoyaron. Según distintas encuestas de opinión pública, su popularidad a lo largo de la gestión nunca llegó a superar el 37% y cayó durante algunos tramos a un piso de 20%. Son números que reflejan la torpeza de las medidas adoptadas por su gobierno, sobre todo en relación con la pandemia de covid-19.

Por lo demás, en noviembre de 2019 —recién cumplido el primer año de su mandato—, el presidente recibía una noticia poco auspiciosa para sus planes de reelección: en un giro espectacular respecto de su anterior posicionamiento, Luiz Edson Fachin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), resolvía dar lugar al pedido de anulación de la sentencia condenatoria de Lula da Silva y autorizar su salida de la cárcel. En abril de 2021, la corte en pleno confirmó la decisión y otorgó al ex-presidente la restitución de sus derechos políticos.

En una situación de normalidad constitucional, un presidente con niveles tan bajos de apoyo popular como Bolsonaro no tendría la menor chance

**Brasil atraviesa  
un periodo  
muy turbulento e  
inestable que  
hace que todo  
sea posible**

de ser reelegido. Brasil, sin embargo, atraviesa un periodo muy turbulento e inestable que hace que todo sea posible. Bolsonaro es un político tosco, pero conserva capital político: incluso con un desempeño plagado de traspies, logró asegurarse respaldo mayoritario en el Congreso, donde no tiene mayoría propia. Y yendo en contra del discurso ultraliberal y las promesas de control severo del gasto público que signaron su campaña —en sintonía con el evangelio predicado por su ministro de Hacienda, Paulo Guedes—, hoy apunta a meter mano a fondo en las arcas públicas, con la esperanza de reconquistar al electorado perdido. Un gesto muy revelador, ya que pone en evidencia que no es un modelo económico lo que agita el pecho del mandatario; en rigor, el blanco principal de sus ambiciones son justamente

de ser reelegido. Brasil, sin embargo, atraviesa un periodo muy turbulento e inestable que hace que todo sea posible. Bolsonaro es un político tosco, pero conserva capital político: incluso con un desempeño plagado de traspies, logró asegurarse respaldo mayoritario en el Congreso, donde no tiene mayoría propia. Y yendo en contra del discurso ultraliberal y las promesas de control severo del gasto público que signaron su campaña —en sintonía con el evangelio predicado por su ministro de Hacienda, Paulo Guedes—, hoy apunta a meter mano a fondo en las arcas públicas, con la esperanza de reconquistar al electorado perdido. Un gesto muy revelador, ya que pone en evidencia que no es un modelo económico lo que agita el pecho del mandatario; en rigor, el blanco principal de sus ambiciones son justamente

las instituciones del régimen democrático aún vigente, un régimen tambaleante al que Bolsonaro ansía asestarle el golpe de *knock-out*.

De todos modos, en el momento en que se escribe este artículo, Lula da Silva aparece en todas las encuestas como el precandidato favorito de cara a las elecciones de octubre de este año. Si el ex-presidente se impone en la votación, descontando el dato obvio de que su regreso le pondrá un freno a la avanzada del autoritarismo en Brasil, el resto sin embargo es una gran incertidumbre acerca de lo que cabe esperar de un nuevo gobierno suyo. ¿Retomará Lula los hilos de la «marea rosa» perdidos en los acontecimientos dramáticos de 2016, o la nueva coyuntura lo forzará a tomar una ruta alternativa? Eso es lo que este artículo se propone discutir. Pero antes de adentrarnos en tal cuestión conviene abordar, en una síntesis retrospectiva, las raíces de la crisis política que atraviesa el país.

### **Antecedentes de la crisis constitucional brasileña**

La situación actual de Brasil reproduce, en cierto modo, los desarreglos que vienen padeciendo las democracias en diversas partes del mundo. Que tales desórdenes afecten también a países y regiones enteras en donde la práctica de la democracia ostenta fuertes raíces históricas es algo que otorga a la crisis actual un perfil bastante inédito y peculiar. Por primera vez en mucho tiempo, se da una sincronía casi perfecta de graves perturbaciones políticas tanto en países caracterizados típicamente por la precariedad o la intermitencia de sus regímenes democráticos como en otros donde la democracia podría considerarse estable y sólida, como Estados Unidos y varias naciones de Europa occidental.

El síntoma más evidente de esta situación es el crecimiento de fuerzas y corrientes autoritarias de extrema derecha, que se expresa en la conquista de un número significativo de votos y, con ello, de una posición destacada en la conformación de los parlamentos, si no en el control del Poder Ejecutivo. Por lo demás, tales corrientes parecen propiciar un efecto de contagio, en la medida en que el éxito de una fuerza de extrema derecha en un país determinado genera fenómenos semejantes en otros países. Así, el triunfo del Brexit en Gran Bretaña en 2016 y, meses después, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses en buena medida impulsaron el ascenso de Bolsonaro en Brasil, el cual contagió a su vez el escenario político de los países vecinos.

De cualquier modo, y aun cuando existan rasgos comunes, cada crisis exhibe su propia historia, con sus peculiaridades. Hagamos entonces un repaso del cuadro que nos ocupa.

Cuando Lula da Silva asumió por primera vez el cargo de presidente de la República, el 1º de enero de 2003, Brasil vivía un momento de gran aceptación popular del régimen constitucional establecido tras una larga dictadura militar (1964-1984). Pese a que el suyo era un triunfo inédito –era la primera vez que el líder de un partido de izquierda encabezaba un gobierno nacional–, Lula da Silva no asumía su cargo en el vacío. Lo antecedía una etapa en la que un proyecto socialdemócrata clásico, inscrito en la Constitución Federal de 1988, había tenido que ajustarse a las coyunturas nacional e internacional surgidas, por un lado, de una larga crisis inflacionaria y un traumático proceso de destitución del presidente Fernando Collor de Melo, en 1992, y, por el otro lado, de la crisis del Estado de Bienestar en Occidente y el colapso de la Unión Soviética.

Le tocó a Fernando Henrique Cardoso, primero como ministro de Hacienda (1993-1994) y luego como presidente de la República (a partir de 1995), dar los pasos iniciales en una senda que le aseguraría al país un periodo de estabilidad democrática sin precedentes, que duraría cerca de 20 años. Lo propio de esa senda era la conjunción y el roce, o más bien las fricciones entre las pautas de un modelo neoliberal –entonces en pleno ascenso internacional– y las promesas, consensuadas en la Asamblea Constituyente de 1987-1988, de resarcir la «deuda social» heredada de la dictadura militar. De esa amalgama surgió una suerte de guion político y económico a largo plazo, de vocación suprapartidaria, que en otro lugar denominamos «modelo social-liberal»<sup>1</sup>.

En la arena partidaria-electoral que se conformó tras la caída de Collor de Melo, el PT y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha) se convirtieron en los dos puntales del régimen político en construcción. Encarnaron los polos de atracción para las preferencias electorales en una suerte de modelo con dos ramificaciones: una más «liberal», inclinada a la derecha, y la otra más «social», inclinada a la izquierda. La primera fue transitada durante los dos mandatos de Cardoso y el PSDB; la segunda llegó con el triunfo de Lula y el PT.

Un segundo aspecto del modelo tiene que ver con una regla no escrita para el ejercicio del Poder Ejecutivo, una que muchos politólogos llaman «presidencialismo de coalición»<sup>2</sup>. En el fondo, se trata de una racionalización de lo aprendido tras el proceso que acabó con la destitución de Collor

---

1. Este término y la argumentación correspondiente pueden encontrarse en C. Araujo y Leonardo Belinelli: «A crise constitucional brasileira: ensaio de interpretação histórica (1988-2016)» en André Singer, C. Araujo y Fernando Rugitsky (eds.): *O Brasil no inferno global: capitalismo e democracia fora dos trilhos*, EFLCH, San Pablo, 2022 (en prensa).

2. Término acuñado por el politólogo Sérgio Henrique Hudson de Abranches en «Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro» en *Dados* vol. 31 Nº 1, 1988.

de Melo. Y esta es la lección que de allí se desprendía: el presidente de la República debe construir una amplia mayoría en el Congreso –un apoyo más amplio que el de la alianza que hizo posible su elección–, en vistas a asegurarse al mismo tiempo el protagonismo de sus proyectos y la estabilidad en su propio cargo. Si esa regla se violase, quedaría abierto el camino para un destino similar al de Collor de Melo en 1992.

Poner en práctica esa regla implicaba, sin embargo, una reducción brutal de la transparencia en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, puesto que el objetivo de ampliar el apoyo parlamentario traía aparejada una serie de acuerdos y pactos a menudo inconfesables entre el presidente y miembros de distintos partidos que no integraban la alianza electoral vencedora y ahora debían ser cooptados de algún modo. No bien la regla se implementó durante la presidencia de Cardoso, fue convirtiéndose informalmente en una instancia paralela de acceso al poder estatal, tejida a lo largo y ancho de la malla del poder oficial, lo que incluía una relación promiscua entre la representación política (en todos los niveles) y el poder económico, sobre todo el más vinculado y dependiente de recursos públicos. A esa instancia paralela la denominamos «Cámara Invisible»<sup>3</sup>. Su naturalización en el juego político y electoral contribuyó a la estabilidad de la interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo en los años subsiguientes. Pero a largo plazo nada de esto era seguro. En vistas de la corrosión que se iba produciendo silenciosamente en las disputas por el poder, se trataba de una estabilidad provisoria, lograda a costa de una peligrosa inestabilidad futura.

Un tercer aspecto del modelo remite al nuevo papel desempeñado por el Poder Judicial. Comprendido en todo su espectro, este pasaba a abarcar no solo a jueces y tribunales, sino también las instancias independientes de control del ejercicio de los otros dos poderes constitucionales –atribución que la Carta de 1988 delega claramente en el Ministerio Público (MP) y, en cierta medida, en la Policía Federal (PF)–. Tal cuadro garantizaba al MP el poder de «provocar» a los tribunales –incluida la Corte Suprema– en nombre de los derechos difusos de la ciudadanía, a fin, por ejemplo, de investigar casos de corrupción en los órganos de gobierno y llevar a juicio a sus responsables. A medida que se iba expandiendo el proceso contemporáneo de judicialización de los conflictos sociales y políticos, ese nuevo papel del Poder Judicial se volvió un arma importante para las

**El objetivo de ampliar el apoyo parlamentario traía aparejada una serie de acuerdos y pactos a menudo inconfesables**

---

3. Ver C. Araujo y L. Belinelli: ob. cit.

fuerzas opositoras, cualquiera fuera el lado del espectro político del que estas proviniesen<sup>4</sup>.

Como arma de combate político, hicieron uso abundante de ella todos los partidos insatisfechos con su posición eventualmente minoritaria en el Congreso, contrarrestando la maquinaria de cooptación que la práctica del presidencialismo de coalición había propiciado. En cierto modo, por ende, estos dos últimos aspectos del modelo social-liberal que mencioné se oponían entre sí, lo que parecía adecuarse a la clásica noción de *checks and balances* (pesos y contrapesos) de los poderes constitucionales, aunque también abría brechas para futuras crisis de implementación del modelo.

La gestión de Cardoso se había destacado por el éxito en el combate a la hiperinflación, y eso le otorgó una fuerte legitimidad a la orientación neoliberal de su política económica: privatizaciones, monetarismo, apertura comercial, liberación del mercado de capitales, etc. Y también posibilitó que se echase una palada de cal en favor de las políticas de desarrollismo nacional que el país había implementado desde la era de Getúlio Vargas, aunque con notable caída a partir de la década de 1980. El éxito en el control de la inflación y la idea de que esto debería estar al tope de las prioridades en cualquier gestión de la economía echaron raíces en la opinión pública nacional. Conscientes de eso, Lula da Silva y sus consejeros buscaron ya desde la campaña electoral el modo de ajustar el programa del PT a este imperativo, y así fue como la «Carta al pueblo brasileño» (junio de 2002) esclareció que la lucha contra la inflación sería una prioridad<sup>5</sup>.

**Lula da Silva y el PT  
tuvieron que buscar  
alternativas para  
dar cumplimiento a  
las promesas de  
reformismo social**

Evitando el choque frontal con la orientación neoliberal que los precedió, Lula da Silva y el PT tuvieron que buscar alternativas para dar cumplimiento a las promesas de reformismo social, marca registrada del partido y punto fundamental de su plataforma de campaña. Así fue como se establecieron las llamadas «políticas sociales focalizadas» que luego serían implementadas por su gobierno —y que se fueron desplegando a lo largo de sus dos mandatos—, de las cuales el Programa Bolsa Família ocupó el lugar central. El Bolsa Família fue un amplio programa de transferencia de ingresos para los más pobres. Aun cuando no abarcase servicios públicos universales y de carácter esencialmente no mercantil, típicos del *welfare state* europeo, el programa

4. El ministro Luis Roberto Barroso, del STF, abordó la cuestión de la judicialización de la política como expresión de un fenómeno más amplio de judicialización de la vida social. Ver L.R. Barroso: «A judicialização da vida» en Edmar Bacha et al. (eds.): *130 anos: em busca da República*, Intrínseca, Río de Janeiro, 2019.

5. Disponible en <[www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml](http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml)>.

tuvo un impacto profundo en los sectores trabajadores más precarios, una parte bastante numerosa, si no mayoritaria, de la población brasileña. En definitiva, posibilitó para ese sector una inserción real, aunque modesta, en el mercado de consumo, gracias a recursos en dinero transferidos directamente por los organismos estatales<sup>6</sup>.

En favor de estas mismas camadas trabajadoras se establecieron, asimismo, otras medidas que hicieron posible el acceso a crédito con bajos intereses, la adquisición de vivienda propia (como con el programa Minha Casa, Minha Vida, lanzado durante el segundo mandato) y el financiamiento de la enseñanza superior en instituciones privadas. Finalmente, la política de cupos raciales y sociales (para personas de bajos ingresos) en el ingreso a universidades públicas, la posterior ampliación del número de plazas, la contratación de nuevos docentes e inversión en infraestructura; y, por sobre todo, la elevación anual del salario mínimo por encima de la inflación.

Es cierto que el ciclo internacional del *boom* de los *commodities*, en pleno auge justamente durante los dos mandatos de Lula da Silva, ayudó bastante al desempeño gubernamental. Su enorme impacto en la balanza comercial y financiera prácticamente blindó al país frente a los *shocks* externos, en virtud de una acumulación de reservas sin precedentes y de una situación aliviada para la deuda pública<sup>7</sup>. En paralelo, es importante subrayar que el tipo de reformismo social que se implementó —fuertemente orientado, como decíamos, a la inserción en el mercado consumidor de enormes contingentes de la población hasta entonces excluidos— acabó contribuyendo a la reactivación del crecimiento económico e, indirectamente, del mercado de trabajo.

En el campo político, al gobierno no le tomó mucho tiempo lograr una mayoría relativamente estable en el Congreso. Individualmente, la bancada del PT en Diputados era la más grande, pero aun incluyendo a los parlamentarios de los partidos de la alianza electoral estaba lejos de ser mayoritaria, y en el Senado la situación era más complicada. Sin embargo, con la práctica del presidencialismo de coalición ya allanada, el uso de la maquinaria estatal permitió atraer un número suficiente de diputados y senadores de diferentes partidos para la «base aliada». Era, como no podría ser de otro modo, una alianza muy heterogénea desde el punto de vista ideológico y programático, y por ende algo viable solo sobre la base de las prebendas que el control de la máquina administrativa podía asegurar.

---

6. Para una descripción detallada y un análisis de la implementación del Programa Bolsa Família, v. Walquiria Leao Rego y Alessandro Pinzani: *Vozes do Bolsa Família: autonomia, dinheiro e cidadania*, Unesp, San Pablo, 2014.

7. Sobre el impacto del *boom* de los *commodities* en la economía brasileña, v. Laura Carvalho: *Valsa brasileira: do boom ao caos econômico*, Todavía, San Pablo, 2018.

Esta política, que obviamente tiende a reducir bastante los niveles de moralidad pública, se cobró muy pronto sus primeras víctimas. A mediados de 2005, el país tomó conocimiento del escándalo del *mensalão*: un supuesto esquema de pagos ilegales a diputados a cambio de apoyo al gobierno. Pese a que nunca se llegó a comprobar la existencia de esos pagos, el escándalo parecía ser un indicio de que el PT, a fin de asegurarse el éxito en el Congreso y en las futuras batallas electorales, había decidido sumergirse a fondo en los meandros de la Cámara Invisible y de la malla paralela del poder a la que nos referíamos antes.

**El escándalo  
fue un duro golpe  
a la imagen del PT  
como «campeón  
de la ética»**

El escándalo fue un duro golpe a la imagen del PT como «campeón de la ética». Provocó la caída de cuadros importantísimos dentro del núcleo dirigente del partido, y un alejamiento definitivo de sectores de la clase media sensibles a la cuestión de la corrupción. Pero el gobierno lulista logró evitar consecuencias más drásticas bloqueando el avance de las investigaciones en el Congreso y la amenaza de un proceso de destitución. Esto fue posible gracias a, entre otras cosas, la decisión de reforzar la base aliada con la inclusión de un partido hasta entonces dejado de lado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), símbolo de la lucha contra el régimen militar y que poco a poco se había ido transformando en una confederación de caciques políticos regionales. En los hechos esta inclusión significaba, más que un distanciamiento, el adentrarse aún más en terrenos de la Cámara Invisible<sup>8</sup>.

Pese a las turbulencias, el presidente completó su ciclo, en 2010, con un envidiable índice de aprobación popular superior a 80% —un auténtico récord—, y todo se encaminaba hacia la victoria tranquila de quien era su candidata a la sucesión presidencial, la entonces ministra-jefa de Gabinete Dilma Rousseff. Y la victoria se dio, en efecto, con un buen margen de diferencia sobre su adversario en segunda vuelta, pero no todo fluyó con la tranquilidad prevista. La campaña para la segunda vuelta fue muy tensa y polarizada, con el candidato de la oposición (José Serra, del PSDB) alentando pasiones de raíz religiosa en su favor, una estrategia extraña en su biografía y carrera política. Serra no tuvo éxito, pero su maniobra dejó un tufo rancio, una acidez en el ambiente político, que acabaría prosperando en los años siguientes<sup>9</sup>.

8. Para más información sobre el *mensalão* desde dos enfoques diferentes, v. Joaquim Falcão: *Mensalão. Diário de um julgamento: Supremo, mídia e opinião pública*, Editora Forense, San Pablo, 2015; y Paulo Moreira Leite: *A outra história do mensalão: As contradições de um julgamento político*, Geração, San Pablo, 2013.

9. Sobre la campaña electoral de 2010, v. C. Araujo: «Interpretando a campanha e as urnas» en *Fevereiro. Revista de Cultura e Política* Nº 2, 12/2010.

## El proceso de descarrilamiento del pacto de 1988

Tras un inicio bastante ortodoxo, dedicado a «poner en orden» las cuentas públicas, en mayo de 2012 la nueva presidenta y su ministro de Hacienda, Guido Mantega, anunciaron un giro sorprendente en la política económica. Bautizada como Nueva Matriz Económica (NME), la iniciativa representaba, al mismo tiempo, un gran programa preventivo para enfrentar las secuelas del *crash* financiero internacional de 2008 –que por entonces sacudían la economía de Europa y parecían listas para doblegar la de América Latina– y una tentativa de relanzar la industrialización del país, nunca recuperada desde el agotamiento del desarrollismo nacional, por medio de un plan que incluía miles de millones en subsidios y exenciones fiscales para el sector industrial.

Aunque la iniciativa seducía por lo audaz, la implementación de la NME acabó revelándose fatal para el futuro del mandato de Rousseff. Ocurre que el plan, junto con otros factores que enseguida mencionaremos, sometía al modelo social-liberal a una serie de tensiones que este no estaba preparado para soportar. Este punto es importante para entender las fragilidades del pacto que sostenía el régimen constitucional, y por eso vamos a detenernos en él.

El modelo social-liberal fue muy eficaz en la generación de beneficios para los ciudadanos situados en ambos polos de la pirámide social, esto es, en la cima y en la base. Al tiempo que liberaba a los más ricos de una parte considerable de la carga fiscal, permitía destinar significativas porciones del presupuesto público a los más pobres, especialmente a través de las políticas «focalizadas». Durante su gestión, Cardoso y el PSDB fueron más bien tímidos en explorar esta vía, lo que le dio a Lula da Silva y al PT la oportunidad de probarla a gran escala generando la sensación de algo inédito. Pero esta implementación traía aparejado un problema potencial, algo bastante obvio aunque poco percibido al comienzo, ya que sentaba las bases para que toda una franja intermedia de la pirámide se sintiese excluida: en el fondo, el régimen brasileño no tenía una política específica para los sectores medios. Para estos, el modelo se limitaba a indicar que podían aprovechar las oportunidades individuales de ascenso social surgidas, digámoslo así, de los «beneficios ampliados» que el propio éxito del modelo –en especial, en términos de crecimiento agregado de la economía– generaba como un subproducto.

Valiéndose del *boom* de los *commodities* y de la legitimidad que otorgaba el resarcimiento de la deuda social del país, los dos mandatos de Lula lograron testear con éxito la elasticidad del social-liberalismo constitucional y dejar sus fragilidades en la sombra. La presidenta Rousseff, sin embargo,

amparada en la popularidad de su antecesor y, como ya se mencionó, preocupada por los posibles efectos dañinos de la crisis financiera internacional, resolvió dar un salto al frente. Para viabilizar las metas ambiciosas de la NME, trató de modificar el patrón de relacionamiento que su antecesor había fijado con los sectores empresariales. Sin dejar de cultivar buenas relaciones con estos, lo cierto es que Lula nunca había llegado a un trabajo orgánico en conjunto con el empresariado. El plan de la presidenta, por el contrario, buscaba allí una alianza estrecha, con objetivos comunes, casi un contrato con obligaciones mutuas. De ahí los anuncios y encuentros públicos en los cuales representantes de los empresarios, los trabajadores y el gobierno manifestaban acuerdos a partir de compromisos de cada parte.

**La NME fue encontrando obstáculos y dificultades que poco a poco irían recortando aquel ímpetu inicial**

Al implementarse, sin embargo, la NME fue encontrando obstáculos y dificultades que poco a poco irían recortando aquel ímpetu inicial. En primer lugar porque, aun cuando aseguraba beneficios directos para ellos, la fuerte intervención estatal que iba aparejada con el plan no endulzaba en absoluto los oídos de diversos grupos empresariales. En segundo lugar, porque implicaba la intromisión del gobierno en las relaciones internas entre fracciones capitalistas –por ejemplo, el recorte en las tarifas eléctricas y los intereses bancarios era visto como una tentativa de poner a unos sectores en contra de otros–. Por último, en la medida en que el gobierno cumplía con su parte de los compromisos asumidos –en especial, en el terreno de las exenciones fiscales–, su equipo económico pasaba a presionar a las empresas para que cumpliesen con la suya. Esta consistía básicamente en transformar los estímulos estatales en crecimiento efectivo de la economía. En los años siguientes, sin embargo, la tasa de crecimiento del PIB no alcanzó los índices de alza esperados, al tiempo que la balanza comercial seguía mostrándose muy dependiente de la exportación de granos y minerales<sup>10</sup>. Con el tiempo, la presión sobre las empresas para que revirtiesen ese cuadro desgastó las relaciones entre sus propietarios y el gobierno.

En otro gesto importante en relación con la política de su antecesor, la presidenta Rousseff resolvió adoptar una «tolerancia cero» ante cualquier involucramiento de sus ministros en sospechas de corrupción. Fue lo que André Singer llamó el «ensayo republicano» del gobierno<sup>11</sup>. A causa de esto, varios ministros designados por la base aliada en el Congreso (inclusive algunos que

10. Sobre el significado y las consecuencias políticas de la NME, v. A. Singer: *O lulismo em crise: um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016)*, Companhia das Letras, San Pablo, 2018.

11. Ibid.

provenían de la gestión lulista) fueron excluidos del gabinete. Con estos movimientos, Rousseff buscaba mejorar la imagen del gobierno ante las clases medias, pero al costo de incrementar las tensiones dentro del complicado juego político que era el sostén del presidencialismo de coalición.

Entretanto, creció en los sectores medios la percepción de que la NME se hacía a costa de un peso impositivo extra volcado sobre sus hombros, y sin recibir nada a cambio. Existía el riesgo de que la enorme exención fiscal para las empresas, aunque beneficiase directamente a las clases trabajadoras del sector industrial, fuera pagada por los grupos sociales restantes y, una vez más, por las capas medias. Para cuando se divisó que la época de bonanza en el ciclo de los *commodities* podía llegar a su fin y, peor aún, que parte de esa bonanza había sido drenada o bien por la corrupción o bien por decisiones económicas fallidas, ya estaba sembrada la predisposición de esos sectores medios hacia la protesta social. Esa fue la raíz de las enormes manifestaciones públicas ocurridas en junio y julio de 2013. En realidad, al decidir ocupar masivamente las calles, las clases medias estaban protestando no solo contra los gobiernos del PT, sino contra las bases mismas del pacto social de 1988. Tal era, en definitiva, el hecho objetivo del proceso de subversión al que quedó sometido a partir de entonces el régimen democrático brasileño.

Como resultado de las protestas, los índices de popularidad de Rousseff, hasta entonces positivos, se vinieron rápidamente abajo, poniendo en jaque su liderazgo. Por primera vez en muchos años —en rigor, desde que el ciclo de estabilidad política se había iniciado, hacia 1994—, el Poder Ejecutivo perdía su capacidad de iniciativa y con ello ponía en riesgo toda la arquitectura del presidencialismo de coalición. Rousseff consiguió hallar reservas de energía para vencer en la contienda presidencial de octubre de 2014 por un margen apretado, tras una campaña marcada por fuertes tensiones y polarización ideológica. Sin embargo, como pronto se constató, la suya fue una victoria pírrica. Una vez contados los votos y anunciada la reelección de la presidenta, el acuerdo constitucional que había puesto a los dos partidos principales en un juego de «concordancias en la discordia» ya estaba roto. Clara señal de esto fue la sospecha que el candidato opositor (Aécio Neves) manifestó públicamente y de manera inmediata sobre el resultado de las urnas.

Por lo demás, ese primer gesto evidente de un quiebre de la normalidad constitucional tenía su base en otro punto débil del modelo social-liberal, que quedaba contradictoriamente evidenciado en el éxito mismo de las políticas sociales de los gobiernos petistas. Ocurre que ese éxito les daba enormes ventajas en la competencia con sus adversarios por el voluminoso electorado popular. Si a esas ventajas les sumamos el hecho de que los partidos que ahora se vinculaban al Ejecutivo tenían acceso privilegiado a

la Cámara Invisible y, por lo tanto, al poder económico que esta abrigaba, puede imaginarse el panorama desesperanzado que las huestes opositoras institucionales comenzaron a proyectar para sí mismas, percibiendo que del otro lado tenían una fuerza electoral virtualmente imbatible. En resumen, la misma falta de perspectiva de alternancia en el poder político forzaba a la oposición a buscar caminos que contorneasen la legitimidad de las urnas<sup>12</sup>.

Estas fueron las condiciones que dieron impulso a un movimiento faccioso que conectaba, por un lado, a grupos insatisfechos desde el interior del sistema partidario y, por otro, a los agentes del Poder Judicial –estos, por medio de la Operación Lava Jato, lanzada a comienzos de 2014 para indagar nuevos casos de corrupción en el gobierno<sup>13</sup>– que, por razones de lo más diversas, deseaban modificar el equilibrio de fuerzas reinante. La destitución de la presidenta Rousseff, en agosto de 2016, y el juicio y condena del ex-presidente Lula, menos de un año después, fueron simplemente despliegues de este proceso.

### El regreso a escena de Lula y la disputa presidencial

**Temer logró que se aprobara una enmienda constitucional que impuso severos límites al gasto público**

El gobierno que sucedió al de Dilma Rousseff, conducido por su vicepresidente, Michel Temer, aglutinó a las fuerzas más cercanas, dentro del sistema político, a los intereses de las clases propietarias del país. El programa que lo orientó, elaborado mientras el impeachment de Rousseff maduraba en el Congreso, fue bautizado «Puente para el Futuro» y apuntaba a actualizar en algunos aspectos y a radicalizar en otros la clásica receta neoliberal, llevándola a las áreas donde esta, debido a cláusulas sociales de la Constitución Federal, aún no había logrado penetrar. Apoyándose en las fuerzas conservadoras del Parlamento que se habían aliado para derrocar a su antecesora, Temer logró que se aprobara una enmienda constitucional que impuso severos límites al gasto público y una reforma laboral que, de un solo golpe, debilitó a los sindicatos y recortó ciertos derechos de los trabajadores consagrados desde la década de 1930 y que nunca antes habían sido tocados.

Su equipo en el Ministerio de Hacienda apostaba a que estas medidas atraerían al país un volumen de inversión privada suficiente para asegurar

12. Ver C. Araujo y L. Belinelli: ob. cit.

13. Sobre la Operación Lava Jato, v. Fábio Kerche y João Feres Júnior: *Operação Lava Jato e a democracia brasileira*, Contracorrente, San Pablo, 2018.

la recuperación del crecimiento económico. El hecho es que la economía nacional, ya abatida por la crisis política de los años pasados, salió aún más golpeada por el deliberado quietismo gubernamental que proponía el programa Puente para el Futuro. Por lo demás, el gobierno tuvo que lidiar con nuevos escándalos de corrupción que involucraban a congresistas, ministros y al propio presidente en ejercicio.

Todas estas circunstancias sumadas dibujaron la imagen de un país que se movía a la deriva a través de un desierto constitucional. Con sus dos puntales partidarios —el PT y el PSDB— desarticulados y desmoralizados, el régimen de 1988 abrió un flanco para el fortalecimiento de las alternativas antisistémicas. Y, en efecto, estas ganaron cuerpo en la campaña presidencial de 2018, aunadas bajo la candidatura de extrema derecha de Bolsonaro. Era también la prueba del rotundo fracaso que había sido el gobierno de Temer, incapaz no solo de presentarse él mismo a elecciones, sino hasta de proponer un candidato sucesor.

Tras haber asumido, el presidente Bolsonaro se mostró, como era de esperar, completamente privado de competencia y hasta de voluntad para ejercer su cargo atendiendo a la necesidad de sacar al país de su atolladero económico, social e institucional. Para colmo, fue justamente en medio de esta coyuntura precaria cuando el país se vio sacudido por una pandemia mundial inesperada.

Así las cosas, no deja de ser irónico que el ex-presidente Lula da Silva, luego de ser liberado y tras la anulación por parte del STF de la sentencia que pesaba sobre él, se haya convertido en los tiempos actuales, y en virtud de una popularidad que se mantuvo prácticamente intacta aun estando preso, en una de las escasas opciones, si no la única, para evitar que la tambaleante democracia brasileña vuelva a desmoronarse. Por cierto, el espectacular regreso del ex-sindicalista a escena parece indicar un nuevo realineamiento de fuerzas políticas en el país.

Los intentos de construir una «tercera vía» no logran despegar. Es evidente que su actual fragmentación en diversas candidaturas no colabora, pero esta no es, ni por lejos, la razón que explica sus dificultades. El punto es que el electorado conservador al que podrían atraer solo visualiza dos opciones capaces de aglutinar y unificar otras plataformas de menor peso: la autoritaria y la democrática, respectivamente encabezadas por Bolsonaro y Lula da Silva. Y en la medida en que se hace más evidente que esta es la alternativa fundamental a resolverse en las próximas elecciones, la llamada «tercera vía» se convierte efectivamente en una zona cuyo potencial no es otro que el de reforzar alguna de las dos candidaturas sostenibles.

En esta coyuntura, el ex-presidente se ha transformado en una suerte de pivote para un nuevo realineamiento de las corrientes democráticas. Vimos

que estas, durante el periodo anterior al actual desarreglo constitucional, aun cuando ofreciesen varias opciones se reducían a dos principales: la liderada por el PSDB y la conducida por el PT. Después de cada elección, el grueso de los otros partidos se reposicionaba en relación con uno de estos polos. La crisis política acabó con ese juego y puso en primer plano una nueva opción, completamente distinta de las dos anteriores y con peso popular: la opción autoritaria, encarnada en fuerzas de extrema derecha que en poco tiempo confluyeron bajo una candidatura y prestaron su apoyo a Bolsonaro. Tal es el vector que hoy induce a distintas corrientes del electorado democrático, aturdidas pero aun así sólidas si se juntan, a volcar sus esperanzas en la candidatura del ex-dirigente metalúrgico.

Esto nos lleva al segundo punto de la cuestión: cómo progresará esta candidatura y qué podemos esperar, si sale triunfante, de ella misma y del ambiente político que la rodea. Ya se mencionó al comienzo de este artículo que el ex-presidente asoma como favorito en todas las encuestas. Pero el terreno por el que camina es sumamente movedizo y está sujeto a la posibilidad de vuelcos y caídas que acaben favoreciendo a su adversario. Este podría aprovechar la sensación de un ambiente institucional que le es hostil –por ejemplo, en los choques cada vez más explícitos con la Corte Suprema y la justicia electoral– para elevar al máximo la tensión de la campaña presidencial, haciendo de esto su mejor estrategia para revertir una tendencia actual que no le es muy favorable. Tampoco hay que despreciar el efecto electoral de sus medidas más recientes, claramente improvisadas y de corto plazo, para aliviar las penurias de los grupos sociales más afectados por la crisis económica.

Consciente de estos riesgos, Lula da Silva busca reforzar sus filas con nuevos aliados. Tal vez la adhesión más impactante a la fecha fue la de su antiguo adversario oriundo de las líneas del PSDB, el ex-gobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, quien aceptó la invitación a sumarse a la fórmula en calidad de candidato a vicepresidente<sup>14</sup>. Esta iniciativa dejaría ver, en principio, la necesidad de Lula da Silva de acercarse «al centro», especialmente tratándose de una elección en dos turnos. Pero es también un fuerte indicio de que no solo los diferentes sectores del electorado, sino también sus respectivos líderes políticos, buscan dar forma al realineamiento que antes comentábamos. Esto se integra, por ende, en un movimiento más profundo, no ya de una candidatura de izquierda que aspira a atraer al «centro» hacia ella, sino de una metamorfosis viabilizada en una fórmula que represente a todo el heterogéneo campo democrático.

---

14. Cabe resaltar que, al aceptar unirse a la fórmula con Lula da Silva, Alckmin tuvo que abandonar el PSDB y afiliarse al Partido Socialista.

La palabra «heterogéneo» es decisiva para este análisis. Porque esa es, al mismo tiempo, la fuerza y la debilidad de la metamorfosis en curso. Su fuerza, evidentemente, reside en la amplitud político-ideológica, en el esfuerzo por congregarse las más diversas corrientes democráticas, a izquierda y a derecha. La debilidad, por su parte, está en su propensión a perder un núcleo programático, a dejar de lado una orientación firme y clara. Es cierto, la «marea rosa» que Lula da Silva capitaneó a partir de 2003 fue exactamente eso que la expresión sugiere: una izquierda gobernante diluida para hacer posible el proyecto. De todos modos, diluida como estaba, era una izquierda que buscaba diferenciarse de un adversario situado relativamente a la derecha, explorando hasta el límite el componente «social» de ese modelo programático compuesto, de tipo «social-liberal». Su identidad y su orientación estaban en cierta forma dadas por la existencia de una oposición constante con aquel adversario, aunque siempre teniendo ambas opciones como escenario de fondo un régimen democrático estabilizado y no cuestionado por ninguna otra fuerza política de peso electoral considerable.

Ese es el escenario de fondo que se perdió en la coyuntura actual. Por eso mismo, el posible triunfo de la candidatura de Lula da Silva, que hoy se ofrece a los electores, no podrá reproducir la «marea rosa» de 20 años atrás. Si el amplio campo que esta representa se encontrase convergiendo en un programa común de reconstrucción del régimen democrático y si estuviese madurando un acuerdo acerca de los caminos de superación positiva de los errores y fracasos previos, tal vez las perspectivas serían otras, por lo pronto más nítidas y consensuadas. Pero no es esto lo que podemos ver. Por lo demás, la coalición democrática que hoy se está decantando tendrá que ser muy consciente de que, si fracasa, pone al país en un enorme riesgo de fortalecimiento de la extrema derecha en una versión más nociva que la que conocemos. Así las cosas, es fundamental que esta coalición democrática pueda explicar sus objetivos, más allá de ser la «alternativa al autoritarismo».

Finalmente, habrá que tener en cuenta los condicionamientos de la coyuntura internacional, también muy distinta de lo que fue en los años de la «marea rosa». Hoy, un nuevo gobierno presidido por Lula da Silva estará mucho más sujeto que en sus mandatos anteriores a un cuadro global muy complejo, y no es nada sencillo augurar cómo incidirán las turbulencias en curso. 

# La democratización en Venezuela pasa también por la reconstrucción del Estado

Maryhen Jiménez

Para transformar el pasado y presente autoritarios y sus consecuencias, así como atender las urgentes necesidades de la sociedad, parece imprescindible (re)construir la capacidad estatal. Esto a su vez requiere redimensionar los horizontes temporales del cambio de régimen político y generar consensos en torno de la puesta en pie de un Estado funcional para facilitar el bien común. El enfoque en la (re)construcción del Estado mediante una negociación inclusiva, y no «únicamente» sostenido en la repetida y fallida apuesta a la aniquilación del adversario, permitirá valorar las oportunidades de cambio que aún existen.

La mayoría de los estudios politológicos sobre Venezuela se centran en la erosión de la democracia y en la sucesiva consolidación del autoritarismo durante la era chavista. Sin duda, este enfoque es central y contribuye a identificar la multiplicidad de retos y los diferentes niveles de complejidad que afectan a las elites políticas y activistas, así como a la ciudadanía en general, subyacentes a la violación sistemática a

---

**Maryhen Jiménez:** es doctora en Ciencias Políticas y MPhil en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford, y politóloga por la Universidad Goethe de Fráncfort. Actualmente es miembro investigadora Marie Skłodowska-Curie en la Universidad de Oxford y en el Woodrow Wilson Center en Washington, DC. Su investigación abarca los campos del autoritarismo comparado, democratización, movimientos de oposición y partidos políticos.

**Palabras claves:** autoritarismo, Estado, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Venezuela.

**Nota:** la autora agradece a Stefania Vitale y Juan Manuel Trak por sus valiosos comentarios y sugerencias.

los derechos humanos, la persecución de opositores y disidentes, la criminalización de activistas, la ausencia de Estado de derecho, el colapso de la economía, la mala administración y la corrupción en la industria petrolera –motor central de la economía venezolana–. Sin embargo, la destrucción del Estado y cómo este elemento ha debilitado la relación de cada ciudadano y ciudadana con el poder y permeado el tejido social se suele abordar con menor profundidad.

Como se ha podido constatar a lo largo de las últimas dos décadas, el chavismo no cumplió con sus promesas de construir una democracia participativa, erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, y reducir la dependencia de la renta petrolera diversificando la economía. Por el contrario, el régimen autoritario (competitivo) que se fue erigiendo con Hugo Chávez y se afianzó bajo el régimen de Nicolás Maduro se alejó de los preceptos de esa oferta política y, más bien, ha sometido a la sociedad venezolana a una crisis multidimensional, asociada a un significativo declive institucional que ha vulnerado el epicentro democrático sobre el cual funcionaba, aunque de una forma imperfecta, el Estado venezolano. En el centro de cualquier balance se sitúa la destrucción de la capacidad estatal, entendida como aquella que tienen las instituciones del Estado para implementar de manera efectiva los objetivos oficiales<sup>1</sup>. En lugar de fortalecer el Estado para hacerlo más atento (*responsive*) a las necesidades de la población, el movimiento de Chávez, heredado por Maduro, ha destruido su funcionalidad. De distintas formas, ambos mandatarios desfiguraron el Estado, volviéndolo incapaz, frágil y ampliamente ilegítimo frente a la sociedad. Por un lado, Chávez se dedicó a personificar las funciones del Estado y disminuyó así las posibilidades de consensuar un plan estratégico con diversos actores –políticos, sociales, económicos– que ayudase a repotenciar la capacidad construida durante la era democrática. Su visión de un Estado todopoderoso exacerbó el modelo rentista y creó vínculos de dependencia insostenibles entre Estado y sociedad y, en especial, con sus bases de apoyo.

Maduro, por su parte, frente a la crisis económica generada por los gobiernos chavistas y a la ausencia de renta para distribuir entre elites y bases, ha tomado una serie de medidas económicas drásticas que se han alejado de los ideales bolivarianos originarios, lo que incluye una liberalización y desregulación de ciertos mercados, la dolarización de facto (junto con el uso de otras monedas extranjeras), la liberación del control

---

1. Kathryn Sikkink: *Ideas and Institutions: Developmentalism in Brazil and Argentina*, Cornell UP, Ithaca, 1991.

cambiario y la admisión de diversas formas de pago (por ejemplo, en efectivo, con bolívares o moneda extranjera, y transferencias electrónicas). Esta adaptación, producto también del aislamiento diplomático y de las sanciones económicas a Venezuela, ha conllevado la formación de un Estado predatorio que beneficia a una minoría, mientras desfavorece a la mayoría<sup>2</sup>. El aparente lema «dejar hacer, dejar pasar» ha producido un Estado que no solo desasiste a su población, sino que además la intimida y extorsiona, mientras enriquece a unos pocos. Ante la incapacidad estatal de proveer servicios públicos y seguridad ciudadana, y de mantener la soberanía territorial, la sociedad venezolana se ha visto forzada a responder desde su propia microrrealidad y a privatizar prácticamente todas las esferas de su vida.

Este artículo propone un giro en el enfoque de análisis, frente a la consolidación del autoritarismo, la fragmentación de la oposición y la emergencia humanitaria compleja. Para transformar el pasado y presente autoritarios y sus consecuencias, así como atender las urgentes necesidades de la sociedad, parece imprescindible (re)construir capacidad estatal. En ese sentido, exploro dos factores: (a) reconsiderar la dimensión temporal de un proceso de democratización en dos planos, uno de corto y otro de mediano y largo plazo, y (b) generar consensos en torno de la edificación de un Estado funcional que facilite el bien común. El enfoque en el Estado, y no únicamente en la repetida y fallida apuesta a la aniquilación del adversario, permitirá percibir y valorar las oportunidades de cambio que aún existen.

## El Estado chavista

¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son sus tareas? Estos interrogantes han sido ampliamente abordados desde distintas disciplinas. La definición clásica weberiana entiende por Estado un «instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al *monopolio legítimo* de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente»<sup>3</sup>. El control territorial y administrativo, por tanto, son características esenciales de un Estado. Dependiendo del tipo de régimen político, los objetivos variarán. Otra gama de trabajos al respecto distingue entre tres tipos de capacidad estatal: capacidad extractiva, capacidad coercitiva (control sobre el territorio

---

2. Antulio Rosales: «Cómo Maduro ‘liberalizó’ la economía venezolana» en *Nueva Sociedad* edición digital, 10/2021, disponible en <[www.nuso.org](http://www.nuso.org)>.

3. Max Weber: *Economía y sociedad*, FCE, Ciudad de México, 1977.



© Nueva Sociedad / Jorge Roa 2022

**Jorge Roa** es diseñador industrial y reside en el sur de Chile. Trabaja ilustrando libros, revistas y material publicitario. Instagram: <[www.instagram.com/conjuntouniverso/?hl=es-la](https://www.instagram.com/conjuntouniverso/?hl=es-la)>.

y seguridad ciudadana) y capacidad administrativa (diseño y provisión de servicios públicos; regulación de esferas sociales y económicas)<sup>4</sup>.

La concepción chavista de la política y el rol del Estado han mutado en el tiempo. En gran parte, esas transformaciones han estado atadas a las visiones y nociones personales de Hugo Chávez. Un primer cambio en torno

**La concepción  
chavista  
de la política y  
el rol del Estado  
han mutado  
en el tiempo**

de su forma de relacionarse con el Estado y el poder ocurre en 1996, cuando lo convencen de abandonar la vía insurreccional y tomar el camino electoral, con la construcción de una plataforma política<sup>5</sup>. En su primera campaña promete una democracia participativa y protagónica, así como una nueva política con mayor énfasis en «el Soberano» y menor foco en los pactos entre elites. La Constitución de 1999, elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente mayoritariamente chavista (90%), define que el Estado venezolano es un «Estado democrático y social de Derecho y de Justicia» que «tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo». Como en la era democrática, reconoce también que la «educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines»<sup>6</sup>. Esa concepción de un Estado garante de amplios derechos, incluidos los sociales, económicos, culturales y ambientales, y también actor clave en el diseño de la economía y desarrollo, se va a mantener en todos los planes chavistas de gobierno (2000-2025). Lo que sí resulta un cambio notable en 2006 es la autodefinición de Chávez como «socialista», lo cual generó tensiones en los propósitos de la Constitución y en la implementación de los diferentes planes de gobierno. Según esta nueva noción, no bastaba con construir una democracia participativa y protagónica, sino que era preciso alcanzar una «Democracia Protagónica Revolucionaria» y una «nueva ética socialista». A su vez, Chávez intentó cambiar la relación de la ciudadanía con el Estado a través de la creación de un «poder comunal» que se ejercería desde asam-

4. Jonathan K. Hanson y Rachel Sigman: «Leviathan's Latent Dimensions: Measuring State Capacity for Comparative Political Research» en *The Journal of Politics* vol 83 Nº 4, 10/2021; Peter B. Evans, David Rueschemeyer y Theda Skocpol: *Bringing the State Back In*, Cambridge UP, Cambridge, 1985.

5. Juan Eduardo Romero: «El discurso político de Hugo Chávez (1996-1999)» en *Espacio Abierto* vol. 10 Nº 2, 6/2001.

6. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999; José Ignacio Hernández: «Estado social y ordenación constitucional del sistema económico venezolano» en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano* 11, Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlín-Montevideo, 2006.

bleas ciudadanas en las comunidades; sin embargo, no logró concretar su ambición tal como la imaginaba<sup>7</sup>.

En la práctica, lo que veremos a lo largo del chavismo es una simbiosis entre el Estado y el partido de gobierno y sus objetivos políticos hegemónicos. Desde entonces, el poder se ha ejercido de forma personalista y vertical y esto ha empujado al país hacia un autoritarismo competitivo bajo el régimen de Chávez, lo cual luego se profundiza bajo el mando de Maduro<sup>8</sup>. En el marco del auge económico favorecido por el *boom* petrolero, el chavismo aumentó el gasto público e invirtió en programas sociales llamados «misiones» (2003-2014) para atender a los sectores populares del país en las áreas de salud, educación y capacitación, así como alimentación y vivienda<sup>9</sup>. En tiempos recientes y como respuesta a la crisis multidimensional que comienza a manifestarse en 2013-2014, el gobierno de Maduro implementó dos iniciativas presidenciales para la distribución del escaso ingreso fiscal petrolero: el Carnet de la Patria y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Ambos mecanismos han fungido como instrumentos clientelares a través de los cuales se distribuyen los recursos públicos a cambio de lealtad política<sup>10</sup>. Cabe resaltar que, desde el inicio, en lugar de invertir en las instituciones del Estado, el chavismo utilizó mecanismos paralelos para hacer el *delivery* de programas sociales, eliminando controles horizontales, es decir, la intermediación de la administración pública, que supone el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de las políticas. En su lugar, se priorizó la relación directa entre líder y seguidores.

Si bien el gobierno celebró el rol de las misiones en la reducción temporal de la pobreza de ingreso y exclusión en tiempos de bonanza, hay que destacar que los programas sociales han sido utilizados como redes clientelares para movilizar y controlar a la población<sup>11</sup>. Lo contradictorio es que, pese a tener factores claves a su favor, como amplio apoyo popular, ingresos inéditos, una Constitución garantista y un clima regional propicio (la «mare rosa»), el chavismo, siendo un movimiento de izquierda, no reivindicó en los hechos el rol central del Estado ni construyó capacidades estatales.

---

7. Para un análisis más detallado sobre el estado comunal, v. Margarita López Maya: «Socialismo y comunas en Venezuela» en *Nueva Sociedad* N° 274, 3-4/2018, disponible en <www.nuso.org>.

8. A. Rosales y M. Jiménez: «Venezuela: Autocratic Consolidation and Splintered Economic Liberalization» en *Revista de Ciencia Política* vol. 41 N° 2, 2021.

9. Yolanda D'Elia y Luis Francisco Cabezas: «Las misiones sociales en Venezuela», ILDIS, Caracas, 5/2008.

10. M. López Maya: «El colapso de Venezuela ¿qué sigue?» en *Pensamiento Propio*, 6/2018.

11. Guillermo Tell Aveledo: «Venezuela: de las protestas a la coyuntura electoral» en *Diálogo Político* N° 2/2014.

Por el contrario, la desinversión y/o mal manejo de la administración pública, los servicios básicos y el control territorial han debilitado al Estado venezolano<sup>12</sup>.

Según los datos más recientes del State Fragility Index —que mide diferentes dimensiones de (in)capacidad estatal a través de 12 indicadores—, Venezuela se ubicaba en 2021 en el número 25 sobre 195 países. En 2006 el país aún se encontraba en el puesto 63 y, en 2013, en el peldaño 89. Solo en los últimos siete años Venezuela engrosa la lista de países con fragilidad estatal y es uno de los cinco países, junto con Libia, Siria, Malí y Yemen, que han exhibido las tasas más altas de desmejoras de la última década.

Esta situación coincide con otros indicadores socioeconómicos e investigaciones que constatan la gravedad de las consecuencias de la fragilidad del Estado venezolano. En términos de control territorial y violencia, por ejemplo, informes internacionales han mostrado que, como consecuencia de las debilidades institucionales, han surgido y se han fortalecido grupos paramilitares (los llamados «colectivos»). Se presume que algunos de estos grupos han tenido y continúan teniendo la anuencia del gobierno para operar a cambio de apoyo político<sup>13</sup>. Igualmente, existen indicios que señalan la presencia en el territorio venezolano de grupos irregulares que han suplido funciones del Estado. A su vez, se han identificado la interacción y simbiosis entre grupos criminales y funcionarios estatales corruptos que cooperan entre sí para dividir rentas ilícitas<sup>14</sup>.

**La fragilidad del Estado venezolano encarna una situación compleja en materia de seguridad ciudadana**

La fragilidad del Estado venezolano encarna una situación compleja en materia de seguridad ciudadana, no solo por su incapacidad de proveerla, sino por el hecho de que la violencia es generada precisamente por cuerpos estatales<sup>15</sup>. Según datos de HumVenezuela de 2021, 5,7 millones de personas fueron víctimas de eventos violentos y 11.891 fallecieron por causas violentas. En 2020, se estima que al menos 3.034 personas fueron asesinadas por cuerpos de seguridad como resultado de la ausencia de Estado de derecho, debilitamiento

12. Diego Lombardi: «Venezuela, salir del pozo o revolución» en *Agenda Pública*, 4/10/2020.

13. ACNUDH: «Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in the Bolivarian Republic of Venezuela», 1/2/2020.

14. Bram Ebus y Thomas Martinelli: «Venezuela's Gold Heist: The Symbiotic Relationship between the State, Criminal Networks and Resource Extraction» en *Bulletin of Latin American Research* vol. 41 N° 1, 2022.

15. Andrés Antillano y Keymer Ávila: «¿La mano dura disminuye los homicidios? El caso de Venezuela» en *Revista CIDOB d'Afers Internacionals* N° 116, 2017.

institucional e impunidad sistemática<sup>16</sup>. Para enfrentar la criminalidad, el gobierno venezolano ha puesto en marcha diferentes operativos militares y policiales, incluidas, por ejemplo, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), que han sido cuestionadas por ser operaciones de exterminio que criminalizan la pobreza<sup>17</sup>. Posteriormente, se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que, al igual que las operaciones conjuntas militar-policiales antes mencionadas, se han tornado en exceso violentas y han sido criticadas abiertamente por el presunto uso excesivo de fuerza y abuso de autoridad. Informes sobre estas fuerzas especiales llevaron a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) a exigir su disolución inmediata, lo que a la fecha no ha ocurrido<sup>18</sup>. Dado el contexto autoritario y el patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Venezuela es objeto de seguimiento por la OACNUDH y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA). En septiembre de 2021, una Misión Internacional de Determinación de Hechos concluyó que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Otra serie de indicadores describen la incapacidad del Estado en materia de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales consagrados en la Constitución venezolana y en la provisión de servicios públicos constantes y de calidad. De hecho, la pobreza y la desigualdad han crecido con celeridad. En 2014 la pobreza de ingresos se calculó en 52,2% y en 2021 llegó a 94,5%. Las cifras de pobreza extrema de ingresos nos señalan que en 2014 fue de 13,1%, y siete años más tarde, en 2021, alcanzó a 76,6%. Según el cálculo del índice de pobreza multidimensional de 2021, esta alcanzaba a 65,2% de las personas, lo cual representa un aumento dramático si consideramos que en 2014 el porcentaje era de 39,3%<sup>19</sup>. Aquí vale la pena resaltar el impacto que ha tenido la masiva corrupción en la imposibilidad de garantizar los derechos de la sociedad: el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional ubica a Venezuela en el número 177 sobre 180 países.

Más aún, la provisión y calidad de los servicios públicos son precarias, tal como lo indican las cifras sobre las necesidades humanitarias. En 2021, 74,2% de la población –21,3 millones de personas– reportó interrupciones de electricidad; 67,3% –19,3 millones– tuvo severas faltas en el transporte público

---

16. HumVenezuela: «Derecho a condiciones de vida digna», 6/2021.

17. Rebecca Hanson y Verónica Zubillaga: «From Carceral Punitivism to Systematic Killing: The Necropolitics of Policing in Post-Chávez Venezuela» en *Violence: An International Journal*, 12/5/2021.

18. ACNUDH: «Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad», 16/9/2020.

19. «ENCOVI UCAB: Venezuela es el país más pobre de América Latina y el perfil nutricional se asemeja a países de África» en *El Ucabista*, 7/7/2020.

en su comunidad, y 58,7% –16,8 millones– no recibió gas doméstico. El acceso al agua potable también es limitado: la capacidad operativa de abastecimiento de agua a escala nacional ha caído 90%. En 2021, al menos 62,2% de las personas conectadas al sistema de acueductos sufrió interrupciones repetidas en el suministro de agua, mientras que 35,1% no tuvo acceso estable al agua potable; 23% de las viviendas no contaban con conexión al sistema de acueductos. Igualmente, la ausencia de saneamiento y el consecuente deterioro de las capacidades para el manejo de residuos sólidos están afectando la salud de la población y produciendo un daño ambiental irreparable en los cuerpos de agua. 76% de la población tuvo servicios deficientes de saneamiento y recolección de aguas servidas; 4,6 millones vivían en hogares sin conexión a la red de cloacas<sup>20</sup>.

La crisis institucional, económica y social ha obligado a millones de personas a emigrar. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), más de seis millones de personas han migrado y se encuentran fuera del país. De ese grupo, más de 950.000 han solicitado asilo en diferentes

países y más de 186.000 han sido reconocidas con estatus de refugiados<sup>21</sup>. La fragilidad del Estado y la compleja emergencia humanitaria han generado condiciones de extrema vulnerabilidad, particularmente a lo largo de las fronteras, donde desde hace años la esclavitud moderna se ha convertido en una práctica generalizada<sup>22</sup>.

**La crisis  
institucional,  
económica y social  
ha obligado a  
millones de  
personas a emigrar**

Para paliar la crisis económica, reflejada en una contracción del PIB de casi 70% entre 2013 y 2019 y en la escasez de productos generados por el gobierno<sup>23</sup>, y sobrevivir en el poder pese a múltiples presiones –domésticas e internacionales–, Maduro ha implementado una serie de medidas desorganizadas en materia económica que han abierto aún más la brecha entre quienes tienen acceso a divisas y quienes deben vivir en bolívares. Desde hace varios años, el gobierno ha creado espacios de experimentación en la economía para dar respuesta a la crisis económica, entre ellos, la zona de desarrollo especial Arco Minero del Orinoco (2016), la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios para permitir el uso y cambio del dólar estadounidense (2019), la Ley Antibloqueo (2020) y la promoción de Zonas Económicas Especiales<sup>24</sup>. La liberalización en marcha está favoreciendo a elites

20. HumVenezuela: «Derecho al agua y saneamiento», 6/2021.

21. ACNUR: «Situación de Venezuela» disponible en <[www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html](http://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html)>, s./f.

22. CDH-UCAB: «De lo laboral a lo sexual: formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar», 2020.

23. Hugo Prieto: «Asdrúbal Oliveros: 'Pasamos ya de una crisis económica a una crisis social de gran envergadura'» en *Prodavinci*, 5/4/2020.

24. Benedicte Bull, A. Rosales y Manuel Sutherland: «Venezuela: de la crisis económica al capitalismo elitista bodegonero», publicación especial, Friedrich-Ebert-Stiftung, Caracas, 2021.

vinculadas al Estado y generando desigualdades profundas. Como escribió Antulio Rosales, «el gobierno de Maduro estaría replanteando, de manera accidentada, torpe y autoritaria, una transición del Estado rentista petrolero a uno neopatrimonial, todavía con carácter extractivo, pero con nuevos oligarcas a la cabeza, bajo la protección y, posible supervisión, de la elite de poder»<sup>25</sup>. El problema central es que estas flexibilizaciones desorganizadas están creando profundas grietas en la sociedad venezolana, visto que excluyen a la mayoría de la población vulnerable, así como a sectores tradicionalmente de ingresos bajos y de clase media que no tienen recursos para el consumo privilegiado<sup>26</sup>.

Como respuesta a la dolarización de facto (o al uso de otras monedas, como el peso colombiano o el real en zonas cercanas a Colombia y Brasil, respectivamente) y a la ausencia de un Estado funcional, (una parte de) la sociedad venezolana está actuando desde sus capacidades individuales para poder sobrevivir. Quienes pueden reunir una cantidad importante de dólares para escarbar un pozo de agua propio, lo hacen; quienes tienen menos dólares, pagan un *delivery* puntual de agua; y quienes no tienen dinero, están a merced del Estado y de su irregular prestación de este servicio público. Algo similar ocurre con la electricidad: quien tiene dinero, compra una planta eléctrica –individual o para su complejo residencial–, y quien no, padece los cortes en el suministro por el colapso del sistema eléctrico. Esta dinámica de sectores privilegiados versus excluidos difícilmente resultará en una estabilidad política y/o socioeconómica sostenible en el tiempo.

### ¿La alternativa? Construir un Estado funcional

En contextos de conflicto o autoritarismo, la pregunta sobre qué hacer o, más específicamente, qué hacer mientras ese Estado disfuncional se prolonga, no es fácil de responder. Esto es así por la incertidumbre y opacidad de estos contextos, y también porque el marco de acción y los costos que derivan de tales contextos para actores adversos a un régimen autoritario pueden variar ampliamente. Las opciones estratégicas de oposición en la búsqueda de cambio de regímenes políticos incluyen rutas institucionales, como la participación en procesos electorales, negociaciones, reformas de políticas públicas o protestas pacíficas, y vías extrainstitucionales, es decir, mecanismos violentos para el cambio, como golpes de Estado, intervenciones o protestas violentas. Si bien es cierto que las vías institucionales tienden a generar una estabilidad

---

25. A. Rosales: «Cómo Maduro ‘liberalizó’ la economía venezolana» en *Nueva Sociedad* edición digital, 10/2021, disponible en <[www.nuso.org](http://www.nuso.org)>.

26. A. Oliveros: «El otro también cuenta» en *Revista SIC*, 21/12/2021.

postransición, hay que resaltar que no toda negociación y/o participación electoral lleva necesariamente a una democratización. Por ello, movimientos y/o partidos opositores se preocupan por no generar condiciones de legitimidad y sustento para un régimen autoritario.

Una situación de incertidumbre similar se da en torno de la intersección entre capacidad estatal y autoritarismo. ¿Qué implicaciones tiene la fragilidad estatal? Carolien Van Ham y Brigitte Seim exploran el nexo entre capacidad estatal, autoritarismo y democratización y encuentran que la capacidad estatal puede ser una de las variables que condicionan el poder democratizador de las elecciones en regímenes autoritarios. Sostienen que, en regímenes autoritarios con una alta capacidad estatal, el cambio en el Ejecutivo es menos probable, mientras que en regímenes autoritarios con poca capacidad estatal las probabilidades de cambio del Ejecutivo son altas. Sin embargo, en este último caso, es posible que la nueva democracia no perdure y, por tanto, que no se puedan implementar políticas públicas o reformas sustantivas<sup>27</sup>.

Estas ideas ayudan a pensar el caso venezolano. La construcción de capacidad estatal ¿fortalecería al gobierno autoritario? Mientras el conflicto esté en marcha, toda respuesta es incierta. Sin embargo, tomando la experiencia de trabajos existentes, se puede deducir que apoyar al oficialismo en la construcción de capacidad estatal, por ejemplo, en términos de provisión de servicios públicos, puede ayudarlo a ganar legitimidad frente a la ciudadanía. Al mismo tiempo, podría consolidar aún más su régimen autocrático a través del aumento de la represión y la cooptación. En vez de debilitar sus estructuras de poder, le podría dar estabilidad y continuidad en el tiempo. No obstante, la inacción frente a la delicada situación del Estado puede traducirse en una aún mayor fragilidad en el tiempo. Lo cual, si seguimos el argumento de Van Ham y Seim, podría significar que, ante la eventualidad de un cambio en el Ejecutivo, el nuevo régimen político no esté en condiciones de implementar las reformas necesarias. Para una nueva democracia, eso representaría un mal comienzo y generaría un entorno incierto: investigaciones al respecto han encontrado que la fuente de legitimidad y estabilidad está vinculada al desempeño del nuevo régimen, es decir, a su capacidad para proveer servicios públicos, crecimiento económico y redistribución<sup>28</sup>. Por lo tanto, no atender la fragilidad del Estado venezolano en el presente podrá también tener consecuencias negativas en el futuro.

¿Cómo se podría construir una ruta hacia la democracia? Dos factores resultan importantes antes de contestar este interrogante: el dominio chavista

---

27. C. van Ham y B. Seim: «State Capacity, Incumbent Turnover and Democratic Change in Authoritarian Elections», V-Dem Working Paper N° 51, 6/2017.

28. Jørgen Møller, Lasse Lykke Rørbæk y Svend-Erik Skaaning: «State Capacity and Political Regime Stability» en *Democratization* vol. 21 N° 7, 10/11/2014.

y el manejo de expectativas y tiempo. Maduro ha sobrevivido y neutralizado presiones internas. Lo ha logrado utilizando el aparato coercitivo del Estado y desviando los costos del conflicto hacia la sociedad. El resultado es una oposición fragmentada y perseguida, una sociedad empobrecida y despolitizada, y una coalición autoritaria relativamente unida hasta hoy. En un contexto semejante, la acción colectiva contra el gobierno luce difícil, y lo mismo ocurre con las probabilidades de una revuelta que desafíe a Maduro desde sus propias filas<sup>29</sup>. Al mismo tiempo, si bien se hay evidencia de que los regímenes autoritarios con Estados en bancarota son vulnerables al colapso, en vista de su incapacidad para remunerar adecuadamente a sus fuerzas de seguridad<sup>30</sup>, el gobierno venezolano ha «descentralizado» el acceso a la renta ilícita, lo cual sigue garantizando ingresos a sus elites. Por tanto, habría que comprender el atrincheramiento del gobierno y los costos-beneficios de una transición a la democracia para la elite autoritaria.

Este escenario nos lleva entonces a una difícil pero quizás beneficiosa ruta para un eventual proceso de democratización: la negociación. Es aquí donde vuelven las variables tiempo y expectativa, dado que todo proceso de cambio significativo será lento y gradual. Pese a los complejos *trade-offs* que presupone, la ventaja de una negociación es que implica un espacio regulado en el cual cabe la posibilidad de construir confianza y generar consensos posiblemente estables sobre nuevas reglas de un nuevo sistema político<sup>31</sup>. En sus estudios sobre transiciones, Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter señalaban en la década de 1980 que estas tienen lugar cuando las elites autoritarias moderadas negocian con sectores opositores moderados<sup>32</sup>. Entendiendo esta complejidad, resultaría útil cambiar el enfoque del conflicto para encontrar ventanas de oportunidad para su transformación. ¿Cómo? Trayendo a la mesa de negociación la importancia del Estado y su actual fragilidad. Esto no implicaría abandonar la aspiración de un cambio de régimen político. Por el contrario, se trataría de vincular la

**La ventaja de una negociación es que implica un espacio regulado en el cual cabe la posibilidad de construir confianza y generar consensos**

29. Merete Bech Seeberg: «State Capacity and the Paradox of Authoritarian Elections» en *Democratization* vol. 21 N° 7, 10/11/2014.

30. Jonathan K. Hanson: «State Capacity and the Resilience of Electoral Authoritarianism: Conceptualizing and Measuring the Institutional Underpinnings of Autocratic Power» en *International Political Science Review* vol. 39 N° 1, 1/2018.

31. Leiv Marsteintreder: «With the Cards Stacked against You: Challenges to a Negotiated Transition to Democracy in Venezuela» en *European Review of Latin American and Caribbean Studies* N° 109, 13/5/2020.

32. G.A. O'Donnell y Ph.C. Schmitter: *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Johns Hopkins UP, Baltimore-Londres, 1986.

construcción de Estado a las negociaciones políticas y ver en esto un punto de interés común. Los beneficios pueden ser múltiples. La literatura especializada nos dice que para construir un Estado eficaz son importantes, entre otros factores, (a) el horizonte temporal: gobernantes que manejan un horizonte temporal más largo serán más propensos a invertir en capacidad estatal, y (b) un diseño institucional inclusivo y no de suma cero: es decir, los gobiernos y sus opositores no deberían temer la entrega del poder al otro<sup>33</sup>. Un arreglo institucional estable les hará invertir en capacidad estatal, pues tienen un interés común. En Venezuela, la inversión en la capacidad estatal en el corto plazo ayudaría a la población afectada y posiblemente también al gobierno. Esto último luce relevante en términos de incentivos en una negociación. Sin embargo, al construir las bases para un nuevo sistema político inclusivo, la oposición democrática y la sociedad en general también se beneficiarían a mediano y largo plazo.

Abordar el conflicto de esta forma permitiría pensar en dos ejes temporales —uno en el corto y el otro en el mediano y largo plazo—, ambos vinculados a distintos objetivos. En el corto plazo, la sociedad organizada, junto con actores políticos en el país y aliados internacionales relevantes, podrían invertir en lo urgente, es decir, en la dimensión administrativa de la capacidad estatal, que se refiere a la capacidad del Estado para brindar servicios públicos básicos y cumplir paulatinamente con los derechos consagrados en la Constitución venezolana (1999). Invertir en infraestructura para el sector salud, educación, transporte, entre otros, no solo aliviaría la emergencia humanitaria que padecen millones de ciudadanos, sino que podría tener otros beneficios, como contribuir a la (re)generación de la relación entre Estado y sociedad, restándoles peso a grupos irregulares y devolviendo paulatinamente la legitimidad al Estado. Dado que el gobierno es autoritario y poco confiable, cabría desarrollar una metodología y un monitoreo confiables, con asistencia técnica, para asegurarse de que los recursos y apoyos brindados puedan ser invertidos sin ser desviados. Igualmente, la sociedad organizada podría ejercer presión, movilizándose para que el Estado cumpla con sus responsabilidades.

Separar lo urgente de lo esencial —el diseño de un nuevo Estado y sus instituciones— permitiría restar presión sobre la idea del cambio inmediatesta que no ha sido factible hasta el día y que luce poco probable a futuro. Las instituciones, los recursos, las alianzas y el *know how* autoritario no desaparecen, incluso después de una exitosa transición a la democracia; por el contrario, condicionan al emergente régimen político<sup>34</sup>. Una negociación

---

33. Timothy Besley y Torsten Persson: «The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics» en *American Economic Review* vol. 99 N° 4, 2009.

34. Michael Albertus y Victor Menaldo: *Authoritarianism and the Elite Origins of Democracy*, Cambridge UP, Cambridge, 2018.

que no tenga como objetivo aniquilar políticamente al chavismo, sino incorporarlo en un Estado funcional y democrático, podría darle al gobierno la oportunidad de democratizarse y pensarse como parte del proceso de cambio<sup>35</sup>. En una negociación que no se rija por la lógica de suma cero, se podría abordar la reinstitucionalización del país a través de acuerdos consensuados que ayuden a mitigar los efectos de las instituciones autoritarias en el futuro. Por ejemplo, un elemento importante sería el diseño de instituciones contramayoritarias –no reelección indefinida, sistema electoral proporcional– que faciliten la cooperación entre actores. También podría retomarse la profundización de la descentralización iniciada en los años 90, para fortalecer las competencias regionales y municipales y vincular a la sociedad a las decisiones en políticas públicas. La inversión en capacidad administrativa antes mencionada tendría un efecto *spill-over* hacia otros sectores de la burocracia: si el Estado se profesionaliza y aumenta su capacidad, es dable esperar que la colaboración nacional-internacional se replique para fortalecer otras instituciones y poderes del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral o la Asamblea Nacional. Dicho esto, como un Estado fuerte beneficia a quien gobierna, tanto en una democracia como en una autocracia<sup>36</sup>, es esencial que en cualquier proceso de negociación se establezcan mecanismos claros y confiables que faciliten un proceso de liberalización y eventual democratización. Esta propuesta será realista en la medida en que las elites autoritarias generen señales creíbles de apertura, cooperación y reinstitucionalización<sup>37</sup>.

En gran medida, la política cambia de acuerdo con intereses y voluntades. Después de más de dos décadas de confrontación política, polarización y crisis multinivel, es necesario encontrar un punto en común para iniciar una nueva búsqueda por la democracia. La (re)construcción del Estado representa una oportunidad. Un cambio de enfoque, de un «no volverán [en referencia a la oposición]» o una «salida del Ejecutivo como sea», a una «construcción de capacidades estatales y democratización en varias etapas», podría significar un futuro distinto para Venezuela. ☐

---

35. Una ruta gradual de cambio no implicaría dejar a un lado la lucha por la justicia, verdad, reparación y no repetición. Ver M. Jiménez: «Lost in Fragmentation? The Recurrent Dilemmas of the Venezuelan Opposition and What to Do Next», The Wilson Center, 10/2021; Marino Alvarado B: «Toda negociación para salir de la crisis en Venezuela y rescatar la democracia debe partir de varios aspectos...» en Twitter, 17/4/2022, disponible en <<https://mobile.twitter.com/marinoalvarado/status/1515715209041690624>>.

36. David Andersen, Jørgen Møller, Lasse Lykke Rørbæk y Svend-Erik Skaaning: «State Capacity and Political Regime Stability» en *Democratization* vol. 21, Nº 7, 10/11/2014.

37. M. Jiménez: «Venezuela's Negotiations Won't Get Rid of Maduro. So What's Next?» en *Americas Quarterly*, versión digital, 11/2021, disponible en <[www.americasquarterly.org](http://www.americasquarterly.org)>.

# Los desafíos de Xiomara Castro en Honduras

Leticia Salomón

El triunfo de la izquierda hondureña, tras ocho años de gobierno conservador autoritario y corrupto de Juan Orlando Hernández y un golpe de Estado en 2009, está marcado por una suma de desafíos y la posibilidad de frustración de las expectativas de cambio. Pero, en definitiva, las últimas elecciones abrieron una nueva etapa en el país centroamericano.

El 6 de mayo se cumplieron los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Su llegada al gobierno el 27 de enero de 2022 se produjo en un contexto lleno de expectativas y esperanzas, tras 12 años consecutivos del Partido Nacional (2010-2022), que asumió el poder político inmediatamente después del golpe de Estado de 2009. Ocho años de los últimos dos gobiernos correspondieron a Juan Orlando Hernández (2014-2022), denunciado por corrupción y narcotráfico, y hoy detenido en Estados Unidos luego de concretarse el proceso de extradición desde Honduras.

Durante ese tiempo, hubo un fuerte retroceso en lo que se había avanzado en el proceso de construcción democrática iniciado a comienzos de la década de 1980 y se degradó el estilo de hacer política y de ejercer gobierno, ambos caracterizados por una visión patrimonialista

---

**Leticia Salomón:** es una socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) en temas de gobernabilidad, defensa y seguridad, con varios libros y artículos publicados.

**Palabras claves:** cambio, corrupción, Xiomara Castro, Honduras.

extrema del Estado. Esta se evidenció en un saqueo generalizado de los bienes y recursos públicos mediante redes de corrupción y un control total del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado y sobre las instancias claves relacionadas con el control de cuentas, mecanismos de transparencia y sistema electoral.

Las elecciones generales de noviembre de 2021 marcaron un alto en este proceso. Pero el país heredado y el Estado recibido por el nuevo gobierno están marcados por el saqueo sistemático y generalizado, un presupuesto muy limitado, una acentuada debilidad institucional, la politización de la justicia, un peligroso acercamiento entre Estado y líderes religiosos, particularmente evangélicos, y la represión y judicialización de la protesta social. La toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro representa la restauración de la esperanza de amplios sectores de la población que confían en que la nueva mandataria, la primera mujer en ocupar la Presidencia en la historia del país, revertirá la estructura de impunidad que sostuvo al ex-presidente Hernández; derogará muchas leyes que comprometieron la soberanía nacional, los derechos humanos, la transparencia en el manejo del presupuesto, el castigo a los corruptos, el saqueo de las instituciones del Estado y la criminalización de los defensores del ambiente, entre otras; y confían en que se abrirán las posibilidades de una mejoría económica que les permita atender sus necesidades más elementales y ver con más esperanza el futuro inmediato.

No obstante, este inicio se vio empañado por una crisis dentro del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que impactó en el Congreso Nacional y que se tradujo en la existencia simultánea de dos juntas directivas, debatiendo al mismo tiempo y en lugares diferentes. Esta situación, que se prolongó durante varios días, mostró una fisura en el nuevo partido de gobierno cuando un grupo de 20 diputados desconoció un compromiso de campaña que otorgaba al Partido Salvador de Honduras (PSH) la Presidencia del Congreso y decidió asumir esa instancia, negociando para ello con el Partido Nacional, que gobernó el país en los últimos 12 años y es responsable de la situación crítica en la que se encuentra en este momento. Aunque la crisis se resolvió, fue una muestra de las dificultades que enfrentará el nuevo gobierno.

La presencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la asunción de Castro y la extradición del ex-presidente Hernández parecen indicar que la lucha contra la corrupción, más que la ideología, marcará las relaciones entre Honduras y EEUU.

Cabe mencionar que esto ocurre cuando Honduras vive aún secuelas del golpe de Estado de 2009, entre ellas la creciente polarización de la sociedad, un lenguaje anticomunista propio de la Guerra Fría y la obsesión enfermiza de los conservadores con el ex-presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009). Para sorpresa de todos, en particular del Partido Nacional, el

## **Se propició la articulación de un bloque de centroizquierda que ganó las elecciones**

intento de convertir la lucha electoral en una guerra ideológica no tuvo el éxito alcanzado con el golpe de Estado de 2009. De forma hábil, el principal partido LIBRE impulsó a última hora, y cuando nadie lo esperaba, una coalición con otras fuerzas que están lejos de identificarse con la izquierda, entre ellas el PSH, de reciente creación, el Partido Innovación Nacional y Unidad (PINU) y un grupo fuerte de dirigentes del Partido Liberal. Con esta alianza se neutralizó el creciente proceso de ideologización y se propició la articulación de un bloque de centroizquierda que ganó las elecciones y conformó un plan de gobierno con un claro elemento aglutinador: desmontar la estructura de corrupción, narcotráfico, criminalización, entrega de soberanía, fraude electoral, atrofia de los servicios públicos e insatisfacción de las necesidades básicas de los hondureños. Este elemento aglutinador entre fuerzas políticas diferentes se expresó en las acciones e iniciativas de los primeros 100 días de gobierno, llenos de urgencias, desafíos y dificultades.

### **Las urgencias**

#### **Desmontaje del anterior estilo de gobernar**

El anterior mandatario, Juan Orlando Hernández, conocido como JOH, se caracterizó por el autoritarismo en la gestión estatal. Desarrolló un estilo basado en una cultura secretista con clara influencia militar, argumentando que una gran parte de la información del Estado debía clasificarse con diferentes niveles de secretismo por «motivos de seguridad», lo que llegaba a incluir reservas que violentaban las normas mínimas de transparencia. Pero no solo eso: también puso a su servicio a diferentes instituciones del Estado que le permitían criminalizar a quienes protestaban o lo cuestionaban, con diversos recursos que encubrían la tendencia a la represión directa. La derogación de la Ley de Clasificación de Documentos, conocida como Ley de Secretos, se convirtió en uno de los pilares desarticuladores del estilo autoritario de JOH para la nueva alianza de gobierno.

#### **Enfrentar problemas heredados del gobierno anterior**

El nuevo gobierno asumió funciones en condiciones de precariedad extrema en cuanto a falta de recursos presupuestarios, elevada deuda externa, nombramientos pendientes de personal de salud contratado para la pandemia,

demandas acumuladas de los transportistas y compromiso de los ingresos de la denominada tasa de seguridad durante el año 2022. Todo ello explotó en los primeros días de gestión y obligó al gobierno a centrarse en lo urgente, postergando lo importante, como el impulso de mecanismos de diálogo para encontrar soluciones y resolver las situaciones críticas evitando los enfrentamientos o la represión que eran usuales en el gobierno anterior.

### Reorganización del aparato estatal

El estilo anterior de hacer gobierno suponía una excesiva concentración de decisiones en el presidente de la República; duplicidad de funciones en varias instituciones; creación de muchas otras con funciones compartidas; creación de múltiples fideicomisos y establecimiento de alianzas público-privadas para impulsar proyectos que evadieran los procedimientos de la administración pública. Se volvía perentorio ordenar, desconcentrar, fusionar, eliminar y crear instituciones, lo cual se volvía más difícil luego del nombramiento de funcionarios según el esquema institucional heredado del gobierno anterior.

La decisión se produjo de forma paralela a la modificación del presupuesto que había quedado aprobado en diciembre de 2021 sin la participación de las autoridades recién electas; ambas decisiones, institucionales y presupuestarias, tomadas en el mes de abril de 2022, reflejan con claridad, aunque con cierta improvisación, las prioridades del gobierno, centradas en salud, educación, desarrollo agrícola y forestal, combate de la corrupción y desarrollo social.

### Demandas ciudadanas y compromiso electoral

Demandas sociales muy claras, recogidas en el plan de gobierno de LIBRE y sus aliados, son el combate de la corrupción, el abordaje del tema de la energía, con sus contratos oscuros y un alto precio para los consumidores, y lo relacionado con el vigente empleo por hora. La primera se abordó con la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia, presidida por el ex-fiscal general Edmundo Orellana Mercado. Las otras dos fueron objeto de una acción coordinada entre la presidencia de los dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, que condujo a la derogación de la Ley del Empleo por Hora y a la remisión al Congreso Nacional, por parte del Ejecutivo, de un proyecto cuyo nombre indica por sí solo el compromiso con el tema: «Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social».

### Presión de la clientela política

A lo largo de 12 años en el gobierno, el Partido Nacional logró ubicar a su clientela política en los diferentes niveles de la burocracia estatal. La avasalladora derrota de este partido en las últimas elecciones, sumada al grave problema de desempleo en el país, hizo que se produjera una enorme presión social sobre el nuevo gobierno por parte de los militantes y seguidores de LIBRE y del PSH, motivados por el triunfalismo de los resultados electorales y cierto espíritu de revancha, en un «ahora nos toca a nosotros». Esa presión fue intensa y obligó a varias instancias a iniciar procesos de despido y nuevas contrataciones, pese a las limitaciones presupuestarias y laborales. No se resolvieron a plenitud las demandas clientelares, pero se las logró aplacar, mientras se impulsa desde el gobierno un buen plan de empleo y se generaliza para el Estado la idea de una base laboral profesional y permanente, a salvo de los cambios de gobierno y de partido.

### Manejo policial de la inseguridad

La inseguridad ciudadana sigue siendo un problema grave en el país y en sus diversos componentes, no solo por el índice de homicidios, sino por los niveles de criminalidad. La nueva gestión parece estar avanzando en una tendencia al manejo policial de la seguridad, vislumbrando un tímido proceso de desmilitarización de la policía y de conducción de sus operaciones. Haber nombrado a un policía en la Secretaría de Seguridad es un avance, aunque falta mucho para consolidar la conducción civil, lo que se logrará cuando se nombre a un civil en esa Secretaría con verdadero poder de mando. De igual manera, es un buen inicio, aunque sin garantía de éxito, haber retirado el control del sistema penitenciario de manos de militares, e ir empujando a estos al desempeño de sus funciones primarias: la defensa de la soberanía e integridad territorial.

### Los desafíos

#### Pluralidad

La conformación de un gobierno producto de una alianza electoral supone una pluralidad en la conformación del gabinete y otros poderes del Estado y, sobre todo, la aceptación de este hecho como parte esencial de la relación entre fuerzas y personas que constituyen la base de la alianza. Es indudable que LIBRE es el partido mayoritario dentro de la coalición, el que representa la mayoría partidaria en el Poder Legislativo y el que conduce la alianza, aunque

no todos parecen entenderlo. De igual manera, el Poder Legislativo es el espacio plural por definición, donde coexisten todas las fuerzas políticas del país. El diálogo entre ellas forma parte del juego democrático, en especial cuando se necesitan consensos para la aprobación, eliminación o reforma de leyes que requieren mayoría simple o mayoría calificada. Las dificultades para aceptar y promover la pluralidad forman parte del déficit de cultura política democrática, por lo que esto se convierte en un verdadero desafío.

## Diversidad

La conformación del partido LIBRE está vinculada a la resistencia contra el golpe de Estado de 2009. De hecho, la agrupación se convirtió en el brazo político de la resistencia, en tanto se mantenía en el ámbito social y con total independencia de aquella. La diversidad ideológica se encuentra en la base de esta fuerza política, conformada por un sector del Partido Liberal seguidor del ex-presidente Manuel Zelaya. LIBRE cuenta con una importante presencia de movimientos sociales, en particular de mujeres, jóvenes, ecologistas, defensores de derechos humanos, artistas y un sector sindical de centroizquierda, antiguos comunistas y un sector estudiantil de izquierda radical. Es un partido diverso y como tal, está lleno de contradicciones internas que se expresan también en el ámbito externo. Aceptar la diversidad es un desafío tanto para este partido como para sus contendientes.

Es importante, en este sentido, ver cómo quedó conformado el gabinete de gobierno: salvo dos o tres integrantes con ideología de izquierda, actual o pasada, el resto de los ministros proviene de las distintas fuerzas que constituyen LIBRE. Es un gabinete diverso, que mezcla a personas de poca y mucha experiencia, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, en un espectro de diversidad etaria, de género, social y política que vale la pena observar, analizar y dar seguimiento. Por lo pronto es adecuado señalar el gobierno de Xiomara Castro como un gobierno de centroizquierda, el cual, junto con el PSH, en particular su bancada en el Congreso Nacional, fácilmente pueden tildarse de revolucionarios por solo la mitad de las reformas que piensan encarar para desmontar todo el andamiaje de corrupción y narcotráfico del gobierno anterior, de corte claramente conservador, cínico y retardatario.

## Pragmatismo

El nuevo gobierno recibió un país en condiciones críticas en lo económico, social, sanitario, educativo, ecológico y ético. El incremento de la pobreza y la falta

**La conformación del partido LIBRE está vinculada a la resistencia contra el golpe de Estado de 2009**

de empleo demandan un proceso de recuperación económica, al igual que la migración, que exige la creación de condiciones económico-sociales para que la población económicamente activa no abandone el país. De igual manera, el combate contra la corrupción y el narcotráfico requieren de un gran esfuerzo nacional y de colaboración internacional para su correcto y completo abordaje.

En estas condiciones de limitación y desigualdad, es importante desarrollar una visión pragmática que permita mantener relaciones de cooperación con dignidad e independencia con los diferentes países de la región, del continente y del mundo. Un cuestión sensible, que requiere de mucho pragmatismo, es la relación con EEUU, país con el que se puede compartir, y de hecho se comparte, una agenda con respecto a los temas planteados, en tanto ambas partes asuman que el abordaje de esos temas es de interés mutuo y que hay una línea de respeto y reconocimiento de la voluntad soberana que no debe romperse por ningún motivo.

## Bienestar

Un desafío fundamental para el gobierno de Xiomara Castro es elevar los indicadores de bienestar de la población hondureña. Ello pasa por mejorar la satisfacción de necesidades básicas y de servicios públicos. El nivel de satisfacción/insatisfacción es fundamental para determinar el ritmo de la migración, pero abordarlo requiere de recursos, voluntad política y cooperación con otras instancias y países. Eliminar o, por lo menos, reducir la desigualdad en todas sus manifestaciones es un tema de anclaje de los

**Los servicios públicos, en particular la provisión de energía, reclaman un abordaje riguroso, inmediato y responsable**

potenciales migrantes, que así saben que pueden encontrar en el país las oportunidades que necesitan.

Los servicios públicos, en particular la provisión de energía, reclaman un abordaje riguroso, inmediato y responsable. Demasiados años de saqueo y de voracidad de los empresarios nacionales e internacionales involucrados convirtieron a la empresa proveedora en la mayor atracadora de los consumidores, lo que amerita una auditoría forense conformada por expertos nacionales e internacionales que concluya indicando los nombres, para deducir responsabilidades, de todos los responsables del descalabro de esa empresa del Estado llamada a ser altamente rentable.

## Conducción

Todos los desafíos descritos anteriormente necesitan de una clara, directa y consistente conducción de los procesos y cambios que el país necesita.

Quienes conforman el gabinete y ejecutan la política interior y exterior del país, con sus diferencias etarias, de género, políticas y sociales, deben saber que su autonomía se reduce al interior de su espacio, pero que hacia afuera de este y del país, ellos son la expresión de la voluntad de la presidenta de la República, que conduce todo el proceso con sus políticas. En este contexto puede haber mucha pluralidad, diversidad y pragmatismo, pero todos deben estar alineados con las directivas que emanan de la presidenta —de ella y de nadie más— y sustentados en el plan de gobierno.

Este es un desafío mayor cuando hay personalidades fuertes que consideran que les corresponde decidir lo que se hace o no se hace dentro de sus despachos, olvidando que, en el Ejecutivo, todos los subalternos ejecutan los lineamientos de política que emanan de la Presidencia, siempre y cuando sean congruentes con la legalidad y la justicia. Esto vale también para policías y militares, que forman parte del Ejecutivo, aunque por ratos pareciera que lo olvidan.

### **Retos en política exterior<sup>1</sup>**

En Honduras hay tres asuntos de alta sensibilidad política y social que deben ser trabajados en el plano interno e internacional: narcotráfico, migración y corrupción. Con EEUU hay coincidencia total en los dos primeros, pero coincidencia a medias en el tercero; esto es así porque la preocupación por la corrupción es común en el momento en que afecta a la seguridad de EEUU, al igual que, particularmente, lo hace el narcotráfico, cuya gestión, además, drena en Honduras recursos destinados a satisfacer necesidades básicas de la población, disminuye la atención de estas y se convierte en un factor de expulsión de migrantes.

El combate contra el narcotráfico fue un punto de colaboración entre el ex-mandatario Hernández y el ex-presidente Donald Trump, lo cual se tradujo en una lucha contra los demás narcotraficantes y el mantenimiento de cierta impunidad sobre la propia actividad ilícita de la cual se acusa hoy al primero. Esta colaboración en el combate al narcotráfico trae consigo un asunto muy sensible: el involucramiento de militares hondureños en esta tarea, que es estrictamente policial y judicial. En la experiencia de la colaboración citada, el involucramiento se produjo a través de la fuerza del Ejército y, según se percibe, la actual se va a llevar a cabo a través de la Fuerza Aérea, la más profesional de las Fuerzas Armadas.

---

1. En esta sección retomamos el artículo «Honduras 2022. Los retos de la gobernabilidad en el contexto poselectoral», Análisis Carolina N° 6, Fundación Carolina, Madrid, 17/3/2022.

La migración, por su parte, fue objeto de negociación entre EEUU y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) y se ubicó en la agenda de seguridad cuando debería haberse colocado en la agenda del desarrollo. Esto se tradujo en la ubicación de militares y policías como actores claves en la contención de la migración a lo largo de la ruta migratoria, que inicia en la frontera entre Honduras y Guatemala y se extiende hasta la frontera de México con EEUU, pasando por la frontera entre Guatemala y México. La situación, llevada al extremo, hizo que las caravanas de migrantes que salían de Honduras se toparan con militares y policías que les impedían salir del país, en tanto en los demás países les impedían continuar.

La inserción de la migración en la agenda del desarrollo parte, en cambio, del reconocimiento de que las personas se van porque no encuentran en su país de origen las condiciones básicas para vivir, conseguir empleo y tener acceso a salud, educación o seguridad social, entre otras necesidades. Por tanto, desde este punto de vista, la solución es crear esas fuentes en el país gracias a una buena inversión en desarrollo, con fuertes controles para eliminar o reducir sustancialmente la corrupción que pueda repercutir de manera negativa sobre esa inversión. Este es un punto en común con los intereses de EEUU, que propicia la inversión en áreas estratégicas que terminarían reduciendo la migración hacia ese país.

**El combate contra la corrupción puede llevar a conseguir apoyo estadounidense y/o de organismos internacionales**

El combate contra la corrupción puede llevar a conseguir apoyo estadounidense y/o de organismos internacionales para instalar en Honduras, como se ha mencionado, una comisión de apoyo en la lucha anticorrupción similar a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que se estableció con apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), o a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que se instaló con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De esta manera, ambos países saldrían ganando.

El establecimiento de relaciones con China continental es una cuestión que queda pendiente, pese a haberse proclamado como prioridad en la campaña electoral del partido LIBRE. Es natural pensar que, al establecer alianzas electorales, los participantes terminen haciendo recortes en algunos temas, y este es uno que se pospondrá algún tiempo, en tanto China se dispone a intensificar su financiamiento en algunos rubros y EEUU se prepara para hacer lo mismo para compensar la relación de Honduras con China.

Las relaciones con el resto de los países de Centroamérica se encuentran en un momento de cierta lejanía. El vínculo con Guatemala se mantiene frío. Con El Salvador hay una cierta coincidencia, derivada quizás de las fuertes críticas de

su presidente hacia el ex-presidente Hernández y de su colaboración con varios alcaldes hondureños en la provisión de vacunas contra el covid-19, en momentos de muchas dificultades en el país para conseguirlas. Resulta así oportuno destacar que, pese a no existir un acercamiento oficial entre los gobiernos de Honduras y El Salvador, los alcaldes de las principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se preparan para recibir y rendir homenaje al presidente Nayib Bukele por, como se ha mencionado, la ayuda que brindó a varias municipalidades del país durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia.

Con Nicaragua, la anterior relación cercana se ha enfriado bastante, sin llegar al punto de condenar o romper por la grave situación de la gobernabilidad en ese país. Se mantiene una discreta lejanía, que no llega a la condena por las irregularidades político-electorales cometidas por el gobierno nicaragüense ni por el desprestigio nacional e internacional en el que se ha sumido por las violaciones a los derechos humanos de críticos y opositores. Pero tampoco llega, ni va a llegar en el futuro cercano, a una cercanía que derive en un posicionamiento común en materia regional e internacional. La cercanía de EEUU y los intereses en juego, entre ellos el establecimiento de relaciones de esos dos países con China, puede actuar como un elemento disuasivo coyuntural.

## Conclusiones

Con el triunfo electoral de la alianza encabezada por Xiomara Castro, se abre una real esperanza de cambio en Honduras. El control del poder político durante 12 años consecutivos por parte del Partido Nacional le dio un giro conservador al gobierno y produjo un notable retroceso en las instituciones democráticas, una excesiva concentración de poder en el Ejecutivo, una manipulación personal y partidaria de los otros poderes del Estado, un debilitamiento del Estado de derecho, escasa atención a las necesidades básicas y servicios públicos y una contaminación generalizada por corrupción y narcotráfico, entre otros. Desmontar ese andamiaje, darle un giro al estilo de gobernar y de hacer política, cumplir con la oferta electoral, eliminar el sentimiento de indefensión, hacer que la sociedad recupere la esperanza y dejar en claro que se acabó la impunidad para todos los delincuentes es sencillamente algo tan grande que va más allá de la aplicación de estereotipos ideológicos a un gobierno que se propone enfrentarlo.

Desmontar 12 años de gobiernos conservadores, corruptos, manipuladores e ineficientes supone un esfuerzo tan grande como difícil, lleno de urgencias, desafíos y dificultades que involucran al nuevo gobierno, a los demás poderes del Estado, al partido LIBRE, al resto de los partidos

de la alianza, a todos los partidos con representación en el Congreso Nacional, a la ciudadanía que apoyó con sus votos, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, a la cooperación internacional y a la misma empresa privada que no esté contaminada. Superar ese camino tortuoso supone una clara y precisa conducción política desde la Presidencia de la República, en torno de la cual todos los funcionarios y empleados deben regir su desempeño y alinearse con los planes y proyectos a ejecutar.

Algunos insisten en ubicar a Honduras en la oposición entre izquierda y derecha. El recurso a la ideologización utilizado por el conservador Partido Nacional y sus cómplices de la empresa privada, medios de comunicación e iglesias provocó la polarización de la sociedad hondureña, la criminalización de la protesta y el retroceso democrático durante muchos años. Superar la desigualdad y la pobreza que asfixian a hondureños y hondureñas y los obligan a migrar hacia otros países requiere de un enorme esfuerzo y de realizar en el país un salto cualitativo hacia adelante, esfuerzo en el cual deben sumarse todos los que quieran cambiar el desastre de país que nos dejaron el conservadurismo y el cinismo del Partido Nacional y sus líderes.

La tarea de la alianza que encabeza la nueva presidenta de la República es de gran envergadura y todos los esfuerzos tienen que concentrarse, hacia adentro, en desmontar lo viejo y montar lo nuevo, en una tarea constante y creciente durante los cuatro años de gobierno. Hacia afuera, el reto es construir e impulsar una política exterior congruente con la política interior, articulando con la necesaria sabiduría el pragmatismo con la dignidad, pero nunca con la complicidad. ☐



## REVISTA DE CULTURA Y CIENCIAS SOCIALES

2021

Gijón

Nº 110

### PAISAJES PORTUARIOS Y RELACIONES PUERTO CIUDAD EN EL ÁMBITO ATLÁNTICO

#### SUSCRIPCIONES

Suscripción personal: 39 euros

Suscripción bibliotecas e instituciones: 50 euros

Suscripción internacional: Europa - 66 euros (incluye gastos de envío)

América y otros países - 90 euros (incluye gastos de envío)

Suscripción digital: 22 euros

*Ábaco es una publicación trimestral de CICEES, C/ La Muralla Nº 3, entlo. 33202 Gijón, España. Apartado de correos 202. Tel./Fax: (34 985) 31.9385. Correo electrónico: <revabaco@arrakis.es>, <revabaco@telecable.es>. Página web: <www.revista-abaco.es>.*

# Una vida entre los archivos soviéticos

*Entrevista a Sheila Fitzpatrick*

Mariano Schuster

Sheila Fitzpatrick (Melbourne, 1941) es una de las historiadoras más importantes e influyentes de la actualidad. Dedicada al estudio de la historia de la Rusia soviética desde hace más de 50 años, ha hecho grandes contribuciones a la comprensión de la vida del campesinado y de la población industrial durante el estalinismo, a la vez que ha abordado cuestiones asociadas a la clase y la movilidad social en la Unión Soviética.

Profesora de Historia en la Universidad de Sídney y profesora emérita de la Universidad de Chicago, Fitzpatrick se ha destacado por la puesta en

práctica de una «historia desde abajo» que permite ver aspectos decisivos y particulares de la vida cotidiana en la URSS. En contraste con el modelo propuesto por la «escuela del totalitarismo» —que tendía a analizar el mundo soviético «desde arriba», considerando que alcanzaba con conocer las decisiones del Estado, los líderes y el Partido—, Fitzpatrick centró sus estudios en las relaciones sociales de los ciudadanos y en las complejas interacciones de estos con las instancias gubernamentales, incluidos los resquicios en los que las órdenes estatales eran desafiadas de distintos modos.

---

**Mariano Schuster:** es periodista. Es editor de la plataforma digital de *Nueva Sociedad*. Fue jefe de redacción de las publicaciones socialistas argentinas *La Vanguardia* y *Nueva Revista Socialista*. Colabora con medios como *Letras Libres* y *Le Monde diplomatique*, entre otros. Es coautor de Mario Bunge y Carlos Gabetta (comps.): *¿Tiene porvenir el socialismo?* (Eudeba, Buenos Aires, 2013).

**Palabras claves:** historia desde abajo, Sheila Fitzpatrick, Rusia, Unión Soviética.

**Nota:** transcripción y adaptación del inglés de Mariano Grynszpan; traducción de Mariano Schuster.

Reconocida internacionalmente por libros como *Lunacharski y la organización soviética de la educación y de las artes (1917-1921)*<sup>1</sup>, *La Revolución Rusa*<sup>2</sup>, *La vida cotidiana durante el estalinismo*<sup>3</sup> y *El equipo de Stalin*<sup>4</sup>, acaba de publicar *The Shortest History of the Soviet Union* [Brevisima historia de la Unión Soviética], que será publicado próximamente en español y portugués.

En esta entrevista, Fitzpatrick repasa su obra y su vida entre archivos soviéticos, comenta sus influencias y sus modos de hacer historia, y se adentra en algunos de los grandes debates contemporáneos que tienen como eje a la Rusia de Vladímir Putin.

*Su último libro, The Shortest History of the Soviet Union, fue publicado a 30 años de la caída de la Unión Soviética y en un contexto en el que Rusia y sus vecinos vuelven a estar en el centro de los debates sobre la política global. ¿Por qué es importante volver sobre la historia soviética?*

Si quisiera entender el presente, lo primero que abordaría como lectora de este libro serían, de hecho, los últimos capítulos. En ellos relato y analizo la ruptura y la caída de la URSS. Entender la desintegración de la URSS, así como las formas y las causas por las que se produjo ese proceso, resulta muy relevante para comprender el presente.

Desde mi punto de vista, la importancia de este libro es diferente, dado que yo, obviamente, no soy su lectora sino su autora. Me lo encargaron en 2020 y lo escribí en 2021. Y lo que me resultó realmente interesante fue el hecho de que, con el colapso de la URSS, esa historia tuvo un principio y un final. Normalmente, escribimos historia y no hay un final, se trata de un proceso continuo que se sostiene en el tiempo. Pero en esta historia contamos con un principio y un final que puede delimitarse con nitidez. Eso impone una perspectiva distinta a la de otros episodios históricos. Y ese es el interés para mí: dar un paso atrás y ver esa historia como algo finito y no como un proyecto en curso.

*Su padre, Brian Fitzpatrick, fue un destacado activista por los derechos civiles, además de un socialista democrático que, como usted misma ha dicho, gustaba de escandalizar a la burguesía. ¿Cuánto influyó en usted el contexto familiar a la hora de definir la historia soviética como su campo de estudio?*

Me influyó, aunque no siempre de forma directa. Yo identificaría dos cuestiones muy particulares. Una es que, siendo una adolescente, en la década de 1950, desarrollé el tipo de crítica que realizan los jóvenes de esa edad a todos los aspectos posibles de la vida

1. [1977] Siglo Veintiuno, Madrid, 2017.

2. [1982] Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2005.

3. [1999] Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2019.

4. *El equipo de Stalin. Los años más peligrosos de la Rusia soviética, de Lenin a Jrushchov*, Crítica, Barcelona, 2016.

de sus padres. En ese sentido, comencé a desafiar a mi padre, no tanto en sus creencias políticas fundamentales —que estaban asociadas y vinculadas profundamente a la lucha por las libertades civiles—, sino en relación con algo bastante periférico para él: su admiración por la URSS. O al menos su esperanza de que la URSS fuera en algún momento digna de un sentimiento de ese tipo. No sabía mucho sobre esa experiencia, pero al igual que otras personas de izquierda sentía que probablemente la URSS estaba siendo calumniada por la prensa capitalista y eso lo llevaba a algún tipo de apoyo. Yo consideraba que él no tenía suficiente información y por eso lo acibillé un poco con mis cuestionamientos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era extremadamente difícil formarse una opinión sobre la URSS porque la bibliografía disponible no solo era escasa, sino completamente contradictoria. Se trataba de libros partidistas a favor o en contra, y resultaba imposible comprender lo que realmente había ocurrido o estaba ocurriendo allí. Y ese me pareció un reto interesante.

La segunda cuestión que influyó en mi decisión de dedicarme a la historia rusa es que, en la Universidad de Melbourne, donde yo cursaba Historia, había que estudiar una lengua extranjera. Yo quería aprender alemán, pero no me dejaron hacerlo porque no tenía una base previa —dado que no lo ofrecían como parte de la currícula en mi escuela secundaria—. Así que mis padres me sugirieron que estudiara ruso. El motivo que estuvo detrás fue

el emblemático episodio de la Guerra Fría en Australia: la desertión del diplomático soviético Vladímir Petrov, que llevó a la creación en 1954 de una Comisión Real de Espionaje [*Royal Commission on Espionage*]. En el ambiente de histeria que siguió, algunos miembros del Parlamento empezaron a cuestionar la lealtad de la persona que dirigía el Departamento de Lengua y Literatura Rusa de la Universidad de Melbourne. Se trataba de una especie de campaña de difamación legalmente permitida. Era una rusa llamada Nina Mikhailovna Christesen, casada con el director de una revista literaria que era amigo de mi padre. Mis padres, como otros miembros de la intelectualidad de izquierdas con hijos en edad universitaria, me sugirieron que estudiara ruso para que el número de alumnos de Nina aumentara y las cosas fueran más fáciles para ella. Así que eso hice. Hice el primer curso de ruso, que era todo lo que se requería. Pero después de terminar ese curso, pensé: «No sé lo suficiente del idioma para que sea útil. Haré también el segundo año». Y, de hecho, cursé el segundo año en ruso, lo que me proporcionó suficientes conocimientos de lectura como para arriesgarme a tratar un tema utilizando fuentes rusas para mi ensayo de investigación de cuarto año en Historia. Y eso me llevó a convertirme en una historiadora de Rusia.

*Pese a que usted es muy reconocida por sus trabajos sobre el estalinismo, y también por su libro La Revolución Rusa, su primer trabajo estuvo dedicado a la*

*figura de Anatoli Lunacharsky, el Comisario del Pueblo para la Educación tras la Revolución de Octubre. ¿Por qué la atrajo ese personaje tan particular?*

No fue exactamente porque fuera mi héroe, aunque lo miraba con interés y, en general, con benevolencia. Pero sí había algunas buenas razones para abordar un estudio sobre Lunacharsky. En primer lugar, en la URSS acababan de empezar a publicar sus obras completas. Es decir, estaban publicando el material necesario para desarrollar una biografía intelectual, que es lo que yo inicialmente pensaba escribir. En las bibliotecas de Oxford podía encontrar buena parte del material prerrevolucionario, pero entonces los soviéticos estaban publicando una colección bastante completa de sus escritos posteriores a la Revolución. A medida que me adentré en el tema, me alejé bastante de Lunacharsky como intelectual y, por lo tanto, de mi proyecto biográfico inicial. Se trataba de un divulgador, básicamente muy ecléctico, que recogía muchas ideas y las entrelazaba muy rápidamente en una especie de narración que no solía ser muy profunda. Sin embargo, su actividad como Comisario del Pueblo para la Educación (una suerte de comisario de la Ilustración), me resultó profundamente interesante, especialmente después de mi llegada a la URSS para investigar. Y terminé escribiendo mi disertación sobre eso.

Había otro aspecto que me interesó en Lunacharsky y era el que se vinculaba con su papel de autoproclamado mediador entre la intelectualidad y el

Partido Comunista. Creo que esto tenía algo que ver con mi padre, quien, de hecho, había desarrollado un papel político informal en Australia como mediador de trastienda, alguien que no era miembro de ningún partido político pero que mantenía contactos con comunistas, así como con figuras del Partido Laborista e incluso con algunos liberales. Hoy en día, no estoy segura de si admiraba el papel de mediador de mi padre o lo criticaba, pero me interesaba como autodefinición y *modus operandi*.

En 1966 fui a la URSS para un año de investigación como estudiante de intercambio británica, con la esperanza de que me permitieran trabajar en los documentos personales de Lunacharsky, que estaban en los archivos del Partido Comunista. A los soviéticos no les gustaba dar acceso a los archivos de la época soviética a los extranjeros y me negaron la consulta. Sin embargo, tras algunos meses de lucha, me permitieron ingresar en los Archivos Estatales, considerados menos sensibles políticamente, para trabajar en los archivos del ministerio de Lunacharsky (Narkompros) de la década de 1920. Esos materiales del Narkompros eran absolutamente fascinantes. A través de ellos aprendí sobre Lunacharsky, pero sobre todo empecé a entender cómo funcionaba la política en la URSS. La idea predominante sobre la URSS, encapsulada en el modelo totalitario, sostenía que toda la política se formulaba en el Politburó y luego se transmitía hacia abajo. Pero lo que descubrí en los archivos fue que el Ministerio de Educación

formulaba políticas (al igual que otros ministerios, departamentos del Comité Central del Partido, etc.) y luego intentaba presionar al Politburó, al gobierno, al Consejo de Ministros y a las personas que lo integraban para que sus políticas fueran aprobadas. A veces tenían éxito y otras no, pero yo estaba viendo un proceso político que el modelo totalitario simplemente no permitía ver.

*Cuando usted comenzó sus estudios historiográficos sobre el comunismo soviético, esa perspectiva de la «escuela del totalitarismo» era predominante en la soviología. Sin embargo, usted adoptó una postura diferente, enfocándose en una «historia desde abajo», que atendía y hacía eje en la vida cotidiana. ¿Cuáles eran sus críticas o sus reparos hacia ese paradigma y por qué eligió abordar la historia soviética desde un enfoque societal?*

Mis primeros encuentros negativos con el «modelo del totalitarismo» se produjeron a partir de mi trabajo de archivo en la URSS. Eso sucedió antes de que me fuera a Estados Unidos, a principios de la década de 1970. Sin embargo, cuando me afiqué allí, la cuestión se volvió más importante para mí porque los estudios soviéticos en EEUU estaban entonces dominados por politólogos cuyo modelo favorito era el del totalitarismo. Era un campo muy politizado en la Guerra Fría, y el «modelo del totalitarismo» —basado en la idea de la similitud esencial entre el sistema soviético y el de la Alemania

nazi— no solo servía a los fines académicos, sino también políticos.

Mi decisión de hacer «historia desde abajo» no se produjo durante mi primer periodo de investigación en la Unión Soviética, sino después de mudarme a EEUU. Eso reflejaba, en primer lugar, lo que estaba sucediendo en la historiografía profesional en su conjunto. Todos se dirigían hacia la historia social, que había sido cuantitativa, pero en ese momento estaba pasando a ser más cualitativa. Hacer historia social entonces era como hacer historia cultural en los años 90: todo el mundo se sentía atraído por ella. En el caso soviético, existía una cuestión adicional. Si la historia se escribía considerando que todo venía «desde arriba», hacer historia era muy fácil: se podían leer todas las declaraciones oficiales, las resoluciones del Comité Central, las leyes del Consejo de Ministros y decir: «Perfecto, esto es lo que ha pasado». Si, por ejemplo, alguien estaba interesado en el campesinado, podía leer todas las leyes y resoluciones relativas al campesinado y deducir la situación real. Pero las cosas no funcionaban de ese modo en la URSS. Como percibí más tarde con bastante cinismo, las leyes y las instrucciones eran a menudo más útiles para el historiador social por una especie de lectura inversa: te decían cómo las autoridades querían que fueran las cosas, no cómo eran; y sus listas de prohibiciones eran a menudo una excelente guía de los tipos de prácticas que eran habituales en la vida real.

Pensé que hacer historia desde abajo también era un reto especialmente interesante en la historia soviética porque nadie había intentado hacerlo antes. No estaba muy claro cuáles serían las fuentes, aunque era evidente que eran inadecuadas, especialmente para los años 30 y 40. Pero ¿era posible o no? Me gustan bastante los retos, así que pensé que podría ser factible. Pensé que podría ser factible incluso en lo que se refería a los archivos soviéticos, a pesar de todos los problemas de acceso a los archivos para los extranjeros, que incluían no poder ver nunca los catálogos o inventarios y, por tanto, tener que adivinar qué tipo de material podían contener los archivos. Sin embargo, a mediados de los años 70 yo era al menos una persona conocida, así que supuse que no iba a ser tan difícil. Ciertamente, los soviéticos estaban mucho más dispuestos a entregar el material relacionado con cuestiones sociales que políticas. Les preocupaba mucho que la gente buscara información sobre Trotsky o sobre Bujarin. Esas eran sus obsesiones. También podía ser un problema si se buscaba material sobre el campesinado en la época de la colectivización. Pero obtuve una buena cantidad de material, en particular sobre los sindicatos y la industria pesada a finales de los años 20 y 30. Lo que yo buscaba, en realidad, era analizar y comprender los procesos de interacción entre los trabajadores de base y la administración de las empresas. Y pude conseguirlo con esos materiales.

A la vez, descubrí que me interesaba la cuestión de la movilidad social ascendente. Cuando trabajé por primera vez sobre la educación en torno de Lunacharsky, se me hizo evidente que la cuestión de dar «preferencia a los proletarios» ocupaba un lugar muy destacado y nadie tenía un marco teórico en el que colocar esta cuestión. Lo que los soviéticos decían era que estaban dando poder a la clase obrera a través del partido. Pero lo que hacían en realidad, y que tenía cierta resonancia en los trabajadores reales, era ofrecer oportunidades de movilidad ascendente a los trabajadores pero, sobre todo, a sus hijos. Les daban preferencia en la admisión a la educación superior, por ejemplo. Pensé que era un fenómeno realmente interesante y que merecía la pena estudiarlo, y que era viable hacerlo pese a las limitaciones de acceso a los archivos.

Los soviéticos, por supuesto, habrían rechazado el término «movilidad social ascendente». No reconocían esa noción y, seguramente, no habrían estado a gusto con esa interpretación de las «reglas de preferencia proletaria». Sin embargo, tenían su propio enfoque que sus historiadores llamaban «formación de la *intelligentsia* soviética». Ahora bien, la «formación de la *intelligentsia* soviética» significa, entre otras cosas, el ascenso social de gente de origen obrero y campesino. Por lo tanto, bajo ese título de formación de la *intelligentsia* soviética pude conseguir material de archivo sobre la movilidad social ascendente.

*En «New Perspectives on Stalinism» [Nuevas perspectivas sobre el estalinismo], un artículo publicado en The Russian Review en 1986, usted planteó, en consonancia con su crítica al modelo propuesto por la escuela del totalitarismo, que era posible pensar el estalinismo «desde abajo». Luego, efectivamente, fue lo que usted misma hizo y plasmó en su libro La vida cotidiana durante el estalinismo. ¿Qué modificaciones concretas implicó ese estudio sobre el estalinismo para comprender las formas del régimen? ¿Qué cuestiones salieron a la luz que no habían sido atendidas hasta entonces?*

Como historiadora, siempre dudo de los modelos. Por lo tanto, lo que yo pretendía no era desarrollar uno alternativo al del totalitarismo, sino evidenciar y dar cuenta de aquellos aspectos que ese enfoque no permitía ver. En ese sentido, tampoco expresé mis ideas y mis análisis sobre el funcionamiento de la política soviética en términos de modelo. Al abordar la cuestión del funcionamiento de la sociedad, la imagen que ofrecí fue la de una amplia estructura institucional creada y controlada por el Estado, y la de individuos que no solo operaban dentro de esa estructura, sino en sus intersticios. En otras palabras, pretendí reflejar que para conseguir lo que necesitaban para la vida, las personas debían tener en cuenta esa estructura oficial y utilizarla de manera voluntaria o involuntaria. Para todo tipo de cosas necesitaban de esa estructura: para conseguir bienes de consumo, para hacer que los hijos recibieran una

educación adecuada, etc. Allí operaban en los intersticios por medio de conexiones personalistas.

Es importante destacar la importancia del término soviético «*blat*». *Blat* es un sistema de intercambio recíproco de favores: yo tengo la oportunidad de hacer ciertas cosas por ti debido a mi posición; tú, en cambio, tienes otras oportunidades y puedes hacer otras cosas por mí. Pero no es una relación cruda que se pueda monetizar y tampoco la contrapartida tiene que ser inmediata. No, es un balance continuo. De hecho, en esa economía de favores nos consideramos amigos, aunque hasta cierto punto se trate de una amistad instrumental. Esa forma de operar, de la que me da cuenta porque estuve en la URSS en los años 60 y la observé de manera directa, fue muy importante, en mi opinión, desde el principio. Es interesante que en China, donde se utiliza el término «*guānxi*» para definir este tipo de economía de favores, el sistema prevalece y muchos lo remontan a las raíces tradicionales chinas. Lo cierto es que allí tienen una estructura institucional y unas respuestas similares, formas análogas de lidiar con ella y de evadirla para desarrollarse.

*Usted escribió un libro sobre la cúspide de poder del estalinismo. Me refiero a El equipo de Stalin, que usted misma definió como «una especie de etnografía del Politburó». ¿Por qué decidió, luego de trabajar la vida cotidiana, desarrollar un estudio sobre la estructura de poder en el estalinismo?*

Nuevamente hay una serie de razones, pero quizás podría mencionar simplemente la principal: me gusta hacer cosas que no he hecho antes y no me gusta que me encasillen. Yo ya había pasado de ser historiadora cultural —o, más bien, historiadora de instituciones culturales— a trabajar en el campo de la historia social. Es decir, no me había mantenido en un solo campo.

Pero sobre esta cuestión específica, siempre había sabido algo sobre el Politburó en los años 20 debido a que, durante décadas, había cultivado una estrecha amistad con Igor Sats, el secretario de Lunacharsky. Sats había conocido a Trotski, a Stalin, a Bujarin y solía hablarme de ellos, por lo que yo tenía una imagen de aquellos personajes y de sus interacciones personales que no estaba plasmada en la bibliografía de entonces. En particular, solía conversar sobre ello con el politólogo Jerry Hough, con quien entonces estaba casada. Jerry siempre me decía: «Deberías escribir esto porque da una imagen de la política soviética que simplemente no tenemos». Pero no lo hice porque quería hacer historia social. Mucho después de que Jerry y yo nos divorciáramos —de manera muy amistosa—, pensé: «¿Por qué no hacerlo?». Pero también pensé que algo de lo que había comprendido, a partir de mi trabajo sobre la vida cotidiana bajo el estalinismo, sobre la forma de hacer las cosas era, de hecho, perfectamente aplicable, por lo que me dije: «Si miro al Politburó, si aportó al Politburó soviético un cierto grado de conocimiento de segunda

mano de las personalidades y un buen sentido de cómo operaba la gente en la URSS, podría hacer un trabajo de historia política realmente interesante». Y consideré que quizás esto podía aportar algo a la forma en que vemos y pensamos al propio Stalin. Porque ha habido una gran cantidad de estudios sobre Stalin, pero casi todos son biográficos. Yo no pretendía anular ese trabajo, ni decir «No, es el Politburó el que dirige todo, no Stalin». Intentaba ver cómo encajaba el Politburó en el sistema estalinista.

Stalin se reunía con los miembros de su Politburó (o a veces con un órgano *ad hoc* que se solapaba con el Politburó formal) prácticamente todos los días durante varias horas. Eso significa que el Politburó tenía una función que Stalin consideraba importante. Stalin era un hombre muy trabajador y era imposible pensar que fuera a pasar tiempo con ellos a menos que el Politburó tuviera un objetivo y una tarea definidos. Ese fue mi punto de partida: que el Politburó tenía que tener funciones y tareas de gobierno porque, de otra manera, Stalin no habría pasado tiempo dialogando a diario con sus miembros. Y estaba muy claro que pasaba tiempo allí porque los registros de su oficina estaban disponibles. Cada hora de su día en la oficina quedó registrada. Eso me permitió desarrollar mi trabajo, sobre todo porque esos registros estaban también publicados en Australia, y cuando comencé a trabajar el tema, me encontraba allí y viajaba periódicamente a la URSS.

*Permítame preguntarle sobre su propia historia como investigadora. ¿Cómo fue trabajar en los archivos soviéticos?*

Era difícil. Lo fue especialmente en los años 60 y 70 porque no entregaban catálogos ni guías. No decían qué material tenían. Tampoco lo publicaban. Así que había que hablar con un empleado de los archivos y decirle: «Mi tema es tal y tal, y quiero tal y tal material». Entonces, por supuesto, podían entenderte mejor o peor, y podían ser más o menos colaborativos. Era realmente complicado conseguir material de esa manera, a punto tal que, en el proceso, aprendí mucho sobre la burocracia y los archivos. Si pedías, por ejemplo, las actas de las reuniones de una determinada institución, pero las actas se llamaban protocolos, puede que no las trajeran a no ser que les cayeras bien. Pero si decías «Quiero protocolos» y tenían protocolos, a menudo se sentían obligados a traerlos. Y una vez que tenías los protocolos o las actas, entonces podías continuar mejor el trabajo, fecha por fecha. Ahora bien, muchos de los archivistas, esos funcionarios subalternos con los que traté, fueron de una enorme ayuda. Hicieron lo que pudieron por mí y, a menudo, con muy buena predisposición. Puede que tuvieran la sospecha de que, en los intercambios académicos, las potencias occidentales enviaban espías que se hacían pasar por historiadores. Sin embargo, si te veían trabajar regularmente durante un largo tiempo, se convencían de que realmente estabas escribiendo sobre historia. Veían que

estabas haciendo tu trabajo y que no estabas simplemente sentada ahí. En mi caso, evidentemente, decidieron que yo era una verdadera historiadora.

Me gustaría contar una historia curiosa sobre esta cuestión. Algo que me sucedió ya en los años 80, una época en que durante bastante tiempo viajé a la URSS casi cada año. Un día, en el paquete de carpetas que recibí, había una sobre el uso de mano de obra de convictos en la industria pesada, un tema tabú. Yo estaba entonces trabajando sobre la industria pesada. Miré ese archivo y me dije: «Es increíble. Yo no pedí esto». Pero me senté, lo leí y tomé notas detalladas. Y luego volví y dije: «¿Puedo tener el siguiente año de la misma serie?». Pero, ciertamente, nunca obtuve más. En definitiva, parecía una cosa extraña que me había llegado y que me permitía llenar un vacío porque, por supuesto, el material sobre el uso de la mano de obra de convictos no era parte del archivo de acceso abierto. Muchos años más tarde, ya a finales de los 80, en tiempos de la perestroika, me encontré en una ocasión social con la subdirectora del archivo. Entonces, ella me dice: «¿Le gustó el regalo que le envié?». Y yo le pregunté: «¿Qué regalo?». Y ella respondió: «Le envié unas cositas sobre el trabajo de los convictos». Y mientras la miraba sorprendida, ella me explicó: «Lo hice porque vi que era muy trabajadora, siempre estaba trabajando. Pensé que eso merecía un reconocimiento».

*En su autobiografía* A Spy in the Archives: A Memoir of Cold War Russia

*[Una espía en los archivos. Memorias de la Rusia de la Guerra Fría], narra el momento que da título al libro: el de la acusación en 1968 en el periódico Sovetskaya Rossiya de ser una «saboteadora ideológica», una espía para Occidente disfrazada de académica. ¿Qué supuso para usted esa acusación y cómo transitó ese periodo?*

No fue tan malo como parece o, en realidad, como podría haber sido. La realidad es que se equivocaron con mi nombre o, más bien, no sabían que yo era la persona de la que estaban hablando. Esto necesita un poco de explicación. Yo nací Fitzpatrick y publiqué mis artículos utilizando ese apellido. Pero me casé en Gran Bretaña con un hombre llamado Alex Bruce. Y pese a que yo hubiese deseado mantener mi apellido en el pasaporte británico, los británicos no lo permitían. Dijeron: «Usted es la señora Bruce». Así que conseguí un pasaporte que decía Sheila Bruce o, en ruso, Sheyla Brius. Mientras tanto, publicaba como Fitzpatrick. Solo tenía un artículo en aquella época, en una revista que seguía la vieja convención británica de utilizar las iniciales en lugar del nombre. Así que me llamaba S. Fitzpatrick. El periódico *Sovetskaya Rossiya* evidentemente tenía a alguien asignado para leer la prensa occidental con el fin de escribir artículos diciendo que esa gente era saboteadora y falsificadora. Tal vez la KGB le dijo que buscara a Fitzpatrick o, más probablemente, simplemente esa persona estaba leyendo la revista buscando algunos potenciales «falsificadores burgueses»

para atacar, encontró ese artículo y pensó: «Bueno, esto encaja». Supuso que Fitzpatrick era un hombre, porque el apellido no da el género. Escribió en su artículo que Fitzpatrick era lo más parecido a un espía. Mientras tanto, yo seguía en Moscú como Sheyla Brius. Pero yo no leí ese periódico, y mis amigos tampoco. Cuando volví a Oxford, la gente de allí que estaba al tanto de la prensa soviética dijo: «Dios mío, te han denunciado como espía. ¿Pasó algo?». Así fue como me enteré. Supongo que después de un tiempo la KGB descubrió que Fitzpatrick y Brius eran la misma persona. Pero creo que en ese momento no sabían eso. En los archivos, la persona con la que trataban era Bruce (Brius), y no había nada contra nadie con ese apellido.

*Acaba de mencionar su estancia en Oxford, donde se doctoró con su tesis sobre Lunacharsky. Mientras tanto, en Cambridge estaba E.H. Carr, el prolífico escritor, diplomático e historiador, cuyos estudios sobre la URSS habían adquirido gran relevancia. ¿Tuvo usted contacto con Carr? ¿Qué impresión le causó su obra?*

Cuando fui a Oxford, la historia soviética no era considerada un objeto de estudio muy legítimo. Entre otras cosas, era vista como demasiado contemporánea y se asumía que no se podía conseguir material de archivo. Yo la veía como un campo más o menos virgen en la década de 1960. Había apenas algunas personas estudiando esos temas, pero yo los consideraba esencialmente como

politólogos que se habían desviado hacia el campo de la historia. En definitiva, no había nadie cuyo trabajo sobre la historia soviética me pareciera de gran interés en Oxford.

Las dos personas que tenían un trabajo que sí me resultaba serio e interesante eran Leonard Schapiro, en la London School of Economics, y E.H. Carr, en Cambridge. Y tuve relación con ambos. Hasta el momento en que Leonard decidió que no le gustaba ideológicamente, me apoyó mucho y fue un gran patrocinador. En el caso de Carr, las cosas se dieron de otro modo y muchas veces me he preguntado por qué no fui en primer lugar a Cambridge a estudiar con él. Es uno de los misterios de la vida, pero lo cierto es que no lo hice. De hecho, tampoco me puse en contacto con Carr, aunque admiraba mucho su trabajo. Sin embargo, fue él quien un día se puso en contacto conmigo y entonces apareció la misma cuestión del apellido. Fue hacia 1968 o 1969. Carr me escribió una carta a mi dirección de Oxford dirigida a la «Sra. Bruce». Decía algo así como: «Querida Sra. Bruce, me pregunto si se ha dado cuenta de que una persona llamada Fitzpatrick está trabajando en su tema y ha publicado este artículo...». Así que le respondí: «Esa soy yo» (estoy segura de que él lo sabía y de que la carta era su pequeña broma). Me invitó a ir a Cambridge y visitarlo. Me apresuré a ir y nos hicimos, creo, amigos. Fue bastante curioso. Su oficina estaba en el Trinity College de Cambridge. Recuerdo que subí muchas escaleras oscuras para llegar allí y que las propias habitaciones

estaban a oscuras, y allí estaba él: un hombre alto, mayor, de aspecto impresionante, sentado detrás de su escritorio. Entonces entré yo, una mujer joven y menuda. Gracias a nuestras conversaciones descubrí por qué se interesaba en mi trabajo. Aunque no se dedicaba básicamente a la historia cultural, tenía una sección sobre política cultural en el libro que estaba escribiendo. Creo que era el segundo volumen de *Bases de una economía planificada*. Era evidente, por mi artículo publicado sobre Lunacharsky, que yo sabía algo al respecto, y él quería informarse.

Carr siguió en contacto incluso después de que yo me fuera a EEUU. En cierto modo, él se mantuvo más presente conmigo que yo con él. No porque yo no hubiera querido, sino más bien porque pensé: «Él es un gran hombre, ¿y quién soy yo?». En 1971, cuando ya no estaba casada con Alex, y vivía en Londres, en una relación con un periodista que trabajaba para el *Financial Times*, Carr me escribió a la casa de esa persona, a quien nunca le había mencionado, en lugar de escribir a mi dirección de Oxford. Esa era otra de sus pequeñas bromas, supongo, una forma de decir: «Mis espías saben dónde estás».

*Quisiera preguntarle ahora por algunas cuestiones vinculadas a la actualidad de Rusia y, en particular, por el modo en que se piensa desde la política contemporánea el proceso soviético. Vladímir Putin suele defender algunos aspectos de la URSS, pero desprecia la Revolución de Octubre (a punto tal que no se celebró su*

*100<sup>a</sup> aniversario en 2017). Parece ver la Revolución y a Lenin como generadores de caos y desintegración. ¿Dónde ubicaría a Putin desde el punto de vista ideológico y de su lectura de la historia rusa?*

En cierta ocasión Putin se definió como un «producto puro y completamente exitoso de la educación patriótica soviética». Aun con la dosis de ironía de la expresión, hay mucho de cierto en ella. Por supuesto, es evidente que sobre Lenin se apartó bastante de aquello que le enseñaron, pero sobre Stalin se mantuvo en el mismo eje.

Para tener una perspectiva de las ideas de Putin sobre la Revolución Rusa conviene, efectivamente, observar sus opiniones en los debates de cara a las celebraciones del centenario de la Revolución —celebraciones que finalmente no se produjeron—. En aquel contexto de 2017, Putin dijo que con seguridad Lenin había hecho algunas cosas buenas, pero que hubo aspectos negativos muy claramente destacables para él. Lo definió, lisa y llanamente, como un destructor de naciones. En ese contexto, lanzó su crítica favorita a Lenin, considerando como una de sus peores medidas el otorgamiento del derecho de secesión a las repúblicas de la URSS. Putin lo llamó «una bomba de tiempo». Se trata de un recurso que, por supuesto, ninguna de las repúblicas usó durante 70 años, hasta que finalmente lo hicieron.

En contraste con su mirada sobre Lenin, Putin ve a Stalin como un

constructor de la nación. Y la construcción de la nación es algo por lo que Putin manifiesta una enorme simpatía. Él siente que está dedicado a ello. Piensa su propio papel como el del hombre que tiene la misión de construir una nación después de una fuerte agitación que ha producido una gran erosión y malestar dentro de la sociedad. Es en ese sentido en el que admira a Stalin.

Varios académicos han sugerido que, en cuestiones como el trato a Ucrania, Putin remonta su perspectiva al tiempo de la consolidación del control ruso del siglo XVIII sobre aquellas tierras, entonces rusas, que ahora son parte de Ucrania. Simon Montefiore afirma que Putin ha leído su libro sobre Catalina la Grande y la creación de la Gran Rusia<sup>5</sup> y que le gustaría situarse en la tradición de los constructores de la nación y el imperio rusos, empezando por Pedro el Grande y pasando por Catalina. Estoy abierta a ese punto de vista, pero no he visto ninguna evidencia concreta que me convenza de que eso sea más importante para Putin que el aspecto soviético, que, después de todo, está más cerca de él. Pero es ciertamente una hipótesis bastante plausible.

*¿Qué aspectos de la historia rusa nos dan pistas para analizar la invasión a Ucrania?*

El propio Putin nos ha dado una pista en sus comentarios sobre la

5. S. Montefiore: *Catherine the Great and Potemkin: Power, Love and the Russian Empire*, Weidenfeld & Nicolson, Londres, 2010.

inseparabilidad histórica de Rusia y Ucrania. Considera que los orígenes del actual Estado ucraniano están en la República Socialista Soviética de Ucrania, formada como miembro fundador de la URSS en la década de 1920. Esto implica que una estrecha relación con Rusia (en la época soviética, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia) está incorporada a la identidad ucraniana.

La cuestión del destino de Ucrania dentro de la URSS es complicada. Es la URSS la que reconoce a Ucrania como entidad nacional a principios de la década de 1920, en contraste con los aliados occidentales después de la Primera Guerra Mundial, que se negaron a hacerlo. En la década de 1920 hubo conflictos por el «nacionalismo burgués» en Ucrania. En la hambruna de principios de la década de 1930 (llamada «Holodomor» por los ucranianos, y una parte clave de la historia nacional del Estado ucraniano postsoviético), los campesinos ucranianos fueron los principales afectados (aunque los campesinos de otras regiones productoras de grano, como el sur de Rusia y Kazajistán, también sufrieron mucho); y los líderes del Partido ucraniano, junto con los de otras repúblicas y regiones nacionales, fueron víctimas de las Grandes Purgas a finales de la década.

Este es un terreno relativamente conocido, pero también está la cuestión del papel de Ucrania en la política y el gobierno soviéticos en el periodo posterior a Stalin. Durante la redacción de mi último libro, *The*

*Shortest History of the Soviet Union*, me interesé bastante por este tema. El periodo posterior a Stalin, especialmente a partir de los años 60, fue mucho más fácil para Ucrania. Nikita Jruschov, un ruso nacido en Ucrania, había sido el jefe del Partido en esa región a finales del periodo de Stalin, y cuando pasó a esferas más altas en Moscú conservó muchos amigos ucranianos, a los que por supuesto les fue muy bien bajo su mandato. Por aquel entonces, los líderes del Partido ucraniano, si bien nombrados por Moscú, eran siempre ucranianos étnicos; y la representación ucraniana en el Politburó aumentó y siguió siendo importante durante el periodo de Leonid Brezhnev. Durante el último periodo soviético, Ucrania parecía una de las repúblicas más exitosas, le iba bastante bien y, en comparación con otras repúblicas de la URSS, se sentía bastante satisfecha consigo misma. Aunque existía un movimiento nacionalista disidente, era relativamente pequeño en aquella época.

Esto hace que sea más fácil comprender el hecho de que, cuando se produjo el fracaso de la perestroika de Mijaíl Gorbachov y la cuestión de la soberanía republicana y la separación ingresó en la agenda de los líderes de las repúblicas soviéticas, Ucrania no se encontrara en la primera línea. Los Estados bálticos eran los que realmente querían salir más rápido y los que contaban con una opinión popular que apoyaba firmemente a los líderes separatistas. Los líderes de Georgia y Armenia también estaban avanzando

hacia la salida en 1990-1991, con el apoyo de la opinión pública de sus repúblicas. Pero ese no fue el caso de Ucrania. Ucrania abandonó la URSS en el último momento, junto con Rusia (bajo el mando de Boris Yeltsin), y en gran medida siguiendo el ejemplo de Rusia. El golpe mortal para la URSS se produjo cuando Yeltsin, el líder ucraniano Leonid Kravchuk y los bielorrusos comunicaron al presidente soviético Gorbachov que las tres repúblicas eslavas se marchaban, dejando a Gorbachov presidiendo el cascarón vacío de la URSS.

*¿Cree que Putin puede estar buscando para Ucrania un régimen similar al de Lukashenko en Bielorrusia?*

Si eso es lo que pretende, no creo que lo consiga. Lo que ha provocado, de hecho, es lo contrario. Ha conseguido una suerte de consolidación de un sentido de la nacionalidad ucraniana separada y hostil a Rusia. Y ese sentido de pertenencia a esa nacionalidad ucraniana tiene que incluir a los numerosos ciudadanos étnicamente rusos que viven en Ucrania. Uno de los aspectos más llamativos de la cobertura mediática sobre la invasión de Ucrania es que nadie haya mencionado, al tratar la destrucción y el brutal bombardeo de Mariupol, que la mitad de la gente que vive allí es de origen ruso. Según el último censo, en Mariupol vivía 44% de personas de origen ruso. Así que se trata de rusos que, junto con los ucranianos, están sufriendo el trauma de la guerra y que, presumiblemente, en respuesta

en gran medida a esta invasión y a la hostilidad, se identifican con el proyecto del Estado ucraniano. Incluso antes de la invasión, yo hubiera sido muy escéptica de que a Putin se le pasara por la cabeza la idea de que podía conducir a toda Ucrania a una posición como la bielorrusa. Ya lo intentó antes, de forma más o menos democrática, pero no funcionó. Ahora, la invasión ha dificultado aún más su consecución. No está claro cuáles eran los objetivos concretos de Putin al invadir y, en cualquier caso, probablemente hayan cambiado tras el desastre del primer avance hacia Kiev. Pero en este momento parece mucho más probable que los futuros historiadores vean la invasión de 2022 como parte de la involuntaria «fabricación de una nación ucraniana» (de orientación occidental, hostil a Rusia) que a la de un Estado que funcione como un cliente obediente de Rusia.

*A menudo se dice que existe una nostalgia de los tiempos soviéticos, pero se habla poco de una nostalgia de los tiempos revolucionarios, de los tiempos creativos del proceso de 1917. ¿Cómo cree que piensan los ciudadanos rusos sobre la revolución bolchevique? ¿Tienen una idea similar a la de Putin? ¿Qué valoración pueden llegar a tener hoy de un personaje como Lenin?*

Por lo que recuerdo de las encuestas de opinión en 2017, en el centenario de la Revolución, cuando se le pedía a la gente que evaluara los diferentes periodos de la historia soviética, la opinión sobre la Revolución y sobre Lenin era más positiva que la que sostiene Putin. Ahora bien, en

las encuestas de opinión, aquella gente que valoraba positivamente a Stalin era la que afirmaba normalmente que también le gustaba Lenin, mientras que a Putin solo le gustaba uno de ellos. En ese momento, este parecía ser un tema de discusión, pero no de discusión apasionada. En otras palabras, a la gente le interesaba pensar en ello, pero no parecía tener una gran relevancia.

En cuanto a la nostalgia soviética, ciertamente fue muy fuerte entre la población rusa durante las primeras décadas posteriores a la caída de la URSS. Sin embargo, supongo que el cambio generacional la ha ido desvaneciendo. En otras palabras, ahora tenemos a una generación completa que no se crio ni se educó en la URSS. Y uno podría suponer que eso reducirá ese sentimiento de nostalgia. Sin embargo, no estoy segura de poder confirmarlo directamente mediante la investigación o la observación. Es, sencillamente, una suposición.

*¿Cómo cambiaron los estudios rusos desde los comienzos de su carrera y cuáles son hoy los niveles de colaboración con los historiadores rusos?*

Ahora esas relaciones son habituales y hay contactos completamente normales. Existen colaboraciones intelectuales realmente productivas, como la del historiador británico Yoram Gorlizki con Oleg Khlevniuk en Moscú. En mi caso, no tengo ninguna colaboración estrecha como la que acabo de mencionar, pero, por supuesto, mantengo una conversación profesional continua con varios rusos que son expertos en diversos temas en los que trabajo. Hasta ahora, este tipo de comunicación ha continuado. Pero si la guerra se prolonga, es probable que esto cambie: habrá más sospechas de los occidentales por parte de los rusos (y viceversa) y las relaciones intelectuales y profesionales se verán afectadas. ☐

## PÁGINAS

Marzo de 2022  
Lima  
Nº 265

ACTUALIDAD: La mancha del aprendizaje, **Susana Cárdenas Alayza**. REFLEXIÓN: Sinodalidad y movimientos populares, **Felipe Zagarra**. «Gritos y clamores que sean nuestros». Ecología integral en clave liberadora, **Silvia Cáceres Frisancho**. Integralidad cristiana como humanización. Desarrollo humano integral, **Javier M. Iguíñiz Echeverría**. Entre lo diverso y lo universal. Cultura, inculturación e interculturalidad, **Juan Ansion**. Diversidad religiosa y nación en perspectiva histórica, **Juan Fonseca**. La filosofía y el cautiverio de las ideologías. Reflexiones sobre la actitud crítica en la vida pública, **Gonzalo Gamio Gehri**. NOTA: Beatifican a Rutilio Grande y otros tres mártires en El Salvador. TESTIMONIOS: Octavio Ortiz Arrieta, el obispo «pecadito», **Gerardo Hanlon**. INFORME: Dos informes cruciales para el futuro de la humanidad, **Carmen Lora**. DOCUMENTOS: Cuando los impuestos son justos, son para el bien común, **Papa Francisco**. Comunicado ante la opinión pública. Ante los recientes cambios en el Consejo de Ministros, **CONFER**.

*Edita y distribuye Centro de Estudios y Publicaciones, Belisario Flores 681 – Lince, Lima 14, Perú. Tel.: (511) 4336453 – Fax: (511) 4331078. Correo electrónico: <paginas@revistapaginas.com.pe>. Página web: <www.revistapaginas.com.pe>.*

# Summaries

## Resúmenes en inglés

### **Francisco J. Verdes-Montenegro: «Geopolitical Europe» and Latin America: An Opportunity for Strategic Autonomy? [4779]**

In recent years, the European commitment to «strategic autonomy» has had a restricted vision, more attached to defense, along with a broader, multi-dimensional one. These visions affect the perception of the ties with Latin America, in a context of crisis and dependencies that is redefining global geopolitics.

*Keywords: Critical Raw Materials, Geopolitics, Strategic Autonomy, Latin America, European Union.*

### **Zbigniew Marcin Kowalewski: Three Historical Forms of Russian Imperialism [4780]**

The annexation of Crimea in 2014 anticipated some further Russian moves on

Ukraine, which in February 2022 would transform into an outright invasion. Thinking about the dynamics of Russian imperialism throughout its history allows us to understand the current crisis beyond its conjunctural elements or recent events.

*Keywords: Decolonization, Imperialism, Internal Colonialism, Russia, Ukraine.*

### **José Natanson: The New New Left [4781]**

Progressive and leftist governments seem to be redefining the ideological color of the region. However, the scenario is different from the cycle of the Left in the 2000s. The success of the «new new Left» will depend, among other things, on the ability to coordinate between the different tribes and the possibility of taking advantage of the geopolitical opportunity that has

opened up due to the dispute between China and the United States.

*Keywords: Cold War, Left, Reform, Latin America.*

**Manuel Canelas: Latin America: All that Glitters Is Not a «Cycle» [4782]**

The victory of progressive forces in various countries has prevented the consolidation of a «turn to the Right» in the region, but how productive is it to think of Latin American politics in terms of cycles? What characteristics do these new progressivisms have?

*Keywords: Cycle, Left Turn, Progressivism, Latin America.*

**Juan Pablo Luna: A Promise Called Gabriel Boric [4783]**

Gabriel Boric's triumph in Chile has generated, on its own merits, great enthusiasm inside and outside of the country. However, in addition to the economic and social problems –and also those related to security– of the «Chilean model», there is the fact that the new leftist project has grown in an alluvial way, and has not sufficiently taken root in Chilean society.

*Keywords: Constitutional Convention, Left, Gabriel Boric, Chile.*

**Humberto Beck / Patrick Iber: AMLO and his contradictions [4784]**

The Mexican president has been walking a tightrope, balancing the opposite

tendencies of populism: the expansion of democracy and the strengthening of personal leadership. Has he started to wobble? A review of the results of his administration allows us to address the tensions of his government and the reasons for his high popularity.

*Keywords: Democracy, Personal Leadership, Reforms, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Mexico.*

**Marisa Glave: Peru: The Teacher in his Labyrinth [4785]**

Pedro Castillo's arrival in government was made possible by the anti-Fujimori vote, but even so, the profile of the president, from rural Peru, generated expectations of change. However, the first stretch of his administration has been chaotic, the urban Left has distanced itself from the president and social conflicts are added to the threats from Congress to remove him from power.

*Keywords: Crisis, Instability, Left, Pedro Castillo, Peru.*

**María Esperanza Casullo: The Curious Case of Non-Top-Down Peronism [4786]**

The rejection of a large part of Kirchnerism to the signing of the agreement with the International Monetary Fund (IMF) shows the heterogeneity of the Pan Peronist coalition that governs Argentina. But, at the same time, the internal tensions in the government of Alberto Fernández reflect an unprecedented

situation in Peronism: the absence of a unified leadership. This generates uncertainty about the immediate future.

*Keywords: Peronism, Populism, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Argentina.*

**Fernando Molina: Bolivian MAS No Longer Dances Only to Evo's Rhythmn** [4787]

Luis Arce Catacora's victory in 2020, after the overthrow of Evo Morales after three terms in government, opened the way to an unprecedented situation for the Movimiento al Socialismo (MAS): for the first time, the leader of the government does not coincide with the party leader. Although he maintains strong control of the party, Evo Morales no longer controls the state, and the tensions with Arce and vicepresident David Choquehuanca are increasingly visible.

*Keywords: Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, Evo Morales, Bolivia.*

**Cicero Araujo: A Second «Pink Tide» in Brazil?** [4788]

Former president Luiz Inácio Lula da Silva seeks a return to power supported by a democratic front that faces the extreme right of Jair Bolsonaro. With that purpose, he sealed an alliance with his former adversary Geraldo Alckmin and tries to transcend the borders of the Left. For now, the former president is leading the polls, but even if he wins, it is not clear

that the axes of the PT governments of the past can be recovered.

*Keywords: Democracy, «Pink Tide», Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Brazil.*

**Maryhen Jiménez: Democratization in Venezuela Also Involves the Reconstruction of State** [4789]

To transform the authoritarian past and present and its consequences, as well as address the urgent needs of society, it seems essential to (re)build State capacity. For this, it is necessary to resize the time horizons of the change of political regime and generate consensus around the establishment of a functional State to facilitate the common good. The focus on the (re)construction of the State through inclusive negotiation, and not «only» supported by the repeated and unsuccessful bet on the annihilation of the adversary, will make it possible to assess the opportunities for change that still exist.

*Keywords: Authoritarianism, State, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Venezuela.*

**Leticia Salomón: The Challenges of Xiomara Castro in Honduras** [4790]

The triumph of the Honduran Left, after eight years of the authoritarian and corrupt conservative government of Juan Orlando Hernández and a coup in 2009, is marked by a series of challenges and

the possibility of frustrating expectations of change. But ultimately, the latest elections started a new era in the Central American country.

*Keywords: Change, Corruption, Xiomara Castro, Honduras.*

**Mariano Schuster: A Life among the Soviet Archives: Interview with Sheila Fitzpatrick [4791]**

*Keywords: People's History, Sheila Fitzpatrick, Russia, Soviet Union.*

## RELACIONES INTERNACIONALES

Julio-Diciembre de 2021

La Plata

Año 30, Nº 61

**EDITORIAL: Norberto Consani.** DIÁLOGOS: **NinieK Kun Naryatie.** ESTUDIOS: Internalizando la flexibilidad en la regulación del cambio climático: un análisis del caso brasileño, **Christopher Kurt Kiessling.** Lo que necesita este país es más internacionalistas: el recurso a la serie animada *Los Simpsons* para la enseñanza del derecho internacional, **Leopoldo M. A. Godio, Luciano Pezzano.** Pierre Bourdieu, la estadística y el estudio de las relaciones internacionales, **Víctor Montoya.** Sobre chuteiras e coturnos: Fútbol como instrumento de soft power de regímenes autoritarios en Argentina, Brasil e Chile, **Ian Rebouças Batista y Laryssa Vidal Amazonas de Souza.** La relevancia de los enfoques de género en las Relaciones Internacionales y su aplicación al estudio de las mujeres en Medio Oriente, **Alejandra Gutiérrez Luna.** Narcoterrorismo e neoliberalismo: Condicionamientos e (Re)enquadramentos do conflito social colombiano, **Wanderley dos Reis Nascimento Júnior y Rafaela Cristina Silva de Souza.** La doble excepcionalidad antártica en tiempos de pandemia, **Cristian Lorenzo y Diego Navarro Drazich.** La importancia estratégica del Ártico en la geopolítica marítima, **Silvia Marina Rivas de Hernández.** Cooperación en la gobernanza sanitaria entre China y Argentina en el contexto de la covid-19 desde la perspectiva de la gobernanza multinivel, **Xiaoyu Ruan y Jingting Zhang.** Más allá del petróleo. En el umbral de la acumulación por desfossilización, **Martín Kazimierski y Melisa Argento.** RESÚMENES DE TESIS: La Unión Africana en la política exterior argentina (2003-2015), **Pablo Exequiel Virasoro.** REFLEXIONES: Comercio y cambio climático: regímenes en tensión, **Roberto Bouzas.** HISTORIA: La profecía cumplida. A 20 años de los atentados del 11-s, **Patricia Kreibohm.**

Director – Fundador: Dr. Norberto Consani

*Relaciones Internacionales es una publicación del Instituto de Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Calle 48 e/ 6 y 7 – 5° Piso, 1900, La Plata, Argentina. Tel.: (54-221) 4230628. Página web: <www.iri.edu.ar>. Correo electrónico: <iri@iri.edu.ar>.*

# Diálogo y Paz

Un espacio de análisis y debate comprometido con el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas frente a las coyunturas políticas críticas que atraviesa América Latina.

mediación  
análisis  
geopolítica  
política  
estrategia  
seguridad  
diálogo  
Colombia  
crisis  
paz  
diplomacia  
Venezuela  
polarización  
México  
debate  
América Latina

<https://nuso.org/dialogo-y-paz/>

Una nueva sección en nuestra web en la que recuperamos todas las semanas artículos publicados desde la primera edición de la revista en 1972.

[www.nuso.org/50aniversario](http://www.nuso.org/50aniversario)



ENCUESTA

#QuépiensaALsobrelaUE

# América Latina – Unión Europea: miradas, agendas y expectativas

Resultados en la web

› [data.nuso.org](https://data.nuso.org)

FRIEDRICH  
EBERT  
STIFTUNG  
ARGENTINA



NUEVA SOCIEDAD



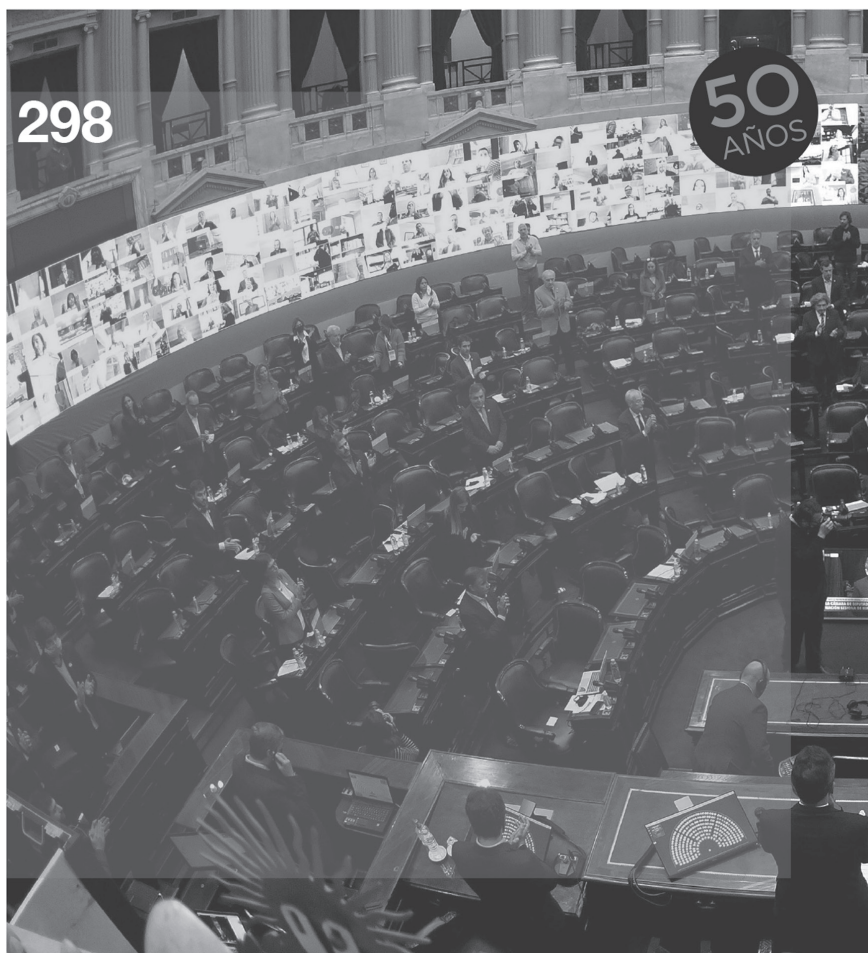
Latinobarómetro™  
OPINIÓN PÚBLICA LATINOAMERICANA



**NUEVA SOCIEDAD 298**



## **Los desafíos de la democracia**



**Alemania:** F. Delbanco, Tel.: (49 4131) 2428-8, e-mail: <post@delbanco.de>.

**Argentina:** Distribuidor: Jorge Waldhuter, Pavón 2636, Buenos Aires, Tel./Fax: (5411) 6091.4786, e-mail: <hola@waldhuter.com.ar>.

**Bolivia:** en La Paz: Yachaywasi, Tel.: (591) 2 2441.042, e-mail: <yachaywa@acelerate.com>.  
En Santa Cruz de la Sierra: Lewylibros, Junín 229, Tel.: (591) 3 3360709.

**Colombia:** Librería Fondo de Cultura Económica, Calle 11 No. 5-60, Barrio La Candelaria, Bogotá, Colombia. Tel.: (571) 2832200, e-mail: <libreria@fce.com.co>.

**Costa Rica:** Librería Nueva Década, Tel.: (506) 2225.8540, e-mail: <ndecada@ice.co.cr>.

**Ecuador:** LibriMundi, Tel.: (5932) 252.1606, 223.4791, e-mail: <librimu1@librimundi.com.ec>.

**España:** Marcial Pons-Librero, Tel.: (34 914) 304.3303, e-mail: <revistas@marcialpons.es>.

**Japón:** Italia Shobo, Fax: 3234.6469; Spain Shobo Co., Ltd., Tel.: 84.1280, Fax: 84.1283, e-mail: <info@spainshobo.co.jp>.

**Perú:** El Virrey, Bolognesi 510, Miraflores, Lima, Tel.: 444.4141, e-mail: <info@elvirrey.com>.

**Puerto Rico:** Laberinto, 251 calle de la Cruz, San Juan, Tel.: (787) 724.8200, e-mail: <info@librerialaberinto.com>.

Ventas y consultas por internet:  
<[www.nuso.org](http://www.nuso.org)>

Distribución internacional a librerías:  
<[distribucion@nuso.org](mailto:distribucion@nuso.org)>

#### PARA SUSCRIBIRSE A NUEVA SOCIEDAD

| SUSCRIPCIÓN                | ANUAL            | BIENAL            |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Incluye flete aéreo</b> | <b>6 números</b> | <b>12 números</b> |
| América Latina             | US\$ 70          | US\$ 121          |
| Resto del mundo            | US\$ 107         | US\$ 196          |
| Argentina                  | \$ 2.900         | \$ 5.800          |

##### > Formas de pago

1. **Pago online:** Ingrese en <[www.nuso.org/suscribirse/](http://www.nuso.org/suscribirse/)>, donde encontrará un formulario para registrar su pedido y efectuar el pago.

2. **Pago con tarjeta de crédito:** Solicite instrucciones a <[distribucion@nuso.org](mailto:distribucion@nuso.org)>

3. **Pago con cheque:** Envíe un cheque por el importe correspondiente a la orden de Fundación Foro Nueva Sociedad a la siguiente dirección: Nueva Sociedad, Humberto Primo 531, C1103ACK Buenos Aires, R. Argentina, acompañado de los datos del suscriptor (nombre, domicilio postal completo, teléfono, correo electrónico).

> Para otros medios de pago y cualquier otra consulta, escriba a <[distribucion@nuso.org](mailto:distribucion@nuso.org)>.

LA SOCIALDEMOCRACIA HA MUERTO,  
VIVA LA SOCIALDEMOCRACIA

#### COYUNTURA

**José Luis Rocha.** Nicaragua:

¿del mecenazgo bolivariano a las  
sombras chinescas?

**Giancarlo Summa.** El regreso de Lula  
a un Brasil de rodillas

#### TRIBUNA GLOBAL

**Jake Werner.** ¿Cómo escapó China  
a la terapia de choque?

#### TEMA CENTRAL

**Joan Subirats.** Replantear las políticas  
de bienestar. Dilemas y tensiones  
entre igualdad y diversidad

**Roger Martelli.** La izquierda en  
busca de sentido. Reflexiones desde  
la experiencia francesa

**Göran Therborn.** Las paradojas  
de las socialdemocracias nórdicas

**Cristina Monge.** La socialdemocracia  
se juega en la batalla contra el miedo

**Mariano Schuster.** Socialistas, otra vez  
**Ricard Gomà / Gemma Ubasart.**

Tejer ciudadanía social en el siglo xxi.  
Nuevos pactos sociales, ecológicos  
y de género

**Christian Krell.** El «retorno» de la  
socialdemocracia alemana

**Rodrigo Arocena.** ¿Nuevos encuentros  
entre democracia y transformación?

**Ricardo Martínez Mazzola.** ¿Por qué  
no hay socialismo en América Latina?  
Una vieja pregunta y algunas respuestas  
desde Argentina

**Joe Bilsborough.** Lo que nos  
enseña la socialdemocracia danesa.  
Entrevista a Pelle Dragsted.

#### ENTREVISTAS | 50 AÑOS

**Gisèle Sapiro / Violeta Garrido.**

¿Qué hacemos con los autores  
«incómodos»?

#### SUMMARIES

LOS DESAFÍOS DE LA DEMOCRACIA

#### COYUNTURA

**Natalia A. Volosin.** En las cloacas de  
la política. Politización y cuentapropismo  
de la inteligencia argentina

**Benedicte Bull / Antulio Rosales /  
Manuel Sutherland.** Venezuela:  
lujo, desigualdades y «capitalismo  
bodegonero»

#### TRIBUNA GLOBAL

**Pavel Barša.** Europa del Este: los sueños  
extraviados de los liberales del 89

#### TEMA CENTRAL

**Yanina Welp.** Sin partidos la democracia  
no funciona; con estos partidos, tampoco  
**Nabila Abbas / Yves Sintomer.** Tres  
imaginarios del sorteo en la política.  
¿Democracia deliberativa, antipolítica  
o radical?

**Steven Forti.** Posverdad, *fake news* y  
extrema derecha contra la democracia

**Cristina Lafont.** Las asambleas  
ciudadanas y la concepción populista  
de representación

**Nuria Alabao.** Por una democracia  
feminista (siempre por hacer)

**Santiago Gerchunoff.** La crisis de la  
democracia como melancolía

**Alicia Lissidini.** Democracia directa  
y movilización social: lo que nos  
muestra Uruguay

**Patricio Gómez Talavera.** América Latina  
y los gatos de Cambises. Fragmentación  
política y desafíos para la democracia

#### ENTREVISTAS | 50 AÑOS

**Maristella Svampa / Pablo Stefanoni.**

Pensar y actuar de manera anfibia

#### SUMMARIES



## NUEVA SOCIEDAD | 299

### Progresismos latinoamericanos: segundo tiempo

#### COYUNTURA

*Francisco J. Verdes-Montenegro* La «Europa geopolítica» y América Latina

#### TRIBUNA GLOBAL

*Zbigniew Marcin Kowalewski* Tres formas históricas del imperialismo ruso

#### TEMA CENTRAL

*José Natanson* La nueva nueva izquierda

*Manuel Canelas* América Latina: no todo lo que brilla es un «ciclo»

*Juan Pablo Luna* Una promesa llamada Gabriel Boric

*Humberto Beck / Patrick Iber* AMLO y sus contradicciones

*Marisa Glave* Perú: el profesor en su laberinto

*María Esperanza Casullo* El curioso caso de un peronismo no verticalista

*Fernando Molina* El MAS boliviano ya no baila solo al ritmo de Evo

*Cícero Araujo* ¿Una segunda «marea rosa» en Brasil?

*Maryhen Jiménez* La democratización en Venezuela pasa por la reconstrucción del Estado

*Leticia Salomón* Los desafíos de Xiomara Castro en Honduras

#### ENTREVISTAS | 50 AÑOS

*Sheila Fitzpatrick / Mariano Schuster* Una vida entre los archivos soviéticos